INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS

El Juicio Fiscal en Línea y el Juicio Fiscal en Vía Sumaria

SERIE ESTUDIOS INTERGUBERNAMENTALES

Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal

2013

Esmeralda Álvarez Ascencio

El Juicio Fiscal en Línea y el Juicio Fiscal en Vía Sumaria

Esmeralda Álvarez Ascencio

2013

Editor:
Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC)
Lerdo de Tejada No. 2469, Col. Arcos Sur, C.P. 44500, Guadalajara, Jal.

Primera edición, marzo de 2013
Tiraje: 700 ejemplares
ISBN en trámite
Diseño: Arte y Comunicación,
Priv. Andrés Terán No. 8, Col. Americana.
C.P. 44600. Guadalajara, Jal. México
Impresión: Prometeo Editores
Calle Libertad No. 1457, Col. Americana.
C.P. 44160 Guadalajara, Jal., México

Impreso en México - Printed in Mexico

Contenido

Presentación 5
Introducción 11

Capítulo I
Generalidades del Juicio Contencioso Administrativo Federal 15
1.1 Antecedentes del Juicio Contencioso Administrativo Federal 15
1.2 Los medios de defensa fiscal en México 16
1.3 Aspectos generales del Procedimiento Contencioso Administrativo Federal. 23
1.4 Naturaleza jurídica del Juicio Contencioso Administrativo Federal. 23
1.5 Procedencia e improcedencia del Juicio Contencioso Administrativo Federal 29
1.6 Partes que intervienen en el Juicio Contencioso Administrativo Federal. ... 45
1.7 El Juicio Contencioso Administrativo Federal en sus diferentes etapas. 47
1.8 Bases jurídicas de la Intervención de las autoridades fiscales en el Juicio Contencioso Administrativo de acuerdo con la Coordinación Fiscal. 49
1.9 Evolución del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 53

Capítulo II
El Juicio Fiscal en Línea y el Juicio Fiscal en la Vía Sumaria 57
2.1. La tecnología informática en las Entidades Federativas 58
2.1.1 Antecedentes de la tecnología informática en el Derecho Administrativo 58
2.1.2 Antecedentes de la Reforma a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (juicio en línea y vía sumaria). 59
2.1.3. Antecedentes de las Herramientas Tecnológicas para la tramitación del Juicio Contencioso Administrativo Federal y su aplicación por las Entidades Federativas 60
2.2 El Juicio Fiscal en Línea 65
2.2.1 Generalidades del Juicio Fiscal en Línea 66
2.2.2 El expediente electrónico y los medios de impugnación 72
2.2.3 Los sistemas de seguridad del Sistema de Justicia en Línea 76
2.3 El Juicio Fiscal Sumario (vía sumaria) 77
2.3.1 Características del Juicio Fiscal Sumario (vía sumaria) 77
2.3.2 Plazos en la Vía Sumaria 78

Capítulo III
El Marco Normativo.....89
3.1 Juicio Fiscal en Línea y Juicio Fiscal por la vía sumaria. 89

Capítulo IV
Implicaciones Jurídicas de las Nuevas Modalidades de Justicia Fiscal en México para las Autoridades Fiscales 109
4.1 Implicaciones para las autoridades fiscales que intervienen en el Juicio en Línea 110
4.2 Implicaciones para las autoridades fiscales que intervienen en los procedimientos sumarios 120
4.3 Implicaciones para las autoridades fiscales frente a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.....130

Capítulo V
El Derecho Informático y los Medios Electrónicos en México y en Otros Países 139
5.1 Importancia del Derecho Informático y su relación con el Juicio en Línea. 139
5.2 El documento electrónico y su clasificación. 141
5.3. Valoración del documento electrónico. 143
5.4. Situación Internacional del documento electrónico. 144
5.5. Decisiones judiciales en México respecto al valor probatorio de los documentos electrónicos. 146

Capítulo VI
Juicio Fiscal en Línea y Juicio Fiscal en la Vía Sumaria (España – México) 167
6.1. Indicadores del Expediente Electrónico y Procedimiento Contencioso Administrativo Abreviado en España. 168
6.2. Indicadores recientes del Juicio en Línea y del Juicio por la vía sumaria. 179

Conclusiones.....183
Glosario.....189
Anexos.....191

Presentación

En nuestro país la aspiración por una administración de justicia pronta y expedita se ha enfrentado a una dilación crónica que resulta en la insuficiencia de recursos para los tribunales encargados de otorgarla.

En este sentido, es generalizado saber que los juicios o procedimientos son dilatados a pesar del empeño que puedan disponer para sus responsabilidades los administradores de justicia.

El conocimiento popular de esta circunstancia que puede ocasionar el obtener tarde la justicia a demandar, lleva en ocasiones a desistir de su intento, lo que desde luego, deteriora de manera grave la imagen institucional de una comunidad. Los esfuerzos gubernamentales para resolver la situación, han pasado en cada época por revisar la asignación presupuestal, incorporar mejoras administrativas y de organización o adoptar las herramientas tecnológicas que la modernidad incorpora a cada espacio de la vida nacional.

En el caso de la administración de justicia fiscal federal se ha modificado de fondo la inercia procesal de los juicios a través de dos medidas esperanzadoras en el afán de procurar justicia pronta y expedita.

Por un lado, se han adoptado las tecnologías de la información en específico la web, para suprimir los obstáculos de sustanciación rápida de los procesos; así como, para acercar a las partes del juicio con la autoridad jurisdiccional sin el requisito de la cercanía física y transferir la información documental del caso bajo la modalidad del viaje fugaz de información que ofrecen las tecnologías electrónicas.

Esta audacia prometedora entusiasma puede contribuir a satisfacer la aspiración de prontitud en la justicia y disminuir los esfuerzos arduos para obtenerla; no obstante, su novedad comprometerá a todos los involucrados en materializar el logro de este esfuerzo.

Por otro lado, la segunda medida instrumentada ha sido dedicar un procedimiento corto para determinados juicios fiscales, cuya atención no requiera de una amplitud procedimental. Esta modalidad si bien no es nueva en la gestión jurisdiccional, lo es en la administración de justicia fiscal y reclamará para concretarse de superar

varios desafíos, uno de los cuales lo constituye el cumplimiento de la agilidad como consecuencia del acortamiento del juicio.

En apoyo a los trabajos de colaboración administrativa que cumplen en materia fiscal federal las entidades federativas, se edita este documento que transita en un examen detenido por las características de ambas modalidades, el Juicio Fiscal en Línea, y el Juicio Fiscal en Vía Sumaria, cuya clara descripción se cree que puede favorecer a la instrumentación de estas medidas y a superar sus desafíos.

La formulación de este trabajo estuvo a cargo de Esmeralda Álvarez Ascencio, Abogada con Maestría en Análisis Tributario y Maestría en Derecho Fiscal por el CONACYT y por la U de G, actualmente se desempeña como Consultora – Investigadora en el INDETEC.

Javier Pérez Torres
Director General
INDETEC

AGRADECIMIENTOS

Se agradece especialmente a *Juan Manuel Jimenez Illescas*, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; a *Miguel Alfonso Delgadillo*, en su momento Magistrado de la Segunda Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de Occidente y a *Alejandra Rosas Ramírez*, Secretaria de Acuerdos de la Ponencia II de la Segunda Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de Occidente, por sus trabajos de investigación, comentarios y discusiones para la elaboración de este documento. De igual manera, agradecimientos especiales a *Diana Bernal Ladrón De Guevara*, Procuradora de la Defensa del Contribuyente y a *Eduardo Sánchez Lemoine*, Director General de Representación Legal en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, por sus investigaciones y aportaciones oportunas para la culminación del presente estudio.

ABREVIATURAS POR ORDEN ALFABÉTICO

AFF	Autoridades Fiscales Federales
APF	Administración Pública Federal
CCAMFF	Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal
CFF	Código Fiscal de la Federación
CFPC	Código Federal de Procedimientos Civiles
CASNCF	Convenios de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal
CPEUM	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
FEA	Firma Electrónica Avanzada
INDETEC	Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas
JCA	Juicio Contencioso Administrativo
LA	Ley de Amparo
LCE	Ley de Comercio Exterior
LFPA	Ley Federal de Procedimiento Administrativo
LFPCA	Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo
LOPDC	Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente
LOTFF	Ley Orgánica del Tribunal Fiscal Federal
LOTFJFA	Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa
OPD	Organismo Público Descentralizado
PAE	Procedimiento Administrativo de Ejecución
PCA	Procedimiento Contencioso Administrativo
PJF	Poder Judicial Federal
PRODECON	Procuraduría de la Defensa del Contribuyente
SAT	Servicio de Administración Tributaria
SCJN	Suprema Corte de Justicia de la Nación
SHCP	Secretaría de Hacienda y Crédito Público
SNCF	Sistema Nacional de Coordinación Fiscal
TCC	Tribunales Colegiados de Circuito
TFF	Tribunal Fiscal de la Federación
TFJFA	Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

Introducción

Actualmente México atraviesa por un momento de transición, de cambio, de reformas recientes, en donde el Sistema de Justicia Fiscal Mexicano juega un papel importante tanto para las autoridades fiscales como para los particulares.

Dentro del Sistema de Justicia Fiscal Mexicano se encuentran establecidos diversos ordenamientos legales que contienen recursos o juicios que los particulares pueden interponer en contra de actos o resoluciones que son emitidos por autoridades.

Los medios jurídicos de impugnación en materia fiscal federal derivan de las disposiciones contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Juicio de Amparo), el Código Fiscal de la Federación (Recurso de Revocación) y la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (Juicio de Nulidad o Procedimiento Contencioso Administrativo), y pueden interponerse legalmente por los particulares – contribuyentes, en contra de actos o resoluciones que sean emitidos por las autoridades fiscales federales.

La intervención de las autoridades fiscales de las entidades federativas en los medios de impugnación antes referidos deviene jurídicamente de la participación de éstas en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF)[1] y de manera expresa en los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal (CCAMFF). A través de la suscripción de este Convenio, las entidades participan en la defensa de los intereses del fisco federal frente a la oposición de los contribuyentes en actos o resoluciones en ejercicio de las funciones asumidas en virtud del Convenio.[2]

Así pues, esta intervención de las autoridades fiscales federales en los juicios de nulidad es realizada a través del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) pero se precisa que en los últimos años, los juicios promovidos ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se han incrementado en forma considerable, lo que ha generado un importante rezago en el trámite y substanciación de los mismos. Lo anterior se advierte del informe de actividades del año 2008 rendido por el magistrado presidente de dicho Tribunal, en el que se señaló expresamente lo siguiente:

---

1 *Para introducirse al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, consultar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 25, 26, 31, 73, 74, 89, 115, 116, 117, 118 y 131, así como la Ley de Coordinación Fiscal.*

2 *ZAVALA RAZO, Jorge, "Los recursos y los incidentes en el Juicio de Amparo", INDETEC 2008, págs. 9 y 10.*

"Durante el periodo que se informa, el pleno de la Sala Superior examinó 987 asuntos, 60 por ciento más que el año anterior, y resolvió 731, es decir 46 por ciento más que el año pasado.
(…)
No obstante, el crecimiento de la estructura jurisdiccional del Tribunal no ha sido proporcional con la ampliación de su competencia. Tan sólo un dato.
Las 41 salas regionales del país dieron ***ingreso a 136 mil 328 demandas nuevas****, que sumadas, al inventario inicial,* ***ascendieron a 254 mil 124 asuntos****.*
Es importante destacar que durante el año que se informa, se consiguió un número de asuntos superior al ingresado, con lo que no sólo alcanzamos el punto de equilibrio, sino que rompimos una inercia de mucho tiempo y comenzamos a abatir el rezago.
(…)
En concreto, ***logramos concluir 147 mil 537 asuntos****, es decir 8.2 por ciento más que los ingresados. En este mismo lapso, el monto del interés económico de los juicios resueltos en todo el tribunal ascendió a 73 mil 421 millones de pesos.*
(…)
Durante 1998, al tribunal ingresaron 40 mil nuevas demandas y contaba con 30 salas regionales*. 10 años después,* ***en 2008, ingresaron 136 mil nuevas demandas a las 41 salas regionales que hoy tiene el tribunal.***
De esta manera, ***durante los últimos 10 años el número de nuevas demandas se incrementó en 240 por ciento, mientras que la estructura jurisdiccional aumentó tan sólo un 37 por ciento.***
(…)"

Se puede observar que resultaría costoso abrir más salas regionales y que las demandas siguieran incrementándose. Ante tales circunstancias, se vio la necesidad de establecer estrategias de gestión que permitieran hacer más eficiente la actividad jurisdiccional, por lo que en ese sentido resultaba viable aprovechar los avances tecnológicos disponibles para hacer más eficiente la tramitación de juicios, mediante la implementación de sistemas modernos y confiables que permitieran a la sociedad de forma fácil y rápida acceder a la impartición de justicia, así como el uso de otros sistemas ya generalizados como la red mundial o "Internet"; entre otras estrategias, para hacer más rápido el procedimiento fiscal.

Por tal motivo, es importante mencionar que en nuestro país, en agosto de 2011 se realizaron cambios trascendentes en Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (LFPCA) y en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (LOTFJFA), a fin de sentar las bases y lineamientos del "Juicio Fiscal en Línea" y del "Juicio Fiscal en la Vía Sumaria" y con el que se prevén ahorros sustanciales para la Federación, para el Tribunal, para las autoridades fiscales y para los particulares. Es decir, se busca crear un mecanismo que permita no solo la impartición de justicia pronta y expedita aprovechando las tecnologías de la información y las comunicaciones, sino también que ésta sea de calidad y que redunde en beneficio de quien acude ante Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA).

De acuerdo con la LFPCA, el *Juicio Fiscal en Línea***,** es el juicio contencioso administrativo federal que se promoverá, substanciará y resolverá en línea, a través del Sistema de Justicia en Línea que deberá establecer y desarrollar el Tribunal. Por su parte, el *Juicio Fiscal en la Vía Sumaria,* es el juicio contencioso administrativo federal que se tramitará y resolverá en la vía sumaria, de conformidad con las disposiciones específicas que para su simplificación y abreviación se dictan en la Ley. Lo anterior para cumplir con la necesidad de cumplir con una justicia pronta y expedita consagrada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

La investigación del juicio en línea y sumario obedece al interés de analizar las implicaciones jurídicas y tecnológicas que conlleva a las Autoridades Fiscales Federales (AFF) del país, pues es una reforma que cambia los hábitos procesales fiscales, por lo cual amerita preparación e información, ya que a lo largo de la conformación de este trabajo, se observó poca claridad en algunos preceptos en la LFPCA, los cuales posteriormente se fueron precisando a la luz de criterios jurisprudenciales.

Profundizar en la indagación desde la perspectiva de los estudiosos del Derecho y de la norma procesal fiscal, fue de gran interés en el ámbito de la investigación. Así mismo, se aportaron indicadores recientes del análisis en mención.

La metodología utilizada para este trabajo fue: método analítico; método deductivo; método sociológico, método científico; método jurídico; método histórico. Las técnicas de investigación empleadas fueron: bibliográficas, documentales, informáticas. hemerográficas, cualitativas, cuantitativas. Es decir, la metodología se realizó de lo general a lo particular, el método histórico fue de gran utilidad para el Juicio Contencioso Administrativo (JCA), así como el método científico basado en autores reconocidos en el aspecto jurídico; y las técnicas empleadas fueron datos estadísticos provenientes del TFJFA e indicadores recientes provenientes de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON), para percatarnos de lo que se ha avanzado a partir del inicio de esta reforma hasta este momento y lo que se podría esperar de la misma.

Durante la investigación se decidió establecer un contacto directo con funcionarios fiscales y estudiosos en la materia, para conocer sus puntos de vista que ciertamente fueron de gran interés. No se llevaron a cabo encuestas.

Así pues, la finalidad del desarrollo de este trabajo de investigación fue el de proporcionar a los funcionarios fiscales herramientas para una mejor defensa legal en los Juicios en Línea y Sumarios, teniendo de referencia las generalidades del Juicio Contencioso Ordinario y las implicaciones que se han originado hasta el momento con las nuevas modalidades de justicia fiscal mexicana, así como información de avances tecnológicos en el ámbito jurídico a nivel internacional.

La investigación consta de seis capítulos y la distribución de los temas se realizó de la siguiente manera:

En el CAPÍTULO I se analizaron los antecedentes y generalidades del Juicio Contencioso Administrativo en nuestro país, con el objeto de que sirva de base para un mejor análisis respecto a las nuevas modalidades de justicia fiscal mexicana. Así mismo, se tomaron importantes aspectos de la coordinación fiscal mexicana en relación con las autoridades fiscales federales, con el objetivo de conocer el origen de su intervención en los juicios de nulidad.

En el CAPÍTULO II se hizo referencia al Juicio Fiscal en Línea y al Juicio por la Vía Sumaria, abordando antecedentes de la tecnología informática en las entidades federativas desde el ámbito del derecho administrativo, los antecedentes de la reforma en comento, lo relacionado al expediente electrónico, y la tecnología que las entidades federativas necesitan para la tramitación del Juicio en Línea.

En el CAPÍTULO III se abordó el marco normativo del Juicio en Línea y del Juicio por la vía Sumaria, identificando la norma reformada y adicionada para estas nuevas modalidades, así como la normatividad relacionada.

En el CAPÍTULO IV se trató básicamente las implicaciones jurídicas que trae consigo el Juicio en Línea y el Juicio por la Vía Sumaria y que como consecuencia impactan de alguna manera a las autoridades fiscales federales de nuestro país. Así como las implicaciones jurídicas que tienen las AFF frente a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.

En el CAPÍTULO V se pretendió reservar un espacio para los medios electrónicos, información necesaria para los funcionarios fiscales, pues se tocan temas introductorios al derecho informático, la valoración de las pruebas electrónicas, el uso de internet en México y la referencia de otros países. Lo anterior con la finalidad de conocer aspectos básicos del derecho informático y la relación de éste con el juicio en línea implementado en el país.

En el CAPÍTULO VI se hizo mención de los expedientes electrónicos y sumarios en España, equivalentes al Juicio Fiscal en Línea y el Juicio Fiscal por la Vía Sumaria en México, así como los indicadores que hasta el momento se tienen en México del Juicio en Línea y por la Vía Sumaria, provenientes éstos del TFJFA y de la PRODECON.

Concluye el presente documento con los comentarios finales en relación a este tema, esperando sea el comienzo de un interés más firme por seguir indagando en las nuevas modalidades de justicia fiscal mexicana, pues ésta se debe fortalecer a través de normas claras y precisas tanto para la autoridad como para el contribuyente.

Capítulo I
Generalidades del Juicio Contencioso Administrativo Federal

1.1 Antecedentes del Juicio Contencioso Administrativo Federal 1.2 Los medios de defensa fiscal en México; 1.3. Aspectos generales del Procedimiento Contencioso Administrativo Federal; 1.4. Naturaleza jurídica del Juicio Contencioso Administrativo Federal; 1.5. Procedencia e improcedencia del Juicio Contencioso Administrativo Federal; 1.6 Partes que intervienen en el Juicio Contencioso Administrativo Federal; 1.7. El Juicio Contencioso Administrativo en sus diferentes etapas; 1.8. Bases jurídicas de la Intervención de las autoridades fiscales en el Juicio Contencioso Administrativo de acuerdo con la Coordinación Fiscal; 1.9. Evolución del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Las autoridades fiscales federales tienen la responsabilidad de conocer detenidamente la LFPCA y las leyes o reglamentos relacionados, para afrontar esa responsabilidad que tienen frente al contribuyente de fundar y motivar correctamente sus actos de autoridad.

Como autoridades fiscales es importante que conozcan los antecedentes del JCA, porque las autoridades son parte en el juicio de nulidad y los antecedentes proporcionan bases para la comprensión del mismo.

1.1 ANTECEDENTES DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL

En el México colonial como en el independiente se encuentran antecedentes del JCA, como lo sería la Junta Superior de Hacienda o bien los Juzgados de Hacienda en la época centralista. Sin embargo nuestro sistema actual de control jurisdiccional de la administración, encuentra su base ideológica principalmente en las instituciones francesas que fueron adoptadas con posterioridad en nuestro país.[3]

3 *JIMÉNEZ ILLESCAS, Juan Manuel, "El juicio en línea, Procedimiento Contencioso Administrativo Federal", Dofiscal, 1ª. Edición, Agosto 2009, p. 1*

Los primeros intentos de incorporar dicha figura en nuestro país se remontan al gobierno de Antonio López de Santa Anna en 1853, con la Ley para el Arreglo de lo Contencioso Administrativo auspiciada por el jurista Teodosio Lares y posteriormente, en el régimen imperial de Maximiliano de Habsburgo, con la Ley de lo Contencioso Administrativo y su reglamento, las cuales recogen dicho sistema de justicia retenida; sin embargo, poco aportaron a nuestro sistema jurisdiccional actual. Fue hasta el 27 de agosto de 1936 cuando se expidió en nuestro país la Ley de Justicia Fiscal que entró en vigor el 1 enero de 1937 y mediante la cual se creó el Tribunal Fiscal de la Federación que a su vez se inspiró en el Tribunal Administrativo Francés de Justicia Delegada.[4]

En temas posteriores se expondrá la evolución del Tribunal hasta nuestros días.

1.2 LOS MEDIOS DE DEFENSA FISCAL EN MÉXICO

En líneas atrás se mencionó que los medios jurídicos de impugnación en materia fiscal federal, derivan de las disposiciones contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Juicio de Amparo), el Código Fiscal de la Federación (Recurso de Revocación) y la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (Juicio de Nulidad o Procedimiento Contencioso Administrativo), y pueden interponerse legalmente por los particulares – contribuyentes, en contra de actos o resoluciones que sean emitidos por las autoridades fiscales federales.

A continuación se explica de manera general en qué consiste cada uno:

El recurso de revocación se encuentra regulado en el CFF y procede contra los actos administrativos dictados en materia fiscal federal.

El recurso administrativo:

- Se interpone y resuelve la propia autoridad administrativa que emite el acto reclamado de ilegal.
- Tiene por regla general el carácter de optativo.
- Las pruebas se ofrecen en el escrito en que se interpone el recurso o su ampliación (se pueden ofrecer adicionales).
- Se admiten todas las pruebas, salvo la confesional de la autoridad a través de absolución de posiciones (declaración jurada que debe prestar en este

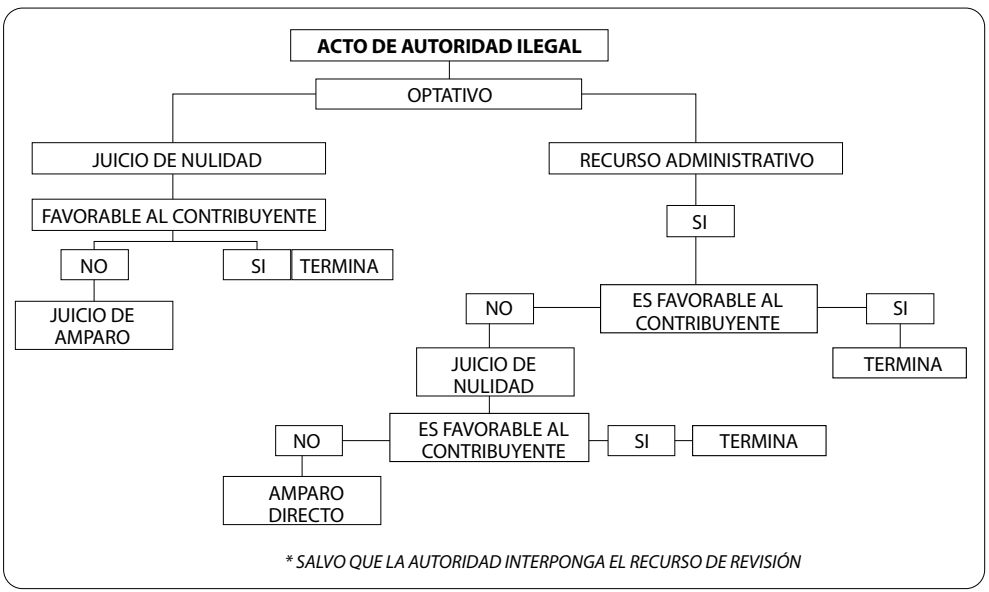
4 Ibídem p. 2

caso la autoridad a requerimiento de la otra parte y es invocada durante el proceso como medio probatorio), la testimonial y la petición de informes a las autoridades, salvo de hechos que obren en los expedientes.

El juicio de nulidad o juicio contencioso administrativo está regulado esencialmente en:

- Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo
- Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

La ilegalidad de un acto de autoridad administrativa se puede impugnar ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa a través del juicio de nulidad. Dicho tribunal es independiente de la autoridad administrativa que emite el acto reclamado. Las pruebas se ofrecen en el escrito de demanda o de contestación a la misma o en la ampliación a éstas. Se admiten todas las pruebas salvo la confesional de la autoridad a través de absolución de posiciones (declaración jurada que debe prestar en este caso la autoridad a requerimiento de la otra parte y es invocada durante el proceso como medio probatorio) y la petición de informes a la autoridad, salvo que obren en los expedientes.



Fuente: Material de INDETEC

El juicio de amparo está reglamentado esencialmente por:

- La Constitución General del país

- Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos o Ley de Amparo.

El día 6 de junio del año 2011 se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer modificaciones en la regulación respecto del juicio de amparo. La reforma tiene relevancia en el quehacer de las autoridades hacendarias, ya que algunos aspectos de los principios rectores del juicio de amparo se transforman sustancialmente. De tal suerte que sufren adecuaciones los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Ley Fundamental.

Con la reforma al artículo 103 de la Constitución Política del país, se establece que los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite; establece lo siguiente:

> ***Artículo 103.*** *Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite*
>
> **I.** *Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;*
>
> **II.** *…*
>
> **III.** *…*

REFORMA AL ARTÍCULO 103 DE LA CPEUM: PROCEDENCIA DEL AMPARO

Por normas generales que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Anteriormente se refería la norma en comento, a la procedencia del amparo por leyes que violaran las garantías individuales.

De acuerdo con la propia Constitución Política del país, el amparo ha procedido, aún antes de la reforma, no sólo contra leyes sino contra las demás normas generales. Por ejemplo, ya se preveía la procedencia de este medio de defensa contra tratados internacionales, reglamentos y demás normas generales que violentaran la Constitución del país, como se puede apreciar en el contenido de la fracción VIII inciso a) del artículo 107 de este cuerpo normativo en vigor antes de la reforma en análisis. De lo expuesto se desprende que se conserva la procedencia del amparo en el campo tributario (como en las demás ramas del derecho), contra normas generales como son las leyes, reglamentos, reglas de carácter general, entre otras.

Por actos u omisiones de la autoridad. Este último aspecto anteriormente no se consideraba expresamente para la procedencia del juicio de amparo antes de la reforma en comento, es decir, la procedencia del amparo solo se preveía en forma expresa por actos de la autoridad y no por su omisión. Lo anterior significa que procede el juicio de amparo para proteger al ciudadano por la falta de acción o inactividad de la autoridad, cuando tiene el deber de realizar alguna conducta. En esta tesitura, el juez de amparo, al otorgar la protección de la Justicia Federal derivado de una omisión de la autoridad, tendrá que ordenar a la autoridad demandada que cumpla u otorgue el derecho del quejoso, el cual no goza por una inactividad gubernamental como puede ser el derecho a la educación o salud, entre otras. Sin embargo, cabe señalar que ya procedía el amparo por omisión de la autoridad para el caso de que no se atendiera en breve término alguna petición del gobernado, como se desprende del artículo 8 de la Ley Fundamental.

La interposición del juicio de amparo puede promoverse en materia tributaria, argumentando violación a esta disposición constitucional; por ejemplo, cuando no se dé contestación a cualquier promoción en breve plazo al peticionario (cuatro meses por regla general según los tribunales federales), dígase solicitud de devolución de impuestos, consultas, solicitud de pago en parcialidades, etc. Las funciones de administración tributaria las realiza la autoridad generalmente dentro de lo que se denomina en la doctrina como “fase oficiosa”, es decir, que el impulso procedimental para lograr la percepción de las contribuciones lo lleva a cabo por regla general la autoridad y ejerciendo sus facultades de imperio.

El amparo procede,
Como se ha señalado, por normas generales y actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Se recuerda que anteriormente se establecía la protección en el juicio de amparo cuando hubiera violación a las garantías individuales previstas en la Constitución. Ahora se amplía la cobertura protectora del amparo a la violación de los derechos humanos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales. Esto es, que procede el amparo contra un acto de autoridad que viole los derechos humanos o sus garantías (medios de defensa que protegen los derechos humanos), aún y cuando no estén previstos en la Constitución, pero sí contemplados en un tratado internacional.
De acuerdo con el artículo 103 constitucional fracción II, el amparo procede por normas generales (anteriormente este precepto se refería a leyes) o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la esfera de competencia del Distrito Federal.
Otra causal de procedencia del juicio de amparo que contempla el precepto antes invocado pero en su fracción III, es la relativa a normas generales (anteriormente se refería a leyes) o actos de las autoridades de los estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal.

Fuente: Federalismo Hacendario No. 175 INDETEC

De lo anterior se desprende que si una ley o actuación de la autoridad administrativa o judicial contraviene algún derecho humano o sus garantías, previstos en la Constitución del país o de un tratado internacional que nuestro país haya suscrito, procederá la protección de la justicia federal mediante el juicio de amparo, situación que no acontecía anteriormente respecto de los tratados internacionales.

Lo comentado implica que se debe efectuar un análisis de los diversos tratados que México ha suscrito y en los cuales se establezcan derechos humanos que tengan vinculación con la materia tributaria, como es el caso del Pacto de San José que indica en su artículo 8:

"ARTÍCULO 8.- Garantías Judiciales.

1. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación

de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier carácter.

2. ….”

Además, se debe considerar que nuestro país ha suscrito gran número de tratados para evitar la doble imposición, así como de tratados de libre comercio que indudablemente tienen repercusión relevante en la materia tributaria, ya que los mismos dan tratamientos fiscales y contemplan medios de defensa.

Estos instrumentos jurídicos internacionales sin duda se deberán aplicar con preferencia a la legislación interna y en caso de su violación se podrá interponer el juicio de amparo cuando contengan un derecho humano que haya sido transgredido.

En adición a lo anterior se puede agregar que los tribunales, en el curso de la evolución de los criterios jurisprudenciales, no siempre han tenido la misma postura respecto del nivel jerárquico de los tratados internacionales en el orden jurídico nacional, por lo que en ocasiones se desaplicaban éstos, privilegiado la resolución de conflicto con base en las normas internas, aun y cuando contravinieran el derecho internacional y por ende no reconociendo los derechos que contienen los tratados internacionales.

En este orden de ideas, cabe señalar que el 10 de junio de 2011 se publicaron reformas constitucionales en materia de derechos humanos. En este contexto, se le cambia de denominación al Título Primero de este ordenamiento legal que se llamaba “De las Garantías Individuales” y se sustituye por el “**De los Derechos Humanos y sus Garantías”.** A mayor abundamiento, entre otros preceptos se reformó el artículo 1 de la Constitución Política del país. Este numeral se modificó para establecer que toda persona gozará en los Estados Unidos Mexicanos, de los derechos humanos y sus garantías (este precepto ya no hace referencia al goce de las garantías individuales). Para una mejor comprensión de lo expuesto con antelación se trascribe el texto reformado de los tres primeros párrafos del artículo constitucional invocado:

“Artículo 1o. *En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.*

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

..."

De esta suerte resulta que con las reformas constitucionales en estudio, no queda duda que a los tratados internacionales se les otorga un rango constitucional en el caso de que éstos contengan derechos humanos[5]. Además de la reforma al precepto 107 que es tópico de otro análisis.

El recurso de revisión es el medio instituido en la ley para que la autoridad impugne resoluciones definitivas adversas dictadas en el juicio contencioso administrativo.[6] Procede contra resoluciones definitivas de las salas del TFJFA en los casos que prevé la LFPCA.

RECURSO DE REVISIÓN Y JUICIO DE AMPARO

IMPUGNACIÓN	RECURSO DE REVISIÓN	JUICIO DE AMPARO
Se interpone contra	Sentencia definitiva o resolución de sobreseimiento	Sentencia definitiva
Quien lo interpone	La autoridad demandada	El particular, el contribuyente
Quien resuelve	Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa	Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa
Tiempo para interponerlo	15 días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia	15 días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia

Fuente: INDETEC

5 *HERNANDEZ SALCEDO, Ricardo. ¿Afecta la Reforma Constitucional en Materia de Amparo al Ámbito Fiscal? Revista Federalismo Hacendario No. 175 2012.*

6 *De acuerdo con los Tribunales Colegiados de Circuito.*

1.3 ASPECTOS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL.

El artículo 1º de la LFPCA es copia del artículo 197 del CFF vigente hasta el 2005, con la diferencia que remite al artículo en el caso de comparecencia de varios actores en la demanda. Se distingue entre la no satisfacción de los intereses en recurso y cuando la autoridad lo tiene por no interpuesto. Así mismo se define que será aplicable para el procedimiento la misma LFPCA. En dicho numeral se establece que a falta de disposición expresa se aplicará supletoriamente el CFPC, siempre que la disposición de este último ordenamiento no contravenga las que regulan el juicio contencioso administrativo federal que establece la LFPCA.[7] Así pues, se precisa que cuando la resolución recaída a un recurso administrativo no satisfaga el interés jurídico del recurrente, éste puede impugnarlo a través del juicio contencioso administrativo.

1.4 NATURALEZA JURÍDICA DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL.

Se considera que el origen y la naturaleza jurídica del JCA recae en la necesidad de que el propio órgano gubernamental demuestre a los administrados no solamente la legalidad de sus actos sino la legitimidad auténtica de los mismos a través de un Tribunal que no dependiera directamente de la administración y que sin embargo, fundara su acción en leyes, sin sujetarse al control del órgano jurisdiccional. Es interesante profundizar más sobre el TFJFA para tener mayor apertura y conocimiento en esta investigación y analizar su naturaleza jurídica.

Así pues, véase si la historia y la naturaleza de las controversias que resuelve el TFJFA ayuda a desentrañar la naturaleza jurídica del JCA a la luz de este Tribunal. Los antecedentes del tribunal y su relación con el JCA se representan de la siguiente manera:

7 *SILVA JUAREZ, Ernesto, "El Procedimiento Contencioso Administrativo Federal" Tercera Edición, Editorial PAC, México 2009, p. 29*

AÑO/ACONTECIMIENTO	DESCRIPCIÓN	COMENTARIOS
1853 – Ley para el Arreglo de lo Contencioso Administrativo	Mejor conocida como "Ley Lares" formulada por Don Teodosio Lares.	Su vigencia fue limitada pues fue declarada inconstitucional por la SCJN por considerar que atentaba contra el principio de la división de poderes.[8]
1936 – Ley de Justicia Fiscal	Mejor conocida como "Ley de Justicia Fiscal de 1936", fue el primer antecedente "formal" del TFJFA	En virtud de este ordenamiento legal se crea el Tribunal Fiscal de la Federación, con facultades para conocer de controversias fiscales derivadas de actos o resoluciones por autoridades fiscales federales.
1938 – Código Fiscal de la Federación	Mejor conocido como "Código de 38"	Ordenamiento legal que contenía lo relativo a los sujetos y elementos de la relación jurídica tributaria, al procedimiento económico coactivo, y todo lo relacionado con las infracciones y sanciones de naturaleza fiscal federal. Consolido la estructura y funcionamiento del Tribunal.[9]
1943 – Código Federal de Procedimientos Civiles	Supletorio	De aplicación supletoria para el PCA, entre ellas para los plazos, condiciones de las notificaciones, el ofrecimiento y desahogo de pruebas, emisión de sentencias entre otros.

8 Lo refieren dos autores, el primero de ellos y muy reconocido MANAUTOU, Margaín en su libro "De lo Contencioso Administrativo, México, 1995; así como, el autor ZAVALA RAZO, Jorge en su obra "Estructura y Competencia del TFJFA" México, 2005. No es muy conocida esta ley debido a su corta vigencia, por ello muchos no lo refieren como parte de los antecedentes a la misma.

9 El surgimiento del TFF en nuestro país originó polémicas en su época argumentando que no era constitucional un tribunal con facultades jurisdiccionales, ya que éste nació en el seno del Poder Ejecutivo (era un organismo que formalmente pertenecía al Ejecutivo, aunque materialmente su actuación fuera jurisdiccional y el cual originariamente era un órgano independiente de Hacienda y de cualquier autoridad administrativa), pues el impartir justicia sólo era competencia del Poder Judicial Federal. Así pues, hasta 1946 se reforman los artículos 73 f XXIX-H y 104 f I-B CPEUM, donde ya hace alusión al TFF.

AÑO/ACONTECIMIENTO	DESCRIPCIÓN	COMENTARIOS
1967 – Nuevo Código Fiscal y Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación (LOTFF)	Conjuntamente aparición del "Nuevo Código de 67" con la creación de la LOTFF	La característica del nuevo Código consiste en que ya no se incorporó dentro de su texto lo relacionado con el TFF, pues para eso se había creado la ley especial LOTFF.[10] Se introduce el concepto de Organismos Fiscales Autónomos y se otorga al Tribunal facultades para conocer de los juicios de lesividad.
1978 – Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación (LOTFF)	Mismo nombre que la anterior	Se prevé la Regionalización del Tribunal, creándose las Salas Regionales y la Sala Superior, precisándose la competencia de ambas, la diferencia era fundamentalmente respecto a la cuantía del asunto. Asimismo se prevé el recurso de revisión, con el que se otorga a la Sala Superior facultades para revisar las sentencias dictadas por las Salas Regionales.
1981 – Código Fiscal de la Federación		Queda una parte procesal aplicable al recurso de revocación, que por analogía se aplica al PCA. Contiene los criterios de multas, actualización y recargos, las formas de garantizar los créditos y como exigir la suspensión del PAE, entre otros aspectos.
1983 – Nuevo Código Fiscal	Conserva básicamente las normas procesales en los mismos términos que el anterior.	Se incluye la queja para cumplimiento de sentencias.
1988 – Modificación de ordenamientos	Se modifican el Código Fiscal y la Ley Orgánica del Tribunal con el objeto de promover la simplificación administrativa.	En los años siguientes aparecen diversas leyes que otorgan competencia al Tribunal en materia de comercio exterior (recurso de revocación previsto en la Ley de la materia), así como la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (recurso de revisión).

10 La Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, fue el primer ordenamiento legal que surgió a la vida jurídica con el único propósito de regular la estructura y competencia del TFF.

AÑO/ACONTECIMIENTO	DESCRIPCIÓN	COMENTARIOS
1996 – Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación	Misma que la anterior pero conserva su nombre y la competencia.	Modifica la integración de la Sala Superior, para aumentar de nueve magistrados a once, así como su forma de operación a través de Pleno o Secciones. Estas últimas conforme a la Ley actual son dos y se integran cada una con cinco magistrados.
2000 – Reformas a la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación y al Código Fiscal de la Federación, en el (Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 2000).	Cambio de Nombre de la Ley Orgánica y del nombre del Tribunal Fiscal por el de "Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA)".	Competencia para conocer de los juicios que se promuevan contra las resoluciones dictadas por las autoridades que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.[11] En cuanto a los cambios en el Código Fiscal, hubo algunos importantes, así como el proyecto de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la cual tiene su base en el título VI del Código Fiscal de la Federación (derogado a la fecha).[12]

11 Conforme al primer ordenamiento citado, se reformó la denominación de Tribunal Fiscal de la Federación por la de Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y se establece la competencia y funciones de la Sala Superior y la competencia territorial de salas regionales. En otras palabras, se le proporcionan facultades al Pleno para determinar las regiones y el número y sede de las Salas, así como la forma de integrar jurisprudencia al resolver contradicciones de las resoluciones de las Secciones o de las Salas Regionales

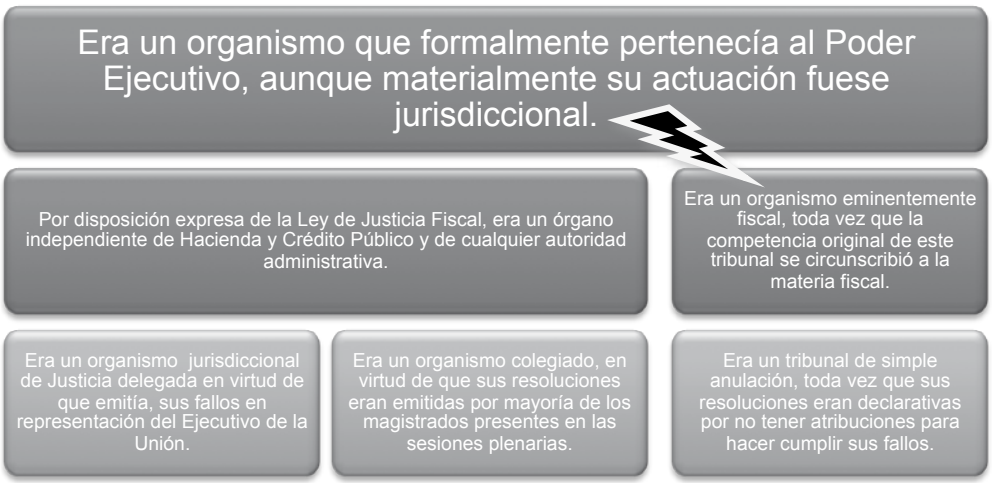
12 En cuanto a las reformas del Código Fiscal de la Federación, entre otras tenemos las siguientes: a) se cambia el nombre de "Procedimiento Contencioso Administrativo" por el de "Juicio Contencioso Administrativo"; b) que el actor debe señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en la jurisdicción de la sala regional, y de no hacerlo las notificaciones se le harán por lista; c) se establece como facultad de las salas, y a petición de parte, el otorgamiento de la suspensión de la ejecución del acto impugnado; d) se establece la posibilidad de señalar domicilio electrónico para recibir notificaciones; e) se establece que en la sentencia se podrá declarar la existencia de un derecho subjetivo, cuando previamente se pruebe su existencia, y condenar al cumplimiento de una obligación, además anular la resolución impugnada; g) se le otorga al pleno de la Sala Superior la facultad para establecer jurisprudencia por contradicción de tesis

AÑO/ACONTECIMIENTO	DESCRIPCIÓN	COMENTARIOS
2005 – Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo	Entró en vigor el 01 de enero de 2006	Es la ley que regula el procedimiento. Deroga el Título VI del CFF.
2007 – Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa		Define la competencia del TFJFA por razón del territorio y por los tipos de actos y resoluciones contra los que procede el PCA.
2011 – Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo	Inclusión del Juicio Fiscal en Línea y el Juicio Fiscal en la vía Sumaria.	En el capitulo X, en sus artículos 58-A al 58-S referente al juicio en línea y el capitulo XI sobre la vía sumaria en sus artículos 58-1 al 58-15 de la LFPCA.

Fuente: INDETEC - TFJFA

Después de revisar a grandes rasgos el origen y reformas tanto del TFJFA como del JCA, conviene mencionar la naturaleza de las controversias que resuelve el mismo para desentrañar posteriormente la naturaleza del JCA.

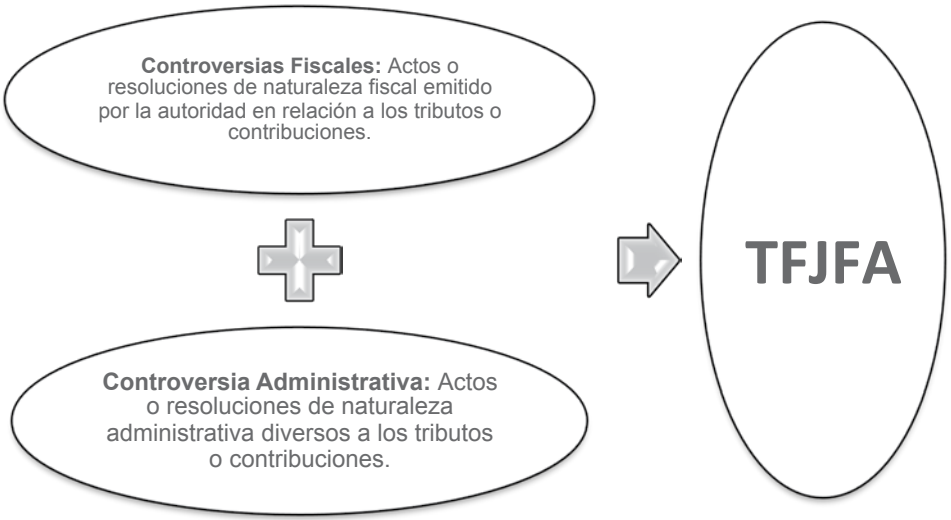
El TFF al momento de su creación, tuvo las particularidades que se muestran en la siguiente figura:



Fuente: Revista TFF 1992

De la figura anterior se puede observar que el TFF era un organismo eminentemente fiscal, pues la competencia original se circunscribía únicamente en la materia fiscal. Según se sabe con el paso del tiempo se fue apropiando de la competencia administrativa, por eso con las reformas efectuadas en el año 2000, el Congreso de la Unión consideró acertado cambiarle de nombre, quedando como se le conoce actualmente, Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa TFJFA (2001).

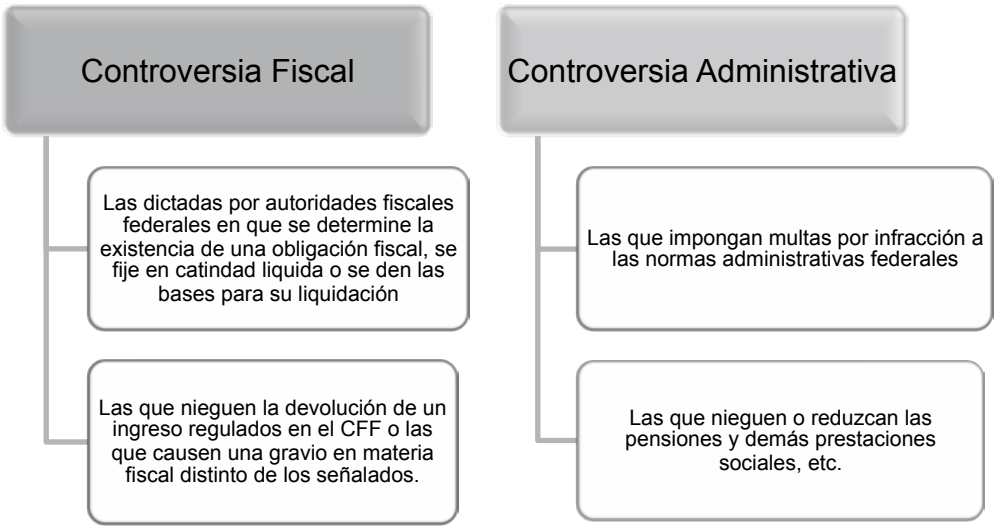
Así pues, el TFJFA resuelve controversias fiscales y administrativas[13] (véase la siguiente figura):



Fuente: INDETEC "Competencia del TFJFA en materia Fiscal y Administrativa."

Para ejemplificar lo anterior, véase lo que atiende la controversia fiscal y la controversia administrativa:

13 Para conocer más acerca de su competencia por materia, conviene revisar la LOTFJFA vigente.



Fuente: Art. 14 LOTFJFA

Se deduce que la naturaleza jurídica del JCA es eminentemente administrativa, es decir, el juicio contencioso administrativo, tal como su nombre lo indica, se refiere a una contienda para solucionar los actos de autoridad emitidos por las autoridades administrativas, pues si bien es cierto que el Tribunal veía inicialmente controversias de índole fiscal, también es cierto que con el paso del tiempo el juicio sobresalió por atender cuestiones administrativas. Y si se toma en cuenta que lo fiscal es parte de lo administrativo, se puede concluir que la naturaleza de dicho juicio es administrativa, pues en ésta ya viene incluido lo fiscal.[14]

1.5 PROCEDENCIA E IMPROCEDENCIA DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL

Se considera conveniente conocer los supuestos de procedencia e improcedencia en el juicio ordinario, para posteriormente abordar en el presente estudio el juicio en línea y por la vía sumaria.

14 Agradecimientos especiales a HERNANDEZ SALCEDO Ricardo, consultor investigador de INDETEC, por su colaboración en discusiones y comentarios para la presente investigación.

Procedencia.

El numeral 2º. de la LFPCA establece lo siguiente:

> *"Articulo 2. El juicio contencioso administrativo federal, procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.*
>
> *Asimismo, procede dicho juicio contra los actos administrativos, Decretos y Acuerdos de carácter general, diversos a los Reglamentos, cuando sean auto aplicativos o cuando el interesado los controvierta en unión del primer acto de aplicación.*
>
> *Las autoridades de la Administración Pública Federal, tendrán acción para controvertir una resolución administrativa favorable a un particular cuando estime que es contraria a la ley."*

Lo anterior no tiene un antecedente en el CFF, sin embargo los artículos 14 y 15 de la LOTFJFA del 2007 amplía su competencia al establecer las resoluciones, actos y procedimiento contra las que procede el juicio de nulidad, que a la letra dice:

> ***"ARTÍCULO 14.-*** *El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación:*
>
> ***I.*** *Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación;*
>
> ***II.*** *Las que nieguen la devolución de un ingreso de los regulados por el Código Fiscal de la Federación, indebidamente percibido por el Estado o cuya devolución proceda de conformidad con las leyes fiscales;*
>
> ***III.*** *Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas federales;*
>
> ***IV.*** *Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores;*
>
> ***V.*** *Las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que concedan las leyes en favor de los miembros del Ejército, de la Fuerza*

Aérea y de la Armada Nacional o de sus familiares o derechohabientes con cargo a la Dirección de Pensiones Militares o al erario federal, así como las que establezcan obligaciones a cargo de las mismas personas, de acuerdo con las leyes que otorgan dichas prestaciones.

Cuando para fundar su demanda el interesado afirme que le corresponde un mayor número de años de servicio que los reconocidos por la autoridad respectiva, que debió ser retirado con grado superior al que consigne la resolución impugnada o que su situación militar sea diversa de la que le fue reconocida por la Secretaría de la Defensa Nacional o de Marina, según el caso; o cuando se versen cuestiones de jerarquía, antigüedad en el grado o tiempo de servicios militares, las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa sólo tendrán efectos en cuanto a la determinación de la cuantía de la prestación pecuniaria que a los propios militares corresponda, o a las bases para su depuración;

***VI.** Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado;*

***VII.** Las que se dicten en materia administrativa sobre interpretación y cumplimiento de contratos de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;*

***VIII.** Las que nieguen la indemnización o que, por su monto, no satisfagan al reclamante y las que impongan la obligación de resarcir los daños y perjuicios pagados con motivo de la reclamación, en los términos de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado o de las leyes administrativas federales que contengan un régimen especial de responsabilidad patrimonial del Estado;*

***IX.** Las que requieran el pago de garantías a favor de la Federación, el Distrito Federal, los Estados o los Municipios, así como de sus entidades paraestatales;*

***X.** Las que traten las materias señaladas en el artículo 94 de la Ley de Comercio Exterior;*

***XI.** Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo;*

XII. *Las que decidan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en las demás fracciones de este artículo;*

XIII. *Las que se funden en un tratado o acuerdo internacional para evitar la doble tributación o en materia comercial, suscrito por México, o cuando el demandante haga valer como concepto de impugnación que no se haya aplicado en su favor alguno de los referidos tratados o acuerdos;*

XIV. *Las que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en este artículo, por el transcurso del plazo que señalen el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o las disposiciones aplicables o, en su defecto, en el plazo de tres meses, así como las que nieguen la expedición de la constancia de haberse configurado la resolución positiva ficta, cuando ésta se encuentre prevista por la ley que rija a dichas materias.*

No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior en todos aquellos casos en los que se pudiere afectar el derecho de un tercero, reconocido en un registro o anotación ante autoridad administrativa;

XV. *Las sanciones y demás resoluciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación, en términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y*

XVI. *Las señaladas en las demás leyes como competencia del Tribunal.*

Para los efectos del primer párrafo de este artículo, las resoluciones se considerarán definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa.

El Tribunal conocerá, además de los juicios que se promuevan contra los actos administrativos, decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean auto aplicativos o cuando el interesado los controvierta con motivo de su primer acto de aplicación.

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que promuevan las autoridades para que sean anuladas las resoluciones administrativas favorables a un particular, siempre que dichas resoluciones sean de las materias señaladas en las fracciones anteriores como de su competencia.

ARTÍCULO 15. *El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas por las que*

se impongan sanciones administrativas a los servidores públicos en términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, así como contra las que decidan los recursos administrativos previstos en dicho ordenamiento."

Como señala la norma, el TFJFA conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos, las resoluciones se consideran definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa.

La norma también refiere que el Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra los actos administrativos, decretos, acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean auto aplicativos o cuando el interesado los controvierta con motivo de su primer acto de aplicación.

Así pues, el TFJFA conocerá de los juicios que promuevan las autoridades para que sean anuladas las resoluciones administrativas favorables a un particular, siempre que dichas resoluciones sean de las materias señaladas en el artículo 14 de la LOTFJFA.

A continuación se presenta un cuadro de la procedencia de acuerdo a la LOTFJFA:

EL JUICIO DE NULIDAD PROCEDE CONTRA:

Artículos 14 y 15 de la Ley Orgánica del TFJFA	A. Materia fiscal B. Pensiones del ejército, fuerza aérea y armada nacional C. Pensiones civiles del IMSS o del ISSSTE D. Contratos públicos E. Responsabilidad de servidores públicos e indemnizaciones F. Pago de garantías G. Comercio exterior H. Recursos administrativos I. Multas administrativas J. Resoluciones definitivas en general K. Con base en tratados internacionales L. Negativas fictas M. Propiedad intelectual

Decretos y acuerdos de carácter general diversos a los reglamentos.	• Cuando sean auto aplicativos o cuando el interesado los controvierta en unión del primer acto de aplicación. • La condición es que sean auto aplicativos, es decir, que no requieran de un acto de autoridad para aplicarse. • También pueden impugnarse en el primer acto de aplicación emitido por la autoridad en contra del particular.
Las autoridades contra resoluciones favorables a particular.	Siempre que sean de las materias del artículo 14 de la LOTFJFA

Fuente: LOTFJFA

Se dice que el TFJFA se ha convertido en el tribunal administrativo más importante de México, como puede observarse en su amplio ámbito material. Esto requiere de una subespecialización más profunda de su personal, porque el mismo magistrado que resuelve en materia aduanera, también debe resolver sobre pensiones civiles, responsabilidad de servidores públicos, propiedad industrial, seguridad social y sobre derechos de autor.

En el caso de las prestaciones sociales, el Ejército, Fuerza Aérea y Marina, el Tribunal solo debe resolver sobre las pensiones. Estas instituciones tienen un fuero especial, es decir, legislación especial y tribunales especiales para resolver sus propias controversias. Las pensiones no entran en dicho fuero.

El Tribunal sólo puede resolver sobre la legalidad de un decreto o un acuerdo. No resuelve sobre la constitucionalidad de éstos, y menos de una ley, debido a que esa facultad está claramente reservada al Poder Judicial de la Federación (PJF).

Por otra parte, puede resolver sobre la legalidad de los reglamentos, pero siempre que el particular los controvierta[15] en un acto de aplicación, dado que el TFJFA no tiene facultades sobre el control de legalidad y constitucionalidad como el PJF.

Cabe recordar que son resoluciones definitivas aquellas que se dictan al final de un procedimiento administrativo, que no pueden ser modificadas, alteradas o ampliadas en perjuicio de los derechos del gobernado.

15 *Controvertir. (Der. regres. de controvertido). 1. intr. Discutir extensa y detenidamente sobre una materia defendiendo opiniones contrapuestas. U. t. c. tr. Real Academia Española*

El principio de definitividad se refiere a que el juicio de nulidad debe agotarse antes de presentar el juicio de amparo[16]. Sin embargo, en el caso de que existan actos adicionales a los enunciados en el artículo 14 de la LOTFJFA puede presentarse el juicio de garantías directamente, sin necesidad de agotar previamente el juicio de nulidad. [17]

Improcedencia del juicio.

De acuerdo al numeral 8 de la LFPCA, se tiene lo siguiente:

> ***"ARTÍCULO 8o.-*** *Es improcedente el juicio ante el Tribunal en los casos, por las causales y contra los actos siguientes:*
>
> ***I.*** *Que no afecten los intereses jurídicos del demandante, salvo en los casos de legitimación expresamente reconocida por las leyes que rigen al acto impugnado.*
>
> ***II.*** *Que no le competa conocer a dicho Tribunal.*
>
> ***III.*** *Que hayan sido materia de sentencia pronunciada por el Tribunal, siempre que hubiera identidad de partes y se trate del mismo acto impugnado, aunque las violaciones alegadas sean diversas.*
>
> ***IV.*** *Cuando hubiere consentimiento, entendiéndose que hay consentimiento si no se promovió algún medio de defensa en los términos de las leyes respectivas o juicio ante el Tribunal, en los plazos que señala esta Ley.*
>
> *Se entiende que no hubo consentimiento cuando una resolución administrativa o parte de ella no impugnada, cuando derive o sea consecuencia de aquella otra que haya sido expresamente impugnada.*
>
> ***V.*** *Que sean materia de un recurso o juicio que se encuentre pendiente de resolución ante una autoridad administrativa o ante el propio Tribunal.*
>
> ***VI.*** *Que puedan impugnarse por medio de algún recurso o medio de defensa, con excepción de aquéllos cuya interposición sea optativa.*

16 *Para conocer más sobre el principio de definitividad y las recientes reformas, consultar Rev. 175 Federalismo Hacendario INDETEC 2012*

17 *Óp. Cit. Nota 7, págs. 40-47*

VII. *Conexos a otro que haya sido impugnado por medio de algún recurso o medio de defensa diferente, cuando la ley disponga que debe agotarse la misma vía.*

Para los efectos de esta fracción, se entiende que hay conexidad siempre que concurran las causas de acumulación previstas en el artículo 31 de esta Ley.

VIII. *Que hayan sido impugnados en un procedimiento judicial.*

IX. *Contra reglamentos.*

X. *Cuando no se hagan valer conceptos de impugnación.*

XI. *Cuando de las constancias de autos apareciere claramente que no existe la resolución o acto impugnados.*

XII. *Que puedan impugnarse en los términos del artículo 97 de la Ley de Comercio Exterior, cuando no haya transcurrido el plazo para el ejercicio de la opción o cuando la opción ya haya sido ejercida.*

XIII. *Dictados por la autoridad administrativa para dar cumplimiento a la decisión que emane de los mecanismos alternativos de solución de controversias a que se refiere el artículo 97 de la Ley de Comercio Exterior.*

XIV. *Que hayan sido dictados por la autoridad administrativa en un procedimiento de resolución de controversias previsto en un tratado para evitar la doble tributación, si dicho procedimiento se inició con posterioridad a la resolución que recaiga a un recurso de revocación o después de la conclusión de un juicio ante el Tribunal.*

XV. *Que sean resoluciones dictadas por autoridades extranjeras que determinen impuestos y sus accesorios cuyo cobro y recaudación hayan sido solicitados a las autoridades fiscales mexicanas, de conformidad con lo dispuesto en los tratados internacionales sobre asistencia mutua en el cobro de los que México sea parte.*

No es improcedente el juicio cuando se impugnen por vicios propios, los mencionados actos de cobro y recaudación.

XVI. *En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de esta Ley o de una ley fiscal o administrativa.*

*La procedencia del juicio será examinada aun de oficio**”**.*

Es necesario distinguir entre causales de improcedencia y causales de sobreseimiento, pues en ambos casos no puede continuar el proceso:

Causales de improcedencia	La demanda no cumple los requisitos para ser admitida
Causales de sobreseimiento	El juicio es procedente, pero no puede continuar porque se dejaron de cumplir los requisitos esenciales.

Fuente: LFPCA

A continuación se analizan los aspectos relevantes de los casos de improcedencia[18] previstos en el artículo 8 LFPCA:

- Cuando no se afecta el interés jurídico del demandante, es decir, cuando quien promueve no es afectado por el acto impugnado; o bien si no se demuestra que es el apoderado o representante legal de la empresa; cuando no se presenta el poder notarial en copia certificada y solo se exhibe copia simple; cuando los poderes han sido revocados o limitados por el paso del tiempo; cuando los poderes son otorgados después de la fecha en la que se presenta la demanda de nulidad.

- Cuando no compete conocer al TFJFA como en los casos de incumplimiento de contratos civiles entre particulares; contra actos emitidos por la Cámara de Diputados, contra sentencias emitidas por la SCJN, contra actos del gobierno del Distrito Federal o de las autoridades locales (son competentes los Tribunales de lo Contencioso Administrativo locales).

- Cuando ya hay sentencia del Tribunal, es decir, ya hay resolución y no es posible resolver dos veces por los mismos actos impugnados y con los mismos actores, es decir, sí es posible impugnar una misma resolución por dos actores diferentes.

- Cuando se vence el tiempo para presentar la demanda que se traduce en los 45 días de las resoluciones fiscales en el caso de los juicios ordinarios. Cuando se vence dicho plazo, precluye el derecho del actor para impugnar el acto o la resolución en virtud de que son términos fatales. No se entiende que hay consentimiento si el actor primero interpuso recurso de revocación; la autoridad confirma la resolución impugnada.

18 Óp. Cit. Nota 7, p-82.

- Cuando ya hay medio de defensa, por ejemplo, hay un recurso de revocación y se presenta una demanda de nulidad simultáneamente; o bien el mismo actor ya ha presentado otra demanda anteriormente, contra el mismo acto impugnado.

- Normalmente la mayoría de los actos administrativos puede impugnarse a través de recurso de revisión, previsto por la LFPA. Por el principio de definitividad procesal, debe agotarse antes de acudir al TFJFA, en atención al principio de definitividad procesal, si se presenta la demanda de nulidad directamente contra dicho acto, el Tribunal debe declarar improcedente el juicio, en virtud de que no se ha agotado la instancia previa. En el caso de las determinaciones definitivas fiscales, el artículo 120 del CFF establece que el contribuyente puede elegir entre interponer el recurso de revocación o acudir directamente al TFJFA. Al pie de la letra dice:

  > ***"Artículo 120**.- La interposición del recurso de revocación será optativa para el interesado antes de acudir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Cuando un recurso se interponga ante autoridad fiscal incompetente, ésta lo turnará a la que sea competente."*

- Conexidad de causa ocurre cuando existe identidad de personas y de acciones, aunque el fondo del asunto sea distinto y las acciones provengan de un mismo origen. Un ejemplo es cuando se impugna la liquidación en juicio de nulidad, y después por la misma vía se impugna un embargo en Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE), relacionado con la misma liquidación. En este caso el artículo 31 de la LFPCA indica claramente que puede ocurrir la acumulación por conexidad cuando:

  > ***ARTÍCULO 31.-** Procede la acumulación de dos o más juicios pendientes de resolución en los casos en que:*
  >
  > ***I.** Las partes sean las mismas y se invoquen idénticos agravios.*
  > ***II.** Siendo diferentes las partes e invocándose distintos agravios, el acto impugnado sea uno mismo o se impugne varias partes del mismo acto.*
  > ***III.** Independientemente de que las partes y los agravios sean o no diversos, se impugnen actos o resoluciones que sean unos antecedentes o consecuencia de los otros.*
  >
  > *Para el caso en que proceda la acumulación y los juicios respectivos se estén sustanciando por la vía tradicional y el juicio en línea, el Magistrado Instructor requerirá a las partes relativas al Juicio en la vía tradicional para que en el*

plazo de tres días manifiesten si optan por substanciar el juicio en línea, en caso de que no ejerza su opción se tramitara el Juicio en la vía tradicional.

Se observa que en este numeral ya está regulado para el caso de las partes que manifiesten substanciar el juicio en línea.

Mismas partes y agravios.
Mismo acto impugnado o impugnado varias veces.
El acto impugnado es antecedente o consecuencia de otro que ya fue impugnado.

- Contra reglamentos. Anteriormente no era exclusivo de reglamentos, sino contra normas e instrucciones de carácter general y abstracto, lo que se puede entender, por ejemplo, contra resoluciones de carácter general en materia fiscal o las resoluciones de carácter general en materia de comercio exterior se podría presentar juicio de nulidad: después de todo son normas de carácter general y abstracto. En estos casos se entiende que se promueve contra el primer acto de aplicación. Ahora bien, parece que esta fracción limita sólo el caso de los reglamentos, aunque no aclara si debe hacerse contra el primer acto de aplicación. Bajo el principio general del derecho que cuando el legislador no distingue, el juzgador no debe distinguir, es adecuado interpretar que proceden las dos vías: a partir de la fecha de publicación del reglamento o contra el primer acto de aplicación.

- Es lógico que el juicio de nulidad sea improcedente cuando en la demanda no se indica cual es el agravio para el particular. Sin embargo, es importante recordar que la jurisprudencia del TFJFA establece que los magistrados puedan razonar agravios evidentes o notorios, como por ejemplo cuando el acto impugnado carece de firma, cuando se trata de un acto en discrecionalidad de facultades sin ningún fundamento o motivación; es decir, aunque el litigante no lo argumente, el Tribunal debe revisar ese agravio y resolver en consecuencia.

- Algunas veces el litigante olvida presentar la resolución o la constancia de que existe el acto impugnado; o bien presenta una copia simple debiendo presentar el original. En este caso, no cumple con los requisitos que establece la ley

- El artículo 97 de la Ley de Comercio Exterior establece que:

  "Artículo 97.- En relación a las resoluciones y actos a que se refieren las fracciones IV, V, VI y VIII del Artículo 94, cualquier parte interesada

podrá optar por acudir a los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia de prácticas desleales contenidos en tratados comerciales internacionales de los que México sea parte. De optarse por tales mecanismos:

***I.** No procederá el recurso de revocación previsto en el artículo 94 ni el juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa contra dichas resoluciones, ni contra la resolución de la Secretaría dictada como consecuencia de la decisión que emane de dichos mecanismos alternativos, y se entenderá que la parte interesada que ejerza la opción acepta la resolución que resulte del mecanismo alternativo de solución de controversias;*

***II.** Sólo se considerará como final la resolución de la Secretaría dictada como consecuencia de la decisión que emane de los mecanismos alternativos. Las partes interesadas que acudan a un mecanismo alternativo de solución de controversias o, en su caso, las partes interesadas sujetas al pago de cuota compensatoria que podría modificarse en virtud de tal mecanismo, podrán garantizar las cuotas compensatorias definitivas en los términos de la fracción III del artículo 98 de esta Ley. Asimismo, en caso de que la cuota compensatoria determinada en las revisiones administrativas sea menor que la vigente al momento en que se inicie el mecanismo alternativo de solución de controversias, deberán garantizar o pagar la diferencia entre dichas cuotas en tanto dicho mecanismo no se resuelva de forma definitiva, y*

***III.** Se observará lo establecido en el artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo."*

En este caso se tiene lo siguiente:

a) La Secretaría de Economía, en una investigación sobre prácticas desleales de comercio internacional (dumping o subvenciones), en aplicación de la Ley de Comercio Exterior, puede emitir diversos actos contra los cuales puede interponerse un recurso de revocación que prevé el artículo 94 de dicha Ley. Entre estos casos se encuentran:

   - ✓ Los que declaran concluida una investigación antidumping sin imponer cuota compensatoria, porque la Secretaría no encontró evidencia de la práctica desleal.

- ✓ Los que determinen cuotas compensatorias definitivas o los actos que las apliquen.

- ✓ Las que respondan a las solicitudes de los interesados en una investigación antidumping.

- ✓ Las que declaren concluida una investigación como consecuencia de un acuerdo entre las partes en una audiencia conciliatoria.

- ✓ Las que desechen o concluyan la solicitud de revisión de una cuota compensatoria, así como las que confirmen, modifiquen o revoquen cuotas compensatorias definitivas a que se refiere el mismo artículo.

b) El artículo 95 de la LCE establece que estas resoluciones deben impugnarse vía recurso de revocación, en los términos establecidos por el CFF, es decir, dentro de los 45 días hábiles siguientes a que surta efectos la notificación del acto impugnado.

c) El mismo precepto establece que debe interponerse recurso de revocación antes de interponer demanda de nulidad ante el TFJFA. En consecuencia, es improcedente el juicio de nulidad, conforme a la fracción XII del artículo 8º de la LFPCA, si no se ha agotado previamente el recurso de revocación ante la Secretaría de Economía.

d) Los tratados internacionales de libre comercio suscritos por México tienen un capítulo especial donde se establece otra vía de impugnación para estas resoluciones. Por ejemplo, el punto 5 del artículo 1904 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en vigor desde el 01 de enero de 1994 establece que el gobierno de uno de los países que haya sido afectado por estas resoluciones podrá solicitar, dentro de los 30 días naturales siguientes a la notificación de la resolución, al Secretariado que se forme un panel de expertos de los tres países para que revisen la resolución y emitan un laudo antes de los 315 días siguientes a la solicitud de la integración. El laudo del panel es definitivo y no procede ningún medio de defensa en su contra. Así pues el punto 5 a la letra establece lo siguiente:

> *"Artículo 1904: Revisión de resoluciones definitivas sobre cuotas antidumping y compensatorias.*
>
> *5. Una Parte implicada podrá solicitar, por iniciativa propia, que un panel revise una resolución definitiva, y deberá asimismo solicitarlo a petición*

de una persona que de otro modo, conforme al derecho de la Parte importadora, estaría legitimada para iniciar procedimientos internos de revisión judicial de la misma resolución definitiva."[19]

e) Esto significa que el juicio de nulidad es improcedente también cuando la opción de panel ha sido ya ejercida, porque quien va a resolver ya en definitiva es el panel.

- En congruencia con la causal de improcedencia del punto anterior, en virtud de que la decisión del panel es inapelable, también lo es la resolución dictada por la Secretaría de Economía para dar cumplimiento a dicha decisión. En este caso la determinación definitiva no se puede impugnar.

- En el caso de los tratados para evitar la doble tributación, el procedimiento para la solución de controversias no es alternativo: en este caso se rigen por el principio de definitividad, es decir, debe agotarse un recurso de revocación ante la SHCP y después se puede acudir al comité o panel; o bien concluir el juicio de nulidad y después acudir a la instancia internacional. La resolución que emita la SHCP en el procedimiento internacional no es impugnable en juicio de nulidad.

- También resulta lógico que una resolución de una autoridad extranjera que determine impuestos, sea impugnada por los medios de defensa previstos en ese país, por un principio elemental de jurisdicción. Sin embargo, el contribuyente sí puede impugnar todos los actos de la autoridad mexicana que en el cumplimiento de la asistencia mutua internacional llegue a ejecutar al contribuyente mexicano, por lo que la misma fracción establece que es procedente el juicio de nulidad contra los actos de cobro y recaudación.[20]

19 *Nafta Secretaria, http://www.nafta-sec-alena.org/sp/view.aspx visto en septiembre de 2012*

20 *Óp. Cit. Nota 7 págs. 80-92*

ESQUEMA DE IMPROCEDENCIA

CASOS DE IMPROCEDENCIA	No afecta el interés jurídico del actor No compete conocer al Tribunal Ya hay sentencia del Tribunal Hay consentimiento (se venció el plazo para el medio de defensa) Ya hay medio de defensa previo (recurso o juicio) Debe impugnarse por un medio de defensa previo (recurso) Conexo a otro que ya fue impugnado por otro medio de defensa (recurso) Ya fue impugnado en procedimiento judicial Contra reglamentos Sin conceptos de impugnación Cuando no hay acto impugnado Actos de la Ley de Comercio Exterior En cumplimiento de resolución panel internacional El procedimiento de doble tributación Liquidaciones de impuestos por autoridades extranjeras Otros casos

Fuente: LFPCA

Sobreseimiento del Juicio.

Se comentaba en temas anteriores que la improcedencia se puede confundir con el sobreseimiento porque en ambos no continúa el proceso.

Del artículo 9 LFPCA se desprende:

> ***"ARTÍCULO 9o.-*** *Procede el sobreseimiento:*
>
> ***I.*** *Por desistimiento del demandante.*
>
> ***II.*** *Cuando durante el juicio aparezca o sobrevenga alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior.*
>
> ***III.*** *En el caso de que el demandante muera durante el juicio si su pretensión es intransmisible o, si su muerte, deja sin materia el proceso.*

IV. *Si la autoridad demandada deja sin efecto la resolución o acto impugnados, siempre y cuando se satisfaga la pretensión del demandante.*

V. *Si el juicio queda sin materia.*

VI. *En los demás casos en que por disposición legal haya impedimento para emitir resolución en cuanto al fondo.*

*El sobreseimiento del juicio podrá ser total o parcial.**"***

a) De lo anterior se tiene que el juicio se sobresee cuando la autoridad demandada deje sin efectos el acto impugnado (y en consecuencia el juicio queda sin materia, remitiendo a otra causal), siempre y cuando se satisfaga la pretensión del demandante.

b) Renunciar o desistirse, cuando el actor considera que no tiene caso continuar con la controversia. Este requisito lo utiliza la autoridad, en especial la SHCP, para permitir que el particular continúe sus actividades comerciales; por ejemplo, las empresas que se dedican a participar en licitaciones para vender al gobierno: la dependencia administrativa le exige no tener créditos fiscales pendientes; y si el particular tiene créditos vivos en pantalla, aunque los esté combatiendo mediante el juicio de nulidad, el reporte de la SHCP a la dependencia será que dichos créditos están pendientes de pago, y mientras no se aclare la situación , la empresa no podrá participar en la licitación administrativa.

c) Cuando en el juicio suceda una causal de improcedencia; de la misma forma cuando se muere el demandante, es decir, no puede continuarse con el procedimiento.

d) Cuando se señala que el juicio queda sin materia, sin acotar legalmente qué debe entenderse por una hipótesis: es decir, en opinión de los magistrados que conozcan del asunto, ellos decidirán cuándo queda sin materia el juicio. Un ejemplo es cuando el particular ha admitido por escrito la legalidad del acto impugnado y ha aceptado expresamente las consecuencias.

e) Si la autoridad se reserva reponer el acto, no procede el sobreseimiento porque no se satisface la pretensión del actor.[21]

21 Óp. Cit. Nota 7 págs. 94 -97

ESQUEMA DEL SOBRESEIMIENTO

CASOS DE SOBRESEIMIENTO	Desistimiento Improcedencia durante el juicio Muerte del actor Autoridad deja sin efecto el acto, en beneficio del actor Juicio sin materia No se puede resolver de fondo

Fuente: LFPCA

1.6 PARTES QUE INTERVIENEN EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL.

Para continuar con el estudio del juicio ordinario, se sabe que hay partes en el juicio, las cuales básicamente son las mismas que en el juicio en línea y por la vía sumaria.

De acuerdo con la LFPCA, en su artículo 3º tenemos:

"Articulo 3. Son partes en el juicio contencioso administrativo:

***I.** El demandante.*

***II.** Los demandados. Tendrán ese carácter:*

***a)** La autoridad que dictó la resolución impugnada.*

***b)** El particular a quien favorezca la resolución cuya modificación o nulidad pida la autoridad administrativa.*

***c)** El Jefe del Servicio de Administración Tributaria o el titular de la dependencia u organismo desconcentrado o descentralizado que sea parte en los juicios en que se controviertan resoluciones de autoridades federativas coordinadas, emitidas con fundamento en convenios o acuerdos en materia de coordinación, respecto de las materias de la competencia del Tribunal.*

Dentro del mismo plazo que corresponda a la autoridad demandada, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá apersonarse como parte en los juicios en que se controvierta el interés fiscal de la Federación.

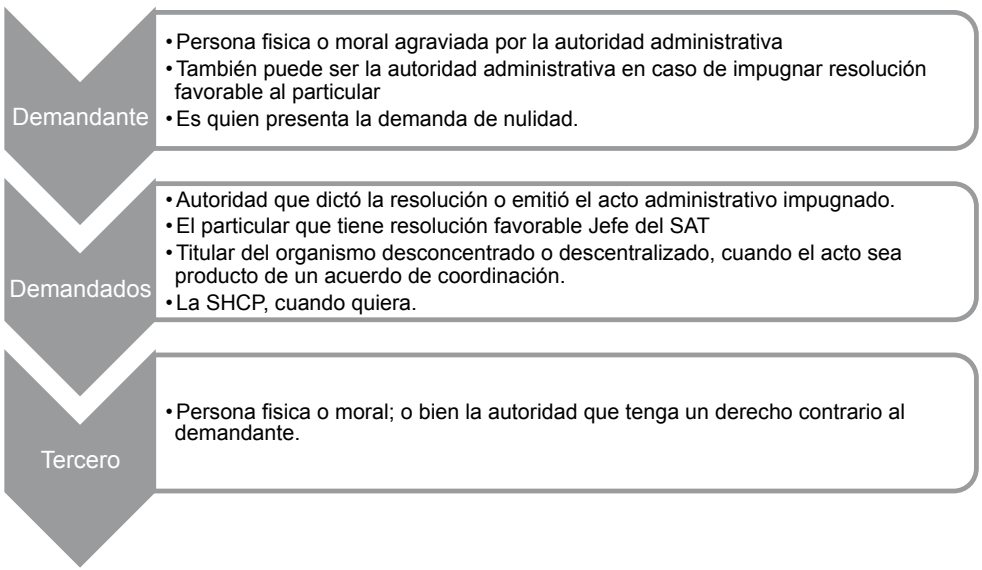
***III.** El tercero que tenga un derecho incompatible con la pretensión del demandante."*

Anteriormente, los titulares de la Administración Pública Federal y los Procuradores podrían entenderse como partes en el juicio, sin ser expresamente los demandados, es decir, como coadyuvantes, mejoró la redacción, ahora todas las autoridades, titulares, procuradores podrán comparecer en el juicio pero en carácter de demandados.

Los titulares de los organismos desconcentrados y descentralizados no pertenecen a la administración pública federal centralizada, sin embargo, sí pueden comparecer en juicio, pero solamente cuando se impugne un acto originado de un acuerdo de coordinación.[22] La jurisprudencia establece que en el caso de las unidades coordinadas, al menos al inicio del juicio, no son parte de éste, y en consecuencia no procede correrles traslado de la demanda.[23]

Respecto a los terceros, como el solicitante en el caso de la propiedad industrial, deben también llamarse a juicio, notificando de la demanda con la copia correspondiente.

PARTES EN LA DEMANDA DE NULIDAD



Fuente: LFPCA

22 *Op. Cit. Nota 7 p. 48*

23 *Juicio de Nulidad. No procede requerir copia de la demanda y sus anexos para el titular de la dependencia o entidad en la que dependa la autoridad demandada, cuando ésta lo sea una autoridad federativa coordinada en ingresos federales, por tener aquél legalmente el carácter de parte. Novena Época. TCC, SJF y su Gaceta Tomo: XVI, Noviembre de 2002, Tesis: VI. 1º. A. 126 A, p. 1144*

1.7 EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL EN SUS DIFERENTES ETAPAS.

Antes de comentar sobre las diferentes etapas de JCA, se debe ubicar en dónde se encuentra éste, pues es optativo, ya que el contribuyente puede optar por el recurso de revocación ante la propia autoridad que emitió el acto o por el juicio de nulidad que es ante el TFJFA; cabe recordar que este juicio se interpone cuando un contribuyente considera que la autoridad está emitiendo un acto de autoridad ilegal, (Véase siguiente cuadro):

DEMANDA DE NULIDAD CONTRA LA RESOLUCIÓN DE UN RECURSO DE REVOCACIÓN.

El particular interpone un recurso de revocación contra un acto o resolución:

La autoridad deja sin efectos una parte y confirma la otra	La autoridad confirma la resolución	La autoridad tiene por no interpuesto el recurso
• El particular interpone demanda contra las dos resoluciones. Puede añadir nuevos agravios. • Tribunal puede resolver sobre ambas resoluciones	• El particular interpone demanda contra las dos resoluciones. Puede añadir nuevos agravios. • Tribunal puede resolver sobre ambas resoluciones	• El particular interpone demanda contra las dos resoluciones. Puede añadir nuevos agravios. • Tribunal debe revisar si el recurso era procedente. • Si es procedente, Tribunal puede resolver sobre ambas resoluciones. • Si el recurso no era procendente, solo puede resolver sobre la última resolución.

Fuente: Silva Juárez, PCAF 2011

El Juicio Contencioso Administrativo se identifica en dos fases[24], para identificarlas se estructura de la siguiente manera:

- *Fase instructiva:* es la etapa del juicio que consiste en el conjunto de actos que son indispensables para que el proceso se encuentre en estado de dictar sentencia.
- *Fase resolutiva:* decide sobre la pretensión planteada por el actor.

Ahora bien, las etapas de la instrucción son:

- *Postulatoria:* en esta etapa se fija a litis.
- *Probatoria:* a través de esta etapa se desarrolla el proceso probatorio
- *Pre conclusiva:* en esta etapa las partes alegan lo que a su derecho convenga sobre los hechos y las pruebas presentadas en el juicio y los argumentos del porqué les asiste la razón y se debe emitir sentencia a su favor.

Las fases o etapas del procedimiento contencioso administrativo[25] son las siguientes:

PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL



Fuente: Silva Juárez, PCAF 2011

24 *HERNÁNDEZ SALCEDO, Ricardo, GUTIÉRREZ BARBOSA, Guillermo, "Juicio de Nulidad en Materia Fiscal Federal" INDETEC 1997*

25 *En el capítulo correspondiente al juicio sumario se encontrará el comparativo de plazos con el ordinario.*

1.8 BASES JURÍDICAS DE LA INTERVENCIÓN DE LAS AUTORIDADES FISCALES EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ACUERDO CON LA COORDINACIÓN FISCAL.

Las facultades de las entidades federativas para intervenir en el juicio, como bien se sabe, derivan de la suscripción del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y de sus respectivos Anexos celebrados entre el gobierno Federal y los gobiernos locales. De ahí se observa que están facultadas para intervenir en juicios contenciosos administrativos contra el contribuyente.

El marco normativo de la coordinación fiscal se encuentra en la Ley de Coordinación Fiscal, en los Convenios de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal Estados-Federación y en los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal. La colaboración administrativa entre las diversas autoridades fiscales es un instrumento mediante el cual los dos ámbitos de gobierno locales (estatal y municipal) en coordinación con la Federación, ejercen funciones en materia de administración de los ingresos federales. Se han firmado siete convenios de colaboración administrativa entre la SHCP y los estados y dos con el D.F. durante 1980 al 2009. Los anexos al convenio de colaboración administrativa en materia fiscal federal establecen funciones operativas y obligaciones que las entidades federativas aceptan llevar a cabo respecto de ingresos federales, así como los incentivos económicos correspondientes.[26]

Así mismo una vez firmado y publicado en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano oficial de la entidad de que se trate, el CCAMFF puede ser modificado celebrando nuevos acuerdos entre ambas partes. Mediante estos acuerdos la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el gobierno de la entidad, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Coordinación Fiscal, pueden convenir en modificar o suprimir algunas cláusulas, así como adicionar secciones al texto original.

Es importante saber que la Ley de Coordinación Fiscal fija las reglas de colaboración administrativa entre las diversas autoridades fiscales. Y la SHCP celebra convenios con las entidades que soliciten adherirse al SNCF que establece dicha Ley. El artículo 12 LCF a la letra dice:

> ***"Artículo 12.-*** *La Entidad inconforme con la declaratoria por la que se considera que deja de estar adherida al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal podrá ocurrir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme al artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y*

26 *INDETEC, Revista Trimestral No. 96 Sistema Nacional de Coordinación Fiscal 2011,pág. 20*

de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, demandando la anulación de la declaratoria que se haya dictado conforme al artículo anterior de esta Ley.

Desde la admisión de la demanda se suspenderán los efectos de la declaratoria impugnada, por 150 días. El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación producirá efectos 30 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenará la publicación en el Diario Oficial de la Federación, tanto de la suspensión de los efectos de la declaratoria impugnada, como de los puntos resolutivos del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En caso de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público infringiera las disposiciones legales y convenios relativos a la coordinación fiscal en perjuicio de un entidad federativa, ésta podrá reclamar su cumplimiento ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siguiendo, en lo aplicable el procedimiento establecido en la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

Lo que cabe resaltar del anterior precepto es que la entidad inconforme con la declaratoria por la que se considera que deja de estar adherida al SNCF podrá ocurrir ante la SCJN, demandando la anulación de la declaratoria que se haya dictado conforme al artículo anterior de esta Ley. Además de esto, señala que en caso de que la SHCP infringiera las disposiciones legales y convenios relativos a la coordinación fiscal en perjuicio de un entidad federativa, ésta podrá reclamar su cumplimiento ante la SCJN; sin embargo, para este precepto es necesario tomar en cuenta la aplicación supletoria del CFF para el trámite contencioso de la nulidad ante la Corte y los recursos según corresponda. Véase siguiente criterio al respecto:

Registro No. 205580

Localización:
Octava Época
Instancia: Pleno
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
61, Enero de 1993
Página: 55
Tesis: P. I/93
Tesis Aislada
Materia(s): Administrativa

COORDINACION FISCAL, CONVENIOS DE. EN LA SUBSTANCIACION DEL JUICIO DE NULIDAD ANTE LA SUPREMA CORTE, PREVISTO A FAVOR DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, CUANDO SE RESUELVA QUE LOS INFRINGIERON, DEBE APLICARSE SUPLETORIAMENTE EL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION.

A falta de disposición expresa en el artículo 12 de la Ley de Coordinación Fiscal, que es el precepto que regula el trámite y substanciación del juicio de nulidad que se haga valer ante la Suprema Corte por las entidades federativas, cuando se resuelva en un recurso de inconformidad que infringieron un convenio de coordinación fiscal, debe acudirse al Código Fiscal de la Federación, por ser el ordenamiento legal aplicable supletoriamente, según se desprende del artículo 11-A de la propia ley, que remite expresamente para la tramitación del recurso de inconformidad a las disposiciones que para el recurso de revocación establece dicho Código, debiendo entenderse que la intención del legislador fue la de remitir también supletoriamente al citado ordenamiento para el trámite del contencioso de nulidad ante esta Corte, más aún si se toma en cuenta que este último precepto, en su parte final, señala que la resolución que recaiga al recurso de inconformidad podrá ser impugnada ante el Tribunal Fiscal de la Federación por los particulares que resulten afectados; razón por la cual si en los términos del artículo 197, de ese cuerpo de leyes los juicios de nulidad se regirán por las disposiciones del Título VI relativo "del procedimiento contencioso administrativo", resulta lógico concluir que respecto del diverso juicio de nulidad que se haga valer por las entidades federativas ante la Corte Suprema, en lo no previsto por el artículo 12 citado, también resulta aplicable supletoriamente.

También cabe mencionar que a las autoridades fiscales demandadas no es necesario exigirles que acrediten su personalidad en el juicio de nulidad, porque forman parte del SNCF y tienen la calidad de autoridad; véase siguiente tesis:

Registro No. 205593

Localización:
Octava Época
Instancia: Pleno
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
61, Enero de 1993
Página: 64
Tesis: P. XIV/93
Tesis Aislada
Materia(s): Administrativa

COORDINACION FISCAL, CONVENIOS DE. EN EL JUICIO DE NULIDAD INTENTADO POR LAS ENTIDADES FEDERATIVAS ANTE LA SUPREMA CORTE, LAS AUTORIDADES DEMANDADAS NO TIENEN QUE EXHIBIR SU NOMBRAMIENTO PARA ACREDITAR SU PERSONALIDAD.

El artículo 200 del Código Fiscal de la Federación, aplicable supletoriamente al juicio referido y en la hipótesis descrita, establece que la representación de las autoridades corresponderá a la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica, según disponga el Ejecutivo Federal en el reglamento o decreto respectivo, o, conforme lo establezcan las disposiciones legales, tratándose de las autoridades de las entidades federativas coordinadas; asimismo, el diverso 214, fracción II, del citado ordenamiento, señala que el demandado deberá adjuntar a su contestación el documento en que acredite su personalidad cuando sea un particular y no gestione en nombre propio, de lo que se sigue que, conforme a los preceptos citados, no debe exigirse a las autoridades demandadas en el juicio de nulidad a que se alude la exhibición del nombramiento que acredite su personalidad.

Las reglas específicas para que las autoridades fiscales de las entidades federativas intervengan en el juicio contencioso administrativo las encontramos en los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, que celebra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con las entidades.

En los convenios de colaboración administrativa, dichas reglas se encuentran implícitas en la *sección de las facultades y obligaciones* donde se establece que *"...en materia de juicios, la entidad intervendrá como parte en los que se susciten con motivo de las facultades delegadas por virtud del Convenio. De igual manera, asumirá la responsabilidad en la defensa de los mismos, sin perjuicio de la intervención que corresponde a la Secretaría. Para este efecto la entidad contará con la asesoría legal de la Secretaría, en la forma y términos que se le solicite. Así mismo se establece que la entidad informará periódicamente a la Secretaría, de acuerdo con los lineamientos que al efecto señale esta última, la situación en que se encuentren los juicios en que haya intervenido y de las resoluciones que recaigan sobre los mismos. Y por ejemplo, en materia del recurso de revisión, la entidad*

se encuentra facultada para interponer dicho recurso en contra de sentencias y resoluciones, ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente, por conducto de las Salas, Secciones o Pleno del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en relación con los juicios en que la propia entidad haya intervenido como parte".[27]

La SHCP también es parte en los juicios de nulidad por ser de la administración pública federal.

Las facultades reservadas a la SHCP las encontramos en los mismos CCAMFF. En materia fiscal federal existen responsabilidades de los funcionarios públicos, éstas las encontramos reglamentadas en diversas disposiciones de ley, comenzando por la Carta Magna, en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y en otras tales como la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en la propia Ley de Coordinación Fiscal, en la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y por si fuera poco, en acuerdos emitidos por el TFJFA.

El tema que interesa para este análisis es el de la coordinación fiscal, por lo que las autoridades fiscales de las entidades federativas, en los términos del artículo 14 de la Ley de Coordinación Fiscal, señala que las mismas tendrán el carácter de autoridades fiscales federales.

Ahora bien, en la modalidad del juicio fiscal en línea, la responsabilidad de los funcionarios públicos la encontramos sustentada en el Acuerdo E/JGA/16/2011 que emitió TFJFA publicado en el DOF del 4 de mayo, donde específica lo siguiente: *"El incumplimiento a lo dispuesto en los lineamientos por parte de los servidores públicos, dará lugar al inicio del procedimiento disciplinario previsto por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en que incurran".*

Se sugiere que las autoridades fiscales estén atentas a lo establecido en diferentes ordenamientos legales, de los cuales se deriva alguna responsabilidad, pues con las nuevas modalidades, éstas aumentan para los funcionarios fiscales.

1.9 EVOLUCIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

Inicialmente en el apartado sobre la naturaleza jurídica del juicio contencioso administrativo se hizo mención de los antecedentes de este Tribunal y el motivo por el que cambió de nombre a TFJFA. Así pues, se debe conocer que desde el inicio

27 CCAMFF

de su actividad, a partir del 1 de enero de 1937, el Tribunal Fiscal de la Federación fungió por más de 50 años como un tribunal de simple anulación, dictando solo sentencias declarativas de nulidad del acto o resolución impugnada, pero dejando a la autoridad administrativa la responsabilidad de su cumplimiento para que fuera esta última la que emitiera una resolución administrativa, revocando o dejando sin efectos la declarada nula, lo que además se encontraba limitado en un principio al ámbito tributario.[28]

Las normas jurídicas que regulaban el juicio contencioso administrativo federal en nuestro país partieron inicialmente de la base de precisar de manera expresa los actos administrativos que estaban sometidos a control jurisdiccional, lo que en su momento fue motivo de interpretación en el sentido de que la norma jurídica dejaba fuera de la competencia del Tribunal por exclusión aquellos actos que no estuvieran referidos en ley como impugnables.

Lo anterior fue base de amplia discusión dentro del propio Tribunal, así como en el PJF, pronunciándose la Segunda Sala de la SCJN, en junio del 2000[29] en el sentido de que los actos y resoluciones emitidos por las autoridades administrativas que pusieran fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resolvieran un expediente y que en consecuencia se rigieran por la LFPA podrían ser impugnados ante el TFF, con lo que se abrió la competencia de dicho Tribunal para conocer de un sin número de asuntos que se emitieran con fundamento en dicho ordenamiento jurídico. Como consecuencia, la reforma a la LOTFF publicada el 31 de diciembre de 2000 en el DOF, además de concentrar en su artículo 11 la competencia total del Tribunal, recogió el criterio antes precisado en su fracción XIII, la cual señalaba:

> *"XIII. Las dictadas por autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo."*

Se aprecia que la posibilidad de impugnar los actos administrativos no especificados expresamente como competencia del Tribunal quedó supeditada a la posibilidad de aplicar a la materia correspondiente la LFPA, en razón de la naturaleza supletoria que el mismo ordenamiento prevé. Poco a poco se fue consolidando en el pensamiento

---

28 Op. Cit. Nota 3, p. 5

29 Tesis 2ª./J.139/99 Novena Época, Segunda Sala, SJF, Tomo XI, Junio 2000, p. 61. REVISION DE SEDE ADMINISTRATIVA. EL ARTICULO 83 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ESTABLECE LA OPCIÓN DE IMPUGNAR LOS ACTOS QUE SE RIGEN POR TAL OREDENAMIENTO A TRAVÉS DE ESE RECURSO O MEDIANTE EL JUICIO SEGUIDO ANTE EL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

jurídico nacional la idea de someter a control jurisdiccional los diversos actos administrativos que con motivo de la creación de nuevas leyes, nuevos órganos de gobierno, o bien nuevas figuras jurídicas, requerían someterse a los principios de legalidad y seguridad jurídica.

Es así como el Tribunal ha ido evolucionando pues se han mencionado los casos en que procede el JCA y por lo anterior, es notorio que se incrementaron de manera significativa los actos y resoluciones impugnables ante el mismo Tribunal. Así pues, tales son las pensiones civiles de los trabajadores del Estado a cargo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; responsabilidades administrativas de los funcionarios o empleados de la Federación; multas por infracciones a normas administrativas federales; cuotas de seguridad del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Organismo Fiscal Autónomo); pagos de garantías a favor de la Federación; los relacionados en materia de comercio exterior a que se refiere el artículo 94 de la LCE (controversias por certificados de origen, cuotas compensatorias); los que se funden en un tratado o acuerdo internacional para evitar la doble tributación o materia comercial suscrito por México, o cuando se alegue que se dejó de aplicar el mismo; lo relativos en materia de propiedad industrial y los actos administrativos, decretos y acuerdos de carácter general diversos a los reglamentos. Así mismo la materia administrativa contenciosa se ha visto incrementada mediante la actividad jurisprudencial de la SCJN.[30]

Justamente por ese incremento significativo de los actos y resoluciones impugnables ante el Tribunal, actualmente se implementaron dos nuevas modalidades de justicia fiscal en México, tema relevante del presente trabajo. Una novedad es el sistema de justicia fiscal en línea, donde hoy en día se han creado salas especializadas en algunos Tribunales del país y se tiene acceso a la justicia los 365 días del año, las 24 horas del día y la otra novedad es el juicio fiscal por la vía sumaria, que según datos revelados por el propio tribunal, para sustanciar un juicio contencioso administrativo en promedio debían transcurrir aproximadamente 1,372 días, esto es, 3 años, 9 meses y 7 días, contrariando elementos fundamentales de la garantía de tutela jurisdiccional prevista en el artículo 17 de la CPEUM, por tal motivo, se propuso la adopción del juicio sumario como: un medio procesal más rápido y sencillo para la resolución del citado procedimiento, en casos en que por su materia no representan mayor complejidad y reduciéndolos además con el criterio de la cuantía.

30 Óp. Cit. Nota 3, p. 5-7

Capítulo II
El Juicio Fiscal en Línea y el Juicio Fiscal en la Vía Sumaria

2.1 La tecnología informática en las Entidades Federativas; 2.1.1; Antecedentes de la tecnología informática en el Derecho Administrativo; 2.1.2; Antecedentes de la Reforma a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (juicio en línea y vía sumaria) 2.1.3; Antecedentes de las Herramientas Tecnológicas para la tramitación del Juicio Contencioso Administrativo Federal y su aplicación por las Entidades Federativas 2.2.El Juicio Fiscal en Línea; 2.3. El Juicio Fiscal Sumario (vía sumaria)

En México, es evidente la transformación que en materia fiscal federal se viene dando, como se puede observar en dos modalidades que actualmente tiene la justicia fiscal en el país, que son la vía sumaria y el trámite en línea en relación al procedimiento contencioso administrativo. De lo anterior tenemos que las entidades federativas se inundan de la tecnología informática con que actualmente cuenta el sistema fiscal mexicano.

De acuerdo con la reforma a la LFPCA y opiniones de funcionarios del TFJFA[31], es menester todo el esfuerzo en la implementación del Juicio en Línea, ya que se espera sea parte de una guía para que en el futuro otras instancias tengan conocimientos más claros sobre lo que deben hacer para desmaterializar sus juicios. El reto es ser esa guía que no tuvieron, por ser pioneros a nivel mundial en el uso de Internet para la sustanciación de los procesos jurisdiccionales. Así mismo, la implementación de la vía sumaria que prevé ahorros sustanciales en tiempo durante el proceso del juicio.

31 *Opiniones de Juan Manuel Jiménez Illescas, Presidente del TFJFA, Alejandra Rosas, Secretaria de Acuerdos y Miguel Alfonso Delgado Magistrado del TFJFA de Occidente, 2011 y 2012.*

2.1. LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

2.1.1 Antecedentes de la tecnología informática en el Derecho Administrativo

El derecho administrativo a grandes rasgos, es aquella rama del derecho público que regula las relaciones de la administración pública frente a los gobernados o particulares. Para que un Estado funcione debe contar con una administración pública bien organizada tanto en estructura como en funciones.

En el área de la administración pública, la tecnología informática ha permitido hacer más eficiente la actuación de los órganos administrativos mediante el uso de equipos de cómputo, procesadores de textos, base de datos, entre otros, que permiten al funcionario público agilizar los procedimientos y trámites administrativos tanto internos, como para los particulares. Al respecto es destacable el hecho de que, de los tres ámbitos de gobierno (legislativo, administrativo y jurisdiccional), se puede afirmar que el administrativo es el que más y mejor ha aprovechado la tecnología informática.[32]

A partir de las reformas publicadas en el DOF el 30 de mayo de 2000, las cuales adicionaron diversos párrafos al artículo 69C de la LFPA, se incorporó la posibilidad de que a través de medios de comunicación electrónica los particulares puedan presentar promociones y solicitudes ante las dependencias y organismos descentralizados de la Administración Pública Federal. En ese caso, se señala que se emplearán en sustitución de la firma autógrafa medios de identificación electrónica (como sería la firma electrónica simple o avanzada), refiriendo que las reglas para tal efecto deberían ser emitidas por el órgano administrativo en cuestión y ser publicadas en el DOF. Por otra parte, también se menciona que el órgano administrativo puede hacer uso de dichos medios para realizar notificaciones, citatorios o requerimientos a los particulares.[33]

Posteriormente, el 17 de enero de 2002 se publicó en ese mismo órgano de difusión un Acuerdo emitido por el titular de la entonces Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, por medio del cual se establecieron disposiciones generales en materia de recepción de promociones, notificaciones, citatorios o requerimientos a través del uso de medios de comunicación electrónica, en los términos previstos por el artículo 69C de la LFPA.

Con ello quedaron establecidos los lineamientos mínimos a observar en las reglas para su implementación, tales como establecer requisitos de los documentos,

32 Óp. Cit. Nota 3, p. 17
33 Ibídem

formatos electrónicos, plazos máximos de respuesta o atención, la referencia al monto de los derechos, productos o aprovechamientos aplicables, entre otros.

Además se facultó a las entidades o dependencias de la APF para establecer mecanismos tecnológicos que representaran mejoras en los tiempos de atención a los particulares, disminución de costos, oportunidad para elevar la eficiencia y transparencia, incrementar la productividad y mejorar la calidad de los servicios que éstas proporcionan.

En el ámbito tributario, es una realidad que a partir de las reformas del año 2006 al CFF en materia de documentos digitales, certificación y firma electrónica avanzada se ha implementado en nuestro sistema tributario la posibilidad (y en otros casos hasta la obligación) de recabar información de los contribuyentes, de cumplir las obligaciones formales, realizar el pago de contribuciones y efectuar diversos trámites y registros mediante el uso de sistemas informáticos y de comunicación masiva.[34]

2.1.2 Antecedentes de la Reforma a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (juicio en línea y vía sumaria).

El Juicio Fiscal en Línea se implementó en nuestro país mediante decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que aprobó la Cámara de Diputados, Gaceta Parlamentaria número 2725-II el 26 de marzo de 2009. El 15 de abril la Cámara de Diputados aprobó el dictamen por 313 votos a favor y cero en contra. El 28 de abril la Cámara de Senadores aprobó el dictamen por 83 votos y cero en contra. Es publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 2009; sin embargo, en el DOF del 10 de diciembre del 2010 se prorrogó su entrada en vigor hasta el 2011 en virtud de que se le dio una *vacatio legis* de 240 días naturales debido a que la reforma del juicio fiscal por la vía sumaria entraría en vigor conjuntamente con la del juicio en línea. Así pues, entró en vigor el 07 de agosto de 2011.

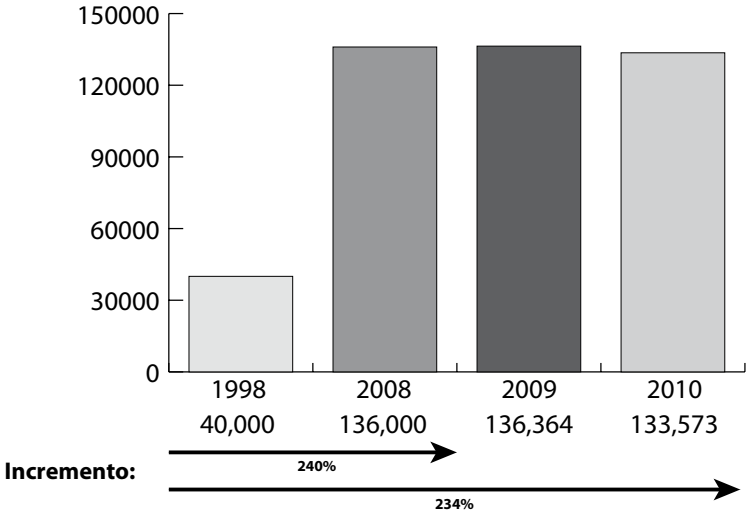
Por otro lado, el juicio fiscal sumario fue aprobado en la Cámara de Senadores el 14 de abril de 2010 y en la Cámara de Diputados el 03 de noviembre de 2010. El Decreto fue publicado en el DOF el 10 de diciembre de 2010 y entró en vigor igualmente el 07 de agosto de 2011.

Lo anterior se debió al extraordinario crecimiento de trabajo que enfrentó el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa equivalente a un 240 %, al pasar de 40,000 mil asuntos que se veían en 1998 a 136 000 mil asuntos en 2008. Ante

34 Óp. Cit. Nota 3, p. 18

esta problemática, el Tribunal estimó que era indispensable contar con recursos presupuestales de gran consideración para crear salas regionales ya que los 136 000 mil asuntos tendrían una distribución desproporcionada en cuanto al número y distribución en las salas existentes de aquella fecha. Las salas equivalían a 44 millones de pesos al año y se requería la creación de 20 a 30 salas, siendo aproximadamente de 880 o 1300 millones de pesos de gasto regular de presupuesto anual del Tribunal.[35] (Véase siguiente gráfico)

Incremento en la demanda de justicia fiscal-administrativa



Fuente: TFJFA "Incremento de la Justicia fiscal administrativa".

2.1.3. Antecedentes de las Herramientas Tecnológicas para la tramitación del Juicio Contencioso Administrativo Federal y su aplicación por las Entidades Federativas

En comentarios de *Rojas Amandi*[36], los juristas de nuestro país permanecen escépticos y muestran poco interés en el aprovechamiento de los avances tecnológicos en el campo de la comunicación. Señala que tal vez los avances

35 DELGADILLO, Miguel Alfonso, "Ponencia en el Seminario sobre Juicio Fiscal Sumario y Juicio Fiscal en Línea, sus implicaciones para las Haciendas Públicas", organizado por INDETEC, Guadalajara, Jalisco, junio 2011.

36 ROJAS AMANDI, Víctor Manuel, "El uso de internet en el Derecho" Oxford University Press, 2009

tecnológicos resultan más útiles para los juristas o funcionarios que trabajan con el derecho internacional, el derecho estadounidense, europeo o nacional de los países integrantes de la Unión Europea, que para los juristas o funcionarios que trabajan con el derecho nacional. Considera como razón el desarrollo de internet en todos sus campos, entre ellos el jurídico, que ha sido más profundo en los países industrializados.

Internet.

El juicio en línea es substanciado a través de internet, una herramienta internacionalmente conocida.

Según *Jimenez Illescas*, es definida como la mayor red de comunicación mundial. La internet se concibe como una asociación global de computadoras que llevan datos y hacen posible el intercambio de información, mediante una interrelación de redes que pertenecen a diferentes propietarios y sin autoridad central de funcionamiento cuya filosofía imperante es que se trata de sistemas abiertos, de tal manera que todas las herramientas desarrolladas pasan a ser de dominio de la comunidad.[37]

La *Internet* es definido por *Rojas Amandi*[38] como: *El conjunto de servidores de archivos distribuidos en todo el mundo e interconectados mediante un sistema maestro de redes de cómputo.*

Internet *s*egún la autora *Delia Crovi*[39]*: Las limitaciones de la Internet, se ubican en que su acceso aún está restringido a un grupo de ciudadanos. Además, para ser navegador activo en las redes es necesario contar con habilidades informáticas, en tanto que exige condiciones duras para la recepción.*[40]

De los anteriores párrafos se aprecia que para manejar internet se debe contar con un mínimo de conocimientos informáticos y algo muy destacable en el juicio en línea, es la importancia de las notificaciones, pues se debe estar atento a las mismas, al estar ingresando al correo electrónico institucional, en este caso para la autoridad.

---

37 Op. Cit. Nota 3, p.26

38 Op. Cit Nota 36 prefacio

39 CROVI DRUETTA, Delia María, "¿Es Internet un medio de comunicación?", Revista Digital Universitaria, Volumen 7, No. 6, ISSN: 1067-6079, UNAM, http://www.revista.unam.mx/vol.7/num6/art46/jun_art46.pdf , crovi@servidor.unam.mx

40 Según Crovi Druetta, en el caso de la Internet, debido a sus características de inmersión en el medio, es posible afirmar que la recepción debe por fuerza ser dura, en la medida en que exige una participación activa del usuario.

Documento electrónico.

El artículo 17 D del CFF define al documento digital como: "*…todo mensaje de datos que contiene información o escritura generada, enviada, recibida o archivada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología".* Esa definición es idéntica al concepto de mensaje de datos previsto en el artículo 89 del CC, que lo define como *"…la información generada, enviada, recibida o archivada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología".*

De lo anterior se desprende que ambos conceptos hacen referencia a la información generada y transmitida por medios electrónicos, lo que implica necesariamente la configuración de los elementos de cualquier medio de comunicación: una persona que genera el mensaje (emisor), otra que lo recibe (destinatario) y el mensaje en sí (información).[41]

Firma electrónica avanzada

En términos del autor *Jimenez Illescas*, la firma se concibe como:

> *… el trazado gráfico, conteniendo habitualmente el nombre, los apellidos y la rúbrica de una persona, con el cual se suscriben los documentos para darle autoría y virtualidad, obligarse en lo que ellos se dice.*

La firma autógrafa se concibe como:

> *… la que suscribe la persona física con su propia mano, consistente en el conjunto de letras que señalan o identifican el sujeto dentro de los documentos suscritos, por el mismo vinculando permanentemente la voluntad de expresar la obligación de lo establecido en dichos documentos.*

Así, la firma electrónica se define como los datos electrónicos que sirven para identificar al firmante en relación con un mensaje de datos que indiquen que la persona ha aprobado la información contenida en ese mensaje de datos.

El Código de Comercio define lo que es firma electrónica y firma electrónica avanzada. Lo anterior se debe a que dicho ordenamiento incorporó, mediante su reforma publicada en el DOF el 29 de agosto de 2003, la definición aportada por el artículo segundo de la Ley Modelo sobre las Firmas Electrónicas de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional.[42] Esta figura jurídica

41 Op. Cit. Nota 3

42 Aprobada por la UNCITRAL el 05 de julio d 2001. www.daccessdds.un.org

comenzó a regularse en el Derecho Privado en el ámbito mercantil para su posterior aplicación en otras áreas.

Para *Jimenez Illescas*, este hecho explica que el resto de los ordenamientos legales que contemplan o hacen referencia a la firma electrónica no contengan una definición legal de la misma.

Artículo 89 del CC:

> ***…***
>
> ***Firma Electrónica:*** *Los datos en forma electrónica consignados en un Mensaje de Datos, o adjuntados o lógicamente asociados al mismo por cualquier tecnología, que son utilizados para identificar al Firmante en relación con el Mensaje de Datos e indicar que el Firmante aprueba la información contenida en el Mensaje de Datos, y que produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, siendo admisible como prueba en juicio.*
>
> ***…***

El artículo 97 del CC, señala:

> *"…*
>
> *La Firma Electrónica se considerará Avanzada o Fiable si cumple por lo menos los siguientes requisitos:*
>
> *I. Los Datos de Creación de la Firma, en el contexto en que son utilizados, corresponden exclusivamente al Firmante;*
>
> *II. Los Datos de Creación de la Firma estaban, en el momento de la firma, bajo el control exclusivo del Firmante;*
>
> *III. Es posible detectar cualquier alteración de la Firma Electrónica hecha después del momento de la firma, y*
>
> *IV. Respecto a la integridad de la información de un Mensaje de Datos, es posible detectar cualquier alteración de ésta hecha después del momento de la firma.*
>
> ***…"***

La firma electrónica se puede clasificar como simple, a diferencia de la firma electrónica avanzada, que es aquella que además reúne los requisitos de seguridad en su creación, tales como autenticidad, la cual abarca dos aspectos, a saber: la vinculación única con el firmante (lo que implica control exclusivo del firmante sobre la firma, de tal manera que no pueda ser atribuida a otra persona), así como la identificación de dicho firmante y la integridad posterior tanto del mensaje de datos firmando como de la propia firma.[43]

De lo anterior, se observa que la administración pública, específicamente el SAT ha aprovechado este instrumento para su interacción con los contribuyentes, contemplándose la firma electrónica avanzada como un medio para identificar el firmante con el cumplimiento de sus obligaciones tanto formales (registro, declaraciones, avisos, solicitudes) como materiales relativas al pago de las contribuciones a su cargo.[44]

Al respecto tenemos el artículo 17 D del CFF, que señala:

> ***"Artículo 17-D**.- Cuando las disposiciones fiscales obliguen a presentar documentos, éstos deberán ser digitales y contener una firma electrónica avanzada del autor, salvo los casos que establezcan una regla diferente. Las autoridades fiscales, mediante reglas de carácter general, podrán autorizar el uso de otras firmas electrónicas.*
>
> *…"*

Los sistemas o redes de cómputo en las entidades federativas

Nuevamente en palabras de *Jimenez Illescas*, especifica que en el ámbito de las entidades federativas son múltiples los casos en que los sistemas informáticos han sido aprovechados para la función administrativa. Por su importancia destaca el sistema denominado "Solución integral para la administración tributaria" que desde su implementación en octubre de 2006 tiene como objetivo mantener una base de datos al servicio del órgano de recaudación federal, respecto del registro de contribuyentes, el cumplimiento de sus obligaciones, así como prestar diversos servicios al contribuyente a través de internet, como orientación fiscal, quejas, aclaraciones, solicitudes de constancias, expedición de copias certificadas, verificación de domicilio, entre otros.

43 Óp. Cit. Nota 3, p. 27-29
44 Ibídem

El correo electrónico.

Internet cumple con dos funciones básicas: medio de comunicación y medio de información. Realiza la primera mediante el correo electrónico, los foros de discusión y el servicio de llamadas telefónicas. Como medio de información, internet es el centro de documentación más grande y completo del mundo, a tal grado que puede comparársele con una inmensa biblioteca a la que tiene acceso desde cualquier computadora del mundo conectada a ella. Y como bien dice *Rojas Amandi*, en una biblioteca real solo las autoridades tienen la facultad de introducir nuevos libros o documentos; en cambio, internet permite que los usuarios introduzcan libremente información, lo que propicia un crecimiento enorme e ininterrumpido del acervo disponible.[45]

En nuestra legislación, el CFF refiere al uso del correo electrónico como un medio de comunicación entre la administración pública y los contribuyentes; ningún ordenamiento jurídico lo define. Sin embargo, siendo un término informático, en esa área se concibe como un servicio de internet el cual permite a los usuarios que tengan dirección de correo electrónico, enviar y recibir mensajes mediante sistemas de comunicación electrónicos. De lo anterior se entiende que el correo electrónico es entonces un mensaje de datos de los definidos por el artículo 89 del CC y del 17 D del CFF. En materia tributaria, la fracción III del artículo 18 del CFF establece que uno de los requisitos de las promociones que los particulares presenten ante las autoridades fiscales, es que señalen la dirección de correo electrónico para recibir notificaciones. De igual forma el artículo 134 fracción I del citado Código establece que las notificaciones, tratándose de documentos digitales, podrán realizarse a través de mensaje de datos, incluyendo como supuesto específico que se efectúen mediante la página de internet del SAT o mediante correo electrónico.[46]

2.2 EL JUICIO FISCAL EN LÍNEA

El juicio en línea en opinión de *Rigoberto Reyes Altamirano "es una modalidad del procedimiento seguido ante el TFJFA para impugnar actos o resoluciones definitivos de la autoridad administrativa fiscal, o el procedimiento que debe regir, cuando dicha autoridad controvierta actos o resoluciones definitivos favorables a los particulares."* [47]

45 *Op. Cit. Nota 36 p. 1*

46 *Óp. Cit. Nota 3 p. 27-29*

47 *REYES ALTAMIRANO, Rigoberto. "Juicio en Línea y Juicio Sumario en Materia Fiscal", Editores Taxxx, p. 49, Guadalajara, Jalisco, México 2011*

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) implementó un sistema de justicia en línea, el cual es un *"Sistema informático a efecto de registrar, controlar, procesar, almacenar, difundir, transmitir, gestionar, administrar y notificar el procedimiento contencioso administrativo que se sustancie ante el Tribunal".* El juicio en línea en términos de la LFPCA, es la substanciación y resolución del juicio contencioso administrativo federal en todas sus etapas y procedimientos a través del Sistema de Justicia en Línea, incluso los casos en que sea procedente la vía sumaria.

2.2.1 Generalidades del Juicio Fiscal en Línea

Después de abordar la definición del juicio en línea, se considera importante conocer desde el punto de vista de la exposición de motivos de la reforma y desde el punto de vista del TFJFA en opinión de *Jiménez Illescas*, los objetivos y beneficios de dicho juicio.

El Juicio en Línea tiene tres objetivos principales:

1. Establecer la posibilidad de que los particulares puedan impugnar los actos y resoluciones administrativas de carácter individual o general utilizando dispositivos electrónicos o sistemas computacionales, por lo que todas las promociones y documentos serán presentados de manera digital y contendrán la firma electrónica avanzada que los valide, proporcionada por el mismo Tribunal.

2. La integración y consulta de los expedientes que se formen con motivo de la tramitación de los juicios ante el Tribunal a través de internet.

3. La implementación de un Sistema de Justicia en Línea por parte del Tribunal para la substanciación del Juicio en Línea.

El Juicio en Línea tiene los siguientes beneficios:

Para los justiciables:

- Acceso total a la justicia administrativa. Todo justiciable podrá acceder y actuar, desde cualquier computadora con internet, las 24 horas y los 365 días del año a su expediente electrónico en tiempo real.
- Litigio fácil, eficiente y seguro. El Juicio en Línea se substanciará de manera integral, desde la presentación de la demanda hasta que se dicte sentencia.
- Justicia expedita. Reducir drásticamente el tiempo de tramitación de los juicios.

- Ahorros sustanciales. En tiempo, dinero y papel.

Para el Tribunal:

Mayor eficiencia y calidad en la función jurisdiccional al:

- Reducir los tiempos en el trámite administrativo de los juicios e incrementar el tiempo en el estudio y análisis jurisdiccional.
- Repartir de manera más eficiente las cargas de trabajo entre las diferentes Salas.

Para el Gobierno Jurisdiccional:

- Contar con un sistema integral que genere información en tiempo real para la planeación y toma de decisiones.
- Crear mecanismos eficientes para medir objetivamente el desempeño de la función jurisdiccional.
- Conocer los juicios con características similares para evitar criterios contradictorios, fijar jurisprudencia y agilizar los procesos.

En general:

- Posicionar a México en el mundo como un transformador de la forma tradicional de impartir justicia.
- Generar una experiencia institucional favorable que pueda ser aprovechada por otros órganos de impartición de justicia.
- Contar con un mecanismo que permita el intercambio oportuno de información con otros poderes y autoridades para la toma de decisiones.
- Contribuir al desarrollo económico del país.
- Generar un impacto económico favorable en las finanzas públicas.[48]

Así pues, según *Jiménez Illescas*, el Juicio en Línea tiene las siguientes características:

- Será optativo para el demandante elegir entre el juicio en la vía tradicional y el substanciado en línea. Así, de elegir esta opción, la misma será obligatoria para la autoridad demanda. Por lo que respecta al juicio de lesividad, la opción de elegir será del demandado.

48 Óp. Cit. Nota 3, p 52-54

- Le aplicarán todas las disposiciones de la LFPCA, salvo las particularidades que se prevén en el capítulo X (Del Juicio en Línea) que se adiciona al Título II (De la Substanciación y Resolución del Juicio) de la citada Ley.
- La creación de un sistema electrónico denominado Sistema de Justicia en Línea en el que se registrará, controlará, procesará, almacenará, difundirá, transmitirá, gestionará y notificará todo el procedimiento. En él se integrará el expediente electrónico del juicio, que incluirá: promociones, resoluciones, oficios, documentos, actuaciones, constancias, notificaciones, solicitudes, incidentes, recursos de reclamación, aclaraciones de sentencia, quejas y demás actos y hechos jurídicos que deriven de la substanciación del juicio.
- No aplicará para la presentación y trámite de los recursos de revisión y juicios de amparo que se promuevan contra las actuaciones y resoluciones del Juicio en Línea.
- Se registrarán autorizados y delegados de las partes (previa solicitud) proporcionándoles su firma electrónica avanzada, clave de acceso y contraseña.
- El Tribunal registrará la fecha y hora en que se abran los archivos que contengan las constancias que integren el expediente y emitirá el acuse de recibido correspondiente.
- El Tribunal, por medio de acuerdos reglamentarios, da a conocer los lineamientos técnicos y formales que deben observarse por las partes.
- Las pruebas documentales electrónicas tendrán el mismo valor probatorio que su constancia física.
- No deberán exhibirse copias para traslado, con lo que se economizará y evitará en gran medida el uso excesivo de papel y el mejor manejo indiscriminado del mismo.
- En relación al procedimiento para la notificación de acuerdos y demás resoluciones, se establece que las de carácter personal se harán a través del correo electrónico que señalen las partes, con la cual el Actuario elaborará la minuta en la que precise la actuación a notificar y los documentos que se adjuntan. Finalmente, como medida de seguridad, el sistema electrónico del Tribunal registrará la fecha y hora en que se efectúe el envío.
- La notificación se tendrá por legalmente practicada cuando el sistema electrónico genere el acuse de recibo donde conste la fecha y hora en que se ha recibido el mensaje enviado, y surtirá efectos a partir del día hábil siguiente a la fecha en que se realizó.
- Se computarán hábiles las 24 horas de los días en que se encuentren abiertas al público las oficinas del Tribunal.
- Las autoridades demandadas deberán registrar a las unidades administrativas jurídicas que los representen durante el periodo de *vacatio legis*, señalando su dirección de correo electrónico.

- Se reformó la Ley Orgánica del Tribunal en lo relativo a las facultades del Secretario General, de los Secretarios de Acuerdos de Sala Superior y de Salas Regionales para la implantación del Juicio en Línea, como sería imprimir y certificar las constancias electrónicas del juicio.
- En los artículos transitorios del decreto de reformas se establece que los juicios en trámite se continuarán substanciando conforme al procedimiento vigente (no electrónico) y que de acuerdo a la reforma que se comenta, se le denomina Juicio en la vía tradicional.[49]

En síntesis, se caracteriza porque es promovido, sustanciado y resuelto a través de Internet, mediante la página Web del TFJFA. El ingreso al Sistema de Justicia en Línea está a disposición los 365 días del año, las 24 horas del día.

Para su mayor comprensión, se realizó un resumen de las características y aspectos más relevantes del Juicio en Línea contemplado en la LFPCA (véase cuadro siguiente):

JUICIO EN LÍNEA	LFPCA (Capítulo X, artículos 58-A al 58-S)
PROMOCIONES	Todas las promociones enviadas a través del Sistema deberán ser autorizadas por las partes con la Firma Electrónica Avanzada (FEA), la cual producirá los mismos efectos legales que la firma autógrafa y garantizará la integridad del documento, teniendo el mismo valor probatorio. Los Magistrados, Secretarios de Acuerdos y Actuarios del Tribunal autorizarán sus acuerdos, oficios y resoluciones con este mismo elemento. Las partes podrán consultar el estado procesal de su Expediente Electrónico y de todas las promociones, pruebas y actuaciones que lo integran, desde cualquier computadora, las 24 horas del día y los 365 días del año. Para el recurso de revisión y amparo se imprime el expediente electrónico y se certifican las constancias para remitirlos a donde corresponda.

49 Óp. Cit. Nota 3, p. 55-56

JUICIO EN LÍNEA	LFPCA (Capítulo X, artículos 58-A al 58-S)
REGISTRO DE AUTORIDADES	Las autoridades susceptibles de ser impugnadas ante el Tribunal o encargadas de su defensa en juicio, podrán hacerlo a través del titular de la dependencia o unidad administrativa de que se trate. Dichas autoridades deberán registrar en la Secretaría General de Acuerdos o ante la Presidencia de las Salas Regionales la dirección de Correo Electrónico Institucional y domicilio oficial para efecto de emplazarlas electrónicamente a juicio en caso de ser autoridad demandada.
PRUEBAS	Las partes en el Juicio en Línea podrán ofrecer las mismas pruebas que en el Juicio Tradicional, las cuales son preferentemente documentales públicas y privadas. Éstas deberán exhibirlas de manera legible, anexas digitalmente al escrito de demanda, ampliación de demanda y contestación que corresponda, que se enviará al Tribunal mediante el Sistema. Si cuentan con un documento o archivo electrónico, directamente lo integrarán al Sistema, y si lo tienen en forma impresa tendrá que escanearse para convertirlo en documento digital. En la promoción de que se trate se deberá manifestar la naturaleza de los mismos, precisando si la reproducción digital corresponde a una copia simple, una copia certificada o al original y tratándose de esta última, si tiene o no firma autógrafa. Los particulares deberán hacer esta manifestación bajo protesta de decir verdad que son documentos originales. La omisión de la manifestación presume en perjuicio solo del promovente, que el documento digitalizado corresponde a una copia simple.

JUICIO EN LÍNEA	LFPCA (Capítulo X, artículos 58-A al 58-S)
NOTIFICACIONES	Todos los acuerdos, oficios y resoluciones que conforme a la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, deban notificarse en forma personal, mediante correo certificado con acuse de recibo, o por oficio, se deberán realizar a través del Sistema. Las partes previamente deben proporcionar su Dirección de Correo Electrónico en el propio Sistema. A ese correo electrónico se les enviará un aviso informando de la existencia de un acuerdo, oficio o resolución, e indicándoles que deben acceder al Sistema a consultarlo en el término de tres días. En el momento en que el destinatario del aviso accede al Sistema y al Expediente Electrónico del juicio de que se trate, se tendrá por hecha formalmente la notificación y el Sistema expedirá un Acuse de Recibo Electrónico en el que se consignará la fecha y hora de dicho acceso. Si no existe el acceso al Expediente Electrónico y el Sistema no emite el Acuse de Recibo Electrónico en el plazo de tres días hábiles mencionado donde conste la notificación, la misma se llevará a cabo al día siguiente por Lista y Boletín Procesal (cuarto día hábil).
SISTEMA DE JUSTICIA EN LINEA	En caso que el Tribunal advierta alguna alteración o destrucción la información del sistema se tomará medidas necesarias desde cancelar su FEA, clave y contraseña hasta responsabilidades penales. Cuando por caso fortuito, fuerza mayor o fallas técnicas se interrumpa el funcionamiento del Sistema de Justicia Fiscal en Línea, las partes deberán dar aviso a la Sala en la misma promoción sujeta a término, quien pedirá un reporte al responsable de la administración del sistema sobre la existencia de la interrupción del servicio, señalando causa y tiempo de la interrupción, fecha y hora de inicio y término de la misma para determinar si hubo o no incumplimiento de los plazos legales.

Fuente: LFPCA

2.2.2 El expediente electrónico y los medios de impugnación

El numeral 1 A, fracción IX de la Ley en estudio refiere el contenido del *expediente electrónico* como el conjunto de información contenida en archivos electrónicos o documentos digitales que conforman un juicio contencioso administrativo federal, independientemente de que sea texto, imagen, audio, identificado por un número específico. Es decir, *"estará compuesto de todos y cada uno de los documentos exhibidos por las partes de forma digital, tratándose de promociones, pruebas documentales, audio o video, testimoniales a través de videoconferencias, periciales, actuaciones, acuerdos, resoluciones interlocutorias y la definitiva. De igual manera, en materia de pruebas tiene una tarea trascendente, pues las mismas van a ser ofrecidas y desahogadas por procedimientos en línea. Por ello se desprende la buena fe de las partes para que la ausencia de manifestar bajo protesta convierta al documento en privado."*[50]

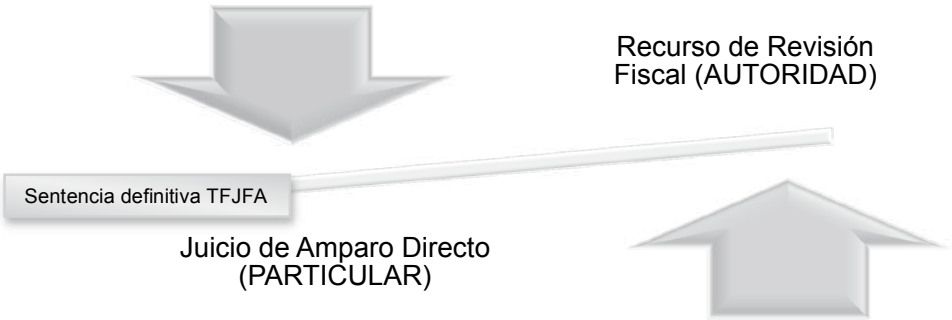
Valdría la pena cuestionarse sobre el valor de las constancias que integran el expediente electrónico, es una pregunta necesaria, ya que dentro de él se encuentran las pruebas documentales digitalizadas, mismas que se podrían utilizar en caso de promover algún medio de impugnación contra la sentencia definitiva emitida por el TFJFA.

Así pues, como ya se ha estudiado, el Juicio en Línea se tramita desde la presentación de la demanda hasta el dictado de su sentencia, a través del Sistema de Justicia en Línea. Esto es, todo el proceso jurisdiccional que comprende desde la presentación de la demanda y que culmina con la sentencia definitiva se llevará a cabo a través de medios electrónicos, "excluyendo" de esta vía a los medios de impugnación contra las sentencias del Tribunal.

Actualmente se prevén como medios de impugnación para ambas partes contendientes en el juicio contencioso administrativo tradicional y en línea contra las sentencias definitivas adversas, emitidas dentro del juicio, el recurso de revisión fiscal para la autoridad, y el juicio de amparo directo para el particular (véase Gráfico 2).

50 Óp. Cit. Nota 3, p. 55.

Gráfico 2. Medios de impugnación contra la sentencia definitiva del TFJFA.



Sin embargo, destaca que en el decreto de 12 de junio del 2009 precitado, con la finalidad de instaurar el juicio en línea no se estableció la aplicación de los medios electrónicos a través de la plataforma tecnológica, para los medios de impugnación contra la sentencia en línea.

A diferencia de la substanciación del juicio en línea que comprende desde la presentación de la demanda, hasta el dictado de la sentencia a través de medios electrónicos. *¿Por qué los medios de defensa no están incluidos?, ¿Qué pretendió el legislador al dejarlos fuera?,* se podría pensar que quizás más adelante se incluyan a efecto de uniformar el sistema en línea, pero hasta ahora se seguirá de la manera tradicional de acuerdo con la Ley, es decir, las constancias que integran el expediente electrónico deben imprimirse y certificarse por los funcionarios del Tribunal y de esta forma enviarse en papel al Poder Judicial de la Federación.

De conformidad con el artículo 58-Q de la LFPCA, se estableció que no serían aplicables los medios electrónicos para la presentación y tramitación de los medios de impugnación (recurso de revisión fiscal y juicio de amparo directo) en contra de la sentencia que se emita dentro del juicio en línea. De tal manera, el citado artículo prevé que el Secretario General de Acuerdos, los Secretarios Adjuntos de Sección y los Secretarios de Acuerdos de Sala Superior y de Salas Regionales según corresponda, serán los encargados de imprimir y certificar las constancias que integran el expediente electrónico. De esta forma se remitirán las constancias al Poder Judicial de la Federación y sólo en aquellos casos en que este último lo solicite, se remitirá la información a través de medios electrónicos.

De forma similar en los artículos 47, fracción VIII; 48, fracción VII; 49, fracción V; y 50, fracción VI, de la LOTFJFA se contemplan las facultades para los funcionarios

del Tribunal como el Secretario General de Acuerdos, los Secretarios adjuntos de Acuerdos de las Secciones, los Secretarios de Acuerdos de Sala Superior y los Secretarios de Acuerdos de las Salas Regionales de digitalizar los documentos que obren en papel en los juicios por la vía tradicional, o bien digitalizar los documentos y actuaciones que deban ser integrados a los expedientes electrónicos, así como de imprimir y certificar los documentos y actuaciones que consten en el expediente electrónico.

De una interpretación sistemática de los preceptos supra citados se desprende que la Ley establece, en lo concerniente a los medios de impugnación, que no le serán aplicables las disposiciones creadas para la instrumentación del juicio en línea. Por lo anterior y en opinión de la autora Nayeli García[51], dicha situación desnaturaliza la esencia del Juicio en Línea y contraviene su objetivo, siendo que la aplicación de las nuevas tecnologías en el campo del derecho, son con el propósito de un desarrollo eficaz en la impartición de justicia. Comenta la autora, que el recurso de revisión fiscal y el juicio de amparo directo son medios de defensa para las partes en el juicio contencioso administrativo federal, y el dejarlos fuera de la substanciación a través de medios electrónicos, significa un retroceso en la impartición de justicia, puesto que tales medios de impugnación intentados se presentan ante la autoridad responsable, siendo ésta el TFJFA, que por su conducto envía los medios a los órganos jurisdiccionales competentes para su estudio y resolución.[52]

En cuanto al valor y veracidad de los documentos digitalizados, constancias y pruebas que integran el expediente electrónico, se analizará con detenimiento más adelante, sin embargo, mientras se podría cuestionar al respecto. *¿Cómo valora el Poder Judicial de la Federación las constancias que integran el expediente electrónico después de haber sido impresas y certificadas por los funcionarios del Tribunal?, ¿Qué valor le dará el Poder Judicial de la Federación, a las constancias que integran el expediente electrónico, una vez que sean remitidas por el Tribunal administrativo con motivo de los medios de impugnación intentados?,*[53] *¿Basta con la protesta de decir verdad que lo que obra en su poder y lo cual se digitalizó es verídico?* Se realiza la misma cuestión, ya que hoy en día la simple protesta de decir verdad, actuando bajo el principio de la buena fe, es algo que llena de incertidumbre, por las innovaciones de la tecnología que se dan a nivel mundial en

51 *GARCIA AGUILAR, Nayeli, "Los medios de impugnación de la autoridad y en particular contra la sentencia dictada en juicio en línea", TFJFA, Diciembre 2009, "Tesis seleccionada en el curso de especialización de Justicia Fiscal y Administrativa" Subdirección de Análisis e Investigación. Consultable en la web http://www.tfjfa.gob.mx/investigaciones/pdf/losmediosdeimpugnacion.pdf*

52 *Ibídem*

53 *Ídem*

cuanto al descubrimiento cibernético. *¿Por qué la veracidad de los documentos se le atribuye a la simple manifestación de decir la verdad?,* se dice que si el TFJFA tiene dudas en cuanto a la naturaleza del documento se solicitará el original en físico pero, *¿Qué sucede si el TFJFA no se percata de una posible falsificación de documentos?,* porque puede pasar que no se percate de la naturaleza de los mismos.

Con el decreto de 12 de junio del 2009 en comento, se estableció que en caso de impugnar una sentencia emitida dentro del Juicio en Línea se procedería a la impresión y certificación del expediente electrónico por funcionarios del Tribunal y una vez impresas y certificadas las constancias se remitirían al Poder Judicial de la Federación.

En este caso el valor dado por el Poder Judicial de la Federación a las constancias remitidas por el Tribunal, es el mismo que les fue dado en cuanto a la veracidad y autenticidad por el propio Tribunal, dada la naturaleza del Juicio en Línea, puesto que los Secretarios de Acuerdos certificarán todo lo actuado una vez impreso el expediente electrónico, aun y cuando al momento de acudir al Poder Judicial Federal la regulación procesal es distinta este reconocimiento es otorgado por el Tribunal y en consecuencia es válido para la superioridad.

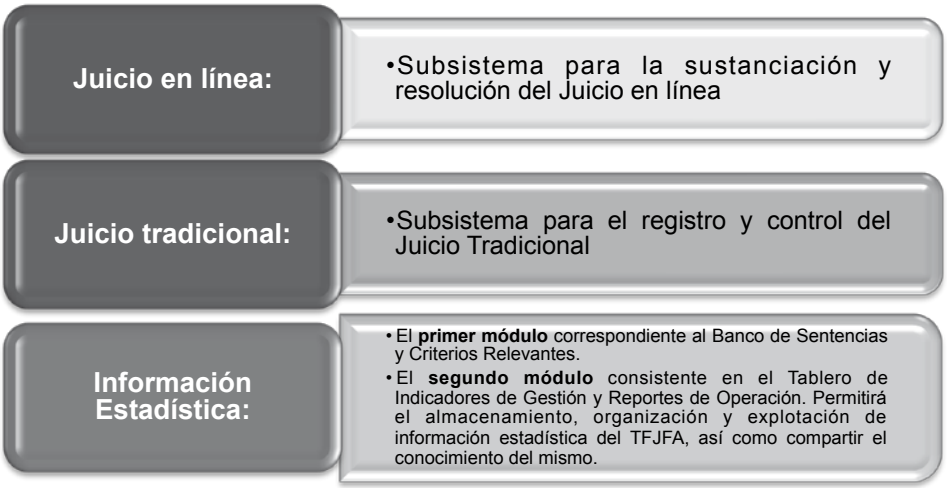
Conviene mencionar que existe una jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación que refiere que *"… las constancias enviadas por fax entre los órganos del Poder Judicial si están certificadas por el Secretario de Acuerdos del Tribunal que las remite y por el que las recibe, de tal manera que conste la hora y fecha de recepción del fax y la persona del órgano jurisdiccional que las envía, en consecuencia tienen pleno valor probatorio por ser confiable el medio en que fueron comunicadas dichas constancias, ya que tiene un grado de seguridad similar al de la documentación consignada en papel, además de que es identificable la persona a quien se atribuye su contenido y pueden verificarse tanto el origen de la documentación como su texto."* [54] De lo anterior se desprende que efectivamente todas las constancias y actuaciones realizadas durante el juicio de nulidad y certificadas por los funcionarios del TFJFA tienen la validez probatoria por el simple hecho de ser el Tribunal una autoridad en caso de la interposición de los medios de impugnación contra su sentencia, pues se presume que actúa de buena fe y que las constancias que obran en su poder en su momento fueron verificadas y otorgadas en cuanto al valor probatorio correspondiente.

---

54 IUS 2009: Tesis: 1a./J. 27/2007, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, marzo de 2007, p. 30.

2.2.3 Los sistemas de seguridad del Sistema de Justicia en Línea

El Sistema de Justicia en Línea está compuesto por 3 subsistemas:



Fuente: TFJFA

De acuerdo con el TFJFA, dicho sistema es seguro debido a que se encuentra adaptado a mejoras continuas y solo es accedido a él por aquellos funcionarios del TFJFA con sus respectivas sanciones en caso de violar algún sistema de seguridad; así como es accedido por los usuarios (contribuyentes o autoridades) los cuales entran con su firma electrónica avanzada (fea) y su clave y contraseña.

Como bien se mencionó antes, en caso que el Tribunal advierta alguna alteración o destrucción de la información del sistema se tomarán medidas necesarias desde cancelar su FEA, clave y contraseña hasta responsabilidades penales. Así como cuando por caso fortuito, fuerza mayor o fallas técnicas se interrumpa el funcionamiento del Sistema de Justicia Fiscal en Línea, las partes deberán dar aviso a la Sala en la misma promoción sujeta a término, quien pedirá un reporte al responsable de la administración del sistema sobre la existencia de la interrupción del servicio, señalando causa y tiempo de la interrupción, fecha y hora de inicio y término de la misma para determinar si hubo o no incumplimiento de los plazos legales.

Así pues, según el Tribunal, se cuenta con un "Data Center" que alberga la plataforma tecnológica del Sistema de Justicia en Línea y que, por sus especificaciones técnicas, arquitectónicas e informáticas, garantiza que el Juicio en Línea esté disponible las 24 horas de los 365 días del año, de manera ininterrumpida.

Por otro lado se sabe que existen riesgos y medidas de seguridad en internet; para Rojas Amandi, el jurista que trabaje con internet debe considerar que el sistema se concibió y desarrollo con la idea de proporcionar un acceso fácil a la información y de servir como un medio de comunicación rápido y efectivo, pues para el logro de este objetivo fundamental, las necesidades de seguridad se relegaron a segundo término.[55]

2.3 EL JUICIO FISCAL SUMARIO (VÍA SUMARIA)

Otra de las transformaciones más recientes que ha experimentado la instancia de lo contencioso–administrativo federal es el Juicio en Vía Sumaria que según el TFJFA, permitirá reducir drásticamente los tiempos de resolución de los juicios. Se estima que el 40 por ciento de las demandas que ingresan al Tribunal, se sustanciarán por esta vía, en juicios que no durarán más de 70 días.

2.3.1 Características del Juicio Fiscal Sumario (vía sumaria)

La característica principal consiste en que es substanciado a través del Sistema de Justicia en Línea o en papel, pero en plazos más breves, siempre y cuando no exceda de 5 veces el salario mínimo elevado al año.

Además de este requisito, con base en el artículo 58-2, el juicio sumario procede en el caso que se impugnen resoluciones definitivas cuyo importe no exceda de cinco veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al año al momento de su emisión. Agrega el numeral, que procede ésta siempre que se trate de alguna de las resoluciones definitivas siguientes:

- Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, por las que se fije en cantidad líquida un crédito fiscal;

- Las que únicamente impongan multas o sanciones, pecuniaria o restitutoria, por infracción a las normas administrativas federales;

- Las que exijan el pago de créditos fiscales, cuando el monto de los exigibles no exceda el importe citado;

- Las que requieran el pago de una póliza de fianza o de una garantía que hubiere sido otorgada a favor de la Federación, de organismos fiscales autónomos o de otras entidades paraestatales de aquélla, o

55 Óp. Cit. Nota 36 p. 13

- Las recaídas a un recurso administrativo, cuando la recurrida sea alguna de las consideradas en los incisos anteriores y el importe de esta última no exceda el antes señalado.

- Resoluciones definitivas que se dicten en violación a una tesis de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de inconstitucionalidad de Leyes, o a una jurisprudencia del Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

En la vía sumaria, no depende de la voluntad del actor sino de las características de los asuntos que se controvierten (la propia ley determina la vía a seguir para la impugnación ante el TFJFA).

De acuerdo con la LFPCA, todas las pruebas deben desahogarse máximo 10 días antes del cierre de instrucción. La testimonial solamente es admisible cuando el oferente se comprometa a presentar a los testigos.

2.3.2 Plazos en la Vía Sumaria

Se mencionó anteriormente que su característica principal es la reducción de los plazos. Para ejemplificar esto, en el siguiente cuadro se hace una comparación de los plazos tanto en la vía ordinaria como en la sumaria (véase el siguiente cuadro):

Ordinario		**Sumario**	
Plazo para interponer la demanda	45 días	Plazo para interponer la demanda	15 días
Plazo para contestar la demanda	45 días	Plazo para contestar la demanda	15 días
Ampliación de demanda y contestación	20 días	Ampliación de demanda y contestación	5 días
Recurso de Reclamación	15 - 5 días	Recurso de Reclamación	5 – 3 días
Sentencia	60 días	Sentencia	10 días
Cumplimiento de sentencia	4 meses	Cumplimiento de sentencia	1 mes

Fuente: LFPCA

Anteriormente se comentó que el 10 de diciembre de 2010, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y

derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (LFPCA) y de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (LOTFJTA). El referido Decreto adiciona un Capítulo XI a la LFPCA, bajo el título "Del juicio en la vía sumaria". Estas reformas, en cumplimiento al Artículo tercero transitorio del citado Decreto, entraron en vigor el 7 de agosto de 2011.

En las iniciativas con proyecto de Decreto del 3 y 10 de diciembre de 2009, originalmente, se preveía la procedencia de la vía sumaria si el actor presentaba su demanda de nulidad dentro de los quince días siguientes a aquél en que surtiera efectos la notificación de la resolución impugnada; *en caso de excederse dicho plazo*, la demanda seguía siendo procedente pero por la *vía ordinaria*.

Este planteamiento fue modificado en el Dictamen aprobado por el Pleno del Senado de la República, el 20 de abril de 2010 en donde se señaló, en la cuarta consideración, la necesidad de **"**determinar que no sea optativo el juicio contencioso administrativo en la vía sumaria, sino que en los supuestos procedentes, el trámite se realice en esta vía, de conformidad a lo dispuesto por el Capítulo XI del Título II de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Lo anterior, en virtud que con ello se dará certeza jurídica al gobernado, en relación con el procedimiento procedente para la tramitación del juicio."

Finalmente, las reformas entraron en vigor el 7 de agosto de 2011, estableciéndose como obligatoria para el particular la vía sumaria en los supuestos previstos por el artículo 58-2, es decir, en contra de resoluciones definitivas cuya cuantía no exceda de cinco veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al año y que además sean: (a) dictadas por autoridades fiscales federales u organismos fiscales autónomos en las que se determinen o exijan el pago de créditos fiscales, (b) impongan multas o sanciones a las normas administrativas federales, (c) requieran el pago de una fianza o garantía, o (d) o se dicten en los recursos administrativos promovidos en contra de alguna de las anteriores.

En las propias reformas se establecieron como excepciones a la vía sumaria: (a) *cuando sin importar la cuantía del asunto se alegue que la resolución impugnada ha sido emitida en contravención a, 1) una tesis de jurisprudencia del Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; o 2) una tesis de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de inconstitucionalidad de leyes;* o bien, (b) cuando se trate de alguno de los supuestos de improcedencia de la vía señalados en el artículo 58-3 del mismo ordenamiento adjetivo.

Ahora bien, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente en su carácter de Ombudsman fiscal, tutor de derechos tributarios, estima que la determinación de

procedencia de la vía a partir de un criterio de cuantía vinculado con otras diversas hipótesis, presupone indebidamente el manejo por parte del justiciable de un tema jurídico especializado para poder distinguir si efectivamente se presentan esas hipótesis; es decir, el gobernado se ve forzado a determinar si el acto a impugnar es un crédito fiscal emitido por una autoridad fiscal federal u organismo fiscal autónomo, así como si el monto por el que procede el juicio sumario comprende el histórico de la contribución o incluye su indexación y recargos, o si bien se trata de los otros supuestos de procedencia referentes a multas, requerimientos de fianzas o resoluciones a recursos.

Así pues, de acuerdo con la PRODECON se está imponiendo al justiciable la carga de identificar la naturaleza jurídica de la resolución que lo afecta, es decir, debe precisar prácticamente desde el momento en que la misma se le notifica, en atención a la brevedad del plazo, si procede la *obligatoria* vía sumaria, que reduce a la tercera parte la regla general de 45 días hábiles para la impugnación de las resoluciones o actos de las autoridades.

Ahora bien, aunque en el Dictamen Legislativo, se utilizó para justificar la obligatoriedad de la vía sumaria el argumento de que con ello se otorgaba certeza y seguridad jurídica al gobernado sobre la forma y términos en que deberá seguirse el procedimiento contencioso administrativo, la PRODECON considera que en la práctica el efecto es precisamente el contrario, pues al establecer la vía sumaria se imponen a los contribuyentes obligaciones excesivas y se restringe de hecho su acceso al sistema de justicia bajo criterios jurídicos discriminatorios.

Cabe mencionar que en agosto de 2012, la Primera Sala de la SCJN resolvió el amparo directo en revisión 1684/2012, en el sentido de que el plazo de 15 días para la interposición del juicio en la Vía Sumaria, no viola la garantía de acceso a la justicia, por lo que negó el amparo y protección de la Justicia Federal a un contribuyente que había presentado su demanda fuera del nuevo término legal. Véase también las siguientes tesis en relación al tema:

Tesis: II.1o.A.2 A (10a.)	*Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*	*Décima Época*	*2002559 16 de 18*
Primer Tribunal Colegiado En Materia Administrativa Del Segundo Circuito	*Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3*	*Pág. 2087*	*Tesis Aislada (Administrativa)*

[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3; Pág. 2087

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL EN LA VÍA SUMARIA. SU TRAMITACIÓN NO ES OPTATIVA EN RELACIÓN CON EL ORDINARIO.

El juicio contencioso administrativo federal en la vía sumaria se instauró con el objeto de agilizar los procesos cuyo conocimiento corresponde al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; sin embargo, su tramitación no es optativa en relación con el juicio ordinario, ya que el artículo 14 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece que dentro de la demanda deberá indicarse que el juicio se sustanciará en la vía sumaria y, en caso de omisión, el Magistrado instructor lo tramitará así en los supuestos en que proceda, de conformidad con el título II, capítulo XI, del propio ordenamiento, por lo que no queda a elección del actor determinar la vía en la cual deba tramitarse su demanda de nulidad, y como los supuestos de procedencia del juicio sumario están claramente establecidos en la mencionada ley, el Magistrado instructor únicamente debe limitarse a aplicarla, concretamente, sus artículos 14 y 58-2; sin que pueda ir más allá de lo que la ley lo faculta, al grado de ser quien decida la vía en que ha de tramitarse un juicio.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO

Amparo directo 180/2012. Costco de México, S.A. de C.V. 5 de julio de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Campuzano Rodríguez. Secretario: Juan Abad Villanueva.

Amparo directo 190/2012. Costco de México, S.A. de C.V. 17 de agosto de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Julia María del Carmen García González. Secretario: Gabriel Camacho Sánchez.

Amparo directo 520/2012. Óscar Gustavo Velázquez Zavala. 11 de octubre de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Campuzano Rodríguez. Secretario: Juan Abad Villanueva.

Amparo directo 508/2012. Qu Ser, S.A. de C.V. 31 de octubre de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Julia María del Carmen García González. Secretario: Gabriel Camacho Sánchez.

Tesis: VI.1o.A.19 A (10a.)	*Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*	*Décima Época*	*2000556 1 de 18*
Primer Tribunal Colegiado En Materia Administrativa Del Sexto Circuito	*Libro VII, Abril de 2012, Tomo 2*	*Pág. 1724*	*Tesis Aislada (Administrativa)*

[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro VII, Abril de 2012, Tomo 2; Pág. 1724

DERECHO HUMANO DE PROTECCIÓN JUDICIAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. CON EL OBJETO DE TUTELARLO Y A PARTIR DE UNA INTERPRETACIÓN PRO PERSONAE O PRO HOMINE DEL ARTÍCULO 23 DE LA LEY FEDERAL DE LOS DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE, EL TÉRMINO PARA PROMOVER EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL EN LA VÍA SUMARIA, DEBE DUPLICARSE SI LA AUTORIDAD FISCAL INFORMA INEXACTAMENTE AL CONTRIBUYENTE, EN LA RESOLUCIÓN QUE LE NOTIFICA, QUE DISPONE DEL DIVERSO RELATIVO A LA VÍA ORDINARIA.

El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos a partir del principio pro personae o pro homine. Por su parte, el ordenamiento jurídico mexicano, con el objeto de asegurar la accesibilidad a los recursos efectivos que garanticen el derecho humano de protección judicial contenido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, prevé en el artículo 23 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente la obligación de las autoridades fiscales de indicar al particular, al notificarle los actos que emitan, el término con que cuenta para la interposición de los medios de defensa a través de los cuales puede combatirlos, entre otros elementos que debe informarle, e indica como consecuencia normativa para el caso de que en la resolución correspondiente se omita tal señalamiento, que los contribuyentes contarán con el doble del término que establecen las disposiciones legales para interponer, según el caso, el recurso administrativo o el juicio contencioso administrativo federal. Por tanto, si la autoridad fiscal asienta en forma inexacta en el acto notificado que el contribuyente, para promover el juicio de nulidad, dispone del término de cuarenta y cinco días que prevé el artículo 13 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, relativo al procedimiento ordinario, a pesar de que la vía procedente sea la sumaria, dado el importe de la resolución en cuestión, y que en consecuencia el término que en realidad deba observarse en el caso particular sea el diverso de quince días previsto en el artículo 58-2 del propio ordenamiento legal; debe concluirse, efectuando la interpretación del invocado artículo 23 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente que más beneficie al particular en relación con la tutela del derecho humano de protección judicial, que el proceder irregular de la autoridad fiscal implica una afectación al gobernado de idéntico alcance al de haber omitido en su totalidad informarle sobre cuáles son los medios de defensa de que dispone para combatir tales actos y el término legal para hacerlos valer, pues en ambas hipótesis el proceder de la autoridad opera en detrimento de la accesibilidad del recurso, por lo que debe aplicarse la consecuencia prevista en esta última norma legal y tomar en consideración, para

determinar la oportunidad de la demanda de nulidad, el término de treinta días, derivado de la duplicación del lapso de quince que prevé el citado artículo 58-2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO

Amparo directo 4/2012. Begoña Isabel Pandal Fernández. 14 de marzo de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco Javier Cárdenas Ramírez. Secretario: Salvador Alejandro Lobato Rodríguez.

Nota:

Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 401/2012, pendiente de resolverse por la Segunda Sala.

Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 483/2012, pendiente de resolverse por la Segunda Sala.

Tesis: VI.1o.A.29 A (10a.)	*Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*	*Décima Época*	*2001304 5 de 18*
Primer Tribunal Colegiado En Materia Administrativa Del Sexto Circuito	*Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2*	*Pág. 1756*	*Tesis Aislada (Constitucional)*

[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2; Pág. 1756

DERECHO HUMANO DE IGUALDAD ANTE LA LEY PREVISTO EN FORMA CONCORDANTE EN LOS ARTÍCULOS 1o. CONSTITUCIONAL Y 24 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA VÍA SUMARIA PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL, QUE SE DERIVAN DE LOS ARTÍCULOS 58-2 Y 58-3 DE LA LEY RELATIVA, NO SE VULNERA LA CITADA PRERROGATIVA FUNDAMENTAL.

De la interpretación sistemática de los artículos 2o., 58-2 y 58-3 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con el contenido de los diversos 14 y 15 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y siguiendo los lineamientos de la jurisprudencia 2a./J. 42/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "IGUALDAD. CRITERIOS QUE DEBEN OBSERVARSE EN EL CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS QUE SE ESTIMAN VIOLATORIAS DE DICHA GARANTÍA.", debe concluirse que en virtud de las dos vías -ordinaria y sumaria- creadas por el legislador para promover el juicio contencioso administrativo federal en cualquiera de sus modalidades -tradicional y en línea-, se derivan dos clases, desiguales entre sí, de sujetos que ejercitan ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa el derecho público subjetivo de acción para incoar dicho procedimiento,

según las características del asunto en particular que se promueva; asimismo, las hipótesis de procedencia de cada una de esas vías se encuentran expresamente delimitadas, pues del análisis conjunto de los aludidos artículos 58-2 y 58-3 se desprenden los supuestos, establecidos bajo los criterios de cuantía y materia, en que los juicios de nulidad competencia del mencionado órgano jurisdiccional deberán tramitarse en la vía sumaria, y por exclusión los restantes asuntos se sustanciarán en la vía ordinaria. Por tanto, si se parte del hecho de que los mencionados grupos de sujetos no se encuentran en una situación de igualdad entre ellos, no se dan las condiciones para concluir que, con la implementación de la vía sumaria para la sustanciación del juicio de nulidad, se vulnera el derecho humano de igualdad ante la ley previsto en forma concordante en los artículos 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues ello se verifica cuando el trato que se les da es diferente a pesar de encontrarse en la misma situación. No es óbice a tal conclusión, el hecho de que el artículo 58-3 prevé casos de excepción que hacen improcedente la vía sumaria, ya que con esto tampoco se genera un trato desigual entre sujetos colocados en la misma situación, pues con la introducción de los supuestos respectivos se crea una nueva clase o grupo de sujetos que se diferencia de los que están en la hipótesis genérica de procedencia de la vía sumaria y, como se ha destacado, la violación a la prerrogativa fundamental en cuestión se verifica cuando el trato que se da a los particulares es diferente a pesar de ubicarse en idéntica situación.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO

Amparo directo 71/2012. Lawrence Antonio Galindo Martínez. 9 de mayo de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Salvador Alejandro Lobato Rodríguez, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado.

Nota: La tesis de jurisprudencia 2a./J. 42/2010 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, abril de 2010, página 427.

Tesis: VI.1o.A.38 A (10a.)	*Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*	*Décima Época*	*2002101 10 de 18*
Primer Tribunal Colegiado En Materia Administrativa Del Sexto Circuito	*Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4*	*Pág. 2871*	*Tesis Aislada (Administrativa)*

[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4; Pág. 2871

VÍA SUMARIA. NO SE ACTUALIZA EL SUPUESTO DE PROCEDENCIA CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 58-2, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CUANDO, ADEMÁS DE LOS ARGUMENTOS RELATIVOS A LA TRANSGRESIÓN DE LAS JURISPRUDENCIAS QUE EN EL PRECEPTO SE PRECISAN, SE FORMULAN OTROS AJENOS A DICHA VÍA.

Mediante el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de diciembre de dos mil diez, entre otras cuestiones, se adicionó el capítulo XI, "Del juicio en la vía sumaria", al título II, "De la substanciación y resolución del juicio", de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. De conformidad con ello, uno de los supuestos de procedencia de la vía sumaria consiste en que "... se impugnen resoluciones definitivas que se dicten en violación a una tesis de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de inconstitucionalidad de leyes, o a una jurisprudencia del Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.", el cual se encuentra contenido en el artículo 58-2, párrafo segundo, del ordenamiento de mérito. Sin embargo, la ley no precisa cómo se debe proceder cuando además de los argumentos relativos a la transgresión de las jurisprudencias de referencia se formulan otros ajenos a dicha vía. Para esclarecer lo anterior es conveniente atender al procedimiento legislativo que dio origen a la reforma. En ese orden de ideas, de las exposiciones de motivos contenidas en las dos iniciativas que dieron origen a la reforma se desprenden los siguientes lineamientos vinculados con la finalidad de la creación de la vía sumaria: a) el establecimiento de un procedimiento rápido y sencillo para los casos que no representen mayor complejidad; b) se trata de una modalidad de tramitación exclusiva en los supuestos específicos de procedencia; y c) es un procedimiento breve, que al mismo tiempo otorga suficiente certeza y seguridad a las partes. Por lo que hace al supuesto de procedencia de la vía contenido en el artículo 58-2, párrafo segundo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda, de la Cámara de Senadores, otorga elementos que permiten afirmar válidamente que el mismo tiene como razón de sustento el que los tópicos ya han sido resueltos por instancias superiores, lo cual se confirma atendiendo a los lineamientos vinculados con la finalidad de la creación de la vía sumaria, precisados con antelación, en particular, el establecimiento de un procedimiento rápido y sencillo para los casos que no representen mayor complejidad. Por lo tanto, cuando además de los argumentos relativos a la transgresión de las jurisprudencias se formulan otros, no se actualiza el supuesto de procedencia de la vía contenido en el artículo 58-2, párrafo segundo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pues no se surte la razón de sustento a que se ha hecho referencia, es decir, no todos los temas han sido resueltos por instancias superiores. Ello se corrobora atendiendo a otro de los lineamientos vinculados con la finalidad de la creación de la vía sumaria, consistente en que se trata de una modalidad de tramitación exclusiva en los supuestos específicos de procedencia, lo que denota su naturaleza excepcional, lo cual implica también que su aplicación debe ser estricta. En efecto, admitir que cuando además de los argumentos relativos a la transgresión de las jurisprudencias se formulan otros sí procede la vía sumaria, ampliaría de gran manera los casos en que el juicio contencioso administrativo debe tramitarse en esa forma, lo cual es contrario a su carácter excepcional.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO

Amparo directo 166/2012. Instant Call, S.A. de C.V. 5 de septiembre de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: José Eduardo Téllez Espinoza. Secretario: Álvaro Lara Juárez.

Tesis: II.1o.A.1 A (10a.)	*Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*	*Décima Época*	*2002602 17 de 18*
Primer Tribunal Colegiado En Materia Administrativa Del Segundo Circuito	*Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3*	*Pág. 2116*	*Tesis Aislada (Constitucional, Administrativa)*

[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3; Pág. 2116

PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN LA VÍA SUMARIA. EL ARTÍCULO 58-2 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, AL PREVER SU PROCEDENCIA EN SUPUESTOS ESPECÍFICOS Y CONCRETOS NO CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD PROCESAL.

Del artículo 58-2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo se advierte que el juicio en la vía sumaria procede cuando se trate de resoluciones definitivas cuyo importe no exceda de cinco veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al año al momento de su emisión, o de alguna de las señaladas en el segundo párrafo del propio precepto, y que la demanda deberá presentarse dentro de los quince días hábiles siguientes a aquel en que surta efectos la notificación de la resolución impugnada, de conformidad con las disposiciones del referido ordenamiento, ante la Sala Fiscal competente. Consecuentemente, con tal contenido, el citado precepto no contraviene el principio de equidad procesal previsto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la medida en que el legislador previó la procedencia de la indicada vía en supuestos específicos y concretos, a fin de lograr la celeridad, eficiencia y eficacia en la administración de justicia; finalidad que es constitucionalmente legítima y acorde con el derecho a la tutela judicial efectiva, ya que responde a criterios objetivos y no de discriminación, como la cuantía, que atiende al tipo del negocio y no a la categoría o calidad de los individuos, de modo que brinda por igual a las partes la oportunidad de intentar el juicio en la vía sumaria, además de que precisa el término para interponerlo y los supuestos en los que procede, sin establecer un monto diferente para cada uno de los supuestos que establece. Por tanto, da un trato equitativo a todos los gobernados que se ubiquen en los mismos supuestos, es decir, no hace distinción alguna para alguien en específico, ni queda al arbitrio o voluntad del juzgador elegir la vía en que ha de tramitarse un juicio, sino que su actuar únicamente se limita a verificar que los requisitos de procedencia se cumplan, dando un trato igual a quienes se encuentren en iguales circunstancias.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO

Amparo directo 180/2012. Costco de México, S.A. de C.V. 5 de julio de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Campuzano Rodríguez. Secretario: Juan Abad Villanueva.

Así pues con base en lo anterior, se establece que el juicio contencioso administrativo federal en la vía sumaria, no es optativo en relación al ordinario; entre otras interpretaciones como ya se observó. Sin embargo, la PRODECON, en virtud de su Ley Orgánica que le da origen, para garantizar el derecho de los contribuyentes a recibir justicia en materia fiscal en el orden federal, se pronuncia sobre la necesidad apremiante de modificar la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a efecto de que se establezca como *optativa* la procedencia de la vía sumaria, tal y como fue planteado originalmente en las Iniciativas de reforma presentadas a la H. Cámara de Senadores, a fin de cumplir con el mandato de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por supuesto, con la nueva reforma constitucional en materia de derechos humanos de fecha 10 de junio reafirmar la más amplia tutela para los derechos fundamentales de los gobernados.

Capítulo III
El Marco Normativo

3.1 Juicio Fiscal en Línea y Juicio Fiscal por la vía sumaria.

3.1 JUICIO FISCAL EN LÍNEA Y JUICIO FISCAL POR LA VÍA SUMARIA.

Antes de introducirse al marco normativo del Juicio en Línea y del Juicio Fiscal por la Vía Sumaria, vale la pena recordar la **fracción IV** del **artículo 31** de nuestra **Carta Magna,** que a la letra dice: *"Son obligaciones de los mexicanos: Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes."* De este fundamento constitucional se desprenden los principios rectores en materia tributaria y se infiere que los tributos tienen relación tanto con los contribuyentes, como con el fisco y con los medios de impugnación.

Así pues, como ya se mencionó en un inicio, los medios jurídicos de impugnación en material fiscal federal, derivan de las disposiciones contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Juicio de Amparo), el Código Fiscal de la Federación (Recurso de Revocación) y la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (Juicio de Nulidad o Procedimiento Contencioso Administrativo), y pueden interponerse legalmente por los particulares – contribuyentes, en contra de actos o resoluciones que sean emitidos por las autoridades fiscales federales.

El carácter federal que tienen las autoridades fiscales de las entidades federativas deriva del artículo 14 de la Ley de Coordinación Fiscal, que a la letra dice:

> ***Artículo 14.-*** *Las autoridades fiscales de las entidades que se encuentren adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y las de sus Municipios, en su caso, serán consideradas, en el ejercicio de las facultades a que se refieren los convenios o acuerdos respectivos, como autoridades fiscales federales. En contra de los actos que realicen cuando actúen de conformidad con este precepto, sólo procederán los recursos y medios de defensa que establezcan las leyes federales.*

> *La Secretaría de Hacienda y Crédito Público conservará la facultad de fijar a las entidades y a sus Municipios los criterios generales de interpretación y de aplicación de las disposiciones fiscales y de las reglas de colaboración administrativa que señalen los convenios y acuerdos respectivos.*

Se recuerda que para intervenir en juicio, además de la Ley de Coordinación Fiscal, el carácter de autoridades fiscales federales de las entidades federativas, se deriva de la suscripción del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y de sus respectivos Anexos celebrados entre el gobierno Federal y los gobiernos locales. De ahí se observa que están facultadas para intervenir en juicios contenciosos administrativos contra el contribuyente. En estos convenios, dichas reglas se encuentran implícitas en la sección de las facultades y obligaciones donde se establece que *"...en materia de juicios, la entidad intervendrá como parte en los que se susciten con motivo de las facultades delegadas por virtud del Convenio…"*

Así pues, la SHCP también es parte en los juicios de nulidad por ser de la administración pública federal. Las facultades reservadas a la SHCP las encontramos en los mismos CCAMFF.

El marco normativo que nos interesa en primer instancia para este análisis es la LFPCA, lo que tiene relación con la LOTFJFA y los lineamientos que se han emitido al respecto (mismos que se incluyen como Anexo). Existen también algunos ordenamientos jurídicos que se relacionan con el presente trabajo como: la Ley de Coordinación Fiscal, el Código Fiscal de la Federación, la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, la Normatividad del Servicio de Administración Tributaria y Acuerdos emitidos por el TFJFA, entre otros. Sin embargo, se abocara a los primeros que se mencionaron por ser parte fundamental de este marco.

En cuanto a la normatividad del Juicio en Línea y del Juicio por la Vía Sumaria, éstos fueron analizados en un capítulo anterior. A continuación se presenta un extracto del Decreto de Reforma, mencionándose solo los artículos de interés para el capítulo normativo, pues al final de la investigación se añade como "Anexo" todo el proceso legislativo de ambas reformas para su mayor abundamiento, así se tiene lo siguiente:

MARCO NORMATIVO

JUICIO FISCAL EN LÍNEA

SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, publicado en el DOF el 12 de junio de 2009.

ARTÍCULO PRIMERO. *Se* ***REFORMAN*** *los artículos 1-A, fracciones III, XII, XIII y actual XV; 13, fracción I, inciso a); 14, sexto párrafo; 24; 25; 27; 28; 29, fracción I; 30; 48, primer párrafo, así como la fracción I, inciso a), segundo párrafo, fracción II, incisos a, b) y d); 52, fracción V, inciso c); 58, fracción III; 62; 65, primer párrafo; 66; 67; 68; 69; 70; 75, tercer párrafo, y 77, primer párrafo; y se* ***ADICIONAN*** *una fracción XIV al artículo 1-A, recorriéndose las demás en su orden; un párrafo segundo a la fracción I y un séptimo párrafo al artículo 14; el artículo 24 Bis; el párrafo cuarto al artículo 51, recorriéndose el actual cuarto párrafo en su orden, y el Capítulo XI denominado "Del Juicio en la Vía Sumaria" al Título II, que comprende de los artículos 58-1 a 58-15, a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo …*

ARTÍCULO 1-A.- *Para los efectos de esta Ley se entenderá por:*

I. *Acuse de Recibo Electrónico: Constancia que acredita que un documento digital fue recibido por el Tribunal y estará sujeto a la misma regulación aplicable al uso de una firma electrónica avanzada. En este caso, el acuse de recibo electrónico identificará a la Sala que recibió el documento y se presumirá, salvo prueba en contrario, que el documento digital fue recibido en la fecha y hora que se consignen en dicha constancia. El Tribunal establecerá los medios para que las partes y los autorizados para recibir notificaciones puedan verificar la autenticidad de los acuses de recibo electrónico.*

II. *Archivo Electrónico: Información contenida en texto, imagen, audio o video generada, enviada, recibida o archivada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología que forma parte del Expediente Electrónico.*

III. *Boletín Electrónico: Medio de comunicación oficial electrónico, a través del cual el Tribunal da a conocer las actuaciones o resoluciones en los juicios contenciosos administrativos federales que se tramitan ante el mismo.*

IV. *Clave de acceso: Conjunto único de caracteres alfanuméricos asignados por el Sistema de Justicia en Línea del Tribunal a las partes, como medio de identificación de las personas facultadas en el juicio en que promuevan para utilizar el Sistema, y asignarles los privilegios de consulta del expediente respectivo o envío vía electrónica de promociones relativas a las actuaciones procesales con el uso de la firma electrónica avanzada en un procedimiento contencioso administrativo.*

V. *Contraseña: Conjunto único de caracteres alfanuméricos, asignados de manera confidencial por el Sistema de Justicia en Línea del Tribunal a los usuarios, la cual permite validar la identificación de la persona a la que se le asignó una Clave de Acceso.*

VI. *Dirección de Correo Electrónico: Sistema de comunicación a través de redes informáticas, señalado por las partes en el juicio contencioso administrativo federal.*

VII. *Dirección de Correo Electrónico Institucional: Sistema de comunicación a través de redes informáticas, dentro del dominio definido y proporcionado por los órganos gubernamentales a los servidores públicos.*
VIII. *Documento Electrónico o Digital: Todo mensaje de datos que contiene texto o escritura generada, enviada, recibida o archivada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología que forma parte del Expediente Electrónico.*
IX. *Expediente Electrónico: Conjunto de información contenida en archivos electrónicos o documentos digitales que conforman un juicio contencioso administrativo federal, independientemente de que sea texto, imagen, audio o video, identificado por un número específico.*
X. *Firma Digital: Medio gráfico de identificación en el Sistema de Justicia en Línea, consistente en la digitalización de una firma autógrafa mediante un dispositivo electrónico, que es utilizada para reconocer a su autor y expresar su consentimiento.*
XI. *Firma Electrónica Avanzada: Conjunto de datos consignados en un mensaje electrónico adjuntados o lógicamente asociados al mismo que permita identificar a su autor mediante el Sistema de Justicia en línea, y que produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. La firma electrónica permite actuar en Juicio en Línea.*
XII. *Juicio en la vía tradicional: El juicio contencioso administrativo federal que se substancia recibiendo las promociones y demás documentales en manuscrito o impresos en papel, y formando un expediente también en papel, donde se agregan las actuaciones procesales, incluso en los casos en que sea procedente la vía sumaria.*
XIII. *Juicio en línea: Substanciación y resolución del juicio contencioso administrativo federal en todas sus etapas, así como de los procedimientos previstos en el artículo 58 de esta Ley, a través del Sistema de Justicia en Línea, incluso en los casos en que sea procedente la vía sumaria.*
XIV. *Juicio en la vía Sumaria: El juicio contencioso administrativo federal en aquellos casos a los que se refiere el Capítulo XI del Título II de esta Ley.*
XV. *Sistema de Justicia en Línea: Sistema informático establecido por el Tribunal a efecto de registrar, controlar, procesar, almacenar, difundir, transmitir, gestionar, administrar y notificar el procedimiento contencioso administrativo que se sustancie ante el Tribunal.*
XVI. *Tribunal: Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa*
ARTÍCULO 4o.- *Toda promoción deberá contener la firma autógrafa o la firma electrónica avanzada de quien la formule y sin este requisito se tendrá por no presentada. Cuando el promovente en un Juicio en la vía tradicional, no sepa o no pueda estampar su firma autógrafa, estampará en el documento su huella digital y en el mismo documento otra persona firmará a su ruego.*
…

TÍTULO II
De la Substanciación y Resolución del Juicio
CAPÍTULO I
De la Demanda

ARTÍCULO 13.- *El demandante podrá presentar su demanda, mediante Juicio en la vía tradicional, por escrito ante la sala regional competente o, en línea, a través del Sistema de Justicia en Línea, para este último caso, el demandante deberá manifestar su opción al momento de presentar la demanda. Una vez que el demandante haya elegido su opción no podrá variarla. Cuando la autoridad tenga este carácter la demanda se presentará en todos los casos en línea a través del Sistema de Justicia en Línea.*
Para el caso de que el demandante no manifieste su opción al momento de presentar su demanda se entenderá que eligió tramitar el Juicio en la vía tradicional.
La demanda deberá presentarse dentro de los plazos que a continuación se indican:
I. a III…
Cuando el demandante tenga su domicilio fuera de la población donde esté la sede de la Sala, la demanda podrá enviarse a través de Correos de México, correo certificado con acuse de recibo, siempre que el envío se efectúe en el lugar en que resida el demandante, pudiendo en este caso señalar como domicilio para recibir notificaciones, el ubicado en cualquier parte del territorio nacional, salvo cuando tenga su domicilio dentro de la jurisdicción de la Sala competente, en cuyo caso, el señalado para tal efecto, deberá estar ubicado dentro de la circunscripción territorial de la Sala.
…
…
ARTÍCULO 14.- *La demanda deberá indicar:*
I. *El nombre del demandante, domicilio fiscal y su domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la jurisdicción de la Sala Regional competente, así como su dirección de correo electrónico, cuando opte porque el juicio se substancie en línea a través del Sistema de Justicia en Línea.*
II. a VIII. …
En cada demanda sólo podrá aparecer un demandante, salvo en los casos que se trate de la impugnación de resoluciones conexas, o que se afecte los intereses jurídicos de dos o más personas, mismas que podrán promover el juicio contra dichas resoluciones en una sola demanda.
En los casos en que sean dos o más demandantes éstos ejercerán su opción a través de un representante común.
En la demanda en que promuevan dos o más personas en contravención de lo dispuesto en el párrafo anterior, el Magistrado Instructor requerirá a los promoventes para que en el plazo de cinco días presenten cada uno de ellos su demanda correspondiente, apercibidos que de no hacerlo se desechará la demanda inicial.
Cuando se omita el nombre del demandante o los datos precisados en las fracciones II y VI, el Magistrado Instructor desechará por improcedente la demanda interpuesta. Si se omiten los datos previstos en las fracciones III, IV, V, VII y VIII, el Magistrado Instructor requerirá al promovente para que los señale dentro del término de cinco días,

apercibiéndolo que de no hacerlo en tiempo se tendrá por no presentada la demanda o por no ofrecidas las pruebas, según corresponda.
En el supuesto de que no se señale domicilio del demandante para recibir notificaciones conforme a lo dispuesto por la fracción I, de este artículo, las que corresponda hacérsele en el mismo, se efectuarán por Boletín Electrónico.
Articulo 24. …
…
…
Durante los periodos de vacaciones del Tribunal, en cada región un Magistrado de Sala Regional cubrirá la guardia y quedará habilitado para resolver las peticiones urgentes sobre medidas cautelares o suspensión del acto impugnado, relacionadas con cuestiones planteadas en la demanda.
Artículo 24 Bis….
***I.** La promoción en donde se soliciten las medidas cautelares señaladas, deberá contener los siguientes requisitos:*
***a)** El nombre del demandante y su domicilio para recibir notificaciones, el cual deberá encontrarse ubicado dentro de la región de la Sala que conozca del juicio, así como su dirección de correo electrónico, cuando opte porque el juicio se substancie en línea a través del Sistema de Justicia en Línea;*
b) a d) …
II. …
…
…
Articulo 31 …
I. a III. …
Para el caso en que proceda la acumulación y los juicios respectivos se estén sustanciando por la vía tradicional y el juicio en línea, el Magistrado Instructor requerirá a las partes relativas al Juicio en la vía tradicional para que en el plazo de tres días manifiesten si optan por substanciar el juicio en línea, en caso de que no ejerza su opción se tramitara el Juicio en la vía tradicional.

CAPÍTULO X
Del Juicio en Línea

***ARTÍCULO 58-A.-** El juicio contencioso administrativo federal se promoverá, substanciará y resolverá en línea, a través del Sistema de Justicia en Línea que deberá establecer y desarrollar el Tribunal, en términos de lo dispuesto por el presente Capítulo y las demás disposiciones específicas que resulten aplicables de esta Ley. En todo lo no previsto, se aplicarán las demás disposiciones que resulten aplicables de este ordenamiento.*
***ARTÍCULO 58-B.-** Cuando el demandante ejerza su derecho a presentar su demanda en línea a través del Sistema de Justicia en Línea del Tribunal, las autoridades demandadas deberán comparecer y tramitar el juicio en la misma vía.*
Si el demandante no señala expresamente su Dirección de Correo Electrónico, se

tramitará el Juicio en la vía tradicional y el acuerdo correspondiente se notificará por lista y en el Boletín Procesal del Tribunal.

ARTÍCULO 58-C.- *Cuando la demandante sea una autoridad, el particular demandado, al contestar la demanda, tendrá derecho a ejercer su opción para que el juicio se tramite y resuelva en línea conforme a las disposiciones de este Capítulo, señalando para ello su domicilio y Dirección de Correo Electrónico.*

A fin de emplazar al particular demandado, el Secretario de Acuerdos que corresponda, imprimirá y certificará la demanda y sus anexos que se notificarán de manera personal. Si el particular rechaza tramitar el juicio en línea contestará la demanda mediante el Juicio en la vía tradicional.

ARTÍCULO 58-D.- *En el Sistema de Justicia en Línea del Tribunal se integrará el Expediente Electrónico, mismo que incluirá todas las promociones, pruebas y otros anexos que presenten las partes, oficios, acuerdos, y resoluciones tanto interlocutorias como definitivas, así como las demás actuaciones que deriven de la substanciación del juicio en línea, garantizando su seguridad, inalterabilidad, autenticidad, integridad y durabilidad, conforme a los lineamientos que expida el Tribunal.*

En los juicios en línea, la autoridad requerida, desahogará las pruebas testimoniales utilizando el método de videoconferencia, cuando ello sea posible.

ARTÍCULO 58-E.- *La Firma Electrónica Avanzada, Clave de Acceso y Contraseña se proporcionarán, a través del Sistema de Justicia en Línea del Tribunal, previa obtención del registro y autorización correspondientes. El registro de la Firma Electrónica Avanzada, Clave de Acceso y Contraseña, implica el consentimiento expreso de que dicho Sistema registrará la fecha y hora en la que se abran los Archivos Electrónicos, que contengan las constancias que integran el Expediente Electrónico, para los efectos legales establecidos en este ordenamiento.*

Para hacer uso del Sistema de Justicia en Línea deberán observarse los lineamientos que, para tal efecto, expida el Tribunal.

ARTÍCULO 58-F.- *La Firma Electrónica Avanzada producirá los mismos efectos legales que la firma autógrafa y garantizará la integridad del documento, teniendo el mismo valor probatorio.*

ARTÍCULO 58-G.- *Solamente, las partes, las personas autorizadas y delegados tendrán acceso al Expediente Electrónico, exclusivamente para su consulta, una vez que tengan registrada su Clave de Acceso y Contraseña.*

ARTÍCULO 58-H.- *Los titulares de una Firma Electrónica Avanzada, Clave de Acceso y Contraseña serán responsables de su uso, por lo que el acceso o recepción de las notificaciones, la consulta al Expediente Electrónico y el envío de información mediante la utilización de cualquiera de dichos instrumentos, les serán atribuibles y no admitirán prueba en contrario, salvo que se demuestren fallas del Sistema de Justicia en Línea.*

ARTÍCULO 58-I.- *Una vez recibida por vía electrónica cualquier promoción de las partes, el Sistema de Justicia en Línea del Tribunal emitirá el Acuse de Recibo Electrónico correspondiente, señalando la fecha y la hora de recibido.*

ARTÍCULO 58-J.- *Cualquier actuación en el Juicio en Línea se efectuará a través del Sistema de Justicia en Línea del Tribunal en términos del presente Capítulo. Dichas actuaciones serán validadas con las firmas electrónicas y firmas digitales de los Magistrados y Secretarios de Acuerdos que den fe según corresponda.*

ARTÍCULO 58-K.- *Los documentos que las partes ofrezcan como prueba, incluido el expediente administrativo a que se refiere el artículo 14, fracción V, de esta Ley, deberán exhibirlos de forma legible a través del Sistema de Justicia en Línea del Tribunal.*
Tratándose de documentos digitales, se deberá manifestar la naturaleza de los mismos, especificando si la reproducción digital corresponde a una copia simple, una copia certificada o al original y tratándose de esta última, si tiene o no firma autógrafa. Los particulares deberán hacer esta manifestación bajo protesta de decir verdad, la omisión de la manifestación presume en perjuicio sólo del promovente, que el documento digitalizado corresponde a una copia simple.
Las pruebas documentales que ofrezcan y exhiban las partes tendrán el mismo valor probatorio que su constancia física, siempre y cuando se observen las disposiciones de la presente Ley y de los acuerdos normativos que emitan los órganos del Tribunal para asegurar la autenticidad de la información, así como de su transmisión, recepción, validación y notificación.
ARTÍCULO 58-L.- *Para el caso de pruebas diversas a las documentales, los instrumentos en los que se haga constar la existencia de dichas pruebas se integrarán al Expediente Electrónico. El Secretario de Acuerdos a cuya mesa corresponda el asunto, deberá digitalizar las constancias relativas y procederá a la certificación de su cotejo con los originales físicos, así como a garantizar el resguardo de los originales y de los bienes materiales que en su caso hubieren sido objeto de prueba.*
Para el caso de pruebas diversas a las documentales, éstas deberán ofrecerse en la demanda y ser presentadas a la Sala que esté conociendo del asunto, en la misma fecha en la que se registre en el Sistema de Justicia en Línea del Tribunal la promoción correspondiente a su ofrecimiento, haciendo constar su recepción por vía electrónica.
ARTÍCULO 58-M.- *Para los juicios que se substancien en términos de este capítulo no será necesario que las partes exhiban copias para correr los traslados que la Ley establece, salvo que hubiese tercero interesado, en cuyo caso, a fin de correrle traslado, el demandante deberá presentar la copia de traslado con sus respectivos anexos.*
En el escrito a través del cual el tercero interesado se apersone en juicio, deberá precisar si desea que el juicio se continúe substanciando en línea y señalar en tal caso, su Dirección de Correo Electrónico. En caso de que manifieste su oposición, la Sala dispondrá lo conducente para que se digitalicen los documentos que dicho tercero presente, a fin de que se prosiga con la instrucción del juicio en línea con relación a las demás partes, y a su vez, se impriman y certifiquen las constancias de las actuaciones y documentación electrónica, a fin de que se integre el expediente del tercero en un Juicio en la vía tradicional.
ARTÍCULO 58-N.- *Las notificaciones que se practiquen dentro del juicio en línea, se efectuarán conforme a lo siguiente:*
I.- *Todas las actuaciones y resoluciones que conforme a las disposiciones de esta Ley deban notificarse en forma personal, mediante correo certificado con acuse de recibo, o por oficio, se deberán realizar a través del Sistema de Justicia en Línea del Tribunal.*
II.- *El actuario deberá elaborar la minuta electrónica en la que precise la actuación o resolución a notificar, así como los documentos que se adjunten a la misma. Dicha minuta, que contendrá la Firma Electrónica Avanzada del actuario, será ingresada al*

Sistema de Justicia en Línea del Tribunal junto con la actuación o resolución respectiva y los documentos adjuntos.

***III.-** El actuario enviará a la Dirección de Correo Electrónico de la o las partes a notificar, un aviso informándole que se ha dictado una actuación o resolución en el Expediente Electrónico, la cual está disponible en el Sistema de Justicia en Línea del Tribunal.*

***IV.-** El Sistema de Justicia en Línea del Tribunal registrará la fecha y hora en que se efectúe el envío señalado en la fracción anterior.*

***V.-** Se tendrá como legalmente practicada la notificación, conforme a lo señalado en las fracciones anteriores, cuando el Sistema de Justicia en Línea del Tribunal genere el Acuse de Recibo Electrónico donde conste la fecha y hora en que la o las partes notificadas ingresaron al Expediente Electrónico, lo que deberá suceder dentro del plazo de tres días hábiles siguientes a la fecha de envío del aviso a la Dirección de Correo Electrónico de la o las partes a notificar.*

***VI.-** En caso de que en el plazo señalado en la fracción anterior, el Sistema de Justicia en Línea del Tribunal no genere el acuse de recibo donde conste que la notificación fue realizada, la misma se efectuará mediante lista y por Boletín Procesal al cuarto día hábil contado a partir de la fecha de envío del Correo Electrónico, fecha en que se tendrá por legalmente notificado.*

***ARTÍCULO 58-O.-** Para los efectos del Juicio en Línea son hábiles las 24 horas de los días en que se encuentren abiertas al público las Oficinas de las Salas del Tribunal.*

Las promociones se considerarán, salvo prueba en contrario, presentadas el día y hora que conste en el Acuse de Recibo Electrónico que emita el Sistema de Justicia en Línea del Tribunal, en el lugar en donde el promovente tenga su domicilio fiscal y, por recibidas, en el lugar de la sede de la Sala Regional a la que corresponda conocer del juicio por razón de territorio. Tratándose de un día inhábil se tendrán por presentadas el día hábil siguiente.

***ARTÍCULO 58-P.-** Las autoridades cuyos actos sean susceptibles de impugnarse ante el Tribunal, deberán registrar en la Secretaría General de Acuerdos o ante la Presidencia de las Salas Regionales, según corresponda, la Dirección de Correo Electrónico Institucional, así como el domicilio oficial de las unidades administrativas a las que corresponda su representación en los juicios contenciosos administrativos, para el efecto de emplazarlas electrónicamente a juicio en aquellos casos en los que tengan el carácter de autoridad demandada.*

En el caso de que las autoridades demandadas no cumplan con esta obligación, todas las notificaciones que deben hacerse, incluyendo el emplazamiento, se harán a través del Boletín Procesal, hasta que se cumpla con dicha formalidad.

***ARTÍCULO 58-Q.-** Para la presentación y trámite de los recursos de revisión y juicios de amparo que se promuevan contra las actuaciones y resoluciones derivadas del Juicio en Línea, no será aplicable lo dispuesto en el presente Capítulo.*

El Secretario General de Acuerdos del Tribunal, los Secretarios Adjuntos de Sección y los Secretarios de Acuerdos de Sala Superior y de Salas Regionales según corresponda, deberán imprimir el archivo del Expediente Electrónico y certificar las constancias del juicio que deban ser remitidos a los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados de Circuito, cuando se impugnen resoluciones de los juicios correspondientes a su mesa.

Sin perjuicio de lo anterior, en aquellos casos en que así lo solicite el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado se podrá remitir la información a través de medios electrónicos.
ARTÍCULO 58-R.- *En caso que el Tribunal advierta que alguna persona modificó, alteró, destruyó o provocó la pérdida de información contenida en el Sistema de Justicia en Línea, se tomarán las medidas de protección necesarias, para evitar dicha conducta hasta que concluya el juicio, el cual se continuará tramitando a través de un Juicio en la vía tradicional.*
Si el responsable es usuario del Sistema, se cancelará su Firma Electrónica Avanzada, Clave y Contraseña para ingresar al Sistema de Justicia en Línea y no tendrá posibilidad de volver a promover juicios en línea.
Sin perjuicio de lo anterior, y de las responsabilidades penales respectivas, se impondrá al responsable una multa de trescientas a quinientas veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de cometer la infracción.
ARTÍCULO 58-S.- *Cuando por caso fortuito, fuerza mayor o por fallas técnicas se interrumpa el funcionamiento del Sistema de Justicia en Línea, haciendo imposible el cumplimiento de los plazos establecidos en la ley, las partes deberán dar aviso a la Sala correspondiente en la misma promoción sujeta a término, quien pedirá un reporte al titular de la unidad administrativa del Tribunal responsable de la administración del Sistema sobre la existencia de la interrupción del servicio.*
El reporte que determine que existió interrupción en el Sistema deberá señalar la causa y el tiempo de dicha interrupción, indicando la fecha y hora de inicio y término de la misma. Los plazos se suspenderán, únicamente, el tiempo que dure la interrupción del Sistema. Para tal efecto, la Sala hará constar esta situación mediante acuerdo en el expediente electrónico y, considerando el tiempo de la interrupción, realizara el computo correspondiente, para determinar si hubo o no incumplimiento de los plazos legales.

TÍTULO IV
Disposiciones Finales
CAPÍTULO I
De las Notificaciones

ARTÍCULO 65. *Toda resolución debe notificarse a más tardar el tercer día siguiente a aquél en que el expediente haya sido turnado al actuario para ese efecto y se asentará la razón respectiva a continuación de la misma resolución.*
…
…
ARTÍCULO 66. *En las notificaciones, el actuario deberá asentar razón del envío por correo o entrega de los oficios de notificación, así como de las notificaciones personales o por Boletín Electrónico. Los acuses postales de recibo y las piezas certificadas devueltas se agregarán como constancia al expediente.*
ARTÍCULO 67. *Una vez que los particulares se apersonen en el juicio, deberán señalar domicilio para recibir notificaciones, en el que se les harán saber, personalmente o por correo certificado con acuse de recibo, las siguientes resoluciones:*

I. *La que corra traslado de la demanda, en el caso del tercero, así como el emplazamiento al particular en el juicio de lesividad a que se refiere el artículo 13, fracción III de esta Ley;*
II. *La que mande citar al testigo que no pueda ser presentado por la parte oferente y la que designe al perito tercero, en el caso de dichas personas;*
III. *El requerimiento o prevención a que se refieren los artículos 14, 15, 17 y 21 de esta Ley a la persona que deba cumplirlo, y*
IV. *La resolución de sobreseimiento en el juicio y la sentencia definitiva, al actor y al tercero.*
En los demás casos, las notificaciones se ordenarán hacer a los particulares por medio del Boletín Electrónico.
ARTÍCULO 68. *El emplazamiento a las autoridades demandadas y las notificaciones, del sobreseimiento en el juicio cuando proceda, y de la sentencia definitiva, se harán por oficio.*
En los demás casos, las notificaciones a las autoridades se realizarán por medio del Boletín Electrónico.
Las notificaciones por oficio se harán únicamente a la unidad administrativa a la que corresponda la representación en juicio de la autoridad demandada, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5, tercer párrafo, de esta Ley.
El requerimiento o notificación a otras autoridades administrativas se hará por oficio.
Si el domicilio de la sede principal de la autoridad se encuentra en el lugar de la sede de la Sala, el actuario hará la entrega, recabando la constancia de recibo correspondiente.
ARTÍCULO 69. *La lista de autos y resoluciones dictados por un Magistrado o Sala, se publicará en el Boletín Electrónico al día hábil siguiente de su emisión para conocimiento de las partes.*
La publicación señalará la denominación de la Sala y ponencia del Magistrado que corresponda, el nombre del particular y la identificación de las autoridades a notificar, la clave del expediente, así como el contenido del auto o resolución.
Se tendrá como fecha de notificación, la del día en que se publique en el Boletín Electrónico y el actuario lo hará constar en el auto o resolución de que se trate.
El Tribunal llevará en archivo especial, las publicaciones atrasadas del Boletín Electrónico y hará la certificación que corresponda, a través de los servidores públicos competentes.
La lista también podrá darse a conocer mediante documento impreso que se colocará en un lugar accesible de la Sala en que estén radicados los juicios, en la misma fecha en que se publique en el Boletín Electrónico.

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
(LOTFJFA)

ARTÍCULO SEGUNDO. *Se* ***REFORMAN*** *los artículos 1, segundo párrafo; 2, fracción II; 8, párrafos tercero y cuarto; 14, fracción XIV, segundo párrafo; 18, fracciones II y VII; 23, fracción VII; 25, primer párrafo; 30, fracciones I, XII y XIV; 31; 33; 37, primer párrafo*

y fracción X; 38, fracción X; 41, fracciones IV, V, XI, XIX, XXIX y XXX; 47, fracción VII y VIII; 53, primer párrafo; 55, segundo párrafo; se ***ADICIONAN*** *el artículo 2 Bis; la fracción XV al artículo 14, recorriéndose la última en su orden; las fracciones VIII y IX al artículo 23, recorriéndose la última en su orden; la fracción XV del artículo 30, recorriéndose la última en su orden; la fracción XI del artículo 37, recorriéndose la última en su orden; las fracciones XI y XII del artículo 38, recorriéndose la última en su orden; la fracción XIII Bis del artículo 41; la fracción IX del artículo 47; la fracción IV y el segundo párrafo del artículo 53; y se* ***DEROGA*** *la fracción XV del artículo 18, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para quedar como sigue:*

Artículo 2. ...

I. ...

II. *Las Salas Regionales, que podrán tener el carácter de Salas Especializadas;*

III. ...

Artículo 2 Bis. *Las Salas Especializadas conocerán de materias específicas, con la jurisdicción, competencia y sedes que se determinen en su Reglamento Interior, de acuerdo a los estudios y propuesta de la Junta de Gobierno y Administración, con base en las necesidades del servicio.*

Dichas Salas observarán para su organización, integración y en su caso funcionamiento, las mismas disposiciones aplicables a las Salas Regionales, sin perjuicio de las adecuaciones que se requieran para su buen desempeño.

Articulo 37. …

I. a VII. …

VIII. *Verificar que en la Sala se utilice y mantenga actualizado el sistema de control y seguimiento de juicios, así como el Sistema de Justicia en Línea del Tribunal;*

IX. a XI. …

Articulo 38. …

I. a VIII. …

IX. *Dictar los acuerdos y providencias relativas a las medidas cautelares provisionales en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, así como proponer a la Sala el proyecto de resolución correspondiente a la medida cautelar definitiva que se estime procedente;*

X. *Supervisar la debida integración de las actuaciones en el Sistema de Justicia en Línea del Tribunal;*

XI. *Proponer a la Sala Regional la designación de perito tercero, para que se proceda en los términos de la fracción V del artículo 43 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo;*

CAPÍTULO VI
De la Junta de Gobierno y Administración

Articulo 41. …

I. a XXIX. …

XXX. *Establecer y administrar el Boletín Electrónico para la notificación de las resoluciones y acuerdos, de conformidad con lo establecido por la Ley Federal de*

Procedimiento Contencioso Administrativo, así como el control de las notificaciones que se realicen por medios electrónicos y supervisar la correcta operación y funcionamiento del Sistema de Justicia en Línea del Tribunal para la tramitación de los juicios en línea;
XXXI. *Emitir los acuerdos normativos que contengan los lineamientos técnicos y formales que deban observarse en la substanciación del juicio en línea;*
XXXII. *Supervisar la publicación de las jurisprudencias, precedentes y tesis aisladas emitidas por las Salas y Secciones en la Revista del Tribunal;*
XXXIII. a XXXV. …

CAPÍTULO VII
De los demás Servidores Públicos del Tribunal

Articulo 47. …
I. a V. …
VI. *Dirigir los archivos de la Sala Superior;*
VII. *Digitalizar la documentación y actuaciones que se requiera incorporar a un expediente tramitado en línea, así como imprimir y certificar las constancias de los expedientes electrónicos de la Sala Superior y las reproducciones en medios electrónicos de dichas actuaciones;*
VIII. *Dar fe y expedir certificados de las constancias que obran en lo expedientes que obran en la Sala Superior, y*
Articulo 48. …
I. a V. …
VI. *Dar fe y expedir certificados de constancias que obran en los expedientes de las Secciones;*
VII. *Digitalizar la documentación y actuaciones que se requiera incorporar a un expediente tramitado en línea, así como imprimir y certificar las constancias de los expedientes electrónicos de la Sección y las reproducciones en medios electrónicos de dichas actuaciones, y*
VIII. *Las demás que les encomiende el Presidente de la Sección.*
Articulo 49. …
I. a III. …
IV. *Dar fe y expedir certificados de las constancias que obren en los expedientes de la Ponencia a la que estén adscritos;*
V. *Digitalizar la documentación y actuaciones que se requiera incorporar a un expediente tramitado en línea, así como imprimir y certificar las constancias de los expedientes electrónicos de la Ponencia a la que estén adscritos y las reproducciones en medios electrónicos de dichas actuaciones, y*
VI. *Desempeñar las demás atribuciones que las disposiciones aplicables les confieran.*
Articulo 50. …
I. a IV. …
V. *Dar fe y expedir certificados de las constancias que obren en los expedientes de la Sala a la*
que estén adscritos;

VI. *Digitalizar la documentación y actuaciones que se requiera incorporar a un expediente tramitado en línea, así como imprimir y certificar las constancias de los expedientes electrónicos de la Sala a la que estén adscritos y las reproducciones en medios electrónicos de dichas actuaciones, y*
VII. *Las demás que señalen las disposiciones aplicables.*

TRANSITORIOS

PRIMERO. *El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.*
SEGUNDO. *El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, iniciará el desarrollo e instrumentación del Sistema de Justicia en Línea a través del cual se substanciará el Juicio en Línea.*
TERCERO. *El Tribunal deberá realizar las acciones que correspondan, a efecto de que el Juicio en Línea, inicie su operación a los 18 meses contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto.*
El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa promoverá una campaña masiva entre los usuarios de los servicios del Tribunal para difundir las disposiciones contenidas en este Decreto.
CUARTO. *Las autoridades cuyos actos sean susceptibles de impugnarse ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a través del Sistema de Justicia en Línea, deberán tramitar su Firma Electrónica Avanzada ante la Secretaría General de Acuerdos o ante la Presidencia de las Salas Regionales, según corresponda, y registrar su Dirección de Correo Electrónico institucional, así como el domicilio oficial de las unidades administrativas a las que corresponda su representación en los juicios contenciosos administrativos, para el efecto de emplazarlas electrónicamente a juicio, en aquellos casos en los que tengan el carácter de autoridades demandadas, a partir de los seis meses de la entrada en vigor del presente Decreto, sin exceder para ello del plazo de 18 meses a que se refiere el artículo anterior.*
QUINTO. *En el mismo plazo señalado en el artículo anterior, las unidades administrativas a las que corresponda la representación de las autoridades cuyos actos sean susceptibles de impugnarse ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en los juicios contenciosos administrativos deberán instrumentar y mantener permanentemente actualizados los mecanismos tecnológicos, materiales y humanos necesarios para acceder al Juicio en Línea a través del Sistema de Justicia en Línea del Tribunal.*
SEXTO. *En caso de que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa reciba una demanda por medio del Sistema de Justicia en Línea del Tribunal, y constate que la autoridad demandada, incumplió con lo señalado en el artículo CUARTO transitorio del presente Decreto, se le prevendrá para que en el plazo de 10 días hábiles contados a partir de que se le notifique dicha prevención, proceda a cumplir con dicha disposición o, en su caso acredite que ya la cumplió.*
En caso de no cumplir con la obligación a que se refiere el Artículo CUARTO transitorio el Tribunal le impondrá una multa de 100 a 200 veces el salario mínimo general vigente

en el Distrito Federal y todas las notificaciones que deban hacérsele, incluyendo el emplazamiento, se harán a través del Boletín Procesal, hasta que se cumpla con dicha formalidad.
Así mismo, se requerirá al superior jerárquico de aquélla para que en el plazo de 3 días hábiles, la obligue a cumplir sin demora. En caso de continuar la renuencia de la autoridad, los hechos se pondrán en conocimiento del Órgano Interno de Control que corresponda.
***SÉPTIMO.** Los juicios que se encuentren en trámite ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa a la fecha en que inicie la operación del Juicio en Línea, continuarán substanciándose y se resolverán conforme a las disposiciones vigentes a la fecha de presentación de la demanda.*
***OCTAVO.** El Tribunal llevará a cabo las acciones necesarias a efecto de integrar los sistemas informáticos internos en una sola plataforma tecnológica, a través del Sistema de Justicia en Línea del Tribunal.*
***NOVENO.** Para la promoción, substanciación y resolución del juicio contencioso administrativo federal a través del Sistema de Justicia en Línea, prevalecerán las disposiciones contenidas en el Capítulo X de la ley respecto de otras que se contrapongan a lo establecido en dicho Capítulo.*
***DÉCIMO.** Los recursos necesarios para la implementación y cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto provendrán de recursos fiscales autorizados en el presupuesto del Ramo 32: Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para el presente ejercicio y los subsecuentes.*
Es importancia señalar que en mayo de 2011 el TFJFA emitió el "Acuerdo E/JGA/16/2011, Lineamientos Técnicos y Formales para la sustanciación del Juicio en Línea", a efecto de precisar lo que no se dice en la LFPCA, con respecto a dicho sistema.

JUICIO FISCAL POR LA VÍA SUMARIA

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINSITRATIVO

***ARTÍCULO 14.-** La demanda deberá indicar:*
I. …
La indicación de que se tramitará en la Vía Sumaria. En caso de omisión, el Magistrado Instructor lo tramitará en esta vía en los supuestos que proceda de conformidad con el Título II, Capítulo XI de esta Ley, sin embargo no será causa de desechamiento de la demanda, el hecho de que está no se presente dentro del término establecido para la promoción del Juicio en la Vía Sumaria, cuando la procedencia del mismo derive de la existencia de alguna de las jurisprudencias a las que se refiere el antepenúltimo párrafo del Artículo 58-2; en todo caso si el Magistrado Instructor, antes de admitir la demanda, advierte que los conceptos de impugnación planteados por la actora tienen relación con alguna de las citadas jurisprudencias, proveerá lo conducente para la sustanciación y resolución del Juicio en la Vía Ordinaria.
II. a VIII. …
…

…
…
…
…
…

Capítulo XI
Del Juicio en la Vía Sumaria

ARTÍCULO 58-1. *El juicio contencioso administrativo federal se tramitará y resolverá en la vía sumaria, de conformidad con las disposiciones específicas que para su simplificación y abreviación se establecen en este Capítulo y, en lo no previsto, se aplicarán las demás disposiciones de esta Ley.*

ARTÍCULO 58-2. *Cuando se impugnen resoluciones definitivas cuyo importe no exceda de cinco veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al año al momento de su emisión, procederá el Juicio en la vía Sumaria siempre que se trate de alguna de las resoluciones definitivas siguientes:*

I. *Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, por las que se fije en cantidad líquida un crédito fiscal;*

II. *Las que únicamente impongan multas o sanciones, pecuniaria o restitutoria, por infracción a las normas administrativas federales;*

III. *Las que exijan el pago de créditos fiscales, cuando el monto de los exigibles no exceda el importe citado;*

IV. *Las que requieran el pago de una póliza de fianza o de una garantía que hubiere sido otorgada a favor de la Federación, de organismos fiscales autónomos o de otras entidades paraestatales de aquélla, ó*

V. *Las recaídas a un recurso administrativo, cuando la recurrida sea alguna de las consideradas en los incisos anteriores y el importe de esta última, no exceda el antes señalado.*

También procederá el Juicio en la vía Sumaria cuando se impugnen resoluciones definitivas que se dicten en violación a una tesis de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de inconstitucionalidad de Leyes, o a una jurisprudencia del Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Para determinar la cuantía en los casos de los incisos I), III) y V), sólo se considerará el crédito principal sin accesorios ni actualizaciones. Cuando en un mismo acto se contenga más de una resolución de las mencionadas anteriormente no se acumulará el monto de cada una de ellas para efectos de determinar la procedencia de esta vía.

La demanda deberá presentarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación de la resolución impugnada, de conformidad con las disposiciones de esta Ley ante la Sala Regional competente.

ARTÍCULO 58-3. *La tramitación del Juicio en la vía Sumaria será improcedente cuando:*

I. *Si no se encuentra en alguno de los supuestos previstos en el artículo 58-2.*

II. *Simultáneamente a la impugnación de una resolución de las señaladas en el artículo anterior, se controvierta una regla administrativa de carácter general;*

III. *Se trate de sanciones económicas en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos o de sanciones por responsabilidad resarcitoria a que se refiere el Capítulo II del Título V de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación;*
IV. *Se trate de multas por infracciones a las normas en materia de propiedad intelectual;*
V. *Se trate de resoluciones que además de imponer una multa o sanción pecuniaria, incluyan alguna otra carga u obligación, o*
VI. *El oferente de una prueba testimonial, no pueda presentar a las personas señaladas como testigos.*
En estos casos el Magistrado Instructor, antes de resolver sobre la admisión de la demanda, determinará la improcedencia de la vía sumaria y ordenará que el juicio se siga conforme a las demás disposiciones de esta Ley y emplazará a las otras partes, en el plazo previsto por los artículos 18 y 19 de la misma, según se trate.
Contra la determinación de improcedencia de la vía sumaria, podrá interponerse el recurso de reclamación ante la Sala Regional en que se encuentre radicado el juicio, en el plazo previsto por el artículo 58-8 de esta Ley.
ARTÍCULO 58-4. *Una vez admitida la demanda, se correrá traslado al demandado para que la conteste dentro del término de quince días y emplazará, en su caso, al tercero, para que en igual término, se apersone en juicio.*
En el mismo auto en que se admita la demanda, se fijará día para cierre de la instrucción. Dicha fecha no excederá de los sesenta días siguientes al de emisión de dicho auto.
ARTÍCULO 58-5. *El Magistrado proveerá la correcta integración del juicio, mediante el desahogo oportuno de las pruebas, a más tardar diez días antes de la fecha prevista para el cierre de instrucción.*
Serán aplicables, en lo conducente, las reglas contenidas en el Capítulo V de este Título, salvo por lo que se refiere a la prueba testimonial, la cual sólo podrá ser admitida cuando el oferente se comprometa a presentar a sus testigos en el día y hora señalados para la diligencia.
Por lo que toca a la prueba pericial, ésta se desahogará en los términos que prevé el artículo 43 de esta Ley, con la salvedad de que todos los plazos serán de tres días, salvo el que corresponde a la rendición y ratificación del dictamen, el cual será de cinco días, en el entendido de que cada perito deberá hacerlo en un solo acto ante el Magistrado Instructor. Cuando proceda la designación de un perito tercero, ésta correrá a cargo del propio Magistrado.
ARTÍCULO 58-6. *El actor podrá ampliar la demanda, en los casos a que se refiere el artículo 17 de esta Ley, en un plazo de cinco días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del auto que tenga por presentada la contestación.*
La parte demandada o en su caso el tercero, contestarán la ampliación a la demanda, en el plazo de cinco días siguientes a que surta efectos la notificación de su traslado.
En caso de omisión de los documentos a que se refieren los artículos 17, último párrafo, y 21, segundo párrafo, de la Ley, las partes deberán subsanarla en el plazo de tres días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del requerimiento formulado por el instructor.

ARTÍCULO 58-7. *Los incidentes a que se refieren las fracciones II y IV del artículo 29 de esta Ley, podrán promoverse dentro de los diez días siguientes a que surtió efectos la notificación del auto que tuvo por presentada la contestación de la demanda o, en su caso, la contestación a la ampliación.*

El incidente de incompetencia sólo procederá en esta vía cuando sea hecho valer por la parte demandada o por el tercero, por lo que la Sala Regional en que se radique el juicio no podrá declararse incompetente ni enviarlo a otra diversa.

El incidente de acumulación sólo podrá plantearse respecto de expedientes que se encuentren tramitando en esta misma vía.

Los incidentes de nulidad de notificaciones y de recusación de perito, se deberán interponer dentro del plazo de tres días siguientes a aquél en que se conoció del hecho o se tuvo por designado al perito, respectivamente, y la contraparte deberá contestar la vista en igual término.

ARTÍCULO 58-8. *Los recursos de reclamación a que se refieren los artículos 59 y 62 de esta Ley, deberán interponerse dentro del plazo de cinco días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación de la resolución correspondiente del Magistrado Instructor.*

Interpuesto cualquiera de los recursos se ordenará correr traslado a la contraparte y esta última deberá expresar lo que a su derecho convenga en un término de tres días y sin más trámite, se dará cuenta a la Sala Regional en que se encuentra radicado el juicio, para que resuelva el recurso en un término de tres días.

ARTÍCULO 58-9. *Las medidas cautelares, se tramitarán conforme a las reglas generales establecidas en el Capítulo III de esta Ley. El Magistrado Instructor estará facultado para decretar la resolución provisional o definitiva que corresponda a las medidas cautelares.*

Contra la resolución del Magistrado Instructor dictada conforme al párrafo anterior procederá el recurso de reclamación ante la Sala Regional en la que se encuentre radicado el juicio.

ARTÍCULO 58-10. *En los casos de suspensión del juicio, por surtirse alguno de los supuestos contemplados para ello en esta Ley, en el auto en que el Magistrado Instructor acuerde la reanudación del procedimiento, fijará fecha para el cierre de instrucción, en su caso, dentro de los veinte días siguientes a aquél en que haya surtido efectos la notificación a las partes de la reanudación del juicio.*

ARTÍCULO 58-11. *Las partes podrán presentar sus alegatos antes de la fecha señalada para el cierre de la instrucción.*

ARTÍCULO 58-12. *En la fecha fijada para el cierre de instrucción el Magistrado Instructor procederá a verificar si el expediente se encuentra debidamente integrado, supuesto en el que deberá declarar cerrada la instrucción; en caso contrario, fijará nueva fecha para el cierre de instrucción, dentro de un plazo máximo de diez días.*

ARTÍCULO 58-13. *Una vez cerrada la instrucción, el Magistrado pronunciará sentencia dentro de los diez días siguientes.*

ARTÍCULO 58-14. *Si la sentencia ordena la reposición del procedimiento administrativo o realizar un determinado acto, la autoridad deberá cumplirla en un plazo que no exceda de un mes contado a partir de que dicha sentencia haya quedado firme de conformidad con el artículo 53 de esta Ley.*

ARTÍCULO 58-15. *A falta de disposición expresa que establezca el plazo respectivo en la vía sumaria, se aplicará el de tres días.*

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA (LOTFJFA)
CAPÍTULO V
De las Salas Regionales

ARTÍCULO 31. *El Tribunal tendrá Salas Regionales, con jurisdicción en la circunscripción territorial que les sea asignada, integradas por tres Magistrados cada una. Las Salas Regionales conocerán de los juicios que se promuevan en los supuestos señalados en los artículos 14 y 15 de esta Ley, con excepción de los que corresponda resolver al Pleno o a las Secciones de la Sala Superior.*
En los juicios en la vía sumaria, el Magistrado que haya instruido el juicio lo resolverá, en términos de lo previsto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO 38.- *Los Magistrados instructores tendrán las siguientes atribuciones:*
I. a XI. …
XII. *Tramitar y resolver los juicios en la vía sumaria que por turno le correspondan, atendiendo a las disposiciones legales que regulan dicho procedimiento, y*
ARTÍCULO 38-Bis.- *…*
Estas Salas auxiliarán a las Salas Regionales y Especializadas en el dictado de las sentencias definitivas en aquellos juicios que hayan sido del conocimiento de aquéllas, ya sea que se hubieren sustanciado en la vía tradicional, en línea o en vía sumaria, en términos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
Artículo 75. ...
...
Las Salas y los Magistrados Instructores de un Juicio en la vía Sumaria podrán apartarse de los precedentes establecidos por el Pleno o las Secciones, siempre que en la sentencia expresen las razones por las que se apartan de los mismos, debiendo enviar al Presidente del Tribunal copia de la sentencia.
Artículo 77. *En el caso de contradicción de sentencias, interlocutorias o definitivas, cualquiera de los Magistrados del Tribunal o las partes en los juicios en las que tales tesis se sustentaron, podrán denunciarla ante el Presidente del Tribunal para que éste la haga del conocimiento del Pleno, el cual con un quórum mínimo de diez Magistrados, decidirá por mayoría la que debe prevalecer, constituyendo jurisprudencia.*
...

Fuente: LFPCA y LOTFJFA

Sobre el Acuerdo que establece los Lineamientos Técnicos y Formales para la Sustanciación del Juicio en Línea (mismos que se agregan como Anexo) también se considera que forma parte del capítulo normativo, así que de acuerdo con su artículo 1, a la letra dice:

> ***"Artículo 1.-*** *Los presentes Lineamientos son de carácter general y de observancia obligatoria para todos los Usuarios del Sistema, así como sus administradores y tienen por objeto:*
>
> ***I.*** *Establecer el procedimiento para el acceso y utilización del Sistema, para la promoción, sustanciación y resolución del Juicio en Línea, y*
>
> ***II.*** *Establecer las normas de carácter administrativo a las que deberán sujetarse los servidores públicos del Tribunal en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, así como todos aquellos Usuarios y Administradores del Sistema, que hagan uso del mismo."*

Con respecto a criterios jurisprudenciales, se plasmaron varios en el presente trabajo en relación al Juicio por la Vía Sumaria, así como algunos sobre los documentos electrónicos y su valoración (mismos que se analizarán en el capítulo correspondiente al derecho informático).

Capítulo IV
Implicaciones Jurídicas de las Nuevas Modalidades de Justicia Fiscal en México para las Autoridades Fiscales

4.1 Implicaciones para las autoridades fiscales que intervienen en el Juicio en Línea; 4.2 Implicaciones para las autoridades fiscales que intervienen en los procedimientos sumarios; 4.3 Implicaciones para las autoridades fiscales frente a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente

Anteriormente se ha hecho referencia a que las transformaciones más recientes que ha experimentado la instancia de lo contencioso–administrativo federal es el Juicio en Vía Sumaria, que permitirá reducir drásticamente los tiempos de resolución de los juicios, estimándose que el 40 por ciento de las demandas que ingresan al Tribunal se sustanciarán por esta vía, en juicios que no durarán más de 70 días. Finalmente, el Juicio en Línea, se trata, en esencia, del mismo juicio Contencioso–Administrativo que ya está previsto en la ley, con sus presupuestos, etapas y plazos, pero con la diferencia de que su sustento es la red de telecomunicación mundial "Internet".

El Juicio en Línea es una realidad en nuestros días, y de acuerdo al Tribunal se considera como un instrumento que permitirá al Derecho Administrativo –tanto en lo sustancial como en lo procedimental– seguir siendo un referente de seguridad y de sana convivencia entre la autoridad y los particulares en México.

Así mismo, un reto para el Tribunal a lo largo del tiempo que esté operando el Sistema de Justicia en Línea, es que se detectarán todos los aspectos que sean

susceptibles de mejorarse, y se irá implementando lo necesario para que el Juicio en Línea opere en todas las salas regionales del país, de la mejor forma posible. [56] El deseo del TFJFA es que todos estos esfuerzos que se han realizado para la implementación del Juicio en Línea, sirvan como una guía, para que en el futuro, otras instancias tengan nociones más claras sobre lo que deben hacer para desmaterializar sus juicios. El reto es ser esa guía que no tuvieron, por ser pioneros a nivel mundial en el uso de Internet para la sustanciación de nuestros procesos jurisdiccionales.

En cuanto a la vía sumaria, la reducción en los tiempos de solución de conflictos es muy importante, porque permitirá que los recursos que están controvertidos se liberen más rápido. Esto beneficia al particular –porque podrá disponer de su capital con seguridad– y beneficia también al Estado, que podrá destinar esos recursos a inversión pública con mayor rapidez. [57]

4.1 IMPLICACIONES PARA LAS AUTORIDADES FISCALES QUE INTERVIENEN EN EL JUICIO EN LÍNEA

El impacto del juicio en línea para la autoridad fiscal federal, es sin duda la obligatoriedad que lo anterior representa para ella en su intervención en juicio, debido a que anteriormente, en los juicios tradicionales no se tenía el compromiso de estar revisando los correos electrónicos para las notificaciones, escaneando o digitalizando documentos para ingresarlos al sistema del juicio en línea, entre otras cosas; así pues, resulta un cambio radical. Los particulares tienen la opción de elegir tramitarlo de manera tradicional (papel) o en línea.

Las implicaciones en el juicio en línea que se pueden apreciar, es el hecho que desde que entró en vigor la reforma hasta el momento no se han abierto todas las salas especializadas del país a esta tecnología. Se sabe que hay tres Salas Especializadas en el TFJFA, la Sala Especializada del Juicio en Línea, la Sala Especializada de los Órganos Reguladores de la Actividad Económica del Estado y la Sala Especializada de la Propiedad Intelectual. En cuanto al funcionamiento del sistema en línea se cuenta con dos salas especializadas en todo el país, que es la del Distrito Federal y recientemente abierta la de Chiapas – Tabasco. Con respecto a la sala de Chiapas – Tabasco ésta aún no se encuentra trabajando como la del D.F. por considerarse que la de Chiapas maneja poco volumen de demandas, por

56 *JIMENEZ ILLESCAS, Juan Manuel, Presidente del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, "Tercer Congreso Iberoamericano y Cuarto Congreso Mexicano en Derecho Administrativo" 2011*

57 *JIMÉNEZ ILLESCAS Juan Manuel, "Firma del Convenio de Colaboración con el IMCP" Cd. México, Julio 2011.*

lo cual el proyecto está en espera, encontrándose activas la especializada y la Sala Superior, la cual ya comenzó a emitir fallos. Respecto a la de propiedad intelectual, esta última se consideró conveniente adjuntarla al volumen de trabajo de la del D.F. para que se vaya familiarizando con el sistema digital.[58]

Como se explicó en capítulos anteriores, el Juicio ordinario tradicional y el sumario tradicional se pueden tramitar en línea. El tramitar un juicio en línea implica para los funcionarios fiscales tomar medidas de seguridad, pues se conectan al sistema del juicio en línea a través de internet.

Algunas medidas de seguridad que se recomienda cuando se accede a internet con el objetivo de ingresar al sistema de juicio en línea pueden verse en el siguiente cuadro:

Medidas de seguridad para el funcionario fiscal en el acceso a internet cuando se pretende ingresar y llevar el juicio en línea	**Recomendaciones**
Información o documentos	Cuando la información o documentación se considere importante o confidencial, tener mayor control de ello y si se van a transmitir mediante internet tener la autorización de los superiores y tomar las medidas de seguridad correspondientes.
Respaldos	Realizar de manera periódica respaldos o copias de seguridad de los archivos de las computadoras enlazadas a internet y que contengan bajo resguardo la información relacionada con el juicio en línea
Claves de acceso o contraseñas	Los funcionarios fiscales deben asegurarse que el funcionario encomendado para los juicios en línea con acceso al juicio en línea mantenga en secreto sus claves de acceso o contraseñas.

58 Información recabada del TFJFA de Occidente, 2012-2013.

Programa antivirus	Examinar con un programa antivirus la información que se descarga antes de usarla o de enviarla por el sistema en línea.
Correo electrónico	Aumentar la seguridad de correos electrónicos y demás información que se envíe a través del juicio en línea, de tal forma que no sea posible que terceros sin autorización logren leerlos, así como mantener la integridad de los mensajes de tal manera que no se alteren. El correo electrónico ofrece varias ventajas[59]: lo económico, lo rápido, los lugares de envío (desde cualquier parte del mundo) y que la comunicación es asincrónica, es decir, que una vez enviado el correo electrónico permanece en el buzón del destinatario hasta el momento en que éste lo lea. Se recomienda en el juicio en línea estar revisando el correo electrónico para el caso de las notificaciones.
TFJFA	Notificar inmediatamente al TFJFA por cualquier medio, si se ocasiona una falla al sistema para efecto de los plazos.

Fuente: INDETEC

Como se puede observar, las implicaciones para el juicio en línea son principalmente tecnológicas más que jurídicas y es dentro del sistema donde los funcionarios fiscales deben contar con la capacitación y conocimiento necesarios para ingresar al mismo. A continuación se detallan de manera general algunos pasos para ingresar al sistema del juicio en línea:

59 Óp. Cit. Nota 36 p. 52

DEMOSTRACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA



Fuente: TFJFA

SUBSISTEMA DE JUICIO EN LÍNEA

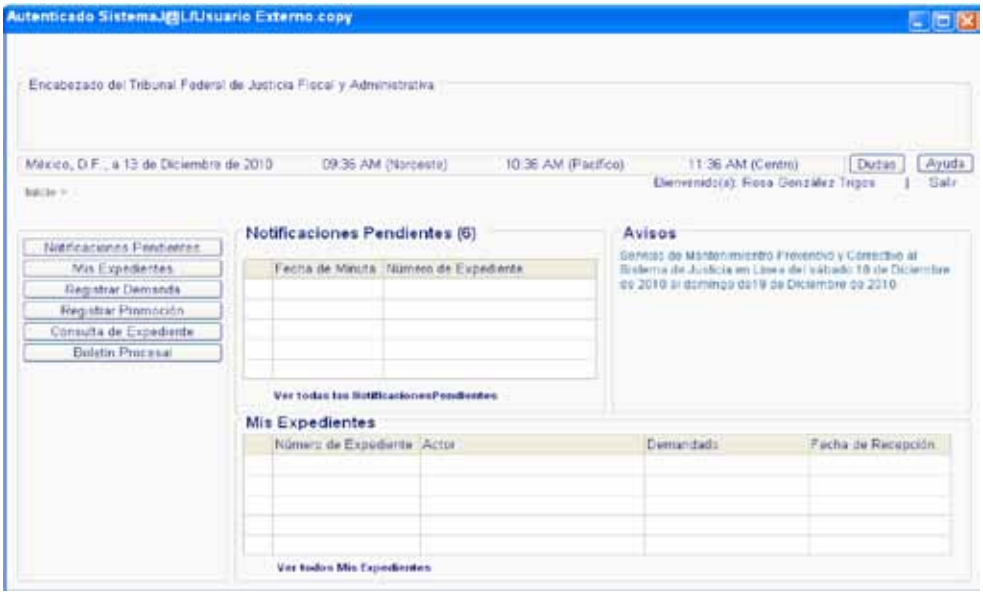
PROCESO JUICIO EN LÍNEA:

A continuación se muestra la secuencia de pantallas para esta etapa del juicio.

Demanda Inicial.- Registro de Demanda Inicial Nulidad
Validación del Registro de Demanda Inicial.- Validación de Demanda
Acuerdo de Admisión de Demanda.- Validación de Documento
Notificación del Acuerdo de Admisión de Demanda.- Notificación
Registro y Presentación del Oficio de Contestación de Demanda.- Elaboración de Documento
Validación del Registro de la Contestación a la Demanda.- Registro de Promoción
Acuerdo de Contestación de Demanda.- Validación de Documento
Notificación del Acuerdo de Contestación de Demanda.- Notificación
Registro y Presentación de Alegatos.- Registro de Promoción
Validación del Registro de Alegados.- Registro de Promoción
Elaboración del Acuerdo que tiene por Formulados los Alegatos.- Validación de Documentos
Notificación del Acuerdo que tiene por Formulados los Alegatos.- Notificación
Acuerdo que declara cerrada la Instrucción.- Validación de Documentos; Cierre de Instrucción
Notificación del Acuerdo que declara cerrada la Instrucción.- Notificación
Emisión de Sentencia
Notificación de la Sentencia

Fuente: TFJFA

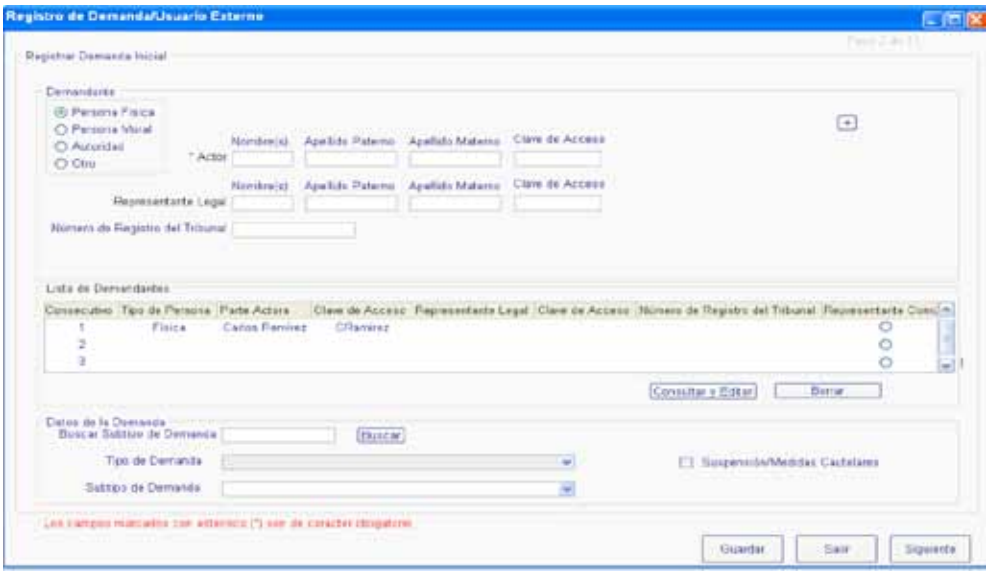
Autenticado, Usuario Externo



Elegir Opción-Nulidad, Usuario Externo



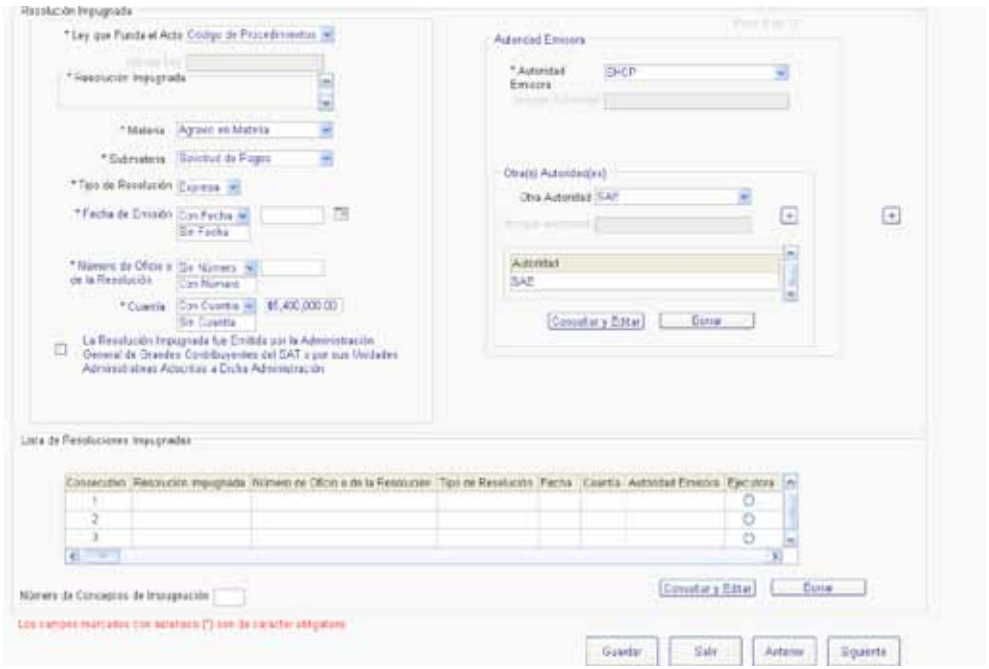
Registrar Demanda Inicial Persona Física-Nulidad, Usuario Externo



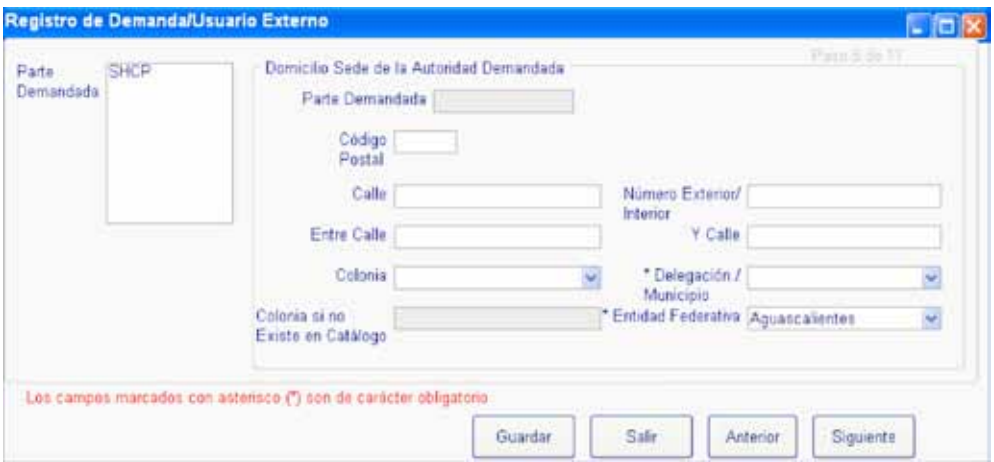
Registrar Direcciones, Usuario Externo



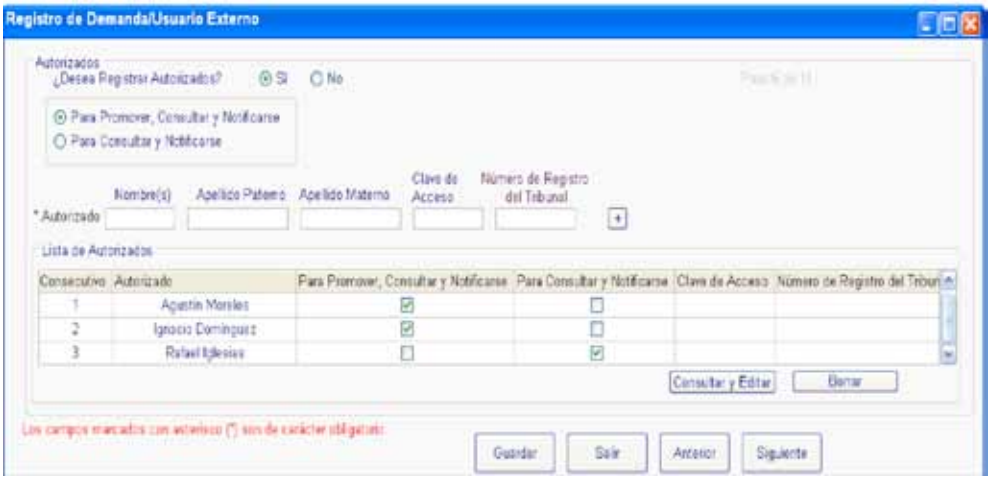
Resolución Impugnada, Usuario Externo



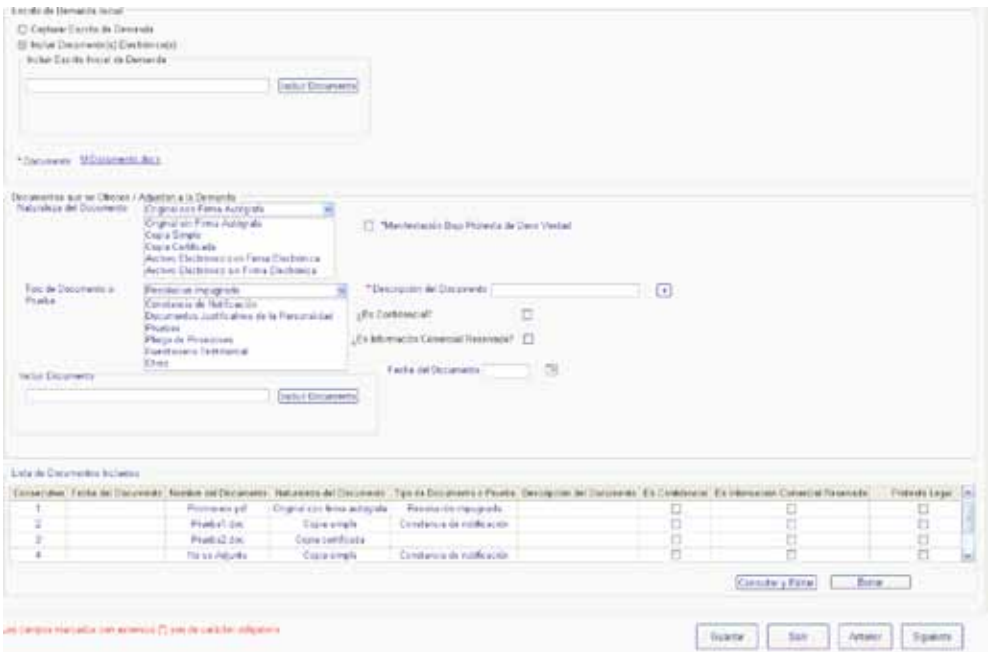
Datos parte Demandada, Usuario Externo



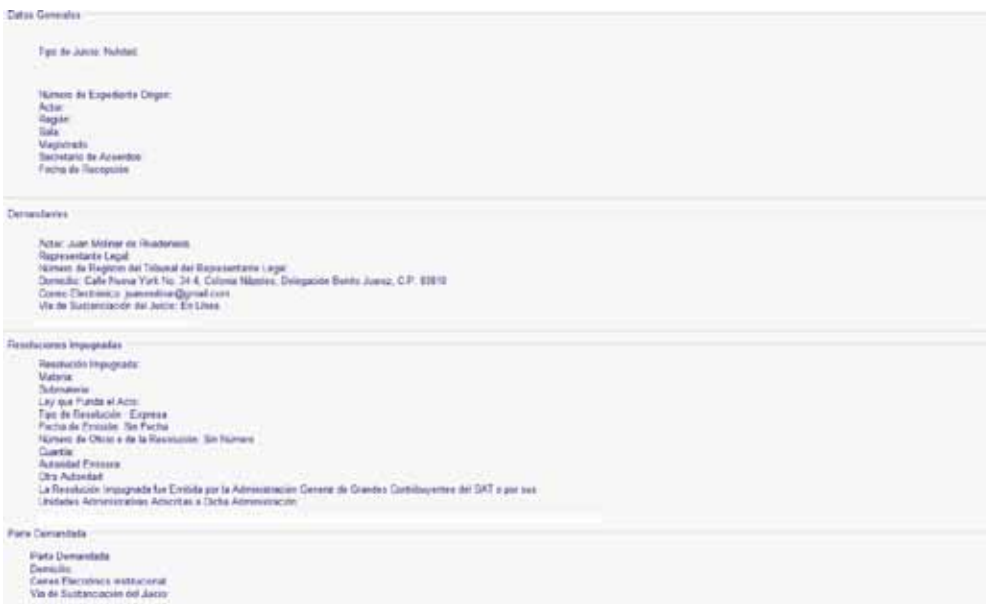
Autorizados, Usuario Externo



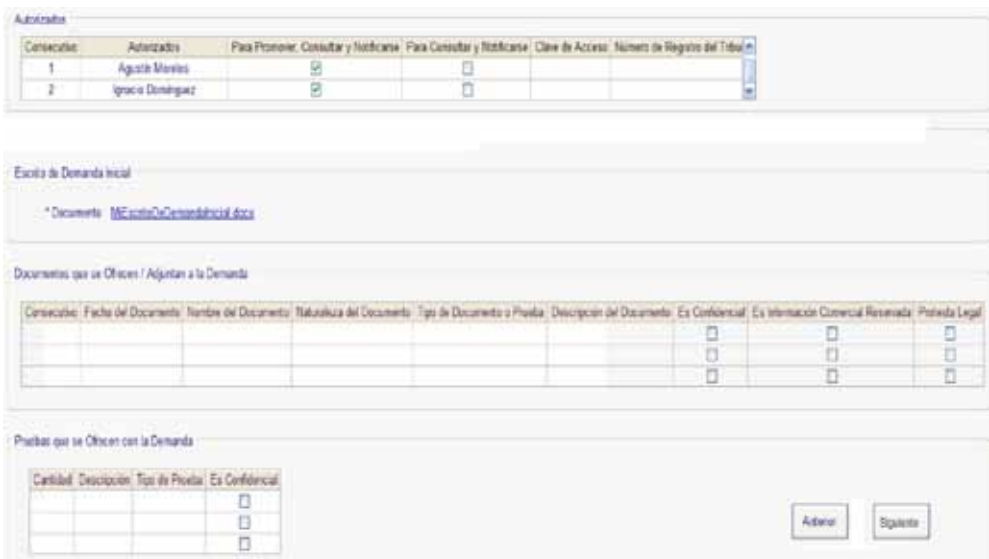
Documentos-Incluir Documentos Escritos, Usuario Externo



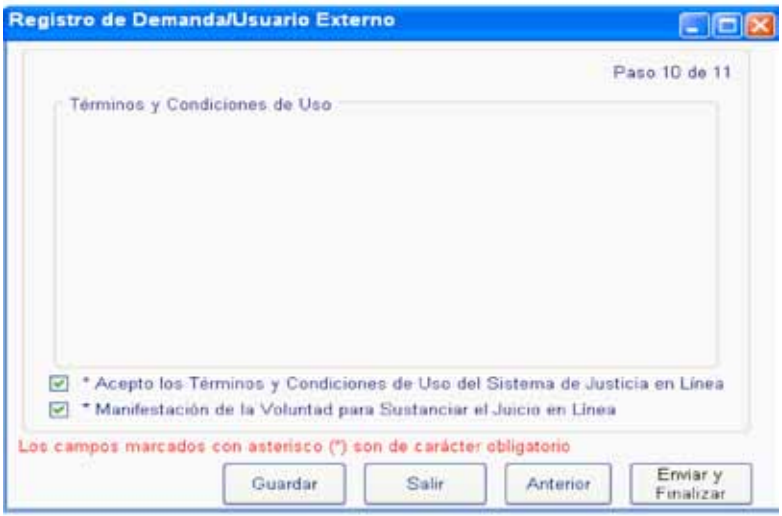
Vista preliminar de Registro de Demanda Inicial en Línea, Usuario Externo



Vista preliminar de Registro de Demanda Inicial en Línea, Usuario Externo



Términos y Condiciones, Usuario Externo



Acuse Persona Física, Usuario Externo



Lo que se observó en las pantallas anteriores son aspectos generales del sistema del juicio en línea una vez dentro del sistema, esto implica que los funcionarios fiscales deban ser capacitados continuamente (en caso de requerirse), se deben familiarizar con el procesamiento de la información de manera virtual, revisar correos electrónicos institucionales, tomar las medidas de seguridad adecuadas para el manejo de información, estar alerta con fallas tecnológicas tanto en el sistema del juicio en línea como en la computadora institucional, entre otros aspectos; es decir, aspectos más tecnológicos que jurídicos, pues con respecto al conocimiento de la norma, son los mismos plazos, términos etc. que en los juicios ordinarios y sumarios, lo único que difiere es que es en línea.

4.2 IMPLICACIONES PARA LAS AUTORIDADES FISCALES QUE INTERVIENEN EN LOS PROCEDIMIENTOS SUMARIOS

Respecto a la vía sumaria, las autoridades fiscales preferentemente deben abocarse al fondo del asunto (interpretación de la norma, fundamentación y motivación) más que a su forma (escritos extensos), precisamente por la reducción de plazos y de tiempo en el procedimiento contencioso administrativo. Una de las implicaciones que inicialmente se aprecia en la vía sumaria, es que se encontraron inconsistencias en la redacción de la ley, pues por mencionar un ejemplo, se encuentra que en el artículo 63 de la LFPCA procede el recurso de revisión por parte de la autoridad contra las resoluciones emitidas por el Pleno, las Secciones de la Sala Superior o por las Salas Regionales del TFJFA cuando en la vía sumaria el que emite la resolución es el magistrado instructor y no la Sala. Este es un claro ejemplo de omisión y poca claridad en la ley, provocando confusión principalmente para la autoridad fiscal,[60] pues una manera de interpretar el precepto sería que en la vía sumaria dicha autoridad se queda sin una revisión de sentencia, situación que confunde.

Hay diversos puntos de vista entre los mismos magistrados del TFJFA y actualmente se tienen datos provenientes del TFJFA de Occidente, respecto a que se han presentado recursos de revisión por parte de la autoridad y el TFJFA los ha admitido, enviándolos a los Tribunales Colegiados de Circuito; sin embargo hasta el momento, según datos del TFJFA, no se han resuelto.

Posterior a esto se emite una tesis aislada donde se establece que es procedente el recurso de revisión contra las sentencias dictadas por el magistrado instructor, donde a la letra dice lo siguiente:

60 *Testimonios mediante entrevistas a funcionarios fiscales de Secretarías de Finanzas de algunas entidades federativas, 2011.*

Tesis: VI.1o.A.32 A (10a.)	*Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*	*Décima Época*	*2001180 21 de 22*
Primer Tribunal Colegiado En Materia Administrativa Del Sexto Circuito	*Libro X, Julio de 2012, Tomo 3*	*Pág. 2049*	*Tesis Aislada (Administrativa)*

[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro X, Julio de 2012, Tomo 3; Pág. 2049

REVISIÓN FISCAL. ES PROCEDENTE DICHO RECURSO CONTRA LAS SENTENCIAS DICTADAS POR LOS MAGISTRADOS INSTRUCTORES DE LAS SALAS REGIONALES DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.

Si bien del capítulo XI intitulado "Del juicio en la vía sumaria" de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, adicionado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de diciembre de dos mil diez, no se desprende literalmente el fundamento para el estudio del recurso de revisión fiscal, también lo es que del contenido del artículo 58-1 del ordenamiento jurídico mencionado se sigue que el juicio contencioso administrativo federal se tramitará y resolverá en la vía sumaria, de conformidad con las disposiciones específicas que para su simplificación y abreviación se establecen en el capítulo relativo y, en lo no previsto, se aplicarán las demás disposiciones de esa ley, lo que denota, en dicho supuesto, la aplicación del contenido del numeral 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo pues no obstante que éste disponga que serán materia del citado medio de defensa las resoluciones emitidas por el Pleno, las Secciones de la Sala Superior o por las Salas Regionales que decreten o nieguen el sobreseimiento, las que se dicten en términos de los artículos 34 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria y 6o. de esa ley, así como las que se emitan conforme a la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado y las sentencias definitivas que emitan, podrán ser impugnadas interponiendo el recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente en la sede del Pleno, Sección o Sala Regional a que corresponda, y que en la hipótesis de que la sentencia recurrida no la emita la Sala Fiscal sino el Magistrado instructor, el artículo 58-1 antes mencionado señala categóricamente que en lo no previsto en el capítulo que regula la procedencia y trámite del juicio sumario se aplicarán las demás disposiciones de la ley adjetiva; aunado al hecho de que un Magistrado instructor integra Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ello de conformidad con el numeral 31 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que textualmente indica que: "El Tribunal tendrá Salas Regionales, con jurisdicción en la circunscripción territorial que les sea asignada, integradas por tres Magistrados cada una. Las Salas Regionales conocerán de los juicios que se promuevan en los supuestos señalados en los artículos 14 y 15 de esta ley, con excepción de los que corresponda resolver al Pleno o a las Secciones de la Sala Superior.-En los juicios en la vía sumaria, el Magistrado que haya instruido el juicio lo resolverá en términos de lo previsto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo."; en este orden de ideas, el recurso de revisión fiscal es procedente no obstante que sea interpuesto contra una sentencia dictada por un Magistrado instructor.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO

Revisión fiscal 27/2012. Administrador Local Jurídico de Puebla Sur. 9 de mayo de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: José Eduardo Téllez Espinoza. Secretaria: Elizabeth Barrientos Sánchez.

Revisión fiscal 30/2012. Administradora Local Jurídica de Puebla Norte y otras. 30 de mayo de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco Javier Cárdenas Ramírez. Secretario: Salvador Alejandro Lobato Rodríguez.

Nota:

Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 390/2012, resuelta por la Segunda Sala el 3 de octubre de 2012.

Por ejecutoria del 3 de octubre de 2012, la Segunda Sala declaró sin materia la contradicción de tesis 407/2012 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis.

Por ejecutoria del 7 de noviembre de 2012, la Segunda Sala declaró sin materia la contradicción de tesis 447/2012 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis.

Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 463/2012, pendiente de resolverse por la Segunda Sala.

Con la tesis anterior se podría pensar que el precepto queda aclarado; sin embargo, con base en esta tesis, se emitieron otras tesis aisladas y jurisprudenciales donde se establece que es improcedente el recurso de revisión fiscal contra las resoluciones en la vía sumaria o dictadas por el magistrado instructor en forma unitaria, donde a la letra dicen lo siguiente:

Tesis: XXIII.1o.(IX Región) 5 A (10a.)	*Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*	*Décima Época*	*2001486 6 de 18*
Primer Tribunal Colegiado De Circuito Del Centro Auxiliar De La Novena Región	*Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2*	*Pág. 1987*	*Tesis Aislada (Administrativa)*

[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2; Pág. 1987

REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS DICTADAS EN LOS JUICIOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS FEDERALES, TRAMITADOS EN LA VÍA SUMARIA.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 58-2 de la Ley Federal de Procedimiento

Contencioso Administrativo, en vigor a partir del siete de agosto de dos mil once, así como con la exposición de motivos del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de diciembre de dos mil diez, a través del cual se instituyó la vía sumaria, ésta es procedente sólo cuando se impugnen resoluciones definitivas cuyo importe no exceda de cinco veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, elevado al año, al momento de su emisión y siempre que se trate de alguno de los temas previstos expresamente en el citado numeral, los cuales son los de mayor incidencia en la práctica y que, por su materia, no revisten complejidad especial. Asimismo, por disposición del diverso artículo 58-13 del mismo ordenamiento, los juicios en la vía sumaria se resuelven por uno solo de los Magistrados integrantes de las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, mas no por éstas funcionando en Pleno, como sucede en el procedimiento ordinario. Por tanto, las sentencias definitivas que se dicten en los juicios tramitados en esa vía especial, no son impugnables a través del recurso de revisión fiscal, previsto en el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ya que por su naturaleza restrictiva y excepcional, este medio de defensa procede únicamente en contra de resoluciones emitidas por el Pleno, las Secciones de la Sala Superior o por las Salas Regionales y que, además, recaigan a asuntos cuya cuantía exceda de tres mil quinientas veces el salario mínimo general diario, o que versen sobre las materias que, por su importancia y trascendencia, están establecidas en las nueve fracciones de este último precepto legal.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA NOVENA REGION

Revisión fiscal 94/2012. Administrador Local Jurídico de Morelia en el Estado de Michoacán. 23 de febrero de 2012. Unanimidad de votos, el Magistrado Ángel Rodríguez Maldonado votó con salvedades. Ponente: Eduardo Antonio Loredo Moreleón. Secretario: Juan Aguilar Rodríguez

Revisión fiscal 96/2012. Administrador Local Jurídico de Morelia en el Estado de Michoacán. 1o. de marzo de 2012. Unanimidad de votos, el Magistrado Ángel Rodríguez Maldonado votó con salvedades. Ponente: Roberto Charcas León. Secretario: Engels Rafael Ruelas Olvera.

Revisión fiscal 100/2012. Administrador Local Jurídico de Morelia en el Estado de Michoacán. 1o. de marzo de 2012. Unanimidad de votos, el Magistrado Ángel Rodríguez Maldonado votó con salvedades. Ponente: Eduardo Antonio Loredo Moreleón. Secretaria: Lorena Casillas Baca.

Revisión fiscal 142/2012. Administrador Local Jurídico de Morelia en el Estado de Michoacán. 1o. de marzo de 2012. Unanimidad de votos, el Magistrado Ángel Rodríguez Maldonado votó con salvedades. Ponente: Eduardo Antonio Loredo Moreleón. Secretario: Juan Aguilar Rodríguez.

Revisión fiscal 140/2012. Administrador Local Jurídico de Morelia en el Estado de Michoacán. 15 de marzo de 2012. Unanimidad de votos, el Magistrado Ángel Rodríguez Maldonado votó con salvedades. Ponente: Ángel Rodríguez Maldonado. Secretaria: Deyanira Ma. del Rocío Martínez Contreras.

Tesis: I.2o.A. J/1 (10a.)	*Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*	*Décima Época*	*2001761 7 de 18*
Segundo Tribunal Colegiado En Materia Administrativa Del Primer Circuito	*Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 3*	*Pág. 1441*	*Jurisprudencia (Administrativa)*

[J]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 3; Pág. 1441

REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN FORMA UNITARIA POR EL MAGISTRADO INSTRUCTOR EN JUICIOS ADMINISTRATIVOS TRAMITADOS EN LA VÍA SUMARIA, AL NO ESTAR PREVISTO EXPRESAMENTE ESE SUPUESTO EN EL ARTÍCULO 63, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

El artículo 63, primer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece la procedencia del recurso de revisión en contra de resoluciones emitidas por el Pleno, las Secciones de la Sala Superior o por las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Y, respecto de las Salas Regionales, los artículos 31 y 35 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa disponen que se integran por tres Magistrados, condición necesaria para la validez de sus sesiones; por otra parte, los numerales 38, fracción XII, de la mencionada ley orgánica y 58-13 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establecen la competencia de los Magistrados instructores para dictar unitariamente las resoluciones de los juicios tramitados en la vía sumaria, es decir, no se integra la Sala Regional para resolver tales procedimientos, por tanto, atendiendo a que el artículo 104, fracción III, de la Constitución Federal establece la excepcionalidad de la revisión, al disponer que sólo procede en los casos que establezcan las leyes, se concluye que en contra de las resoluciones emitidas en los juicios de nulidad tramitados en vía sumaria, es decir, de manera unitaria por los Magistrados instructores, es improcedente el recurso de revisión, ya que ese supuesto no se encuentra previsto expresamente como hipótesis de procedencia en el mencionado numeral 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; conclusión concordante con la intención del legislador de introducir la vía sumaria, con el objetivo de simplificar tanto el trámite del juicio administrativo, como los incidentes y recursos procedentes.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

Revisión fiscal 232/2012. Titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la Delegación Sur del Distrito Federal del Instituto Mexicano del Seguro Social. 5 de julio de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Arturo Iturbe Rivas. Secretario: Benjamín Ciprián Hernández.

Revisión fiscal 275/2012. Director Contencioso y de Recursos, en representación del Procurador Federal del Consumidor y de la autoridad demandada. 5 de julio de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Humberto Suárez Camacho. Secretaria: Leticia Ochoa López.

Revisión fiscal 258/2012. Administrador Local Jurídico del Oriente del Distrito Federal, en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 19 de julio de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Ma. Antonieta Azuela de Ramírez. Secretario: Germán García Flores.

Revisión fiscal 273/2012. Titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la Delegación Sur del Distrito Federal, del Instituto Mexicano del Seguro Social. 23 de agosto de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Ma. Antonieta Azuela de Ramírez. Secretario: Ulises Oswaldo Rivera González.

Revisión fiscal 339/2012. Titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la Delegación Sur del Distrito Federal, del Instituto Mexicano del Seguro Social. 23 de agosto de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Ma. Antonieta Azuela de Ramírez. Secretario: Julián Aguirre Gaona.

Nota: La presente tesis aborda el mismo tema que las sentencias dictadas por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito y Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, en los recursos de revisión fiscal 503/2012, 14/2012 y 202/2011, respectivamente, que son objeto de las denuncias relativas a las contradicciones de tesis 390/2012, 407/2012 y 424/2012, pendientes de resolverse por la Segunda Sala.

Tesis: I.16o.A. J/2 (10a.)	*Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*	*Décima Época*	*2002047 22 de 22*
Decimo Sexto Tribunal Colegiado En Materia Administrativa Del Primer Circuito	*Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4*	*Pág. 2266*	*Jurisprudencia (Administrativa)*

[J]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4; Pág. 2266

REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE ESE RECURSO CONTRA LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR EL MAGISTRADO INSTRUCTOR EN FORMA UNITARIA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL TRAMITADO EN LA VÍA SUMARIA.

De una interpretación teleológica y sistemática de los artículos 58-1 a 58-15 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que regulan la vía sumaria del juicio contencioso administrativo federal (adicionados mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2010, en vigor a los 240 días naturales siguientes a esa fecha) en relación con el primer párrafo del artículo 63 del propio ordenamiento, se colige que las sentencias definitivas dictadas por el Magistrado instructor de alguna Sala

Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al resolver un juicio de la indicada naturaleza, quien actúa en forma unitaria y no como un órgano colegiado, no es de las comprendidas en los supuestos de procedencia del recurso de revisión fiscal, previstos en el segundo de los preceptos señalados, que privilegian las decisiones colegiadas que adopten el Pleno o las Secciones de la Sala Superior o las Salas Regionales del referido órgano y que, por su importancia y trascendencia, ameriten su revisión por un Tribunal Colegiado de Circuito en un medio de impugnación que es excepcional, restrictivo y selectivo, mientras que el legislador en los adicionados preceptos clasificó los asuntos materia de los juicios sumarios, atendiendo a una cuantía relativa y a la importancia ordinaria, común y cotidiana que presentan las resoluciones definitivas impugnables, así como a la conveniencia de que se resuelvan bajo una ágil tramitación, en cuyo diseño puso énfasis en otorgar a los Magistrados instructores la facultad de dictar la sentencia en el sumario, "con lo cual se potenciarán de manera verdaderamente notable los recursos humanos del tribunal, pues en una misma Sala Regional de tres integrantes, se contará con cuatro órganos resolutores; tres Magistrados que actuarán como instructores y unitarios en los juicios sumarios, más la propia Sala Regional que seguirá conservando su competencia en la vía ordinaria.". Por tanto, el mencionado recurso es improcedente contra las resoluciones dictadas por el Magistrado instructor en forma unitaria en el juicio contencioso administrativo federal tramitado en la vía sumaria.

DECIMO SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

Revisión fiscal 74/2012. Titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la Delegación Norte del Distrito Federal del Instituto Mexicano del Seguro Social. 28 de junio de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Raymundo Meneses Tepepa, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: Abel Méndez Corona.

Revisión fiscal 173/2012. Jefa del Departamento Contencioso, en suplencia por ausencia del titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la Delegación Sur del Distrito Federal del Instituto Mexicano del Seguro Social. 2 de agosto de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Ernesto Martínez Andreu. Secretario: Carlos Augusto Amado Burguete.

Revisión fiscal 243/2012. Titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos y representante legal de las autoridades de la Delegación Sur del Distrito Federal del Instituto Mexicano del Seguro Social. 2 de agosto de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: José Antonio Montoya García. Secretaria: Judith Alhelí Andrade Villafán.

Revisión fiscal 241/2012. Subadministrador Local Jurídico del Norte del Distrito Federal, en suplencia del titular de esa Administración y éste a su vez en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público. 15 de agosto de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: María Guadalupe Molina Covarrubias. Secretario: Raymundo Meneses Tepepa.

Revisión fiscal 361/2012. Director General Jurídico, Contencioso y de Sanciones de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, en representación del Presidente de dicha

Comisión. 29 de agosto de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: José Antonio Montoya García. Secretaria: María Elena Bautista Cuéllar.

Nota: La presente tesis jurisprudencial aborda el mismo tema que la tesis aislada VI.1o.A.32 A (10a.) de rubro: "REVISIÓN FISCAL. ES PROCEDENTE DICHO RECURSO CONTRA LAS SENTENCIAS DICTADAS POR LOS MAGISTRADOS INSTRUCTORES DE LAS SALAS REGIONALES DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.", al igual que las sentencias dictadas, respectivamente, por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región al resolver la revisión fiscal 43/2012 (cuaderno auxiliar 503/2012), por el Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito al resolver la revisión fiscal 14/2012, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito al resolver la revisión fiscal 202/2011, por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito al resolver la revisión fiscal 109/2012 y por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región al resolver las revisiones fiscales 656/2012, 657/2012, 652/2012, 659/2012 y 581/2012, que son objeto de las denuncias relativas a las contradicciones de tesis 390/2012 y 407/2012, resueltas por la Segunda Sala el 3 de octubre de 2012, así como de las diversas 424/2012 y 463/2012, pendientes de resolverse por la propia Segunda Sala.

La tesis aislada VI.1o.A.32 A (10a.) citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro X, Tomo 3, julio de 2012, página 2049.

Tesis: V.3o.P.A.5 A (10a.)	*Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*	*Décima Época*	*2002399 14 de 18*
Tercer Tribunal Colegiado En Materias Penal Y Administrativa Del Quinto Circuito	*Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 2*	*Pág. 1536*	*Tesis Aislada (Administrativa)*

[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 2; Pág. 1536

REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE DICHO RECURSO CONTRA LAS SENTENCIAS EMITIDAS EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL TRAMITADO EN LA VÍA SUMARIA.

Atento a la naturaleza excepcional del recurso de revisión fiscal, su procedencia está enmarcada dentro de los criterios de selectividad y restricción, y condicionada a los supuestos específicos que a juicio del legislador, dada su importancia y trascendencia, justifican un nuevo estudio por el tribunal revisor, los cuales prevé el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, cuando se cumplan los siguientes requisitos: a) Que la resolución sea emitida por el Pleno, las Secciones de la Sala Superior, o por las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; b) Que en aquélla se haya decretado o negado el sobreseimiento o se trate de una sentencia definitiva; y, c) Que el asunto se refiera a cualquiera de los supuestos previstos en las fracciones I a IX del citado precepto. En ese orden de ideas, el indicado recurso es improcedente contra

las sentencias emitidas en el juicio contencioso administrativo federal tramitado en la vía sumaria, pues conforme a los artículos 58-1 a 58-15 del señalado ordenamiento, el trámite y resolución de éste culminan con el dictado de una sentencia que, en un término de diez días contados a partir del cierre de la instrucción, debe emitir el Magistrado instructor; de ahí que no se satisfaga el primero de los requisitos aludidos. Además, el legislador estableció la procedencia del recurso de reclamación contra autos o resoluciones intraprocesales dictadas por el Magistrado instructor, sin asentar la posibilidad de inconformarse contra la sentencia que en definitiva dictara en la referida vía sumaria, ya que si hubiera sido su intención incluir ese supuesto, así lo habría hecho en el precepto que contiene tal medio de impugnación o mediante la ampliación de los supuestos de procedencia del invocado artículo 63.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO

Revisión fiscal 61/2012. Administrador Local Jurídico de Ciudad Obregón, Sonora, en suplencia por ausencia del jefe del Servicio de Administración Tributaria. 15 de junio de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel Horacio Vega Montiel, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Claudia Yuridia Camarillo Medrano.

Revisión fiscal 67/2012. Administrador Local Jurídico de Ciudad Obregón, Sonora, en suplencia por ausencia del jefe del Servicio de Administración Tributaria. 26 de junio de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel Horacio Vega Montiel, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Claudia Yuridia Camarillo Medrano.

Nota: La presente tesis aislada aborda el mismo tema que la tesis aislada VI.1o.A.32 A (10a.) de rubro: "REVISIÓN FISCAL. ES PROCEDENTE DICHO RECURSO CONTRA LAS SENTENCIAS DICTADAS POR LOS MAGISTRADOS INSTRUCTORES DE LAS SALAS REGIONALES DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.", al igual que las sentencias dictadas, respectivamente, por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región al resolver la revisión fiscal 43/2012 (cuaderno auxiliar 503/2012), por el Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito al resolver la revisión fiscal 14/2012, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito al resolver la revisión fiscal 202/2011, por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito al resolver la revisión fiscal 109/2012 y por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región al resolver las revisiones fiscales 656/2012, 657/2012, 652/2012, 659/2012 y 581/2012, que son objeto de las denuncias relativas a las contradicciones de tesis 390/2012 y 407/2012, resueltas por la Segunda Sala el 3 de octubre de 2012, así como de las diversas 424/2012, 447/2012 y 463/2012, resueltas por la propia Segunda Sala el 7 y 14 de noviembre de 2012, respectivamente.

La tesis aislada VI.1o.A.32 A (10a.) citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro X, Tomo 3, julio de 2012, página 2049.

Tesis: 2a./J. 152/2012 (10a.)	*Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*	*Décima Época*	*2002644 18 de 18*
Segunda Sala	*Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2*	*Pág. 1440*	*Jurisprudencia (Administrativa)*

[J]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2; Pág. 1440

REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA SENTENCIAS DICTADAS EN FORMA UNITARIA POR LOS MAGISTRADOS INSTRUCTORES DE LAS SALAS REGIONALES DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, EN LOS JUICIOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS FEDERALES TRAMITADOS EN LA VÍA SUMARIA.

En el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el legislador federal estableció los supuestos de procedencia del recurso de revisión fiscal y dispuso que dicho medio de impugnación procede contra sentencias emitidas por el Pleno, las Secciones de la Sala Superior o por las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que decreten o nieguen el sobreseimiento en los juicios de nulidad en que se controviertan resoluciones cuya cuantía exceda de 3500 veces el salario mínimo general diario del área geográfica correspondiente al Distrito Federal, vigente al momento de su emisión, que sean de importancia y trascendencia y se refieran a las materias que en ese mismo precepto legal se señalan, sin aludir a las sentencias dictadas por los Magistrados Instructores de dichas Salas Regionales en el juicio contencioso administrativo sumario previsto en los numerales 58-1 a 58-15 de la citada ley. Además, estableció que dicho juicio sumario procede contra resoluciones definitivas cuyo importe no exceda de 5 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al año al momento de su emisión, equivalentes a 1825 salarios mínimos, siempre que versen sobre cuestiones que el Ejecutivo y el legislador federales estimaron comunes, recurrentes y de resolución sencilla. De ahí que el recurso de revisión fiscal es improcedente contra sentencias pronunciadas en los juicios contenciosos administrativos tramitados en la vía sumaria, toda vez que sería un contrasentido que dicho recurso fuera improcedente contra sentencias dictadas en los juicios ordinarios cuya cuantía fuera de 3499 salarios mínimos y versara sobre materias consideradas por el legislador como de especial importancia y trascendencia, y procediera para impugnar resoluciones definitivas pronunciadas en juicios sumarios de una cuantía menor, y que se refirieran a temas comunes, recurrentes y de poca trascendencia.

SEGUNDA SALA

Contradicción de tesis 390/2012. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero en Materia Administrativa del Sexto Circuito y Primero de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, con residencia en Cancún, Quintana Roo. 3 de octubre de 2012. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Fernando Franco González Salas. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: José Álvaro Vargas Ornelas.

Tesis de jurisprudencia 152/2012 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del diecisiete de octubre de dos mil doce.

Por lo cual, y con lo que se ha señalado anteriormente, se interpreta entonces que para las autoridades fiscales, el recurso de revisión en la Vía Sumaria es improcedente contra las sentencias dictadas por el magistrado instructor.

4.3 IMPLICACIONES PARA LAS AUTORIDADES FISCALES FRENTE A LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE

Las autoridades fiscales federales no solo tienen implicaciones con las modalidades de juicios en línea y vía sumaria, pues también el actuar de las mismas autoridades fiscales tiene implicaciones frente a Instituciones u Organismos Nacionales e Internacionales encargados de velar por los derechos humanos y los derechos del contribuyente.

En México, por ejemplo, es hasta el 23 de junio de 2005 cuando se publica la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, en donde se hace énfasis en los derechos procedimentales, tales como: informar al contribuyente de sus derechos al inicio de cualquier actuación de las autoridades si se trata de fiscalización, sobre el derecho a corregirse y la indicación del medio de defensa procedente; ser tratado con el debido respeto y consideración por los servidores públicos, y que las actuaciones de las autoridades fiscales se lleven a cabo en la forma que les resulte menos onerosa, entre otros.

Además de esto, como ya se comentó en capítulos anteriores, el 10 de junio de 2011 se publicaron reformas constitucionales en materia de derechos humanos. En este contexto, se le cambia de denominación al Título Primero de este ordenamiento legal que se llamaba “De las Garantías Individuales” y se sustituye por el “**De los Derechos Humanos y sus Garantías”.**

Esta reforma constitucional, de gran trascendencia histórica, tiene como ejes: (a) el reconocimiento de los derechos humanos consagrados tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), como en los Tratados Internacionales de los que México es parte; (b) el establecimiento de un nuevo principio de interpretación pro-persona de esos derechos; (c) la creación de un nuevo sistema de control de constitucionalidad en materia de derechos fundamentales que involucra a todas las autoridades del Estado mexicano en el ámbito de sus competencias; (d) la postulación de los principios que integran y enriquecen los derechos humanos y (e) la reformulación y el fortalecimiento de los organismos defensores de esos derechos.

Esto es, el artículo 1° de la Constitución reconoce la necesidad de interacción entre los diferentes derechos para alcanzar su máxima protección, así los derechos de

los contribuyentes se encuentran integrados dentro del mismo *corpus iuris*, ya que desde el propio texto constitucional se estableció el mandato a todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, para promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos.

Esto es, dentro del ámbito de sus competencias, tienen la obligación de aplicar las normas correspondientes haciendo la interpretación más favorable a la persona para lograr su protección más amplia.

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente como Ombudsman en materia fiscal asume la importancia de este compromiso y se constituye en pionera de la nueva postulación, contenido y defensa de los derechos fundamentales de los pagadores de impuestos.

El sistema no jurisdiccional de defensa de los derechos fundamentales, funciona a través de organismos conocidos como "*ombudsman*", cuyas funciones comprenden la promoción y protección de los derechos de las personas, a fin de garantizar la imparcialidad y legalidad principalmente de los actos de la Administración pública.

El sistema Ombudsman es un sistema no jurisdiccional de defensa de los derechos fundamentales, ya que los organismos que lo conforman aspiran a reivindicar la dignidad de la persona frente a las arbitrariedades de las autoridades, así dichas instituciones propugnan también el reconocimiento, ejercicio y defensa de los derechos fundamentales.

Históricamente, la función esencial de estas instituciones es la de recibir las quejas de los gobernados frente a los actos y omisiones de la Administración pública emitiendo, de ser necesario, recomendaciones particulares y generales para lograr la corrección de las prácticas violatorias, procurando la solución rápida de las cuestiones planteadas por la gravedad que representa cualquier vulneración a los derechos fundamentales. De igual forma estas instituciones se ocupan de la divulgación y difusión de la cultura en materia de derechos fundamentales, a efecto de que la sociedad exija con mayor insistencia el respeto integral de sus derechos, frenando la impunidad de aquellas autoridades que aún no han asumido este trascendental compromiso.

Otro aspecto que justifica la creación del Ombudsman es que puede actuar como defensor o representante del pueblo o colectivo social. Es decir, se trata de un control general en la tutela de los derechos fundamentales de los gobernados.

En México, el sistema no jurisdiccional de protección de derechos fundamentales surge en el año 1990 con la creación de la Comisión Nacional de Derechos. Sin

embargo, no es hasta el año 2006 cuando se establece un ombudsman especializado en la materia tributaria, con la creación de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, publicada el 4 de septiembre de 2006 cuyo objetivo es garantizar a los contribuyentes el acceso efectivo a la justicia en materia fiscal. La ley contempla procedimientos sumarios a los que denomina como quejas y reclamaciones y cuyo objetivo precisamente es preservar los derechos tributarios de todas las personas cuando estos resulten vulnerados por actos de autoridades fiscales federales. De estos procedimientos pueden derivar Recomendaciones públicas.[61]

De tal manera que a partir del 1º de septiembre de 2011 entró en funciones la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, instancia que apoyará las actividades en la materia fiscal federal.

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) es un Organismo Público Descentralizado no sectorizado, con autonomía técnica funcional y de gestión, especializado en materia tributaria, que proporciona de manera gratuita, ágil y sencilla servicios de asesoría y consulta, defensoría y representación, así como procedimiento de quejas o reclamación contra actos de autoridades fiscales federales que vulneren los derechos de los contribuyentes.[62]

El 30 de agosto de 2011, la PRODECON dio a conocer en el DOF, los lineamientos que regulan el ejercicio de las atribuciones sustantivas de dicha procuraduría. Estos lineamientos tienen por objeto interpretar y aplicar las atribuciones sustantivas otorgadas por la Ley Orgánica de la PRODECON, para lograr el desarrollo y mejor desempeño de sus actividades a fin de garantizar y hacer efectivo el derecho de los contribuyentes a recibir justicia en materia fiscal en el orden federal. [63]

En los lineamientos antes referidos también se establece lo relacionado con las quejas que los contribuyentes pueden presentar en contra de actos o resoluciones emitidos por las autoridades fiscales que consideren no se apeguen a derecho; así mismo, hace mención de las recomendaciones que puede ésta emitir y las respectivas sanciones.

La PRODECON presta asesoría y servicios gratuitos a petición de parte, así como la representación en juicio del contribuyente que presentó quejas o reclamaciones en contra de autoridades fiscales federales, por el monto de asuntos que no excedan

61 Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, "Derechos Humanos de los Contribuyentes" página web: http://www.prodecon.gob.mx visto enero 2013

62 Página web: http://www.prodecon.gob.mx

63 Revista Práctica Fiscal, Año XXI, septiembre 2011

de 30 veces el salario mínimo del DF elevado al año. Derivado de dichas quejas, tienen la función de emitir recomendaciones.

La Ley Orgánica de la Procuraduría tiene la siguiente estructura:

- El Procurador de la Defensa del Contribuyente.
- El Órgano de Gobierno de la Procuraduría.
- Delegados Regionales.
- Asesores Jurídicos.
- Seis Consejeros Independientes

De acuerdo con la LOPDC, es importante para las AFF saber lo siguiente:

Procedimiento de las Quejas o Reclamaciones

- ✓ Una vez admitida la queja, se cuentan tres días para requerir a las autoridades un informe
- ✓ Tres días para que las autoridades argumenten en su informe
- ✓ Cinco días para que la PRODECON emita recomendación ya sea de medidas correctivas o de no responsabilidad
- ✓ Tres días para que la autoridad exprese si acepta o no (si no la PRODECON representará al contribuyente en el juicio de nulidad)
- ✓ Diez días para cumplir con la recomendación si acepta.

En caso de ser procedente, se emitirá auto de admisión dentro de los tres días siguientes a la presentación de la queja o reclamación; en dicho acuerdo se requerirá a las autoridades señaladas como responsables para que en el término de tres días hábiles siguientes al que surta efectos su notificación, rindan un informe sobre los actos que se les atribuyan en la queja o reclamación.

- En casos urgentes y para la mejor eficacia de la notificación, podrán ordenar que ésta se realice a las autoridades responsables por la vía electrónica.

- En el informe que rindan las autoridades se deberán hacer constar los antecedentes del asunto, los fundamentos y motivaciones de los actos reclamados, si efectivamente éstos existieron, debiendo acompañar copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe.

Para el trámite de la queja o reclamación, cuando se requiera una investigación, la Procuraduría tendrá las siguientes atribuciones:

- Solicitar a las autoridades o servidores públicos a los que se imputen violaciones de derechos de los contribuyentes, la presentación del informe antes mencionado, así como la documentación adicional, y

- Efectuar todas las demás acciones que conforme a derecho juzgue convenientes para el mejor conocimiento del asunto y acreditamiento de las quejas o reclamaciones.

Las conclusiones del expediente, que serán la base de las recomendaciones, estarán fundamentadas exclusivamente en la documentación y pruebas que obren en el propio expediente.

Acuerdos y Recomendaciones

El Procurador de la Defensa del Contribuyente podrá dictar:

- Acuerdos de trámite, para que las autoridades fiscales federales aporten información o documentación**,** salvo aquella que la Ley considere reservada o confidencial;

- Recomendaciones no imperativas para la autoridad o servidor público a la que se dirija, y

- Acuerdos de no responsabilidad.

Dentro de los cinco días siguientes a la recepción del informe de las autoridades responsables la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, formulará una recomendación, analizando los hechos, los argumentos y pruebas, así como los elementos de convicción y las diligencias practicadas, a fin de determinar si las autoridades o servidores han violado o no los derechos de los afectados, al haber incurrido en actos u omisiones ilegales, señalando, en su caso, las prácticas en que hubieren incurrido las autoridades responsables.

En la recomendación se propondrán las medidas correctivas que procedan para la efectiva restitución de los afectados en sus derechos, y si procede, la reparación de los daños y perjuicios que se hubiesen ocasionado.

En caso de que no se comprueben las irregularidades imputadas, la Procuraduría en el término de cinco días, después de recepcionado el informe de las autoridades responsables, dictará acuerdo de no responsabilidad.

La recomendación será pública y no tendrá carácter imperativo para la autoridad o servidor público a los cuales se dirija y, en consecuencia, no podrá por sí misma anular, modificar o dejar sin efecto las resoluciones o actos contra los cuales se hubiese presentado la queja o reclamación.

Una vez recibida la recomendación, la autoridad o servidor público de que se trate informará, dentro de los tres días hábiles siguientes al que surta efectos su notificación, si acepta o no dicha recomendación.

En caso de no aceptar o aceptar parcialmente la recomendación formulada, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente procederá de acuerdo a lo dispuesto por la fracción II del artículo 5 de la LOPDC que establece *"Representar al contribuyente ante la autoridad correspondiente, promoviendo a su nombre los recursos administrativos procedentes y en su caso ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ejerciendo las acciones a que haya lugar, deduciendo con oportunidad y eficacia los derechos de sus representados, hasta su total resolución".*

En caso de aceptar la recomendación, entregará, dentro de los diez días hábiles siguientes, las pruebas que acrediten de que ha cumplido con la recomendación. Dicho plazo podrá ser ampliado por una sola vez por igual término cuando la naturaleza de la recomendación así lo amerite y lo autorice el Procurador de la Defensa del Contribuyente o los Delegados Regionales. En contra de las recomendaciones, acuerdos o resoluciones definitivas de la Procuraduría no procede ningún recurso.

Las recomendaciones y los acuerdos de no responsabilidad se referirán a casos concretos; las autoridades no podrán aplicarlos a otros casos por analogía o mayoría de razón.

Sanciones impuestas por la PRODECON para las autoridades fiscales.

Los servidores públicos de las autoridades fiscales federales serán sancionados:

- Con entre cinco y diez salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal, elevados al mes cuando:

- No rindan el informe requerido en el plazo y términos establecidos, o no acompañen los documentos requeridos, cuando el interesado haya cubierto los derechos respectivos, o no entreguen los documentos o den los datos adicionales solicitados por la Procuraduría.

- No informen, si en su caso, aceptan la recomendación emitida por la Procuraduría;

Con entre veinte y treinta salarios mínimos del Distrito Federal, elevados al mes cuando no asistan a las reuniones periódicas establecidas en la fracción XIV del artículo 5 que dice lo siguiente: *"Convocar y realizar reuniones periódicas con las autoridades fiscales federales, quienes estarán obligadas a participar, cuando así se los solicite la Procuraduría en las reuniones que al efecto se programen, para formularle sugerencias respecto de sus actividades, así como, de advertir o prevenir la comisión de cualquier acto ilegal en perjuicio de una persona o grupo de personas, o de proponerles se eviten perjuicios o se reparen los daños causados a éstos con su ilegal emisión, o por cualquier causa que la justifique. A tales reuniones podrán asistir, e intervenir, en compañía del personal de la Procuraduría, los síndicos, y representantes de colegios profesionales, grupos organizados de consumidores, sindicatos, cámaras empresariales y sus confederaciones y, en general, de grupos de contribuyentes legalmente constituidos, quienes habrán de acreditarse oportunamente ante la Procuraduría"*

- Será motivo de responsabilidad administrativa en términos de lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, cuando los servidores públicos de las autoridades fiscales federales se nieguen a cumplir la recomendación que se les dirija, siempre que el contribuyente logre, mediante el ejercicio de acciones administrativas o contenciosas, que el acto que fue objeto de la intervención de la Procuraduría sea declarado nulo por ausencia total de fundamentación o motivación mediante resolución definitiva.

La imposición de las multas estará a cargo del Procurador de la Defensa del Contribuyente, y de los Delegados Regionales en el ámbito de su competencia. El Procurador podrá delegar esta facultad a otros servidores públicos de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.

Algunos de los últimos boletines de prensa que ha emitido la PRODECON entre otros, son los siguientes:

- *En cooperación con autoridades del Servicio de Administración Tributaria, se promoverán lineamientos para la condonación de multas. Boletín 056/2012, octubre de 2012*

- *La **Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon)** se congratuló por el fallo emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para invalidar los aseguramientos precautorios contra los bienes de aquellos contribuyentes que impidan físicamente la realización de una visita, auditoría u operativo de carácter fiscal. Boletín 055/2012, septiembre de 2012*

- *La titular de la **Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon)** Diana Bernal Ladrón de Guevara afirmó que la construcción de un nuevo pacto fiscal entre gobernados y autoridades debe incluir el correcto y transparente ejercicio del gasto público y la rendición de cuentas. B. 052/2012 septiembre 2012.*

- *Al negar un amparo interpuesto en contra del plazo del juicio en la vía sumaria, la SCJN interpreta de manera menos favorable, el derecho fundamental de acceso a la justicia de los contribuyentes más vulnerables. La SCJN resolvió el amparo directo en revisión 1684/2012, en el sentido de que el plazo de 15 días para la interposición del juicio en la vía sumaria, no viola la garantía de acceso a la justicia, por lo que negó el amparo y protección de la Justicia Federal a un contribuyente que había presentado su demanda fuera del nuevo término legal. B. 045/2012, agosto 2012.*

- *La creación de la PRODECON es un gran paso dentro del marco democrático del país a favor de los contribuyentes: Tristán Canales Najjar.B. 038/2012 Junio 2012.*

Así pues, con la reforma constitucional de junio de 2011 se ve fortalecida la labor de los Ombudsman al adoptarse por el artículo 1° de nuestra Carta Magna el principio de más amplia protección de los derechos fundamentales. Así, se le otorgan nuevas facultades a la Comisión Nacional de Derechos Humanos estableciéndose en el nuevo artículo 102 B, último párrafo, la facultad de investigación en aquellos casos en que se produzcan violaciones graves a derechos fundamentales, facultad que anteriormente estaba encomendada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En el mismo precepto constitucional se fortaleció a este organismo, pues ninguna autoridad podrá negarle la información que solicite con motivo del ejercicio de sus atribuciones.

Como se observó anteriormente, cuando las recomendaciones del Ombudsman nacional, no sean aceptadas o cumplidas por los funcionarios a los que van dirigidas, éstos tienen la obligación de fundar, motivar y hacer pública la razón de su negativa; estableciendo un nuevo control, que será ejercido por la Cámara de Senadores o en sus recesos por la Comisión Permanente, o las legislaturas de las entidades federativas, las cuales podrán llamar a comparecer a las autoridades o servidores públicos responsables, para que expliquen el motivo de su negativa.[64]

Por tal motivo, se recomienda que las AFF funden y motiven correctamente sus actos de autoridad y atiendan las recomendaciones de la PRODECON, pues en el supuesto de no aceptar dicha recomendación, también se sugiere fundar y motivar su respuesta.

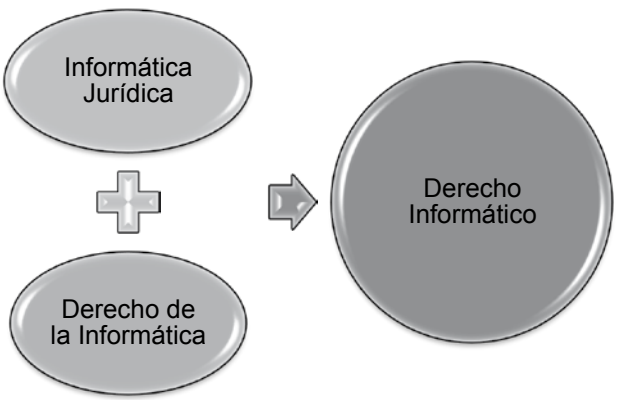
64 Óp. Cit. 61 p. 30

Capítulo V
El Derecho Informático y los Medios Electrónicos en México y en Otros Países

5.1 Importancia del Derecho Informático y su relación con el Juicio en Línea; 5.2 El documento electrónico y su clasificación; 5.3. Valoración del documento electrónico; 5.4. Situación Internacional del documento electrónico; 5.5. Decisiones judiciales en México respecto al valor probatorio de los documentos electrónicos.

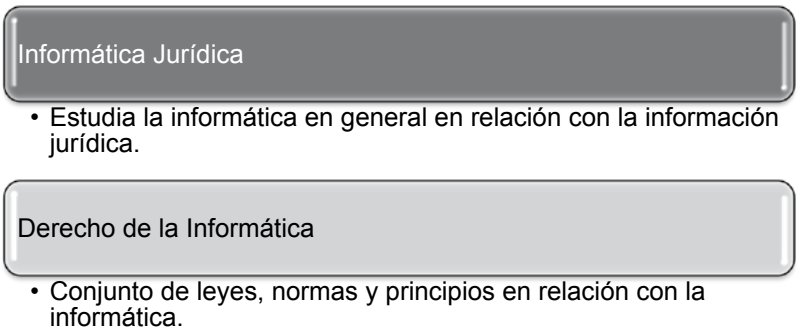
5.1 IMPORTANCIA DEL DERECHO INFORMÁTICO Y SU RELACIÓN CON EL JUICIO EN LÍNEA.

De acuerdo con el autor Téllez Valdés, *el derecho informático* es una rama de las ciencias jurídicas que contempla a la informática como instrumento (informática jurídica) y como objeto de estudio (derecho de la informática). Es decir, el derecho informático se clasifica en la informática jurídica y en el derecho de la informática. (Véase la siguiente figura).



Fuente: INDETEC

La *informática jurídica* la define el mismo autor, como "la técnica interdisciplinaria que tiene por objeto el estudio e investigación de los conocimientos de la informática general, aplicables a la recuperación de información jurídica, así como a la elaboración y aprovechamiento de los instrumentos de análisis y tratamiento de información jurídica necesarios para lograr dicha recuperación". Por otro lado, el *derecho de la informática*, "es el conjunto de leyes, normas y principios aplicables a los hechos y actos derivados de la informática". [65](Véase siguiente figura).



Fuente: INDETEC

El Juicio en Línea se relaciona con la informática jurídica, pues es la conexión de la informática en general con la información jurídica. Es decir, es la utilización de las computadoras en el ámbito jurídico, pues el derecho de la informática se refiere a aquel conjunto de leyes derivado de actos como resultado entre la informática y provocado por el hombre. En otras palabras se deduce que el Sistema de Justicia en Línea es una informática jurídica, ya que se requiere de medios electrónicos y computacionales para el Juicio en Línea y establecer una conexión con la información jurídica a través de internet. (Véase la siguiente figura).

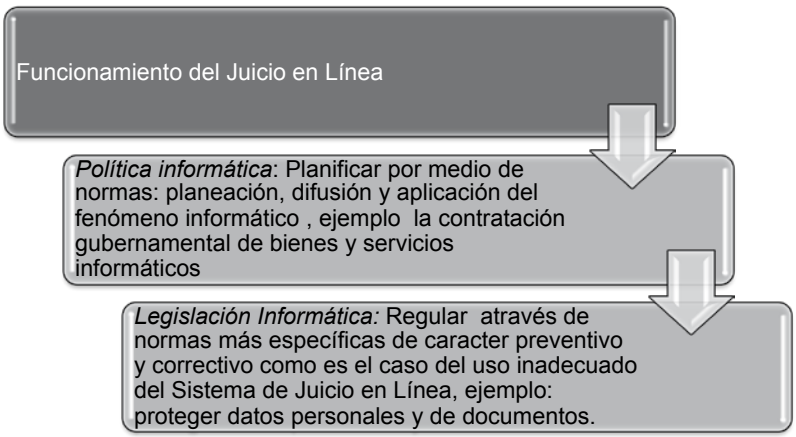


Fuente: INDETEC

65 *TELLEZ VALDÉS, Julio, "Derecho Informático" Cuarta Edición, Mc Graw Hill 2009, p. 9, 10, 12 y 13.*

Se considera que para un necesario funcionamiento del Juicio en Línea se requiere de una política informática (planificar por medios de normas generales; ejemplo, la planeación, difusión y aplicación del fenómeno informático, se tiene el caso del Plan Nacional de Desarrollo, los programas sectoriales y la contratación gubernamental de bienes y servicios informáticos, etc.) y de una legislación informática (regular a través de normas más específicas; es decir, reglas jurídicas de carácter preventivo y correctivo derivado del uso (fundamentalmente inadecuado) de la informática; ejemplo, regulación de la información, protección de datos personales, regulación jurídica de internet, delitos informáticos, protección y valor probatorio de los documentos electrónicos, etc.)[66] (Véase siguiente figura).

Aspectos necesarios para el adecuado funcionamiento del Juicio en Línea.



Fuente: INDETEC

5.2 EL DOCUMENTO ELECTRÓNICO Y SU CLASIFICACIÓN.

El documento electrónico juega un papel importante dentro del Juicio en Línea, pues el documento redactado en las formas tridimensionales (documento manual, mecánicas o fotográficas) es prácticamente sustituido por el documento electrónico.

Concepto de Documento Electrónico.

En capítulos anteriores se mencionó que el artículo 17 D del CFF define al documento digital como "*…todo mensaje de datos que contiene información o escritura generada, enviada, recibida o archivada por medios electrónicos, ópticos*

66 *Ibídem, p. 14 y 15*

o de cualquier otra tecnología" Esa definición es idéntica al concepto de mensaje de datos previsto en el artículo 89 del CC, que lo define como *"…la información generada, enviada, recibida o archivada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología".*

En concordancia con el autor Téllez, "el documento electrónico se alude a que el lenguaje magnético constituye la acreditación, materialización o documentación de una voluntad ya expresada en las formas tradicionales, y en la actividad de una computadora o de una red sólo comprueban o consigan electrónica, digital o magnéticamente un hecho, una relación jurídica o una regulación de intereses preexistentes. En relación a este concepto hay gran discusión en la denominación. Unos lo llaman documento electrónico, otros documento digital, y finalmente hay quienes, como el mismo autor que prefiere llamarle documento informático".

Ahora bien, el conjunto de documentos electrónicos o digitales constituyen lo que se llama "expediente electrónico". Se recuerda que el numeral 1 A, fracción IX, de la LFPCA refiere el contenido del *expediente electrónico* como el conjunto de información contenida en archivos electrónicos o documentos digitales que conforman un juicio contencioso administrativo federal, independientemente de que sea texto, imagen, audio, identificado por un número específico.

Clasificación del Documento Electrónico.

Bien expuesto, Téllez especifica la clasificación de los documentos. "Los documentos electrónicos en sentido estricto, se encuentran contenidos o escritos en soportes de naturaleza magnética o interna o transmitidos vía redes telemáticas. Pero existe una segunda especie de documento electrónico que surge cuando son impresos computacionalmente o provienen de un sistema informatizado, es decir, que ha sido plasmado al papel o llevado a la pantalla de la computadora con información proveniente de un documento electrónico en sentido estricto.

El documento electrónico es el que ya está en la memoria de la máquina y cuyo contenido o texto está en lenguaje de la máquina, el que puede ser pasado a lenguaje natural y eventualmente ser impreso para facilitar su utilización y lectura por parte de los usuarios.

Los documentos informáticos son de dos tipos:

1. *Documentos informáticos sobre soporte de papel.* Se trata de los documentos producidos por medio de la computadora. Son los documentos creados mediante el uso de un periférico de salida, que generalmente es la impresora

láser, y se le dota de soporte papel para ser leído, corregido, autorizado y si contienen un hecho o acto jurídico para ser otorgado mediante la impresión en él de las firmas ológrafas de las partes.

2. *Documentos informáticos sobre soporte electrónico.* Son los documentos producidos no por medio de la computadora, sino en la computadora, y que sólo pueden ser leídos con la aplicación de la técnica informática. En este tipo de documentos, el informático sólo tiene un soporte electrónico. La combinación de la computadora y la telemática dio origen a la comunicación de dos o más computadoras a través de una línea telefónica y permitió la creación, lectura y almacenamiento de documentos informáticos."[67]

En el Juicio en Línea se manejan los dos tipos de documentos informáticos, sin embargo a ambos se les podría dar el mismo valor, un ejemplo, a todas las actuaciones dentro del juicio en línea se les puede clasificar como documento informático sobre soporte electrónico; otro ejemplo es cuando la sentencia y las actuaciones se imprimen para enviarse a los TCC interponiendo el recurso de revisión, en este caso el documento sería informático sobre papel.

5.3. VALORACIÓN DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO.

Dicha valoración es el acto intelectual o fundamental del juzgador o magistrado que tiene como finalidad conocer el mérito o valor de convicción que puede deducirse del medio probatorio.

El documento electrónico y la firma.

El documento electrónico en sentido estricto, no tiene firma autógrafa del autor, es un documento que tiene una nueva forma jurídica, que no admite la firma manuscrita. En el Juicio en Línea sería el caso de la firma electrónica avanzada. Se está de acuerdo en que la libertad que tienen las partes en los instrumentos privados respecto del soporte material, queda limitada por la necesidad de que sea firmado por ellas.

Así la firma electrónica, como ya se definió en capítulos anteriores, se refiere a los datos electrónicos que sirven para identificar al firmante en relación con un mensaje de datos que indiquen que la persona ha aprobado la información contenida en ese mensaje de datos.

67 Óp. Cit. Nota 65, p. 295 y 297

5.4. SITUACIÓN INTERNACIONAL DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO.

Como se ha observado, el documento electrónico juega un papel necesario en el Juicio en Línea, igualmente el valor que se le de en México. De acuerdo a todo lo que se ha visto, el Juicio en Línea abarca desde la presentación de la demanda, pruebas, y todo el proceso hasta la sentencia, por tal motivo se anexa a continuación de manera general, la valoración que se le da al documento electrónico en otros países para enseguida abocarse al nuestro.

En Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania y los países nórdicos (donde predomina el principio de libertad de prueba, que consiste en otorgar libertad a los juzgadores para determinar los medios de prueba, su eficacia probatoria y la manera de producirlos), el problema no llega a ser tan profundo como en Francia, Bélgica e Italia, países fieles al principio de la exigencia legal de la prueba escrita. A pesar de ello, en Gran Bretaña, Australia, República Federal de Alemania, Austria, Suiza, Suecia y Francia se han hecho modificaciones que atribuyen una buena acogida a otros tipos de medios de prueba derivados fundamentalmente de la aparición de nuevas técnicas.

Estados Unidos

En un principio adoptó un sistema menos reglamentarista, regulándose con base en la jurisprudencia. Emanada de los tribunales, surgiendo así normas federales como la *Uniform Business Records as Evidence Act, Voluminous Writing Exception* y la *Uniform Rules of Evidence (Archivos de Negocio Uniformes como Acto de la Evidencia, la Escritura Voluminosa Excepción y las Reglas Uniformes de Evidencia)*, que constituían una excepción para la producción en juicio de la prueba con documento electrónico, que fue conocida como la Business Records Exception.

El primero en legislar sobre la materia fue el estado norteamericano de UTAH, que el 1 de mayo de 1995 sancionó la “UTAH Digital Signature Act”, implementando un nuevo uso en la autopista informática. Ante la ausencia de una ley modelo, la Ley de la Firma Digital de UTAH se ha convertido en la referencia obligada para los demás estados, conformando un esquema regulatorio que brinda efectos legales a la firma digital, un sistema de doble clave que brinda protección, verificación y autentificación a transacciones en línea (on – line), y decide la intervención de una tercera parte, que es la autoridad certificante, encargada de emitir los certificados indispensables para poder utilizar el sistema.

Dicha iniciativa fue luego seguida por la mayoría de los estados de la Unión Américana, que tomaron como modelo tanto esa normativa como la Guía de

Firma Digital (*Digital Signature Guidelines*) publicada en Octubre de 1995 por *The American Bar Association's Information Security Comittee* (Comité de Seguridad de la Información de la Asociación Americana de Abogados).

El 1 de octubre de 2000 entró en vigor en Estados Unidos la primera Ley Nacional sobre Firmas Digitales. Esta ley concede a la firma digital la misma validez que a la tradicional escrita sobre papel.

Naciones Unidas.

Por las dificultades para llegar a un acuerdo internacional respecto a la negociación de medios electrónicos, las Naciones Unidas, se ha manifestado a favor de una rápida adecuación de las legislaciones de cada país como medida de carácter más pragmático. Por lo anterior, dicho organismo ha emitido un valioso documento, titulado *Legal Value of Computer Records*, en el que expresa que las normas o reglas concernientes a las pruebas relativas a documentos electrónicos no deben suponer un obstáculo para el uso de tecnologías emergentes tanto a nivel doméstico como internacional, y señala que las normas redactadas por algunos países deben superar los problemas que genera el lenguaje empleado, pues incorpora referencias culturales que todavía suponen un freno al desarrollo.

Italia.

La legislación Italiana en esta materia está conformada por el Reglamento de actos, documentos y contratos en forma electrónica aprobado el 05 de agosto de 1997. El artículo 5 de este Reglamento trata acerca de la eficacia probatoria del documento informático, en el sentido de que dicho documento firmado con firmas digitales tiene la eficacia de documento privado y que el documento informático revestido de los requisitos previstos en el presente Reglamento, tiene la eficacia prevista en el Código Civil. En su Reglamento, también se hace especial consideración a los documentos informáticos de las administraciones públicas, así como la firma de esos documentos informáticos.

Francia.

Francia es uno de los países pioneros en este campo, pues el 12 de junio de 1980 se sancionó la ley 80/525, reformando el artículo 1348 del Código Civil, estableciéndose así que el documento electrónico tendría el mismo valor probatorio que el documento en soporte de papel escrito y firmado cuando cumpliera determinados requisitos que son inalterabilidad y durabilidad: la doctrina jurisprudencial ha marcado ese mismo valor probatorio cuando cumplían con los requisitos expresados en la norma referida.

El Código Civil de la República de Francia fue reformado mediante la Ley número 2000 – 230 de 13 de marzo de 2000, introduciendo modificaciones al capítulo VI, De la prueba de las Obligaciones y del Pago, refiriéndose dicha reforma a la prueba de las nuevas tecnologías de la información y de la firma electrónica.

España.

La legislación española ha previsto en distintas normas la validez del documento electrónico y de las comunicaciones telemáticas como prueba documental. Así mismo, la jurisprudencia ha reconocido que, a los efectos probatorios, ha de entenderse por documento el escrito, en sentido tradicional, o aquella otra cosa que sin serlo pueda asimilarse al mismo (por ejemplo un disquete, un documento de ordenador, un video, una película, etc), con un criterio moderno de interacción de las nuevas realidades tecnológicas, en el sentido en que la palabra documento figura en algunos diccionarios como "cualquier cosa que sirve para ilustrar o comprobar algo", siempre que el llamado "documento" tenga un soporte material, que es lo que sin duda exige la norma penal.

En lo que respecta a la firma electrónica, el Real Decreto – Ley 14/1999, de 17 de septiembre, establece un régimen específico aplicable a las relaciones telemáticas. Éste persigue básicamente dotar de *seguridad* a estas relaciones. En 2003 se publicó la *Ley de Firma Electrónica*, la ley 59/2003, cuyo contenido coincide en términos generales con el Real Decreto – Ley, y por tanto con la Directiva Comunitaria en la que esta se inspira."[68]

5.5. DECISIONES JUDICIALES EN MÉXICO RESPECTO AL VALOR PROBATORIO DE LOS DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS.

Para *Jiménez Illescas*, a fin de valorar la fuerza probatoria de los documentos exhibidos mediante el Sistema de Justicia en Línea se estima primordialmente a la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada la información que contengan, pues aunque en principio se les otorgará el valor probatorio correspondiente a su constancia física, ello queda sujeto al cumplimiento por las partes oferentes de los acuerdos normativos que deberán atender al transmitir, recibir y validar la documentación.

Por tanto, la forma en que deberá hacerse la valoración de los documentos digitales que se ofrezcan y exhiban dependerá en gran parte de que se atienda a la regulación que al efecto se emita.[69]

68 Ibídem, p. 302 – 307
69 Óp. Cit. Nota 3, p. 80

A continuación, se muestran algunos criterios respecto a los documentos digitales y medios electrónicos en México, para posteriormente analizarlos.

Tesis: 2a./J. 24/2008	*Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*	*Novena Época*	*170349 1 de 1*
SEGUNDA SALA	*XXVII, Febrero de 2008*	*Pág. 530*	*Jurisprudencia (Administrativa)*

[J]; 9a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; XXVII, Febrero de 2008; Pág. 530

DECLARACIÓN PRESENTADA A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y ACUSE DE RECIBO CON SELLO DIGITAL. LA CONSTANCIA IMPRESA O SU COPIA SIMPLE SON APTAS PARA ACREDITAR LA APLICACIÓN DE LOS PRECEPTOS LEGALES EN QUE AQUÉLLA SE SUSTENTÓ.

De acuerdo con el artículo 31 del Código Fiscal de la Federación, los contribuyentes deben realizar pagos y presentar las declaraciones respectivas en documentos digitales a través de los medios electrónicos señalados por el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas generales y este último, conforme al artículo 17-E del propio ordenamiento, por la misma vía remitirá el acuse de recibo que contenga el sello digital, consistente en la cadena de caracteres generada por la autoridad, la cual permita autenticar su contenido. De esa forma, si para cumplir con las indicadas obligaciones fiscales, por disposición legal, debe hacerse uso de una interconexión de redes informáticas, a través de la cual el contribuyente y las autoridades fiscales se transmiten información directamente desde computadoras, prescindiendo de constancias impresas, para valorar la información obtenida de dicha red, o sus copias simples, no debe acudirse a las reglas aplicables en cuanto al valor probatorio de documentos impresos, sino a la regulación específica prevista en el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, conforme al cual debe atenderse preponderantemente a la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada y, en su caso, si el contenido de la información relativa es atribuible a las personas obligadas y si está disponible para su ulterior consulta. Así, tratándose del cumplimiento de las obligaciones fiscales a través de medios electrónicos, el método por el cual se generan los documentos digitales está previsto en la ley y, además, el propio legislador y la autoridad administrativa, a través de reglas generales, han desarrollado la regulación que permite autenticar su autoría, de manera que su impresión o su copia simple son aptos para demostrar la aplicación de los preceptos legales que sirven de base a los diversos cálculos cuyo resultado se plasma en la declaración, siempre y cuando sea indudable que las correspondientes hipótesis normativas sustentan los resultados contenidos en ella.

Del anterior criterio, se resalta lo siguiente: *"Los contribuyentes deben realizar pagos y presentar las declaraciones respectivas en documentos digitales a través de los medios electrónicos señalados por el SAT, por la misma vía remitirá el acuse de recibo que contenga el sello digital tratándose del cumplimiento de las obligaciones fiscales a través de medios electrónicos …" "…Tratándose del cumplimiento de*

las obligaciones fiscales a través de medios electrónicos, el método por el cual se generan los documentos digitales está previsto en la ley y, además, el propio legislador y la autoridad administrativa, a través de reglas generales, han desarrollado la regulación que permite autenticar su autoría, de manera que su impresión o su copia simple son aptos para demostrar la aplicación de los preceptos legales".

Con lo que ya se expuso, se puede observar que efectivamente se le da un valor probatorio a los documentos digitales que con motivo de las obligaciones fiscales se realicen a través de medios electrónicos, pues el mismo legislador y autoridad administrativa lo autorizan.

Tesis: 2a. XCVII/2007	*Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*	*Novena Época*	*171757 1 de 1*
SEGUNDA SALA	*XXVI, Agosto de 2007*	*Pág. 638*	*Tesis Aislada (Constitucional, Administrativa)*

[TA]; 9a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; XXVI, Agosto de 2007; Pág. 638

FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA. EL HECHO DE QUE EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN NO ESTABLEZCA SU DEFINICIÓN NO VIOLA LA GARANTÍA DE LEGALIDAD.

El artículo 17-D del Código Fiscal de la Federación establece que cuando las disposiciones fiscales obliguen a presentar documentos, éstos deberán ser digitales y contener una firma electrónica avanzada del autor, salvo los casos previstos en el propio precepto, y que para esos efectos deberá contarse con un certificado que confirme el vínculo entre un firmante y los datos de creación de una "firma electrónica avanzada", expedido por el Servicio de Administración Tributaria cuando se trate de personas morales y por un prestador de servicios de certificación autorizado por el Banco de México cuando se trate de personas físicas, mediante el cumplimiento de ciertos requisitos, entre ellos, el de la comparecencia del interesado o de su apoderado o representante legal en caso de personas morales, con la finalidad de acreditar su identidad. De lo anterior se concluye que no se viola la garantía de legalidad contenida en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el hecho de que el Código Fiscal de la Federación no establezca una definición particular de lo que debe entenderse por "firma electrónica avanzada", pues del indicado numeral 17-D se advierte el propósito perseguido con ésta, el cual, además de identificar al emisor de un mensaje como su autor legítimo, como si se tratara de una firma autógrafa, garantiza la integridad del documento produciendo los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos con firma autógrafa, teniendo el mismo valor probatorio; lo anterior, en razón de que la firma electrónica avanzada está vinculada a un certificado expedido por una autoridad, en este caso, por el Servicio de Administración Tributaria, en el que constan los datos del registro respectivo.

Del anterior criterio, se resalta lo siguiente: *"… no se viola la garantía de legalidad contenida en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el hecho de que el Código Fiscal de la Federación no establezca una definición particular de lo que debe entenderse por "firma electrónica avanzada…","… garantiza la integridad del documento produciendo los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos con firma autógrafa, teniendo el mismo valor probatorio; lo anterior, en razón de que la firma electrónica avanzada está vinculada a un certificado expedido por una autoridad, en este caso, por el Servicio de Administración Tributaria, en el que constan los datos del registro respectivo."*

Con lo que ya se expuso, se puede observar que la firma autógrafa y la firma electrónica avanzada tienen el mismo valor probatorio pues ésta última es expedida por una autoridad y el que no haya definición de la misma en el CFF no viola la garantía de legalidad.

Tesis: 1a./J. 27/2007	*Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*	*Novena Época*	*173071 1 de 1*
PRIMERA SALA	*XXV, Marzo de 2007*	*Pág. 30*	*Jurisprudencia (Común)*

[J]; 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; XXV, Marzo de 2007; Pág. 30

CONSTANCIAS ENVIADAS POR FAX ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LAS REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LAS RECIBE, TIENEN PLENO VALOR PROBATORIO.

El artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de lo previsto en el diverso artículo 2o. de esta Ley, reconoce como medios de prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología, y establece que su fuerza probatoria está sujeta a la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada y, en su caso, si es posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa y ser accesible para su ulterior consulta. Ahora bien, entre los medios de comunicación electrónica se encuentra el denominado fax, que es un medio de transmisión de datos que emplea la red telefónica, por el cual se envía un documento que se recibe por el destinatario en copia fotostática; de ahí que las constancias transmitidas por este medio, entre los órganos del Poder Judicial de la Federación, si están certificadas por el secretario de Acuerdos del tribunal judicial al que se transmite el mensaje, sobre la hora y fecha de recepción del fax y la persona del órgano jurisdiccional federal que lo remitió, tienen pleno valor probatorio, por ser confiable el medio en que fueron comunicadas dichas constancias, ya que tiene un grado de seguridad similar al de la documentación consignada en papel, además de que es identificable la persona a quien se atribuye su contenido y pueden verificarse tanto el origen de la documentación como su texto; pues en la actualidad

los citados órganos se encuentran comunicados electrónicamente, por distintos medios, lo que permite corroborar los datos del fax recibido.

Del anterior criterio, se resalta lo siguiente: "… *reconoce como medios de prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología,…" "…entre los medios de comunicación electrónica se encuentra el denominado fax,…" "… de ahí que las constancias transmitidas por este medio, entre los órganos del Poder Judicial de la Federación, si están certificadas por el secretario de Acuerdos del tribunal judicial al que se transmite el mensaje, sobre la hora y fecha de recepción del fax y la persona del órgano jurisdiccional federal que lo remitió, tienen pleno valor probatorio,…" "…pues en la actualidad los citados órganos se encuentran comunicados electrónicamente, por distintos medios, lo que permite corroborar los datos del fax recibido."*

Con lo que ya se expuso, se pueden observar dos cosas, la primera que al fax se le da valor probatorio y la segunda, siempre y cuando sea enviado entre órganos del Poder Judicial de la Federación.

Tesis: VIII.5o.1 A	*Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*	*Novena Época*	*173930 1 de 1*
Quinto Tribunal Colegiado Del Octavo Circuito	*XXIV, Noviembre de 2006*	*Pág. 1039*	*Tesis Aislada (Administrativa)*

[TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; XXIV, Noviembre de 2006; Pág. 1039

DERECHO DE PETICIÓN. SU EJERCICIO A TRAVÉS DE INTERNET ESTÁ TUTELADO POR EL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL, SIEMPRE QUE LA AUTORIDAD A QUIEN SE FORMULE LA PETICIÓN PREVEA INSTITUCIONALMENTE ESA OPCIÓN Y SE COMPRUEBE QUE LA SOLICITUD ELECTRÓNICA FUE ENVIADA.

Del artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se advierte que los funcionarios y empleados públicos están obligados a respetar el ejercicio del derecho de petición, siempre que se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa, el cual por seguridad jurídica está condicionado a que la solicitud se haga mediante escrito en sentido estricto, pues de no ser así la autoridad no estaría obligada a dar contestación; sin embargo, el rápido avance de los medios electrónicos como el internet, constituye en los últimos años, un sistema mundial de diseminación y obtención de información en diversos ámbitos, incluso, del gobierno, ya que en la actualidad en el país diversas autoridades han institucionalizado la posibilidad legal de que algunas gestiones los ciudadanos las puedan realizar a través de ese medio, en pro de la eficiencia y el valor del tiempo, lo que evidentemente no previó el Constituyente en la época en que redactó el referido texto constitucional, pues su creación se justificó únicamente en evitar la venganza privada y dar paso al régimen de autoridad en la

solución de los conflictos, obvio, porque en aquel momento no podía presagiarse el aludido avance tecnológico. En esa virtud, de un análisis histórico progresivo, histórico teleológico y lógico del numeral 8o. de la Carta Magna, se obtiene que a fin de salvaguardar la garantía ahí contenida, el derecho de petición no sólo puede ejercerse por escrito, sino también a través de documentos digitales, como serían los enviados por internet, en cuyo caso la autoridad a quien se dirija estará obligada a dar respuesta a lo peticionado, siempre que institucionalmente prevea esa opción dentro de la normatividad que regula su actuación y se compruebe de manera fehaciente que la solicitud electrónica fue enviada.

Del anterior criterio, se resalta lo siguiente: "…*de un análisis histórico progresivo, histórico teleológico y lógico del numeral 8o. de la Carta Magna, se obtiene que a fin de salvaguardar la garantía ahí contenida, el derecho de petición no sólo puede ejercerse por escrito, sino también a través de documentos digitales, como serían los enviados por internet, en cuyo caso la autoridad a quien se dirija estará obligada a dar respuesta a lo peticionado, siempre que institucionalmente prevea esa opción dentro de la normatividad que regula su actuación y se compruebe de manera fehaciente que la solicitud electrónica fue enviada."*

Con lo que ya se expuso, se puede observar que el derecho de petición no solo puede hacerse por escrito sino también a través de documentos digitales y se da el valor probatorio si se comprueba que la solicitud fue enviada.

Tesis: XXI.2o.P.A.32 K	*Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*	*Novena Época*	*174038 1 de 1*
Segundo Tribunal Colegiado En Materias Penal Y Administrativa Del Vigésimo Primer Circuito	*XXIV, Octubre de 2006*	*Pág. 1496*	*Tesis Aislada (Común)*

[TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; XXIV, Octubre de 2006; Pág. 1496

PRUEBA DE INSPECCIÓN. DEBE DESECHARSE CUANDO LOS PUNTOS PROPUESTOS PARA SU DESAHOGO PUEDAN SER COMPROBADOS A TRAVÉS DE LA DOCUMENTAL, ENTENDIDA COMO LA INFORMACIÓN GENERADA O COMUNICADA QUE CONSTE EN MEDIOS ELECTRÓNICOS O EN CUALQUIER OTRA TECNOLOGÍA, QUE PUEDE SER REPRODUCIDA, NO SOLAMENTE EN PAPEL SINO TAMBIÉN EN ALGÚN DISQUETE O DISCO ÓPTICO.

La base de datos existente en el sistema de cómputo de alguna dependencia oficial, constituye, en sentido amplio, una documental, atendiendo a que el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su

artículo 2o., segundo párrafo, señala que se reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología. En ese contexto, resulta correcto desechar la prueba de inspección cuando los puntos materia de su desahogo tienen como propósito demostrar hechos susceptibles de ser comprobados a través de la prueba documental, entendida ésta como la información que puede ser reproducida, no exclusivamente en papel, sino también en algún disquete o disco óptico, en el cual se logre grabar la información solicitada por el quejoso para efectos de exhibirlos como prueba en el juicio de amparo, de conformidad con el artículo 152 de la Ley de Amparo.

Del anterior criterio, se resalta lo siguiente: "…*resulta correcto desechar la prueba de inspección cuando los puntos materia de su desahogo tienen como propósito demostrar hechos susceptibles de ser comprobados a través de la prueba documental, entendida ésta como la información que puede ser reproducida, no exclusivamente en papel, sino también en algún disquete o disco óptico,…"*

Con lo que ya se expuso, se puede observar que se reconoce que la prueba documental no solo puede ser reproducida en papel sino en disquete o disco óptico, es decir, se reconoce como prueba la información generada en medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología. Y se desecha la prueba de inspección si los hechos se pueden demostrar a través de una documental.

Tesis: I.7o.A.410 A	*Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*	*Novena Época*	*176863 1 de 1*
Séptimo Tribunal Colegiado En Materia Administrativa Del Primer Circuito	*XXII, Octubre de 2005*	*Pág. 2471*	*Tesis Aislada (Administrativa)*

[TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; XXII, Octubre de 2005; Pág. 2471

RECIBO DE PAGO ELECTRÓNICO. VALOR PROBATORIO DE LA DOCUMENTAL IMPRESA CORRESPONDIENTE.

El artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología, condicionando su valor a la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada, y en su caso, si es posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa y ser accesible para su ulterior consulta. De esta manera, el legislador, ante los avances de la tecnología, contempló la posibilidad de que en los juicios seguidos ante los tribunales se exhibieran y valoraran elementos probatorios distintos a los convencionales, tales como testimoniales, periciales, documentos, entre otros; consecuentemente, la información generada por la vía electrónica

(internet, comercio electrónico y análogos), tiene un respaldo legislativo, a efecto de crear seguridad jurídica en los usuarios de tales servicios. Así, la valoración del material probatorio en comento no debe sujetarse a las reglas convencionales de justipreciación, sino al apartado específico del numeral en estudio; de esta manera, un recibo de pago de impuestos realizado electrónicamente no carece, por tal circunstancia, de eficacia probatoria, ya que lo que se habrá de tomar en consideración, en su momento, son los datos que corroboren su fiabilidad, como son el código de captura y sello digital, y no elementos ajenos a la naturaleza de los documentos electrónicos, tales como si se trata del original de una impresión.

Del anterior criterio, se resalta lo siguiente: "…*el legislador, ante los avances de la tecnología, contempló la posibilidad de que en los juicios seguidos ante los tribunales se exhibieran y valoraran elementos probatorios distintos a los convencionales, tales como testimoniales, periciales, documentos, entre otros; consecuentemente, la información generada por la vía electrónica (internet, comercio electrónico y análogos), tiene un respaldo legislativo, a efecto de crear seguridad jurídica en los usuarios de tales servicios." " … un recibo de pago de impuestos realizado electrónicamente no carece, por tal circunstancia, de eficacia probatoria, ya que lo que se habrá de tomar en consideración, en su momento, son los datos que corroboren su fiabilidad, como son el código de captura y sello digital, y no elementos ajenos a la naturaleza de los documentos electrónicos, tales como si se trata del original de una impresión."*

Con lo que ya se expuso, se puede observar que el legislador reconoce los medios electrónicos como elemento probatorio y da certeza jurídica a los usuarios, como en el caso de un recibo de pago de impuestos realizado electrónicamente se deben corroborar los datos tales como código de captura y sello digital.

Tesis: 2a. XCIV/2004	*Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*	*Novena Época*	*180113 1 de 1*
SEGUNDA SALA	*XX, Noviembre de 2004*	*Pág. 129*	*Tesis Aislada (Constitucional, Administrativa)*

[TA]; 9a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; XX, Noviembre de 2004; Pág. 129

PAGO DE CONTRIBUCIONES POR MEDIOS ELECTRÓNICOS. LOS ARTÍCULOS 20, SÉPTIMO PÁRRAFO Y 31, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LO PREVÉN, NO INFRINGEN EL ARTÍCULO 28 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2002).

El hecho de que los mencionados preceptos establezcan que el pago de las contribuciones en moneda nacional se efectúe mediante transferencia electrónica de fondos a favor de la Tesorería de la Federación, de conformidad con las reglas de carácter general que señale

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no infringen el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el pago así realizado no demerita la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional que el referido precepto constitucional encomienda al Banco de México, ya que dicha transferencia se efectúa precisamente en esa moneda, según el primer párrafo del artículo 20 del Código Fiscal de la Federación. Además, la indicada transferencia electrónica de fondos sólo constituye uno de los medios de pago de las contribuciones, cuyo establecimiento se hizo con el fin de simplificar y reforzar los procedimientos administrativos a través de los cuales los contribuyentes cumplen sus obligaciones y ejercen sus derechos, aprovechando los avances tecnológicos, sin que la autoridad pierda la información ni el control.

Del anterior criterio, se resalta lo siguiente: "…*la indicada transferencia electrónica de fondos sólo constituye uno de los medios de pago de las contribuciones, cuyo establecimiento se hizo con el fin de simplificar y reforzar los procedimientos administrativos a través de los cuales los contribuyentes cumplen sus obligaciones y ejercen sus derechos, aprovechando los avances tecnológicos, sin que la autoridad pierda la información ni el control."*

Con lo que ya se expuso, se puede observar que se ratifica el aprovechamiento de los avances tecnológicos.

Tesis: VII.2o.C.5 A	*Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*	*Novena Época*	*180608 1 de 1*
Segundo Tribunal Colegiado En Materia Civil Del Séptimo Circuito	*XX, Septiembre de 2004*	*Pág. 1790*	*Tesis Aislada (Administrativa) Superada por contradicción*

[TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; XX, Septiembre de 2004; Pág. 1790

INTERÉS JURÍDICO DEL CONTRIBUYENTE. PARA ACREDITARLO EN EL AMPARO ES SUFICIENTE LA COPIA FOTOSTÁTICA SIMPLE DEL ACUSE DE RECIBO OBTENIDO DE LA RED DE INTERNET, AL CUMPLIRSE CON LAS OBLIGACIONES FISCALES A TRAVÉS DE ESA VÍA.

De lo dispuesto por el artículo 31 del Código Fiscal de la Federación, y de la regla número 2.14.1 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2002, se concluye que al tener el contribuyente la posibilidad de rendir declaraciones vía internet, la copia fotostática simple del acuse de recibo obtenida mediante esa vía, es suficiente para acreditar su interés jurídico en el amparo promovido contra la inconstitucionalidad de los preceptos legales que regulan dicha materia,

toda vez que la constancia de referencia es el único documento que puede obtener al realizar su pago de esa forma, siendo el contenido de la misma lo que interesa, pues al utilizarse los medios electrónicos para el cumplimiento de las obligaciones fiscales, la información relativa sólo puede enviarse a través de documentos digitales, entendiéndose por éstos, aquellos mensajes de datos que contienen información o escritura generada, enviada, recibida o archivada por medios de dicha índole, ópticos o de cualquier otra tecnología y, por tanto, el único medio previsto para autentificar y acreditar que dichos documentos fueron recibidos por la autoridad debida es el acuse de recibo enviado por la misma vía con el sello digital correspondiente, a través del cual se identifica a la dependencia que recibió el documento, sustituyendo a la firma autógrafa y produciendo los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos respectivos, teniendo el mismo valor probatorio, según lo establece la diversa regla general 2.16 de la resolución multicitada, el cual se materializa a través de la cadena de caracteres (conjunto de letras, números y símbolos) asignada por el banco o el Servicio de Administración Tributaria al presentarse las declaraciones o pagos, según se trate, a través de un documento digital. Por ende, ni aun su primera impresión podría refutarse como original, sino únicamente como una reproducción de la información proporcionada por el contribuyente en la dirección electrónica de las instituciones de crédito autorizadas, así como de los de identificación de la operación realizada a través de ese medio electrónico y mientras no sean objetadas por las autoridades hacendarias, no es posible, por razones de seguridad jurídica, poner en duda su autenticidad y contenido. Consecuentemente, se colige, que al existir regulación específica sobre la manera de cumplir con las obligaciones fiscales, no es válido aplicar las normas que rigen en materias de naturaleza diversa, en las cuales a las copias fotostáticas simples se les otorga el carácter de mero indicio, pues en la especie lo trascendente es demostrar que se presentó la declaración y se efectuó el pago por concepto del impuesto, lo cual se logra con la exhibición de la multicitada documental en la que aparecen los datos suficientes para identificar si se aplicaron o no los dispositivos legales reclamados.

Del anterior criterio, se resalta lo siguiente: "…*se concluye que al tener el contribuyente la posibilidad de rendir declaraciones vía internet, la copia fotostática simple del acuse de recibo obtenida mediante esa vía, es suficiente para acreditar su interés jurídico…" "… se colige, que al existir regulación específica sobre la manera de cumplir con las obligaciones fiscales, no es válido aplicar las normas que rigen en materias de naturaleza diversa, en las cuales a las copias fotostáticas simples se les otorga el carácter de mero indicio, pues en la especie lo trascendente es demostrar que se presentó la declaración y se efectuó el pago por concepto del impuesto, lo cual se logra con la exhibición de la multicitada documental en la que aparecen los datos suficientes para identificar si se aplicaron o no los dispositivos legales reclamados."*

Con lo que ya se expuso, se puede observar que la copia simple proveniente de medios electrónicos tiene valor probatorio cuando aparecen los datos suficientes para identificar lo que se quiere demostrar.

Tesis: I.1o.A.120 A	*Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*	*Novena Época*	*182439 1 de 1*
Primer Tribunal Colegiado En Materia Administrativa Del Primer Circuito	*XIX, Enero de 2004*	*Pág. 1492*	*Tesis Aislada (Administrativa)*

[TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; XIX, Enero de 2004; Pág. 1492

CONTRIBUCIONES. LA COPIA SIMPLE DEL COMPROBANTE DE PAGO POR MEDIOS ELECTRÓNICOS OBTENIDA MEDIANTE IMPRESORA, FAX O CUALQUIER OTRO MEDIO ANÁLOGO ES APTA PARA ACREDITAR EL ACTO DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA VIGENTE EN EL AÑO DOS MIL TRES.

Del artículo 31, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación y de la regla 2.9.17. de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente en febrero del año dos mil tres se desprende que cuando los contribuyentes realicen el cumplimiento de sus deberes fiscales por medios electrónicos, no es obligatorio que presenten la declaración correspondiente en las formas aprobadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en virtud de que los contribuyentes podrán presentar la declaración en las citadas formas para obtener el sello o impresión de la máquina registradora, lo que significa que se está en presencia de una facultad o derecho del gobernado que puede o no ejercer y no de un deber; en igual forma, es una facultad de éste obtener copia certificada de las declaraciones presentadas por medios electrónicos. Ahora bien, el pago de contribuciones por medios electrónicos constituye un instrumento para facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los gobernados y la pronta y eficaz recaudación, cuya forma de operar implica que los causantes tengan una clave de acceso al sistema tributario cuando realicen pagos por transferencia electrónica, en tanto que la institución financiera proporcionará el sello digital. El concepto del "equivalente funcional" entre los documentos consignados en papel y aquellos consignados por vía electrónica tiene por objeto establecer una serie de características numéricas y criptográficas que identifican a la persona y aprobar la información que aparece en el mensaje, de ahí que la reproducción de la información mediante impresora, fax o cualquier otro medio análogo, que naturalmente se reduce a copia simple, no significa, en modo alguno, que carezcan de valor probatorio para demostrar el acto de aplicación del artículo tercero transitorio de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en el año dos mil tres, reclamado, por el simple hecho de que consten en copia simple, antes bien, son confiables partiendo de la base de los fines del artículo 31 del ordenamiento citado, que sirvió de fundamento para generar la información electrónica, en virtud de que la seguridad de la operación se encuentra en la clave digital que es original, adminiculada con los demás datos como son el registro federal de contribuyentes, la fecha de pago, el número de cuenta, el número de operación, el periodo, el impuesto y la cantidad que se paga y, en todo caso, el fisco federal, de no estar de acuerdo con su contenido, está en posibilidad de impugnarlo, y si no lo hizo, tal omisión se traduce en su aceptación tácita para todos los efectos legales, porque la presentación de una declaración escrita para

obtener el sello oficial en original o la impresión en ella de la máquina registradora, después de haber realizado el pago o cumplimiento de obligaciones fiscales por medios electrónicos, es una facultad o derecho del gobernado que puede o no ejercer a su juicio, porque no se trata de un deber, una obligación. Por tanto, la fuerza probatoria deriva de la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada y, en su caso, si es posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa y ser exigida para su ulterior consulta, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en términos del artículo 2o. de la Ley de Amparo, y no de la aplicación dogmática de una regla general de que las copias simples carecen, por sí mismas, de valor, por el hecho de que el sello digital se encuentra en una copia simple obtenida de impresora, fax, entre otros, ya que los avances tecnológicos, a nivel mundial, trajeron como resultado que el legislador introdujera los medios electrónicos para crear, modificar, extinguir o cumplir obligaciones, según se advierte de los artículos 31 del código tributario, 89 a 114 del Código de Comercio, 188 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, entre otros ordenamientos, que establecen excepciones a la regla general citada. Por consiguiente, si al realizar el pago provisional del impuesto sustitutivo del crédito al salario que le corresponde, el acuse referido es el único documento que obtuvo el particular al realizar su pago de esa forma, es claro que si las autoridades hacendarias no lo objetaron, por razones de lealtad procesal, de probidad y buena fe frente al Juez, quien debe evitar que se trastoquen dichos valores, debe considerarse apto y suficiente para demostrar el pago de referencia y, por ende, el acto concreto de aplicación de la norma tildada de inconstitucional y su interés jurídico para cuestionarla; con mayor razón si la quejosa, en el escrito de demanda, manifestó bajo protesta de decir verdad que la copia simple en la que consta la firma electrónica, es real, sin perjuicio de las responsabilidades que le pudieran resultar, en el supuesto de que llegara a faltar a la verdad, sobre todo si se toma en cuenta que la autoridad fiscal se abstuvo de cuestionar la veracidad de la firma electrónica, no obstante que cuenta con la base de datos que contiene los sellos digitales y las firmas electrónicas.

Del anterior criterio, se resalta lo siguiente: "…*el pago de contribuciones por medios electrónicos constituye un instrumento para facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los gobernados y la pronta y eficaz recaudación, cuya forma de operar implica que los causantes tengan una clave de acceso al sistema tributario cuando realicen pagos por transferencia electrónica, en tanto que la institución financiera proporcionará el sello digital. El concepto del "equivalente funcional" entre los documentos consignados en papel y aquellos consignados por vía electrónica tiene por objeto establecer una serie de características numéricas y criptográficas que identifican a la persona y aprobar la información que aparece en el mensaje, de ahí que la reproducción de la información mediante impresora, fax o cualquier otro medio análogo, que naturalmente se reduce a copia simple, no significa, en modo alguno, que carezcan de valor probatorio para demostrar el acto de aplicación del artículo tercero transitorio de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en el año dos mil tres, reclamado, por el simple hecho de que consten en copia simple, antes bien, son confiables…" "…en virtud de que la seguridad de la operación se encuentra en la clave digital que es original, adminiculada con los*

demás datos como son el registro federal de contribuyentes, la fecha de pago, el número de cuenta, el número de operación, el periodo, el impuesto y la cantidad que se paga y, en todo caso, el fisco federal, de no estar de acuerdo con su contenido, está en posibilidad de impugnarlo, y si no lo hizo, tal omisión se traduce en su aceptación tácita para todos los efectos legales, porque la presentación de una declaración escrita para obtener el sello oficial en original o la impresión en ella de la máquina registradora, después de haber realizado el pago o cumplimiento de obligaciones fiscales por medios electrónicos, es una facultad o derecho del gobernado que puede o no ejercer a su juicio, porque no se trata de un deber, una obligación."…

Con lo que ya se expuso, se puede observar que los medios electrónicos además de ser un instrumento para facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, mantienen una seguridad de la operación encontrándose esta seguridad en la clave digital, de ahí se deduce que la reproducción de la información mediante impresora, fax o cualquier otro medio análogo, que se reduce a copia simple, no significa que carezca de valor probatorio para demostrar el acto de aplicación.

Tesis: VI.2o.A.62 A	*Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*	*Novena Época*	*182803 1 de 1*
Segundo Tribunal Colegiado En Materia Administrativa Del Sexto Circuito	*XVIII, Noviembre de 2003*	*Pag. 997*	*Tesis Aislada (Administrativa)*

[TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; XVIII, Noviembre de 2003; Pág. 997

PAGOS PROVISIONALES MENSUALES. PARA ACREDITARLOS BASTA CON QUE EL CONTRIBUYENTE EXHIBA LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL DISCO MAGNÉTICO (DISQUETE) QUE UTILIZÓ, SELLADO POR LA INSTITUCIÓN BANCARIA AUTORIZADA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 31, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE EN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE).

De la interpretación integral de ese precepto se colige que los contribuyentes obligados a realizar pagos provisionales mensuales, de conformidad con las leyes fiscales, en lugar de utilizar las formas de declaración a que se refiere el párrafo primero del artículo 31 en mención, deberán presentar las declaraciones correspondientes a través de medios electrónicos, en los términos que señale la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con reglas de carácter general, de ahí que deba estimarse que no es obligatorio presentar la declaración relativa a las formas aprobadas por esa secretaría, ya que claramente dispone dicho numeral que "Adicionalmente, los contribuyentes podrán presentar la declaración correspondiente en las formas aprobadas por la citada dependencia, para obtener el sello o impresión de la máquina

registradora de la oficina autorizada que reciba el pago ...", mas no que deban hacerlo de manera ineludible; en tal virtud, si por una parte, para determinar el crédito fiscal impugnado, la autoridad demandada se apoya en forma esencial en el hecho de que el particular no realiza el pago provisional mensual normal del periodo relativo, por no encontrarse registrado tal pago en la base de datos de la administración local respectiva, en tanto que, por otra parte, dicho proceder fue considerado legal por la Sala, bajo el argumento de que la demandante no demostró que hizo ese pago, al resultar insuficiente el acuse de recibo del disquete, con sello de recepción de la institución bancaria, porque tuviera que hacerlo "adicionalmente" en la forma aprobada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es de concluir que la determinación del crédito obedeció a que el gobernado omitió presentar la declaración de pago provisional mensual en el "formato oficial de pago provisional" con el sello de recepción por la institución bancaria autorizada y no sólo a través de un medio electrónico, lo cual no es obligatorio, dado que esto último es suficiente, acorde con el artículo 31, párrafo segundo, del Código Fiscal de la Federación.

Del anterior criterio, se resalta lo siguiente: "…*se colige que los contribuyentes obligados a realizar pagos provisionales mensuales, de conformidad con las leyes fiscales, en lugar de utilizar las formas de declaración a que se refiere el párrafo primero del artículo 31 en mención, deberán presentar las declaraciones correspondientes a través de medios electrónicos…" "…no es obligatorio presentar la declaración relativa a las formas aprobadas por esa secretaría, ya que claramente dispone dicho numeral que "Adicionalmente, los contribuyentes podrán presentar la declaración correspondiente en las formas aprobadas por la citada dependencia, para obtener el sello o impresión de la máquina registradora de la oficina autorizada que reciba el pago ...", mas no que deban hacerlo de manera ineludible;…" "… el gobernado omitió presentar la declaración de pago provisional mensual en el "formato oficial de pago provisional" con el sello de recepción por la institución bancaria autorizada y no sólo a través de un medio electrónico, lo cual no es obligatorio, dado que esto último es suficiente, acorde con el artículo 31, párrafo segundo, del Código Fiscal de la Federación.*

Con lo que ya se expuso, se puede observar que el medio electrónico es suficiente para demostrar el cumplimiento de la obligación fiscal y no solo el formato oficial de la SHCP.

Tesis: IV.3o.C.20 C	*Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*	*Novena Época*	*182830 1 de 1*
Tercer Tribunal Colegiado En Materia Civil Del Cuarto Circuito	*XVIII, Noviembre de 2003*	*Pág. 976*	*Tesis Aislada (Civil)*

[TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; XVIII, Noviembre de 2003; Pág. 976

INCIDENTE DE REPOSICIÓN DE AUTOS. CARECEN DE VALIDEZ LAS RESOLUCIONES O ACTUACIONES JUDICIALES OBTENIDAS DE LOS ARCHIVOS ELECTRÓNICOS O DE LOS SISTEMAS DE CÓMPUTO DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN).

Si bien es cierto que el artículo 37, párrafo tercero, del código adjetivo civil del Estado de Nuevo León faculta a los Jueces para investigar de oficio la existencia de las piezas de autos desaparecidas, valiéndose para ello de todos los medios que no sean contrarios a la moral o al derecho, también lo es que las resoluciones o actuaciones obtenidas de los archivos electrónicos o sistemas de cómputo que se utilizan en los órganos jurisdiccionales no deben ser tomados en cuenta para ese efecto, en virtud de que carecen de validez legal al faltar las firmas correspondientes de los funcionarios judiciales que intervinieron en su confección, tal como lo exige el último párrafo del numeral 51 del invocado código procesal; por tanto, es inconcuso que el instructor, al conceder eficacia a los instrumentos de referencia, viola las garantías de legalidad y seguridad jurídica contenidas en el artículo 16 de la Constitución General de la República.

Del anterior criterio, se resalta lo siguiente: "…*las resoluciones o actuaciones obtenidas de los archivos electrónicos o sistemas de cómputo que se utilizan en los órganos jurisdiccionales no deben ser tomados en cuenta para ese efecto, en virtud de que carecen de validez legal al faltar las firmas correspondientes de los funcionarios judiciales que intervinieron en su confección,…"*

Con lo que ya se expuso, se puede observar que los archivos electrónicos o sistemas de cómputo que se utilizan en órganos jurisdiccionales no son válidos como prueba si falta la firma de los funcionarios judiciales. En este criterio se ve cómo la firma es un elemento de validez para cualquier actuación.

Tesis: I.3o.C.429 C	*Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*	*Novena Época*	*183903 1 de 1*
Tercer Tribunal Colegiado En Materia Civil Del Primer Circuito	*XVIII, Julio de 2003*	*Pág. 1045*	*Tesis Aislada (Civil)*

[TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; XVIII, Julio de 2003; Pág. 1045

CLAVE DIGITAL. SU UTILIZACIÓN PRUEBA EL RECONOCIMIENTO DEL MEDIO DIGITAL PARA CELEBRAR OPERACIONES Y UTILIZAR SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO.

El artículo 52 de la Ley de Instituciones de Crédito dispone que las instituciones de crédito pueden celebrar sus operaciones y prestar servicios con el público por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, sujetando tales actividades a lo que se pacte en el contrato respectivo; conforme a ello el empleo de la clave digital acredita el consentimiento del usuario para celebrar la operación previamente solicitada con la institución de crédito, pues constituye un acceso personalizado a esos medios expresados a través de cifras, signos, códigos, barras u otros atributos numéricos que permiten asegurar la procedencia y veracidad de su autoría, que constituye un medio de identificación del usuario y es la base para determinar la responsabilidad correspondiente a su uso.

Del anterior criterio, se resalta lo siguiente: "…*la clave digital acredita el consentimiento del usuario para celebrar la operación previamente solicitada con la institución de crédito, pues constituye un acceso personalizado a esos medios expresados a través de cifras, signos, códigos, barras u otros atributos numéricos que permiten asegurar la procedencia y veracidad de su autoría,…"*

Con lo que ya se expuso, se puede observar que la clave digital adquiere la fuerza de una firma electrónica, con la cual a través de ella se le da veracidad a los actos jurídicos que se realicen.

Tesis: I.7o.A.183 A	*Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*	*Novena Época*	*186038 1 de 1*
Séptimo Tribunal Colegiado En Materia Administrativa Del Primer Circuito	*XVI, Septiembre de 2002*	*Pág. 1351*	*Tesis Aislada (Administrativa)*

[TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; XVI, Septiembre de 2002; Pág. 1351

DECLARACIONES FISCALES PRESENTADAS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS (VÍA INTERNET). EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN SE ACREDITA CON ACUSE DE RECEPCIÓN QUE CONTENGA LOS DATOS REFERENTES A LA HORA, FECHA, FOLIO Y TIPO DE OPERACIÓN, TRANSMITIDO POR LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE.

Para acreditar el primer acto de aplicación y, por ende, el interés jurídico del gobernado para acudir al juicio de amparo a reclamar una ley, basta con la exhibición de la constancia de recepción de la declaración y pago correspondiente, presentada a través de los medios electrónicos, específicamente en la página del Servicio de Administración Tributaria de la red respectiva que contenga los datos relativos a la hora, fecha, folio y tipo de operación, para considerarse acreditado el acto de aplicación de las normas reclamadas en el juicio de garantías, toda vez que las constancias de referencia son el único documento que se puede obtener para demostrar el cumplimiento de las obligaciones fiscales por esa vía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31, párrafo segundo, del Código Fiscal de la Federación y la regla número 2.10.7. de la miscelánea fiscal vigente para el año dos mil uno.

Del anterior criterio, se resalta lo siguiente: "…*la exhibición de la constancia de recepción de la declaración y pago correspondiente, presentada a través de los medios electrónicos, específicamente en la página del Servicio de Administración Tributaria de la red respectiva que contenga los datos relativos a la hora, fecha, folio y tipo de operación, para considerarse acreditado el acto de aplicación…"*

Con lo que ya se expuso, se puede observar que lo que se expida a través de los medios electrónicos son válidos siempre y cuando tengan datos suficientes para demostrar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, además de que se realiza mediante una página oficial como lo es la del SAT.

Tesis: V.3o.10 C	*Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*	*Novena Época*	*186243 1 de 1*
Tercer Tribunal Colegiado Del Quinto Circuito	*XVI, Agosto de 2002*	*Pag. 1306*	*Tesis Aislada (Civil)*

[TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; XVI, Agosto de 2002; Pág. 1306

INFORMACIÓN PROVENIENTE DE INTERNET. VALOR PROBATORIO.

El artículo 188 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo previsto en el diverso artículo 2o. de este ordenamiento legal, dispone: "Para acreditar hechos o circunstancias en relación con el negocio que se ventila, pueden las partes presentar fotografías, escritos o notas taquigráficas, y, en general, toda clase de elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia."; asimismo, el diverso artículo 210-A, párrafo primero, de la legislación que se comenta, en lo conducente, reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquiera otra tecnología; ahora bien, entre los medios de comunicación electrónicos se encuentra "internet", que constituye un sistema mundial de diseminación y obtención de información en diversos ámbitos y, dependiendo de esto último, puede determinarse el carácter oficial o extraoficial de la noticia que al efecto se recabe, y como constituye un adelanto de la ciencia, procede, en el aspecto normativo, otorgarle valor probatorio idóneo.

Del anterior criterio, se resalta lo siguiente: "…*reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquiera otra tecnología; ahora bien, entre los medios de comunicación electrónicos se encuentra "internet", que constituye un sistema mundial de diseminación y obtención de información en diversos ámbitos y, dependiendo de esto último, puede determinarse el carácter oficial o extraoficial de la noticia que al efecto se recabe, y como constituye un adelanto de la ciencia, procede, en el aspecto normativo, otorgarle valor probatorio idóneo."*

Con lo que ya se expuso, se puede observar que se reconoce como medio de prueba la información que se genere a través de medios electrónicos, entre ellos el internet en el aspecto normativo se le otorga valor probatorio.

Tesis: P. XVII/2001	*Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*	*Novena Época*	*188651 1 de 1*
PLENO	*XIV, Octubre de 2001*	*Pag. 20*	*Tesis Aislada (Constitucional,Administrativa)*

[TA]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; XIV, Octubre de 2001; Pág. 20

CONSOLIDACIÓN FISCAL. LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL PAGO PROVISIONAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN RELACIÓN CON EL RESULTADO DE LOS ESTADOS CONSOLIDADOS DE LAS SOCIEDADES CONTROLADORAS, OBTENIDA DE LA RED DE INTERNET, ACREDITA EL ACTO DE APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 57-E, 57-K, 57-N Y 57-Ñ DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTES A PARTIR DEL PRIMERO DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.

De una interpretación armónica y sistemática de lo dispuesto en el artículo 31, párrafo segundo, del Código Fiscal de la Federación y en la regla número 2.10.13. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 1998, se desprende que las sociedades controladoras que consolidan sus resultados para efectos fiscales, tienen la obligación legal de presentar sus pagos provisionales mensuales y la declaración anual del ejercicio fiscal de que se trate, a través de medios electrónicos. Ahora bien, si una sociedad controladora, en cumplimiento de las obligaciones fiscales antes precisadas, presenta sus declaraciones y pago correspondiente a través de esos medios, la prueba consistente en la constancia de recepción de la declaración provisional, que obtuvo de la red de internet, sí puede considerarse como idónea para acreditar el acto de aplicación de las normas reclamadas en el juicio de garantías, toda vez que la constancia de referencia es el único documento que puede obtener la sociedad que realiza su pago de esa forma. Por consiguiente, si tal documento no es objetado oportunamente por las autoridades hacendarias, no es posible, por razones de seguridad jurídica, poner en duda su autenticidad y contenido, sin que obste a lo anterior el hecho de que en el mencionado artículo 31, párrafo segundo, se establezca que: "... Adicionalmente, los contribuyentes podrán presentar la declaración correspondiente en las formas aprobadas por la citada dependencia, para obtener el sello o impresión de la máquina registradora de la oficina autorizada que reciba el pago ...", pues del propio numeral se advierte que no es obligatorio para los contribuyentes presentar la declaración correspondiente en las formas aprobadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Del anterior criterio, se resalta lo siguiente: "…*las sociedades controladoras que consolidan sus resultados para efectos fiscales, tienen la obligación legal de presentar sus pagos provisionales mensuales y la declaración anual del ejercicio fiscal de que se trate, a través de medios electrónicos. Ahora bien, si una sociedad controladora, en cumplimiento de las obligaciones fiscales antes precisadas, presenta sus declaraciones y pago correspondiente a través de esos medios, la prueba consistente en la constancia de recepción de la declaración provisional, que obtuvo de la red de internet, sí puede considerarse como idónea para acreditar el acto de aplicación…"*

Con lo que ya se expuso, se puede observar que se le otorga valor probatorio a las constancias expedidas por medios electrónicos a través de internet, pues se acredita el acto de aplicación.

Así pues, el autor Jimenez Illescas, precisa que se debe partir de la base de que el uso de medios electrónicos se ha reconocido como una forma de crear convicción en el juzgador (darle valor probatorio) respecto de hechos sometidos a su juicio.

Al respecto el artículo 210 A del Código Federal de Procedimientos Civiles, que fue adicionado a dicho ordenamiento legal mediante decreto publicado en el DOF el 29 de mayo de 2000, dispone lo siguiente:

> ***ARTICULO 210-A.-*** *Se reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología.*
>
> *Para valorar la fuerza probatoria de la información a que se refiere el párrafo anterior, se estimará primordialmente la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada y, en su caso, si es posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa y ser accesible para su ulterior consulta.*
>
> *Cuando la ley requiera que un documento sea conservado y presentado en su forma original, ese requisito quedará satisfecho si se acredita que la información generada, comunicada, recibida o archivada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, se ha mantenido íntegra e inalterada a partir del momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva y ésta pueda ser accesible para su ulterior consulta.*

De lo anterior, se desprende que nuestro sistema jurídico reconoce como medio de prueba la información contenida en medios electrónicos, también lo es que se deja libertad con respecto a la valoración de la misma, por lo que será el juzgador o magistrado quien deberá valorarla, analizando dos puntos:

a) La fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada, y
b) Si es posible, atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa y su accesibilidad para ulterior consulta.

Uno de los principales problemas para valorar la información contenida en medios electrónicos es la posibilidad de atribuir el contenido de la información relativa a las

personas obligadas, pues en el caso de la información generada por internet en que la mayoría de las herramientas implementadas son de dominio común (dada su naturaleza de un sistema abierto), en principio no existe la certeza de la titularidad de la información publicada o el sujeto obligado por ella, salvo que el sistema restrinja la información dirigida a ciertos usuarios, en este caso se tendría que analizar otros elementos como los que se vieron en los criterios antes citados para darle certeza y veracidad a los actos jurídicos.

En consecuencia, la fiabilidad de la información contenida en internet dependerá primordialmente de si ésta es susceptible de atribuirse a una persona determinada. De manera, que por ejemplo, tratándose de la información proveniente de un sitio de carácter oficial, creada y sostenida por instituciones del Estado o bien por un órgano de carácter internacional, esto permitirá considerar que la información así publicada corresponde precisamente al ente público que proporciona esa información en línea.[70]

De conformidad con los criterios anteriores podemos inferir que la Firma Electrónica Avanzada y la clave que se proporciona a los usuarios del Sistema de Justicia en Línea son importantes, pues con éstas se les da una presunción de buena fe a cualquier documento electrónico proporcionado por las partes, la certeza de la titularidad y el valor respectivo en el caso de que provengan de instituciones oficiales dichos documentos electrónicos.

70 Ibídem, p. 32 - 34

Capítulo VI
Juicio Fiscal en Línea y Juicio Fiscal en la Vía Sumaria (España – México)

6.1. Indicadores del Expediente Electrónico y Procedimiento Contencioso Administrativo Abreviado en España; 6.2. Indicadores del Juicio Fiscal en Línea y del Juicio Fiscal por la Vía Sumaria

En algunos países la posibilidad de acceder a las constancias de los expedientes y presentar escritos a través de Internet existe desde hace varios años.[71] Las Cortes del Distrito Sur de Nueva York han sido las pioneras del sistema de manejo de los juicios por medios totalmente electrónicos." [72] En otros países de América Latina se ha estudiado la posibilidad de implementar en sus sistemas juicios electrónicos.

En septiembre de 2012, el gobierno de Colombia elogió el sistema de juicio en línea que se aplica en México y confió en implementar el modelo lo antes posible en ese país sudamericano para agilizar la labor de los tribunales.

De acuerdo con el TFJFA de México, hay interés de varios países por tomar el modelo de Juicio en Línea por las ventajas para aplicar justicia rápida.[73]

En España se encuentra lo que se llama el "Expediente Electrónico" y el "Procedimiento Contencioso Administrativo Abreviado" y se considera que es lo

71 *JALIFE, Mauricio "Juicio en Línea"* http://www.universopyme.com.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=3972&Itemid=383 consultado 25 septiembre 2011

72 *GARCIA AGUILAR, Nayeli, "Los medios de impugnación de la autoridad y en particular contra la sentencia dictada en juicio en línea", TFJFA, Diciembre 2009, "Tesis seleccionada en el curso de especialización de Justicia Fiscal y Administrativa" Subdirección de Análisis e Investigación http://www.tfjfa.gob.mx/investigaciones/index.asp*

73 *Comunicado del TFJFA, 21 de septiembre de 2012, http://www.tff.gob.mx/*

más allegado a las dos modalidades que se vienen comentando a lo largo de este trabajo: el Juicio Fiscal en Línea y el Juicio Fiscal por la Vía Sumaria, sin embargo difieren en varios aspectos pues la justicia fiscal en España y sus instituciones de la administración pública son un poco diferentes a las nuestras, además que el expediente electrónico en España pretende alcanzar otras áreas del derecho, no sólo el fiscal.

6.1. INDICADORES DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ABREVIADO EN ESPAÑA.

a) Expediente Electrónico en España.

España, desde hace tiempo traía entre manos un proyecto similar al Juicio fiscal en Línea en México, pues según las fuentes de la Audiencia Nacional Española, se pretendió igualmente ser pionero en la implantación de la digitalización de los expedientes, pero lo anterior en el orden penal con un programa que duraría un año, al parecer cuenta con una inversión de cuatro millones de euros y permite la desaparición del soporte papel en los Juzgados. Lo anunció el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, en la Audiencia Nacional[74], donde presentó con un vídeo el "expediente digital" junto al presidente de ese órgano judicial, para que este nuevo proyecto fuese "el inicio de la Audiencia Nacional del siglo XXI". El programa pretendió romper "el secular vínculo entre la Justicia y la plasmación de sus actuaciones en cientos de miles de folios" con la digitalización de los documentos, la creación de un registro de entrada que procede al reparto correspondiente de los mismos y la implantación de un gestor documental que permite realizar búsquedas de información y documentos ahorrando tiempo y espacio.

Así pues, con el fin de romper la visión tradicional de una Administración de Justicia en España, congestionada por los papeles y los legajos y colaborar en agilizar los trámites, dentro del Plan Estratégico de Modernización del Sistema de Justicia 2009-2012, se encontró el proyecto para la digitalización de la Audiencia Nacional como camino hacia el expediente documental judicial. Simplificando mucho, esto significa la gestión integral del expediente judicial en formato digital, es decir, desde su entrada en el registro hasta el cierre de cada uno de los expedientes.[75] Fue aprobado el proyecto por el Gobierno el 18 de septiembre de 2009.

---

74 Noticias sobre el Gobierno Digital en el mundo, página web: http://www.actuar.org.ar/gobiernodigital/texto.asp?are=15&idf=2579, visto agosto 2011

75 Ministerio de Justicia, Oficina Digital, página web: http://oficinajudicial.justicia.es/portaloj/view_content_list_numeros_atrasados?item=digitalizacion_de_la_audiencia_nacional&path=/Espacio%20ra%C3%ADz/portal/contenido/Comunicacion/Newsletters/Numeros%20Atrasados/Newsletter%209/enlaces, visto octubre 2011

Actualmente España implementó el Expediente Judicial Electrónico que se implantó inicialmente en la Audiencia Nacional, y progresivamente su objetivo es introducirlo en otros juzgados y tribunales del país, y refieren que permitirá la superación de una secular tradición jurídica basada en el papel y la adecuación de la Justicia española a los nuevos tiempos.[76]

Algo interesante es que España tiene visualizado también implementarlo en lo administrativo, pues el Ministerio de Justicia sigue avanzando hacia la Administración de Justicia con "papel cero" con la implantación del expediente judicial electrónico en los juzgados centrales de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, proceso que se inició el 14 de junio de 2011 en la Sala de lo Social y que próximamente se extenderá al resto de órganos de la Audiencia Nacional.[77]

Así pues, mediante la promulgación de una ley sobre "El acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos" publicada en 2007,[78] España ya viene regulando el aspecto tecnológico de la Administración Pública, donde se regulan diferentes trámites, relacionados con la Administración del país.

A continuación, véase el anteproyecto de la Ley relativa a lo que se está tratando en este tema en España:

Anteproyecto de Ley Reguladora del Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Administración de Justicia:

Capítulo Segundo. Del Expediente Judicial Electrónico.

Artículo 25. *El expediente judicial electrónico es el conjunto de documentos electrónicos correspondientes a un procedimiento judicial, cualquiera que sea el tipo de información que contenga.*

---

76 Ministerio de Justicia, Expediente Judicial Electrónico, http://oficinajudicial.justicia.es/portaloj/view_content_expediente_judicial_electronico?item=5_video_eje_an&path=/Espacio raíz/portal/contenido/Estatico/Expediente judicial electronico/enlaces visto octubre 2011

77 Oficina Judicial Española, http://oficinajudicial.justicia.es/portaloj/view_content_expediente_judicial_electronico?item=entrada_sala_contencioso&path=/Espacio raíz/portal/contenido/Estatico/Expediente judicial electronico/enlaces visto octubre 2011.

78 LEY ESPAÑA 11/2007, DE 22 DE JUNIO, DE ACCESO ELECTRÓNICO DE LOS CIUDADANOS A LOS SERVICIOS PÚBLICOS (BOE números 150 y 158 de 23 de junio y 3 de julio de 2007).

Extracto de Exposición de Motivos:

La administración de Justicia presenta características que la diferencian de las restantes administraciones públicas. En primer lugar, por la propia naturaleza de la función que la administración judicial tiene atribuida, ya que se trata de un poder del Estado distinto del poder ejecutivo, en que se encuadran las administraciones públicas que, además, debe satisfacer un derecho fundamental que a su vez es clave para sostener el Estado de Derecho. En segundo lugar, la relación de los ciudadanos con los órganos judiciales se establece casi siempre a través de profesionales, cosa que no suele suceder en el caso de las administraciones públicas.

Expediente Judicial

Navarra.

Expediente judicial se compone de dos tipos de documentos:

- Documentos creados por los Órganos Judiciales (formato digital)
- Documentos que provienen del exterior de la Administración de Justicia (ciudadanos, profesionales, otras administraciones, policías, etc.) (formato papel pero, la mayoría, creados en formato digital)

Enfoque del Proyecto de Expediente Judicial en Navarra

Permite que los profesionales de la Justicia (abogados, procuradores y graduados sociales) puedan interactuar telemáticamente con los Órganos Judiciales a través de Internet y a la Administración de Justicia avanzar hacia el expediente judicial.

Seguridad: acceso de los profesionales a los asuntos judiciales mediante la utilización de un certificado digital que garantiza su identidad.

Funcionalidades:

- Consulta de expedientes
- Visualización de documentos
- Agenda de señalamientos
- Presentación telemática de escritos

- Notificaciones telemáticas
- Alta de expedientes
- Configuración de alertas

Presentación telemática de escritos de trámite.

Los profesionales pueden acceder a sus expedientes y realizar el envío de escritos de trámite así como realizar el correspondiente traslado de copias de forma automática.

Al seleccionar el expediente correspondiente, disponen de un botón denominado "Envío de escritos" en el que deben seleccionar el tipo de escrito, darle un título orientativo del contenido del mismo y adjuntar el documento principal así como los anexos que consideren oportunos de igual manera que se adjunta un documento en un correo electrónico.

Se firma electrónicamente, tanto el documento principal como el envío para garantizar la confidencialidad, integridad, autentificación y no repudio de la información enviada.

El escrito enviado por el abogado genera un aviso en la bandeja de entrada del procurador que lo puede devolver al abogado para su revisión o enviarlo al Órgano Judicial Correspondiente también firmado electrónicamente.

A la vez que se realiza el envío de los documentos al órgano judicial, se realiza automáticamente el traslado de copias a las partes.

Recepción de los escritos por el Órgano Judicial

- El órgano judicial dispone de una bandeja de entrada con los escritos pendientes de aceptar.
- Al seleccionar un escrito se muestra el detalle del escrito recibido con los datos del profesional remitente, el número de procedimiento, fecha del envío, título, descripción del escrito y el archivo.
- El órgano judicial tan sólo tiene que aceptar el escrito que queda automáticamente incorporado al asunto judicial correspondiente.

- Este documento ya se encuentra en formato digital y será visible por todos los intervinientes en el expediente correspondiente.

Notificaciones telemáticas

- Posibilita las notificaciones telemáticas de los Órganos Judiciales a los profesionales.

- El órgano judicial selecciona el documento a notificar así como los intervinientes destinatarios del mismo y da la conformidad del envío al salón virtual de procuradores.

- El Salón virtual de procuradores accede mediante certificado digital a la bandeja de entrada en la que aparece la relación de notificaciones recibidas. Firma digitalmente la recepción y éstas se envían automáticamente a los procuradores.

- Los procuradores las reciben en su bandeja de entrada y cuando las abren pueden acceder al documento notificado, a la vez que se produce el envío automático al abogado.

- A partir de este momento el documento notificado está visible en el expediente judicial correspondiente por todos los intervinientes.

Configuración de alertas

Posibilita la creación de un Configurador de envío de alertas ante determinados cambios de estado en los expedientes gestionados por un profesional.[79]

> ***Art. 6. Prestación de servicios y disposición de medios e instrumentos electrónicos:*** *Las Administraciones competentes en materia de Justicia asegurarán el acceso de los profesionales a los servicios electrónicos proporcionados en su ámbito a través de puntos de acceso electrónico, consistentes en sedes electrónicas creadas y gestionadas por aquéllas y disponibles para los profesionales a través de redes de comunicación, para sus relaciones con la Administración de Justicia, en los términos previstos en la presente Ley.*
>
> ***Art. 5. Derechos y deberes de los profesionales del ámbito de la Justicia.*** *3. Los profesionales de la justicia, en los términos previstos en la presente*

79 *Dirección General de Justicia Dirección General de Modernización y Administración Electrónica, www.justicia.navarro.es, visto octubre 2012*

Ley, tienen el deber de utilizar los medios electrónicos, las aplicaciones o sistemas establecidos por las Administraciones competentes en materia de Justicia, respetando en todo caso las garantías y requisitos previstos en el procedimiento que se trate.

Artículo 32. Comunicaciones electrónicas: *Los profesionales de la justicia deberán realizar sus comunicaciones por medios electrónicos cuando estén disponibles*[80]

¿Cual ha sido el resultado de tal innovación en España? Hasta a finales del año 2011, se tiene conocimiento de que los trabajadores de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional se concentraron en noviembre de 2011 en instalaciones del tribunal en Madrid para denunciar problemas en la aplicación del conocido como 'papel cero' y la digitalización de causas y expedientes. En una nota de prensa[81], manifiesta que la implantación del expediente judicial electrónico está provocando "problemas" a los que no se está dando las soluciones adecuadas. Se considera que puede ser en cuanto al aspecto tecnológico más que jurídico.

Respecto a este mismo punto, estaba previsto que la Nueva Oficina Judicial (NOJ) de León (en España) utilizara el expediente digital y su puesta en marcha estaba programada para el 01 de enero de 2012. Sin embargo, la implantación tuvo que esperar ya que la digitalización generó algunos problemas en la Audiencia Nacional.[82] Según los funcionarios, el expediente digital es una herramienta "fundamental" para que la Oficina Judicial alcance niveles óptimos de funcionamiento, lo cierto es que este expediente no está resultando operativo para los profesionales de la Justicia, de acuerdo con las opiniones vertidas anteriormente.

b) El Procedimiento Contencioso Abreviado en España.

En el derecho comparado se encuentra como una institución cercana a la Vía Fiscal Sumaria de 2010, el Procedimiento Contencioso Administrativo Abreviado en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de España. Dicho procedimiento abreviado, previsto en el artículo 78 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, actualmente procede ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo y, en su caso, los Juzgados Centrales

80 Anteproyecto Ley Reguladora Del Uso De Las T.I.C. En La Administración De Justicia

81 COO DE JUSTICIA, Nota de prensa http://ccoojusticiasturias.blogspot.com/2011/11/audiencia-nacionalexpediente.html

82 Nota Periodística LA CRONICA DE LEÓN, http://www.lacronicadeleon.es/2012/01/16/apoyo/la-implantacion-del-expediente-digital-espera-a-que-se-resuelvan-los-problemas-en-la-audiencia-nacional-137845.htm

de lo Contencioso- Administrativo, respecto de los asuntos de su competencia que se susciten sobre a) cuestiones de personal al servicio de las Administraciones Públicas, b) sobre extranjería y sobre inadmisión de peticiones de asilo político, c) asuntos de disciplina deportiva en materia de dopaje, así como d) todas aquellas cuya cuantía no supere los 30,000 euros. Dicho proceso abreviado se caracteriza por su simplificación y agilidad.[83]

A continuación se presenta un extracto de la Ley:

CAPÍTULO II.
PROCEDIMIENTO ABREVIADO.

Artículo 78.

1. Los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo y, en su caso, los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de este Orden Jurisdiccional conocen, por el procedimiento abreviado, de los asuntos de su competencia que se susciten sobre cuestiones de personal al servicio de las Administraciones Públicas, sobre extranjería y sobre inadmisión de peticiones de asilo político, asuntos de disciplina deportiva en materia de dopaje, así como todas aquellas cuya cuantía no supere los 30.000 euros.

2. El recurso se iniciará por demanda, a la que se acompañará el documento o documentos en que el actor funde su derecho y aquellos previstos en el artículo 45.2.

3. Presentada la demanda, el Secretario judicial, apreciada la jurisdicción y competencia objetiva del Tribunal, admitirá la demanda. En otro caso, dará cuenta a éste para que resuelva lo que proceda.

Admitida la demanda, el Secretario judicial acordará su traslado al demandado, citando a las partes para la celebración de vista, con indicación de día y hora, y requerirá a la Administración demandada que remita el expediente administrativo con al menos quince días de antelación del término señalado para la vista. En el señalamiento de las vistas atenderá a los criterios establecidos en el artículo 182 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

83 *PÉREZ LÓPEZ, Miguel "La Reforma Del Derecho Procesal Administrativo Federal De 2010" http://www.tfjfa.gob.mx/investigaciones/pdf/lareformadelderechoprocesal.pdf, visto en enero 2013.*

No obstante, si el actor pide por otro sí en su demanda que el recurso se falle sin necesidad de recibimiento a prueba ni tampoco de vista, el Secretario judicial dará traslado de la misma a las partes demandadas para que la contesten en el plazo de veinte días, con el apercibimiento a que se refiere el apartado primero del artículo 54. Las partes demandadas podrán, dentro de los diez primeros días del plazo para contestar a la demanda, solicitar la celebración de la vista. En dicho caso el Secretario judicial citará a las partes al acto conforme a lo previsto en el párrafo anterior. En caso contrario, el Secretario judicial procederá de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 57, declarando concluso el pleito sin más trámite una vez contestada la demanda, salvo que el Juez haga uso de la facultad que le atribuye el artículo 61.

4. Recibido el expediente administrativo, el Secretario judicial lo remitirá al actor y a los interesados que se hubieren personado para que puedan hacer alegaciones en el acto de la vista.

5. Comparecidas las partes, o alguna de ellas, el Juez declarará abierta la vista.

Si las partes no comparecieren o lo hiciere sólo el demandado, el Juez o Tribunal tendrá al actor por desistido del recurso y le condenará en costas, y si compareciere sólo el actor, acordará que prosiga la vista en ausencia del demandado.

6. La vista comenzará con exposición por el demandante de los fundamentos de lo que pida o ratificación de los expuestos en la demanda.

7. Acto seguido, el demandado podrá formular las alegaciones que a su derecho convengan, comenzando, en su caso, por las cuestiones relativas a la jurisdicción, a la competencia objetiva y territorial y a cualquier otro hecho o circunstancia que pueda obstar a la válida prosecución y término del proceso mediante sentencia sobre el fondo.

8. Oído el demandante sobre estas cuestiones, el Juez resolverá lo que proceda, y si mandase proseguir el juicio, el demandado podrá pedir que conste en acta su disconformidad. Lo mismo podrá hacer el demandante si el Juez, al resolver sobre alguna de dichas cuestiones, declinará el conocimiento del asunto en favor de otro Juzgado o Tribunal o entendiese que debe declarar la inadmisibilidad del recurso.

9. Si en sus alegaciones el demandado hubiese impugnado la adecuación del procedimiento por razón de la cuantía, el Juez, antes de practicarse la prueba o, en su caso, las conclusiones, exhortará a las partes a ponerse de acuerdo sobre tal extremo. Si no se alcanzare el acuerdo, decidirá el Juez, que dará al proceso el curso procedimental que corresponda según la cuantía que él determine. Frente a la decisión del Juez no se dará recurso alguno.

10. Si no se suscitasen las cuestiones procesales a que se refieren los apartados anteriores o si, habiéndose suscitado, se resolviese por el Juez la continuación del juicio, se dará la palabra a las partes para fijar con claridad los hechos en que fundamenten sus pretensiones. Si no hubiere conformidad sobre ellos, se propondrán las pruebas y, una vez admitidas las que no sean impertinentes o inútiles, se practicarán seguidamente.

11. Cuando de las alegaciones de las partes se desprenda la conformidad de todos los demandados con las pretensiones del actor, el carácter meramente jurídico de la controversia, la ausencia de proposición de la prueba o la inadmisibilidad de toda la prueba propuesta, y las partes no deseasen formular conclusiones, el Juez apreciará tal circunstancia en el acto y, si ninguna parte se opusiere, dictará sentencia sin más dilación.

Formulada oposición, el Juez resolverá estimándola, en cuyo caso proseguirá la vista conforme a lo reglado en los apartados siguientes, o desestimándola en la misma sentencia que dicte conforme a lo previsto en el párrafo anterior, antes de resolver sobre el fondo, como especial pronunciamiento.

12. Los medios de prueba se practicarán en los juicios abreviados, en cuanto no sea incompatible con sus trámites, del modo previsto para el juicio ordinario.

13. Las preguntas para la prueba de interrogatorio de parte se propondrán verbalmente, sin admisión de pliegos.

14. No se admitirán escritos de preguntas y repreguntas para la prueba testifical. Cuando el número de testigos fuese excesivo y, a criterio del órgano judicial, sus manifestaciones pudieran constituir inútil reiteración del testimonio sobre hechos suficientemente esclarecidos, aquél podrá limitarlos discrecionalmente.

15. Los testigos no podrán ser tachados y, únicamente en conclusiones, las partes podrán hacer las observaciones que sean oportunas respecto de sus circunstancias personales y de la veracidad de sus manifestaciones.

16. En la práctica de la prueba pericial no serán de aplicación las reglas generales sobre insaculación de peritos.

17. Contra las resoluciones del Juez sobre denegación de pruebas o sobre admisión de las que se denunciarán como obtenidas con violación de derechos fundamentales, las partes podrán interponer en el acto recurso de súplica, que se sustanciará y resolverá seguidamente.

18. Si el Juez estimase que alguna prueba relevante no puede practicarse en la vista, sin mala fe por parte de quien tuviera la carga de aportarla, la suspenderá, señalando el Secretario judicial competente, en el acto y sin necesidad de nueva notificación, el lugar, día y hora en que deba reanudarse.

19. Tras la práctica de la prueba, si la hubiere, y, en su caso, de las conclusiones, oídos los Letrados, las personas que sean parte en los asuntos podrán, con la venia del Juez, exponer de palabra lo que crean oportuno para su defensa a la conclusión de la vista, antes de darla por terminada.

20. El Juez dictará sentencia en el plazo de diez días desde la celebración de la vista.

21. La vista se documentará en la forma establecida en los apartados 3 y 4 del artículo 63.

22. Si los mecanismos de garantía previstos en el apartado anterior no se pudiesen utilizar deberán consignarse en el acta los siguientes extremos: número y clase de procedimiento; lugar y fecha de celebración; tiempo de duración, asistentes al acto; alegaciones de las partes; resoluciones que adopte el Juez o Tribunal; así como las circunstancias e incidencias que no pudieran constar en aquel soporte. A esta acta se incorporarán los soportes de la grabación de las sesiones.

Cuando no se pudiesen utilizar los medios de registro por cualquier causa, el Secretario judicial extenderá acta de cada sesión, en la que se hará constar: a) Lugar, fecha, Juez que preside el acto, partes comparecientes, representantes, en su caso, y defensores que las asisten. b) Breve resumen de las alegaciones de las partes, medios de prueba propuestos por ellas, declaración expresa de su pertinencia o impertinencia, razones de la denegación y protesta, en su caso. c) En cuanto a las pruebas admitidas y practicadas: 1. Resumen suficiente de las de interrogatorio de parte y testifical. 2. Relación circunstanciada de los

documentos presentados, o datos suficientes que permitan identificarlos, en el caso de que su excesivo número haga desaconsejable la citada relación. 3. Relación de las incidencias planteadas en el juicio respecto a la prueba documental. 1. Resumen suficiente de los informes periciales, así como también de la resolución del Juez en torno a las propuestas de recusación de los peritos. 2. Resumen de las declaraciones realizadas en la vista. a) Conclusiones y peticiones concretas formuladas por las partes; en caso de que fueran de condena a cantidad, ésta deberá recogerse en el acta. b) Declaración hecha por el Juez de conclusión de los autos, mandando traerlos a la vista para sentencia.

Las actas previstas en este apartado se extenderán por procedimientos informáticos, sin que puedan ser manuscritas más que en las ocasiones en que la sala en que se esté celebrando la actuación careciera de medios informáticos. En estos casos, al terminar la sesión el Secretario judicial leerá el acta, haciendo en ella las rectificaciones que las partes reclamen, si las estima procedentes. Esta acta se firmará por el Secretario judicial tras el Juez o Presidente, las partes, sus representantes o defensores y los peritos, en su caso.

23. El procedimiento abreviado, en lo no dispuesto en este Capítulo, se regirá por las normas generales de la presente Ley.

Fuente: Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa

Se considera que el procedimiento abreviado en España, a pesar de ser una instancia de lo administrativo, no es completamente similar a la vía fiscal sumaria en México, uno de los asuntos de la competencia en el procedimiento abreviado español en el ámbito administrativo se puede resaltar las cuestiones de personal al servicio de las Administraciones Públicas, cuya cuantía no supere los 30.000 euros. En México como se comentó en capítulos anteriores, el TFJFA atiende asuntos de naturaleza fiscal y administrativa. Otra diferencia del procedimiento abreviado en España es que los plazos y el proceso se relacionan mucho con su Ley del Enjuiciamiento Civil, en donde se puede observar que los plazos, aunque si bien son cortos difieren un poco de los plazos fiscales sumarios en México.

6.2. INDICADORES RECIENTES DEL JUICIO EN LÍNEA Y DEL JUICIO POR LA VÍA SUMARIA.

En capítulos anteriores se observó lo esencial del Juicio Fiscal en Línea y el Juicio Fiscal por la Vía Sumaria, comentando sus particularidades y recomendaciones. A continuación se presentan indicadores de estas modalidades para que con base en éstos se conozcan los avances que se han tenido respecto a los mismos en México.

Cabe mencionar que para la realización de esta investigación en el aspecto documental se consultaron obras jurídicas de Doctrinistas y de expertos en la materia con el propósito de profundizar más en el tema. Así mismo, fueron de gran utilidad las consultas vía internet y revistas fiscales, notas periodísticas, entrevistas a Magistrados y Secretarios de Acuerdos del TFJFA de Occidente, funcionarios de la PRODECON y funcionarios fiscales de algunas entidades federativas, entre otros.

Durante la investigación se decidió establecer un contacto directo con los funcionarios fiscales de algunas entidades federativas como Chiapas, Tamaulipas, Oaxaca y Jalisco, por lo que sus puntos de vista de gran interés fueron vertidos a lo largo de la presente investigación. No se realizaron encuestas.

Los indicadores hasta el momento, son los siguientes:

Indicadores TFJFA.

JUICIO EN LÍNEA
Hasta enero de 2012, se tuvo que la sala especializada del juicio en línea ubicada en la Ciudad de México recibió 332 demandas con un costo de 718 millones de pesos en total; hasta esa fecha se emitieron 13 sentencias definitivas, 45 interlocutorias y 740 resoluciones. Así mismo, el TFJFA en estas mismas fechas anunció que se abrió la 2da. sala regional en todo el país que atienda asuntos de esta naturaleza con sede en Tuxtla Gutierrez, que es la llamada Sala Regional Chiapas – Tabasco, primera provincia (en términos del tribunal) que atiende demandas por medios electrónicos ya que las demás salas se las remitían a la Sala especializada ubicada en la Ciudad de México.

Hasta el 1º. de julio del 2012 existe un volumen de 772 demandas presentadas en línea (tanto en la vía sumaria como ordinaria) que equivale a 14 millones de pesos y con un total de 215 sentencias emitidas.[1] Según el Tribunal, todo este sistema se trata de un bien público, de un proyecto del Estado Mexicano que lo propuso el Poder Ejecutivo Federal, lo aprobó en 32 días el Congreso de la Unión en forma unánime, y que el Poder Judicial de la Federación financia en parte, a través de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia.[2] Hasta el momento la sala especializada de Chiapas no está en funcionamiento y se considera incrementar las salas especializadas en regiones que manejen grandes volúmenes de demandas. Actualmente solo están trabajando la sala especializada del D.F. y de propiedad intelectual de manera virtual.

Hasta septiembre de 2012 se han presentado mil 090 demandas en línea y se han notificado cuatro mil 482 resoluciones, sentencias y oficios. Se detalló que de esos juicios, el 60 por ciento han estado ligados a actos de naturaleza tributaria y el otro 40 por ciento con aspectos de tipo administrativo.

Hasta el 29 de noviembre de 2012, respecto al juicio en línea, se ingresaron 1261 demandas, de las cuales, la autoridad más demandada es el SAT con 379, seguida del IMSS con 208 y la PROFECO con 147 demandas. ("Anexo" al final de la investigación).

Fuente: TFJFA

JUICIO EN LA VÍA SUMARIA

A enero de 2013, se tienen:

Ingreso

Total por Sala: 279 demandas nuevas ingresadas
- 170 Vía Sumaria
- 109 Vía Ordinaria

Bajas

Total por Sala: 82 sentencias

- 43 Vía Sumaria
- 39 Vía Ordinaria

Fuente: TFJFA de Occidente

Indicadores PRODECON

1. ¿Cuántos juicios en línea ha promovido la PRODECON desde el inicio de sus funciones?

Respuesta: Ninguno. Al día de hoy PRODECON sólo ha patrocinado juicios tramitados por la vía tradicional.

2. ¿Cuántos juicios en la vía sumaria ha promovido la PRODECON desde el inicio de sus funciones?

Respuesta: Desde el 1° de septiembre de 2011 al 31 de diciembre de 2012, PRODECON ha promovido 419 juicios por la vía sumaria.

3. De los juicios en línea ¿Cuántos ha promovido la PRODECON por la vía ordinaria y cuántos por la vía sumaria?

Respuesta: Ninguno. Al día de hoy PRODECON sólo ha patrocinado juicios tramitados por la vía tradicional.

4. ¿Contra qué autoridad fiscal de esos juicios promovidos se presentan más demandas?

Respuesta: Contra la Administración Local del Oriente del Distrito del Servicio de Administración Tributaria. Desde el 1° de septiembre de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2012, se han presentado 231 demandas interpuestas en su contra.

5. ¿Cuántos asuntos se han ido al Amparo Directo y cuántos a Revisión?

Respuesta: Se han promovido 120 juicios de amparo directo y han sido notificados a PRODECON 34 recursos de revisión.

6. De los juicios que se han ido al Amparo y a la Revisión ¿Cuántos han sido en línea y cuantos sumarios?

Respuesta: De los 120 juicios de amparo directo 79 tienen su antecedente en un juicio tramitado por la vía sumaria, mientras que en el caso de las 34 revisiones, sólo 20 se refieren a juicios sumarios. Ningún amparo o revisión proviene de algún juicio en línea patrocinado por PRODECON.

Fuente: PRODECON

Por resultar de interés cabe mencionar que en la Secretaría de Finanzas del Estado de Jalisco, en lo que se refiere al Juicio en Línea, se tiene aproximadamente un juicio interpuesto desde el inicio de esta modalidad.[84]

Con los anteriores indicadores se puede observar que:

- Referente al juicio fiscal en línea, que en el TFJFA sí se ha presentado un porcentaje considerable de demandas en línea provenientes de diversas autoridades; sin embargo, en lo que respecta a la PRODECON y a una de las Secretarías de Finanzas, en este caso la de Jalisco, el porcentaje de juicios en línea es del 0 al 1%.

- Referente al juicio fiscal por la vía sumaria, se observa que se ha obtenido buena respuesta tanto en la PRODECON como en el propio TFJFA, pues además de tomarse en cuenta la cuantía para esta vía, el objetivo es la agilización del procedimiento.

Así pues, la finalidad del desarrollo de este trabajo de investigación fue analizar las modalidades de justicia fiscal en línea y en la vía sumaria con sus implicaciones jurídicas y tecnológicas, y que las mismas producen a las autoridades fiscales.

84 Comentario emitido por la Lic. Alejandra Herrera, funcionaria fiscal de la Secretaría de Finanzas del Estado de Jalisco. 2013

Conclusiones

PRIMERA. Los medios jurídicos de impugnación en material fiscal federal, derivan de las disposiciones contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Juicio de Amparo), el Código Fiscal de la Federación (Recurso de Revocación) y la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (Juicio de Nulidad o Procedimiento Contencioso Administrativo), y pueden interponerse legalmente por los particulares – contribuyentes, en contra de actos o resoluciones que sean emitidos por las autoridades fiscales federales.

SEGUNDA. Se dedujo que la naturaleza jurídica del JCA es eminentemente administrativa, es decir, el juicio contencioso administrativo, tal como su nombre lo indica, se refiere a una contienda para solucionar los actos de autoridad emitidos por las autoridades administrativas, pues si bien es cierto que el Tribunal veía inicialmente controversias de índole fiscal, también es cierto que con el paso del tiempo el juicio sobresalió por atender cuestiones administrativas. Y si se toma en cuenta que lo fiscal es parte de lo administrativo, se puede concluir que la naturaleza de dicho juicio es administrativa, pues en ésta ya viene incluido lo fiscal.

TERCERA. El carácter federal que tienen las autoridades fiscales de las entidades federativas deriva del artículo 14 de la Ley de Coordinación Fiscal; además de esta Ley, el carácter de federales, se deriva de la suscripción del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y de sus respectivos Anexos celebrados entre el gobierno Federal y los gobiernos locales. De ahí se observa que están facultadas para intervenir en juicios contenciosos administrativos contra el contribuyente. En estos convenios, dichas reglas se encuentran implícitas en la sección de las facultades y obligaciones donde se establece que *"...en materia de juicios, la entidad intervendrá como parte en los que se susciten con motivo de las facultades delegadas por virtud del Convenio…"*

Así pues, la SHCP también es parte en los juicios de nulidad por ser de la administración pública federal. Las facultades reservadas a la SHCP las encontramos en los mismos CCAMFF.

CUARTA. El Juicio Fiscal en Línea se caracteriza porque es promovido, sustanciado y resuelto a través de Internet, mediante la página Web del TFJFA. El ingreso al

Sistema de Justicia en Línea está a disposición los 365 días del año, las 24 horas del día.

El Juicio Fiscal en Línea es un proyecto novedoso, caro, que refleja hasta este momento falta de cultura tecnológica, pues de acuerdo con la evolución de los indicadores provenientes del TFJFA y de la PRODECON, refleja el incremento paulatino de los asuntos por la vía virtual. Pero es definitivo que el Juicio en Línea sí ahorra tiempos en comparación con el juicio tradicional. Un ejemplo básico es que las partes ya no tendrán que ir físicamente al Tribunal a presentar sus escritos, sino que pueden hacerlo en línea en cualquier momento y desde cualquier parte del mundo.

QUINTA. Se considera que el principal objetivo del juicio en línea y el juicio por la vía sumaria, fue el de reducir la carga de trabajo al TFJFA, pues como se observó en una gráfica proveniente del mismo Tribunal, conforme pasaban los años se incrementaban los asuntos; en segundo orden, si bien es cierto que el objetivo de estas nuevas modalidades es lo referente a la justicia pronta y expedita, también es cierto que lo primero que se pretendía era la reducción de carga de trabajo para el Tribunal, con lo cual seguramente se cumpliría la justicia pronta y expedita que regula el artículo 17 constitucional.

SEXTA. Respecto al Juicio Fiscal por la Vía Sumaria, es muy claro que su principal característica es la cuantía y la reducción de plazos y por lo tanto se debe apegar al plazo que marca la ley. Un ejemplo es la tesis siguiente: JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL EN LA VÍA SUMARIA. SU TRAMITACIÓN NO ES OPTATIVA EN RELACIÓN CON EL ORDINARIO. [TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3; Pág. 2087.

SÉPTIMA. Resultaría muy favorable si se combinaran, el juicio sumario y ordinario con el Juicio en Línea, pues existiría un mayor beneficio para el TFJFA, que si se llevan asuntos sumarios y ordinarios por la vía tradicional. En otras palabras, si se tiene el mismo personal con la misma cantidad de asuntos, no solo ordinarios sino sumarios, sería la misma o mayor carga de trabajo que antes de estas nuevas modalidades para dicho Tribunal. En cuanto a la autoridad y el particular, las consecuencias respecto a la carga de trabajo recaen en la propia autoridad.

OCTAVA. En cuanto al juicio sumario (vía sumaria) al principio se consideró falta de precisión en lo que respecta al artículo 63 de la LFPCA, pues se establece que procede el recurso de revisión por parte de la autoridad contra las resoluciones emitidas por el Pleno, las Secciones de la Sala Superior o por las Salas Regionales del TFJFA, cuando en la vía sumaria el que emite la resolución es el magistrado

instructor y no la Sala, es un claro ejemplo de omisión y poca claridad en la ley, provocando incertidumbre principalmente para la autoridad fiscal, pues con los últimos criterios emitidos por los TCC, una manera de interpretar dicha disposición, es que en la vía sumaria dicha autoridad se quede sin una revisión de sentencia. Sin embargo, posterior a eso se emitieron diversas tesis aisladas y jurisprudencias, donde queda aclarado que la revisión fiscal es improcedente en la vía sumaria o por sentencias dictadas por magistrado instructor, algunos ejemplos de estas jurisprudencias recientes son las siguientes: "REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE ESE RECURSO CONTRA LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR EL MAGISTRADO INSTRUCTOR EN FORMA UNITARIA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL TRAMITADO EN LA VÍA SUMARIA." [J]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4; Pág. 2266, *[J];* REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA SENTENCIAS DICTADAS EN FORMA UNITARIA POR LOS MAGISTRADOS INSTRUCTORES DE LAS SALAS REGIONALES DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, EN LOS JUICIOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS FEDERALES TRAMITADOS EN LA VÍA SUMARIA. 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2; Pág. 1440

Por lo cual y con lo que se ha señalado anteriormente, se interpreta que para las autoridades fiscales, el recurso de revisión en la Vía Sumaria es improcedente contra las sentencias dictadas por el magistrado instructor

NOVENA. Algunas de las implicaciones que el juicio en línea trae consigo es que los funcionarios fiscales deban ser capacitados continuamente (en caso de requerirse), se deben familiarizar con el procesamiento de la información de manera virtual, revisar correos electrónicos institucionales, tomar las medidas de seguridad adecuadas para el manejo de información, estar alertas con fallas tecnológicas tanto en el sistema del juicio en línea como en la computadora institucional, entre otros aspectos. Es decir, aspectos más tecnológicos que jurídicos, pues con respecto al conocimiento de la norma, son los mismos plazos, términos etc. que en los juicios ordinarios y sumarios, lo único que difiere es que es en línea.

El impacto del juicio en línea para la autoridad fiscal federal, es sin duda la obligatoriedad que lo anterior representa para ella en su intervención en juicio, debido a que anteriormente, en los juicios tradicionales no se tenía el compromiso de estar revisando los correos electrónicos para las notificaciones, escaneando o digitalizando documentos para ingresarlos al sistema del juicio en línea, entre otras cosas; así pues, resulta un cambio radical. Los particulares tienen la opción de elegir tramitarlo de manera tradicional (papel) o en línea.

DÉCIMA. Se observó que las autoridades fiscales federales también tienen implicaciones frente a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Por tal motivo, se recomienda que las autoridades fiscales funden y motiven correctamente sus actos de autoridad y atiendan las recomendaciones de la Procuraduría, pues en el supuesto de no aceptar dicha recomendación, también se debe fundar y motivar su respuesta.

DÉCIMA PRIMERA. Se sugiere a las autoridades fiscales federales de México poner mayor atención a los artículos 14 y 16 constitucionales, así como a los derechos humanos de los contribuyentes, consagrados en la Constitución Federal, pues si son violados por la autoridad fiscal, esta última está sujeta a hacerse responsable por sus omisiones, pues ahora también la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente asesora y defiende en juicio al contribuyente, haciendo valer sus derechos humanos.

DÉCIMA SEGUNDA. Con respecto al derecho informático se analizó que el Juicio en Línea se relaciona con la informática jurídica, pues viene siendo la conexión de la informática en general con la información jurídica. Se comprendió el valor de las pruebas y documento electrónico tanto en nuestro país como en otros países y los criterios jurisprudenciales al respecto.

En el Juicio en Línea se manejan dos tipos de documentos informáticos, sin embargo a ambos se les podría dar el mismo valor, un ejemplo, a todas las actuaciones dentro del juicio en línea se les puede clasificar como documento informático sobre soporte electrónico; otro ejemplo es cuando la sentencia y las actuaciones se imprimen para enviarse a los TCC interponiendo el recurso de revisión, en este caso el documento sería informático sobre papel.

DÉCIMA TERCERA. Se consideró la necesidad de que existiese algún tipo de perito virtual para avalar los documentos y pruebas virtuales que se presentan en el juicio en línea, para que ambas partes tuvieran más certeza jurídica. Sin embargo, por el momento se puede tener la seguridad que nuestro sistema jurídico reconoce como medio de prueba la información contenida en medios electrónicos.

DÉCIMA CUARTA. En nuestro sistema jurídico si bien es cierto que reconoce como medio de prueba la información contenida en medios electrónicos, también lo es que se deja libertad con respecto a la valoración de la misma, por lo que será el juzgador o magistrado quien deberá valorarla.

DÉCIMA QUINTA. Se introdujo en la tecnología que se tiene en España, con su expediente electrónico judicial y las consecuencias que hasta el momento se han

observado, así como el juicio contencioso administrativo abreviado previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en España, se observó de ellos lo siguiente:

- El procedimiento abreviado en España, a pesar de ser una instancia de lo administrativo, no es completamente similar a la vía fiscal sumaria en México, pues uno de los asuntos de la competencia en el procedimiento abreviado español en el ámbito administrativo se puede resaltar las cuestiones de personal al servicio de las Administraciones Públicas, cuya cuantía no supere los 30.000 euros. En México como se comentó en capítulos anteriores, el TFJFA atiende asuntos de naturaleza fiscal y administrativa. Otra diferencia del procedimiento abreviado en España es que los plazos y el proceso se relaciona mucho con su Ley del Enjuiciamiento Civil, en donde se puede observar que los plazos si bien son cortos difieren un poco de los plazos fiscales sumarios en México.

- El expediente electrónico judicial ha tenido éxito a excepción de algunas manifestaciones (nota de prensa), respecto a que la implantación del expediente judicial electrónico está provocando "problemas" a los que no se está dando las soluciones adecuadas. Se considera que puede ser en cuanto al aspecto tecnológico más que jurídico.

DÉCIMA SEXTA. Respecto a los indicadores obtenidos en la presente investigación, se tiene lo siguiente:

- Respecto al juicio fiscal en línea, en el TFJFA sí se ha presentado un porcentaje considerable de demandas en línea provenientes de diversas autoridades; sin embargo, en lo que respecta a la PRODECON y a una de las Secretarías de Finanzas, en este caso la de Jalisco, el porcentaje de juicios en línea es del 0 al 1%.

- Referente al juicio fiscal por la vía sumaria, se observa que se ha obtenido buena respuesta y éxito tanto en la PRODECON como en el propio TFJFA, pues además de tomarse en cuenta la cuantía para esta vía, su objetivo principal es la agilización del procedimiento.

Glosario

Crédito fiscal: Según el artículo 4 del CFF, son créditos fiscales los que tengan derecho a percibir el Estado o sus organismos descentralizados que provengan de contribuciones, de sus accesorios o de aprovechamientos, incluyendo los que deriven de responsabilidades que el Estado tenga derecho a exigir de sus funcionarios o empleados o de los particulares, así como aquellos a los que las leyes les den ese carácter y el Estado tenga derecho a percibir por cuenta ajena.[87]

Contribución: El tributo, contribución o ingreso tributario es el vínculo jurídico en virtud del cual el Estado, actuando como sujeto activo, exige a un particular, denominado sujeto pasivo, el cumplimiento de una prestación pecuniaria, excepcionalmente en especie.[88]

Fisco: El fisco es el órgano del Estado encargado de obtener los ingresos de aquél para la integración de la hacienda pública, la administración y la disposición de tales bienes. El fisco federal, como ha quedado apuntado, se identifica con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Las funciones de la Secretaría de Hacienda se enuncian en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal [89]

Impuesto: Los impuestos son una parte sustancial (o más bien la más importante) de los ingresos públicos. Sin embargo, antes de dar una definición sobre los impuestos hay que aclarar la diferencia entre los conceptos de *ingreso público, contribución* e *impuesto.* Cuando nos referimos a *ingresos públicos* estamos haciendo referencia a todas las percepciones del Estado, pudiendo ser éstas tanto en efectivo como en especie o servicios. En segundo lugar, una *contribución* es una parte integrante de los ingresos públicos e incluye aportaciones de particulares como, por ejemplo, pagos por servicios públicos, de donaciones, multas, etc. En tercer lugar, los impuestos forman parte de las contribuciones y éstas a su vez forman parte de los ingresos públicos.[90]

---

87 Código Fiscal de la Federación, artículo 4 establece lo referente al crédito fiscal.

88 PEREZ RAMOS, José Antonio, Artículo número 50| diciembre 2000 afiscco@fisnet.com.mx http://www.offixfiscal.com.mx/varios/art4_3.htm Información fiscal para la era digital. Oaxaca, Oax. México 2000

89 RODRÍGUEZ MEJÍA, Gregorio, "EL FISCO" Boletín Mexicano de Derecho Comparado, No. 106

90 http://www.economia.unam.mx/secss/docs/tesisfe/BonillaLI/cap1.pdf

Juicio Contencioso Administrativo o Juicio de nulidad: Es un medio de defensa que los particulares pueden ejercer contra la autoridad fiscal.[91]

Juicio Fiscal en Línea: Es el juicio contencioso administrativo federal que se promoverá, substanciará y resolverá en línea, a través del Sistema de Justicia en Línea que deberá establecer y desarrollar el Tribunal.

Juicio Fiscal en la Vía Sumaria: Es el juicio contencioso administrativo federal que se tramitará y resolverá en la vía sumaria, de conformidad con las disposiciones específicas que para su simplificación y abreviación se establecen en la Ley.

Ley Federal: es aquella que regula las atribuciones conferidas a determinados órganos con el objeto de trascender únicamente al ámbito federal.

Ombudsman "La palabra "*ombud*", nos dice el Ombudsman para asuntos civiles de Suecia, señor Alfred Bexelius, se refiere a una persona que actúa como vocero o representante de otra."[92]

Procedimiento Administrativo de Ejecución: Conjunto de trámites y gestiones que realiza la autoridad fiscal con la finalidad de hacer exigibles los pagos de los créditos fiscales que no han sido cubiertos o garantizados dentro de los plazos que para estos casos marcan las disposiciones fiscales. [93]

Vacatio legis: Periodo de tiempo estipulado entre la publicación de una ley y su entrada en vigor.[94]

91 Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
92 Óp. Cit. 61
93 Documento Electrónico http://www.despachozarate.com.mx/agendaFiscalOctubre2001.asp#15 PAE
94 http://www.abogadosconjuicio.com/glosario/1.html

Anexos

1) **Proceso Legislativo de la Iniciativa del Juicio Fiscal en Línea (Decreto 192, LX Legislatura), 12 de Junio de 2009.**
2) **Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan Diversas Disposiciones de la LFPCA y de la LOTFJFA, 10 Diciembre de 2010.**
3) **Lineamientos Técnicos y Formales para la Sustanciación del Juicio Fiscal en Línea Acuerdo E/JGA/16/2011 y su Anexo Único**
4) **Información Jurisdiccional del Juicio en Línea Emitido por el TFJFA (Noviembre 2012)**

DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 2009

PROCESO LEGISLATIVO

01	26-03-2009 Cámara de Diputados. **INICIATIVA** con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las Leyes Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Presentada por el Ejecutivo Federal. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Diario de los Debates, 26 de marzo de 2009.
02	15-04-2009 Cámara de Diputados. **DICTAMEN** de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. **Aprobado** en lo general y en lo particular con 313 votos en pro, 0 en contra y 2 abstenciones. Se turnó a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales. Gaceta Parlamentaria, 14 de abril de 2009. Discusión y votación, 15 de abril de 2009.
03	16-04-2009 Cámara de Senadores. **MINUTA** proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera. Diario de los Debates, 16 de abril de 2009.
04	28-04-2009 Cámara de Senadores. **DICTAMEN** de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. **Aprobado** en lo general y en lo particular con 86 votos en pro, 0 en contra y 7 abstenciones. Se turno al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. Diario de los Debates, 28 de abril de 2009. Discusión y votación, 28 de abril de 2009.
05	12-06-2009. Ejecutivo Federal. **DECRETO** por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 2009.

26-03-2009
Cámara de Diputados.
INICIATIVA con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las Leyes Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Presentada por el Ejecutivo Federal.
Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Diario de los Debates, 26 de marzo de 2009.

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - LEY ORGANICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

El Secretario diputado José Manuel del Río Virgen : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

Por instrucciones del Presidente de la República y en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo establecido en el artículo 27, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito remitir la iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa**,** documento que el titular del Ejecutivo federal propone por el digno conducto de ese órgano legislativo.

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículos 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, acompaño copias de los oficios números 529-II-DLPC-050/09, 353.A.1.-0337 y 315-A-01108, mediante los cuales la Secretaría de Hacienda y Crédito Público remite el dictamen de impacto presupuestario de la presente iniciativa.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente México, DF, a 24 de marzo de 2009.--- Cuauhtémoc Cardona Benavides (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Presidencia de la República.

Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presente

México está inmerso en un proceso de transformaciones que no puede ni debe detenerse. La consolidación democrática del país está abriendo paso a una etapa de modernidad en diversas áreas de nuestra vida económica, política y social.

Compartimos el desafío de construir una nación de justicia y leyes, de bienestar y progreso, libertad y democracia.

El progreso de toda nación se funda en la justicia efectiva que brinda el Estado de Derecho. El desarrollo humano precisa del respeto irrestricto de la ley, porque es mediante su aplicación que las personas pueden acceder a mejores oportunidades de vida, participar libre y responsablemente de la democracia, y disfrutar de una vida y un patrimonio seguros. Ningún estado democrático puede lograrse sin la plena vigencia de la legalidad.

La vigencia del estado de derecho depende, fundamentalmente, de la confianza de la ciudadanía en su gobierno y en las leyes que lo rigen. Para ello, es indispensable una actuación íntegra y transparente de la autoridad, que brinde a los ciudadanos la certidumbre de que cuentan, en todo momento, con instituciones que garantizarán el respeto a sus derechos mediante la aplicación de la ley. Es también obligación del estado promover la adecuación del marco legal para que este sea justo y responda a la realidad nacional, de manera tal que la ciudadanía esté convencida de que su interés está mejor protegido dentro de la legalidad que al margen de ella.

También es imperativo garantizar el acceso efectivo a la justicia y que ésta se aplique a todos por igual. Ello resulta indispensable para la consolidación de una verdadera cultura de la legalidad que norme la conducta de los ciudadanos y forme parte integral de la vida cotidiana.

Hoy es tiempo de responder al histórico reclamo de los mexicanos por una justicia real y expedita. Para ello, se debe impulsar una reforma que fortalezca los cimientos del Estado de Derecho, mejorando sus respuestas a las demandas de los ciudadanos y aumentando la eficiencia y eficacia de todas las instituciones involucradas en el sistema de justicia, garantizándose, de esta forma, la paz social en nuestro país, toda vez que la historia nos ha demostrado que las seis revoluciones del siglo XVIII, en Inglaterra, Francia, los Países Bajos, España, Portugal y Nápoles, tuvieron como detonador la inconformidad social generada por la recaudación injusta de impuestos, debido a que no existió una instancia a la que los inconformes pudieran recurrir en demanda de justicia.

El sistema de procuración e impartición de justicia se ha ido modernizando a través de los años; sin embargo, existen graves rezagos que limitan la eficacia con que se desempeña, y que se traducen en una mayor desconfianza de los ciudadanos frente a las instituciones encargadas de protegerlos.

Los cambios en la demanda de los servicios judiciales y las exigencias respecto de su cumplimiento obligan a establecer estrategias de gestión modernas que permitan hacer más eficiente la actividad jurisdiccional en su conjunto en beneficio de las labores sustantivas de la institución. No se trata de ``burocratizar la actividad jurisdiccional'', sino de introducir nuevas formas de gestión y administración para aumentar en conjunto su flexibilidad y capacidad de dar respuesta a las nuevas demandas, sin menoscabo de las formas específicas a la actividad jurisdiccional.

La planeación estratégica de tecnologías de la información es una de las áreas en donde más se requiere de una visión integral del sistema de impartición de justicia y en la cual se presenta, en forma más clara la ventana de oportunidad para la cooperación y colaboración de los diversos subsistemas que integran el sistema nacional de impartición de justicia.

Es impostergable la modernización del sistema de impartición de justicia mediante instituciones más eficientes y leyes más adecuadas.

Uno de los objetivos principales de esta administración, contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, específicamente en el eje rector de ``Estado de Derecho y Seguridad'', es modernizar el sistema de justicia encaminado a lograr un marco normativo que garantice justicia pronta y eficaz, estableciéndose como estrategia impulsar reformas procesales para hacer más expedita la aplicación de la justicia.

Otro de los objetivos de esta administración es generalizar la confianza de los habitantes en las instituciones públicas, particularmente en las de seguridad pública, procuración e impartición de justicia, estableciéndose como estrategia impulsar la vigencia de leyes modernas, suficientes, claras y sencillas en todos los ámbitos de la actividad nacional.

El marco jurídico vigente debe mejorarse a efecto de permitir el desarrollo de la sociedad, por la vía del respeto, la armonía y la productividad. Adicionalmente urge su transformación como punto de partida para recuperar la confianza social, ya que la ciudadanía sólo cambiará su percepción si advierte que las leyes se modernizan en su favor.

Para alcanzar este objetivo, es necesario impulsar las reformas necesarias para dar certeza, claridad y agilidad a los procedimientos que los particulares tramitan en contra de las actuaciones de la administración pública federal.

Por tanto, para lograr un mayor acceso de la sociedad a la impartición de justicia, en la organización de este sistema y en particular por lo que hace a los órganos de gobierno y administración, se debe echar mano de los notables avances y adelantos en materia de tecnologías de la información.

Así las cosas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha realizado varios de los esfuerzos por mejorar el sistema de impartición de justicia en nuestro país, siendo a través de la ``Consulta Nacional para una Reforma Integral y Coherente del Sistema Nacional de Impartición de Justicia en el Estado Mexicano'' cuya convocatoria se llevó a cabo en agosto de 2003, en la que se conjugaron opiniones y encuestas de la comunidad jurídica nacional y en general de la población sobre la operación, las percepciones y las propuestas para optimizar éste.

Uno de los aspectos sobre los que más se insistió en las propuestas recogidas durante la consulta es que los poderes judiciales y los órganos jurisdiccionales en general deben aprovechar los avances tecnológicos para eficientar la tramitación de juicios, recalcándose que las tecnologías de la información son una realidad de la sociedad contemporánea y que su desarrollo impactará, tarde o temprano, a todas las organizaciones, incluyendo al Poder Judicial. Por tanto, urge una reflexión de conjunto que permita aprovechar desde ahora las ventanas de oportunidad que ofrecen dichas tecnologías para una mejor impartición de justicia, tanto desde una perspectiva interna en la toma de decisiones, la gestión y la resolución de los asuntos; como externa, para mejorar los servicios a sus usuarios. Asimismo resulta necesario avanzar en la creación de una nueva cultura institucional, para lograr el uso eficiente de las tecnologías en información.

Se consideró que el problema de la infraestructura tecnológica y el uso de tecnologías de información deben abordarse desde una perspectiva integral respecto del sistema de impartición de justicia del país. Por ello, una visión que se limite al Poder Judicial de la federación sería necesariamente parcial. Por ello, se indicó que era necesario incluir en el diagnóstico y reflexión a los Poderes Judiciales locales. Además, es indispensable que se comprendan los procesos desde la procuración de justicia y los tribunales administrativos, hasta las últimas instancias de decisión en los Poderes Judiciales locales y federal. En esta tesitura se encuentra el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

De lo actuado en la consulta se desprenden, entre otras, las propuestas siguientes:

- Establecer como instrumentos jurídicos procesales la aplicación de mensajes de datos, la firma electrónica avanzada y la conservación por medios electrónicos de la información generada, comunicada y archivada a través de medios ópticos y de cualquier otra tecnología equivalente, así como alguna otra que haga posible su conversión de papel a medios virtuales, para una administración de justicia más ágil.
- Utilizar el correo electrónico como un medio válido para la remisión de correspondencia oficial entre órganos del Poder Judicial de la federación.
- Elaborar formatos tipo contenidos en medios informáticos, para la emisión de acuerdos de trámite.
- Utilizar un sistema de cómputo que ponga especial énfasis en la forma de presentar la demanda de amparo y agilizar así el procedimiento de dicho juicio.
- Publica los acuerdos judiciales vía Internet, con efectos legales.

- Firma electrónica avanzada por parte de los órganos jurisdiccionales.
- Notificar vía Internet, con apoyo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.
- Sustituir el libro de gobierno y otros documentos similares por soportes electrónicos.
- Desaparecer los archivos judiciales para integrar un sistema digitalizado de expedientes.
- Innovar sistemas de seguimiento de expedientes.

De lo anterior se desprende que la mayor parte de los planteamientos implica la necesidad de hacer modificaciones en la legislación procesal a fin de permitir la incorporación de soluciones tecnológicas en el proceso.

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se ha caracterizado por ser una institución comprometida con la sociedad, sin embargo, debido a la ampliación de su competencia en la última década, la cual no ha sido proporcional con la apertura de salas regionales, ha propiciado dilación en la resolución de los juicios interpuestos ante él.

Así, el número de juicios ingresados al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se ha ido incrementando a partir del año 2000, junto con la ampliación de su competencia, por lo que de un inventario de 37 mil 511 expedientes con que contaba en ese año, se llegó a la cantidad de 118 mil 6 expedientes en 2007, propiciándose, de esta forma, una dilación en la resolución de los juicios, llegando a 355 días hábiles promedio transcurridos para resolver un juicio, por lo que en aras de cumplir con la función jurisdiccional a cargo del Estado, contenida en el artículo 17 constitucional, de impartir justicia pronta y expedita, es necesario agilizar la tramitación de los juicios.

Además de la opción tradicional de crecimiento del tribunal en número de salas, se ha pensado en una opción moderna, posible, eficiente, segura, que implica el uso de los medios electrónicos; siendo ésta la de tramitar el juicio en línea, aprovechando la informática, que constituye un fenómeno con gran influencia prácticamente en todas las áreas del conocimiento humano, y el derecho no ha sido la excepción, ya que se ha constituido lo que se conoce como ``Informática Jurídica'' que en un principio incluyó únicamente la creación y recuperación de información que contenía datos jurídicos como leyes, jurisprudencia y doctrina, pero que actualmente ha evolucionado a la creación de programas que permiten la emisión de actos jurídicos como certificaciones y aún, actuaciones de órganos públicos administrativos, así como judiciales y jurisdiccionales dentro de su competencia.

La idea de que el juicio contencioso administrativo federal pueda tramitarse por vía electrónica es acorde al compromiso adquirido por México junto con 182 países más, en la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI) celebrada en Túnez del 16 al 18 de noviembre de 2005, en donde se comprometió a utilizar las ventajas que las tecnologías de la información y la comunicación pueden aportar a la humanidad y ver la manera en que pueden transformar las actividades y la vida de las personas, así como su interacción, para un mejor futuro.

El ``juicio en línea'' permitirá cumplir con la obligación de impartir una justicia pronta y expedita, dado que los avances tecnológicos, permiten que el uso de las computadoras sea cada día más común entre la población y su manejo es parte ya de la educación en el país; incluso la Secretaría de Educación Pública está implantando, dentro de las escuelas públicas el uso de los medios informáticos.

Diversas dependencias gubernamentales ya tramitan algunos procedimientos mediante vía electrónica, como en materia de información y transparencia; asimismo, destaca el caso de la Procuraduría Federal del Consumidor, respecto de los procedimientos de conciliación, denominados ``Concilianet''.

Con el juicio a través de los medios electrónicos, más mexicanos tendrán acceso a la justicia y se logrará acercar ésta de forma más eficiente al gobernado, ya que no será necesario su desplazamiento para

poder acceder a ella; los tiempos de resolución de los juicios se disminuirán a seis meses. La finalidad de esta iniciativa es lograr una justicia más expedita, eficaz, moderna y confiable para todos.

Principios, criterios y fundamento de la iniciativa

A) Ley Federal de Procedimiento Contencioso y Administrativo

Se propone adicionar a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en su Título II, el capítulo X, ``Del juicio en línea'', a fin de regular de manera específica la tramitación y resolución del juicio contencioso administrativo federal en los medios electrónicos, destacando que en lo general, independientemente de las particularidades que al efecto se establecen en el referido capítulo, le serán aplicables todas las disposiciones de la propia ley, en el entendido de que se trata jurídicamente de un mismo juicio, del que varían únicamente algunos aspectos formales en su tramitación. Por lo tanto, los plazos, trámites y requisitos que no se establezcan de manera diversa en el capítulo propuesto, serán aplicables; asimismo, las figuras jurídicas reguladas en la ley como la excusa, la recusación, la improcedencia, el sobreseimiento, los incidentes y recursos, seguirán siendo los mismos en el juicio ``en línea''.

Así, la propuesta es, que utilizando los dispositivos electrónicos y sistemas computacionales, la integración y consulta de los expedientes que se formen con la tramitación de los juicios ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se realice a través de Internet. De ahí la denominación que se propone de ``juicio en línea'', toda vez que en informática se dice que algo está ``en línea'' si está conectado a una red o sistema (que es, implícitamente, la línea) y, en lenguaje coloquial, la mayor red en cuestión es normalmente Internet, por lo que ``en línea'' describe información que es accesible a través de Internet.

Se propone que el juicio en línea sea opcional para el particular, ya sea que él demande o que sea demandado, incluso cuando intervenga en carácter de tercero interesado.

Lo anterior, tomando en cuenta que no toda persona tiene aún acceso a los medios electrónicos y que en tal sentido, no se les puede obligar a que el juicio en el que intervengan se tramite en línea, ya que ello implicaría limitar y condicionar su acceso a la justicia, en contravención al artículo 17 constitucional, por lo que, quedará en los particulares la decisión de si el juicio en el que sean parte se tramitará en la forma tradicional (por

escrito) o en línea (por medios electrónicos), dependiendo de las necesidades y oportunidades de cada persona, en respeto a la garantía constitucional.

A su vez, quienes tienen acceso a medios electrónicos y están familiarizados con su uso, -y que constituyen el 75 por ciento de los usuarios potenciales-, tendrán la posibilidad de que el juicio en el que sean parte se tramite en línea, lo que les proporcionará comodidad, prontitud, eficacia y seguridad, al facilitarles la presentación de su demanda, promociones y pruebas, así como la consulta del expediente, desde cualquier lugar y a cualquier hora, redundando en ahorro de tiempo, recursos y esfuerzo.

El trámite del juicio ``en línea'', queda condicionado a que en la demanda se señale expresamente el domicilio de correo electrónico para recibir el aviso para el ingreso al Sistema de Justicia en Línea, dada la trascendencia de ello, ya que todas las actuaciones se darán a conocer al interesado por ese conducto y no debe por tanto ser incierto ni dejar duda alguna al respecto; así, resulta ser un dato que no debe quedar sujeto a presunciones.

En caso de que se elija por el particular el juicio en línea, será obligatorio dicho trámite para las autoridades, sin que ello implique alguna desventaja o desigualdad de partes, toda vez que las dependencias y

organismos gubernamentales cuentan en la mayoría de los casos con la estructura necesaria y, de cualquier manera, se ha previsto un tiempo previo a la entrada en vigor de las reformas propuestas, para que aquellas que lo requieran obtengan los recursos humanos y materiales necesarios e implemente los sistemas adecuados para este fin.

Asimismo, se toma en cuenta que el compromiso que adquirió México, en la ya referida Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, incluye crear sistemas públicos utilizando las tecnologías de la información y la comunicación, al ser un instrumento eficaz para promover ``la buena gobernanza'' y el Estado de Derecho. Se trata entonces de respetar compromisos y unir esfuerzos en aras de apoyar la pronta y eficaz impartición de la justicia administrativa, siendo además que, a fin de cuentas, a la administración pública federal le significará también a mediano y largo plazo, un ahorro en tiempo y recursos, que podrán ser aprovechados en sus funciones.

De igual manera, si en un juicio decide el particular demandante o demandado que el trámite se realice en línea, y existiendo tercero interesado éste no coincide en ello, a fin de respetar la voluntad de todos, el juicio se tramitará en la forma tradicional respecto del tercero y en línea respecto de las demás partes, para lo cual, el secretario de acuerdos correspondiente, deberá digitalizar los documentos y promociones que el tercero presente a fin de incluirlas en el expediente electrónico y a su vez, imprimir y certificar las actuaciones y documentos electrónicos, a fin de hacerlas del conocimiento del tercero en la vía tradicional.

Para la substanciación del juicio en línea se implementará en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, un ``Sistema de Justicia en Línea'' que deberá garantizar la inalterabilidad, autenticidad, durabilidad y seguridad de todos los documentos, promociones y actuaciones que se ingresen en el mismo y que conformen los expedientes que serán electrónicos; responsabilidad que para seguridad de los gobernados, se incluye de manera expresa en el articulado que se propone.

Además, se establece que el tribunal deberá determinar mediante acuerdos y/o reglamentos, los lineamientos técnicos y formales que las partes y quienes intervengan en la instrumentación del juicio, deberán observar, a fin de uniformar los programas y sistemas adecuados y determinar las características técnicas que deban cumplir las promociones y documentos que se presenten, lo que ayudará a garantizar la debida operación y seguridad de los juicios.

Conforme al proyecto, en el juicio ``en línea'' todas las promociones y documentos deberán ser presentados ante el tribunal de manera digital y contendrán la firma electrónica avanzada que los valide, misma que será proporcionada por el tribunal cuando sea solicitada mediante los formatos que para tal efecto se proporcionarán en la página electrónica del tribunal. Se establece expresamente que la referida firma electrónica avanzada es equivalente a la firma autógrafa.

Queda establecido que al hacer la solicitud de la firma electrónica avanzada mediante el formato referido anteriormente, los particulares quedarán enterados de que las notificaciones del juicio se le harán llegar vía electrónica. En concordancia con esto, se establece como obligación expresa de las partes en el juicio, accesar en un plazo de tres días al Sistema de Justicia en Línea, a fin de evitar dilaciones en ello y por el contrario, proporcionar seguridad jurídica a las mismas partes, señalando que de no cumplir con dicha obligación, la notificación correspondiente se hará al cuarto día, mediante lista.

El proyecto contempla que el Sistema de Justicia en Línea del tribunal emitirá un acuse de recibo que señale fecha y hora de recepción de las promociones y documentos que sean enviados y dirigidos al expediente correspondiente, lo que dará seguridad jurídica a los particulares de que fueron recibidos debidamente. A su vez, el mismo sistema emitirá las constancias correspondientes con fecha y hora en la que se abran los correos electrónicos que se envíen a las partes como notificación, las cuales deberán integrarse al expediente electrónico por el actuario.

Se establece expresamente la responsabilidad de las partes respecto del uso de su firma y clave electrónicas, determinando que las notificaciones a las que se tenga acceso, así como la consulta del expediente y presentación de promociones y pruebas se entenderán hechas por el titular de las mismas, esto, a fin de proteger el uso adecuado de dichos medios y obligar a los particulares al cuidado y protección necesarios de los mismos.

De la misma forma, se establece que los funcionarios que intervienen en la integración del juicio en línea como son magistrados instructores y secretarios de acuerdos, contarán con sus correspondientes firmas electrónica y digital, con la que validarán sus actuaciones.

En cuanto a las pruebas, se contempla en el proyecto que las documentales que se presenten en el juicio en línea, tendrán el mismo valor probatorio que sus constancias físicas, siempre que se hubieren respetado los lineamientos técnicos que respecto de su transmisión y recepción se determinen en los lineamientos que se emitan. Se toma en cuenta además que siendo el Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo conforme a su artículo 1, aquél reconoce como medio de prueba y establece el valor probatorio de la ``información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología'', por lo que no se hace mayor referencia a ello.

Se contempla la posibilidad de desahogo de pruebas diversas a las documentales, y para ello se prevé que el secretario de acuerdos a cuya mesa corresponda el asunto, digitalice e incorpore al expediente electrónico las constancias de las diligencias que se lleven a cabo y haga constar en el mismo el resguardo de los originales físicos y de los bienes muebles que hubiesen sido presentados para el desahogo de la prueba correspondiente.

Dada la trascendencia de la seguridad que debe imperar en el trámite del juicio en línea, se toma en cuenta que en el Código Penal Federal, ya se encuentran tipificados los delitos relativos a la alteración o uso indebido de la información contenida en sistemas o equipos de informática, específicamente en los artículos del 211 Bis 1 al 211 Bis 7, del capítulo II denominado ``Acceso ilícito a sistemas y equipos de informática'', del Título Noveno ``Revelación de secretos y acceso ilícito a sistemas y equipos de informática'', ubicado en el Libro Segundo del citado código.

En relación al juicio en línea, aplican de manera específica las conductas señaladas como delictivas en los artículos 211 Bis 1, 211 Bis 2 y 211 Bis 3, del capítulo referido del Código Penal Federal, al señalar que incurrirá en delito quien ``sin autorización modifique, destruya o provoque pérdida de información contenida en sistemas o equipos de informática protegidos por algún mecanismo de seguridad'', lo que se establece no sólo de manera genérica, sino que se precisa que tratándose de sistemas y equipos de informática del Estado, la pena es mayor. Asimismo, se señala que incurre en conducta delictiva quien ``sin autorización conozca o copie información contenida en sistemas o equipos de informática protegidos por algún mecanismo de seguridad'', precisándose también una pena mayor para cuando se trate de sistemas o equipos del Estado.

De igual manera está contemplado en la legislación penal que se hará acreedor a una pena corporal quien ``estando autorizado para acceder a sistemas y equipos de informática del Estado, indebidamente modifique, destruya o provoque pérdida de información que contengan'', o ``indebidamente copie información que contengan''.

Conforme a lo anterior, resulta que está previsto legalmente que quienes pretendan afectar, intervenir o accesar de manera indebida el ``Sistema de Justicia en Línea'' del tribunal, así como los sistemas o equipos de informática de los usuarios que intervengan en un juicio en línea y quienes con autorización para acceder a la información de los expedientes electrónicos o sin ella, hagan uso indebido de la misma, incurrirán en delito sancionado con penas de prisión y multa; conductas de

las que se deberá dar vista al Ministerio Público cuando sean advertidas, en términos de la presente iniciativa.

No obstante lo anterior, se establece en el proyecto que se propone, el impedimento para continuar y utilizar a futuro el trámite de juicios en línea ante el tribunal y la sanción administrativa para quien indebidamente altere, destruya o provoque la pérdida de información contenida en el Sistema de Justicia en Línea del tribunal, con independencia de las sanciones penales que en su caso pudieran proceder.

De igual manera, se prevén los casos de contingencia en cuanto a fallas temporales en el Sistema de Justicia en Línea del tribunal, señalando la forma en la que las partes deberán de cumplir con los términos legales para la presentación de las promociones que correspondan en el trámite de los juicios en los que intervengan.

B) Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

A fin de que exista control y vigilancia adecuados en la operación y uso del Sistema de Justicia en Línea del tribunal y se delimiten responsabilidades, se regulan las atribuciones necesarias para los funcionarios públicos del tribunal a quienes se estima corresponden dichas funciones, en concordancia a lo establecido en la ley adjetiva y al ámbito de su competencia, en el entendido de que toda actuación de la autoridad debe tener sustento expreso en ley.

Así, se otorga a la Junta de Gobierno y Administración la facultad de verificar el correcto funcionamiento del Sistema de Justicia en Línea del tribunal; facultad que tendrán también a nivel de sala, los presidentes de cada una de ellas.

Se otorga la facultad a los magistrados instructores, de verificar la correcta integración de los expedientes electrónicos, lo que implica su responsabilidad respecto a ello.

Se otorga al secretario general de acuerdos, a los secretarios adjuntos de acuerdos de las secciones y a los secretarios de acuerdos de sala superior y de salas regionales, la facultad de digitalizar documentos y actuaciones que deban ser integrados a los expedientes electrónicos que en turno les corresponda, así como imprimir y certificar las constancias de dichos expedientes.

En términos de lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción I, y 73, fracciones XXIX-H y XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de ese honorable Congreso de la Unión la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para quedar como sigue:

Primero. Se reforman los artículos 4, primer párrafo; 13, primero, tercero y cuarto párrafos; 14, fracción I, segundo, tercero, cuarto y último párrafo; 24, fracción I, así como su inciso a); 65, primer párrafo; 66, 67, último párrafo; y 68, primer párrafo; se adiciona el artículo 1-A; se adicionan los párrafos segundo y tercero al artículo 13, recorriéndose los demás párrafos en su orden, se adiciona un tercer párrafo al artículo 14, recorriéndose los demás párrafos en su orden, se adiciona un párrafo segundo al artículo 31, y se adiciona el Capítulo X denominado ``Del juicio en línea'' al Título II, que comprende de los artículos 58-A al 58-S de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, para quedar como sigue:

Artículo 1-A. Para los efectos de esta ley se entenderá por:

I. Acuse de recibo electrónico: Constancia que acredita que un documento digital fue recibido por el tribunal y estará sujeto a la misma regulación aplicable al uso de una firma electrónica avanzada. En este caso, el acuse de recibo electrónico identificará a la sala que recibió el documento y se presumirá, salvo prueba en contrario, que el documento digital fue recibido en la fecha y hora que se consignen en dicha constancia. El tribunal establecerá los medios para que las partes y los autorizados para recibir notificaciones puedan verificar la autenticidad de los acuses de recibo electrónico;
II. Archivo electrónico: Información contenida en texto, imagen, audio o video generada, enviada, recibida o archivada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, que forma parte del expediente electrónico;
III. Boletín procesal: Medio de comunicación oficial impreso o electrónico, a través del cual el tribunal da a conocer las actuaciones o resoluciones en los juicios contenciosos administrativos federales que se tramitan ante el mismo;
IV. Clave de acceso: Conjunto único de caracteres alfanuméricos asignados por el sistema de justicia en línea del tribunal a las partes, como medio de identificación de las personas facultadas en el juicio en que promuevan para utilizar el sistema, y asignarles los privilegios de consulta del expediente respectivo o envío vía electrónica de promociones relativas a las actuaciones procesales con el uso de la firma electrónica avanzada en un procedimiento contencioso administrativo;
V. Contraseña: Conjunto único de caracteres alfanuméricos, asignados de manera confidencial por el Sistema de Justicia en Línea del tribunal a los usuarios, la cual permite validar la identificación de la persona a la que se le asignó una clave de acceso;
VI. Dirección de correo electrónico: Sistema de comunicación a través de redes informáticas, señalado por las partes en el juicio contencioso administrativo federal;
VII. Dirección de correo electrónico institucional: Sistema de comunicación a través de redes informáticas, dentro del dominio definido y proporcionado por los órganos gubernamentales a los servidores públicos;
VIII. Documento electrónico o digital: Todo mensaje de datos que contiene texto o escritura generada, enviada, recibida o archivada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología que forma parte del expediente electrónico;
IX. Expediente electrónico: Conjunto de información contenida en archivos electrónicos o documentos digitales que conforman un juicio contencioso administrativo federal, independientemente de que sea texto, imagen, audio o video, identificado por un número específico;
X. Firma digital: Medio gráfico de identificación en el sistema de Justicia en Línea, consistente en la digitalización de una firma autógrafa mediante un dispositivo electrónico, que es utilizada para reconocer a su autor y expresar su consentimiento;
XI. Firma electrónica avanzada: Conjunto de datos consignados en un mensaje electrónico adjuntados o lógicamente asociados al mismo que permita identificar a su autor mediante el sistema de justicia en línea, y que produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. La firma electrónica permite actuar en juicio en línea;
XII. Juicio en la via tradicional: El juicio contencioso administrativo federal que se substancia recibiendo las promociones y demás documentales en manúscrito o impresos en papel, y formando un expediente también en papel, donde se agregan las actuaciones procesales;
XIII. Juicio en línea: Substanciación y resolución del juicio contencioso administrativo federal en todas sus etapas, así como de los procedimientos previstos en el artículo 58 de esta ley, a través del sistema de justicia en línea;
XIV. Sistema de Justicia en Línea: Sistema Informático establecido por el tribunal a efecto de registrar, controlar, procesar, almacenar, difundir, transmitir, gestionar, administrar y notificar el procedimiento contencioso adminstrativo que se substancie ante el tribunal, y
XV. Tribunal: Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Artículo 4. Toda promoción deberá contener la firma autógrafa o la firma electrónica avanzada de quien la formule y sin este requisito se tendrá por no presentada. Cuando el promovente en un juicio en la vía tradicional, no sepa o no pueda estampar su firma autógrafa, estampará en el documento su huella digital y en el mismo documento otra persona firmará a su ruego.

Título II De la Substanciación y Resolución del Juicio

Capítulo I De la Demanda

Artículo 13. El demandante podrá presentar su demanda, mediante juicio en la vía tradicional, por escrito ante la sala regional competente o, en línea, a través del Sistema de Justica en Línea, para este último caso, el demandante deberá manifestar su opción al momento de presentar la demanda. Una vez que el demandante haya elegido su opción no podrá variarla. Cuando la autoridad tenga este carácter la demanda se presentará en todos los casos en línea a través del Sistema de Justicia en Línea.

Para el caso de que el demandante no manifieste su opción al momento de presentar su demanda se entenderá que eligió tramitar el juicio en la vía tradicional.

La demanda deberá presentarse dentro de los plazos que a continuación se indican:

I a III. ...
...
Cuando el demandante tenga su domicilio fuera de la población donde esté la sede de la sala, la demanda podrá enviarse a través de Correos de México, mediante correo certificado con acuse de recibo, siempre que el envío se efectúe en el lugar en que resida el demandante, pudiendo en este caso señalar como domicilio para recibir notificaciones, el ubicado en cualquier parte del territorio nacional, salvo cuando tenga su domicilio dentro de la jurisdicción de la sala competente, en cuyo caso, el señalado para tal efecto, deberá estar ubicado dentro de la circunscripción territorial de la sala.
... ...

Artículo 14. ...

I. El nombre del demandante y su domicilio para recibir notificaciones en cualquier parte del territorio nacional, así como su dirección de correo electrónico, cuando opte porque el juicio se substancie en línea a través del Sistema de Justicia en Línea.
II a VIII. ...

En cada demanda sólo podrá aparecer un demandante, salvo en los casos que se trate de la impugnación de resoluciones conexas, o que se afecte los intereses jurídicos de dos o más personas, mismas que podrán promover el juicio contra dichas resoluciones en una sola demanda.

En los casos en que sean dos o más demandantes éstos ejercerán su opción a través de un representante común.

En la demanda en que promuevan dos o más personas en contravención de lo dispuesto en el párrafo anterior, el magistrado instructor requerirá a los promoventes para que en el plazo de cinco días presenten cada uno de ellos su demanda correspondiente, apercibidos que de no hacerlo se desechará la demanda inicial.

...

En el supuesto de que conforme a lo dispuesto en la fracción I de este artículo, no se señale el domicilio del demandante en la jurisdicción de la sala regional que corresponda o se desconozca el domicilio del tercero, las notificaciones relativas se efectuarán por lista autorizada, que se fijará en sitio visible de la propia sala, así como en el boletín procesal que emita el tribunal, el cual estará disponible en su página electrónica. En caso de que el actor desconozca el domicilio del tercero, deberá manifestarlo así bajo protesta de decir verdad.

Artículo 24. ...

I. La promoción en donde se soliciten las medidas cautelares señaladas, deberá contener los siguientes requisitos:
a) El nombre del demandante y su domicilio para recibir notificaciones en cualquier parte del territorio nacional, así como su dirección de correo electrónico, cuando opte porque el juicio se substancie en línea a
través del Sistema de Justicia en Línea.
.....

...

Artículo 31. ...

I a **III.** ...

Para el caso en que proceda la acumulación y los juicios respectivos se estén sustanciando por la vía tradicional y el juicio en línea, el magistrado instructor requerirá a las parte relativas al juicio en la vía tradicional para que en el plazo de tres días manifiesten si optan por substanciar el juicio en línea, en caso de que no ejerza su opción se tramitará el juicio en la vía tradicional.

Capítulo X Del Juicio en Línea

Artículo 58-A. El juicio contencioso administrativo federal se promoverá, substanciará y resolverá en línea, a través del Sistema de Justicia en Línea que deberá establecer y desarrollar el tribual, en términos de lo dispuesto en el presente capítulo y las demás disposiciones específicas que resulten aplicables de esta ley. En todo lo no previsto, se aplicarán las demás disposiciones que resulten aplicables de este ordenamiento.

Artículo 58-B. Cuando el demandante ejerza su derecho a presentar su demanda en línea a través del Sistema de Justicia en Línea del tribunal, las autoridades demandadas deberán comparecer y tramitar el juicio en la misma vía.

Si el demandante no señala expresamente su dirección de correo electrónico, él se tramitará el juicio en la vía tradicional y el acuerdo correspondiente se notificará por lista y en el boletín procesal del tribunal.

Artículo 58-C. Cuando la demandante sea una autoridad, el particular demandado, al contestar la demanda, tendrá derecho a ejercer su opción para que el juicio se tramite y resuelva en línea conforme las disposiciones de este capítulo, señalando para ello su domicilio y dirección de correo electrónico.

A fin de emplazar al particular demandado, el secretario de acuerdos que corresponda, imprimirá y certificará la demanda y sus anexos que se notificarán de manera personal.

Si el particular rechaza tramitar el juicio en línea contestará la demanda mediante juicio en la vía tradicional.

Artículo 58-D. En el Sistema de Justicia en Línea del tribunal se integrará el expediente electrónico, mismo que incluirá todas las promociones, pruebas y otros anexos que presenten la partes, oficios, acuerdos, y resoluciones tanto interlocutorias como definitivas, así como las demás actuaciones que deriven de la substanciación del juicio en línea, garantizando su seguridad, inalterabilidad, autenticidad, integridad y durabilidad, conforme a los lineamientos que expida el tribunal.

En los juicios en línea, la autoridad requerida, desahogará las pruebas testimoniales utilizando el método de videoconferencia, cuando ello sea posible.

Artículo 58-E. La firma electrónica avanzada, clave de acceso y contraseña se proporcionarán, a través del Sistema de Justicia en Línea del tribunal, previa obtención del registro y autorización correspondientes. El registro de la firma electrónica avanzada, clave de acceso y contraseña, implica el consentimiento expreso de que dicho sistema registrará la fecha y hora en la que se abran los archivos electrónicos, que contengan las constancias que integran el expediente electrónico, para los efectos legales establecidos en este ordenamiento.

Para hacer uso del Sistema de Justicia en Línea deberán observarse los lineamientos que, para tal efecto, expida el tribunal.

Artículo 58-F. La firma electrónica avanzada producirá los mismos efectos legales que la firma autógrafa y garantizará la integridad del documento, tendiendo el mismo valor probatorio.

Artículo 58-G. Solamente, las partes, las personas autorizadas y delegados tendrán acceso al expediente electrónico, exclusivamente para su consulta, una vez que tengan registrada su clave de acceso y contraseña.

Artículo 58-H. Los titulares de una firma electrónica avanzada, clave de acceso y contraseña serán responsables de su uso, por lo que el acceso o recepción de las notificaciones, la consulta al expediente electrónico y el envío de información mediante la utilización de cualquiera de dichos instrumentos, les serán atribuibles y no admitirán prueba en contrario, salvo que se demuestren fallas del Sistema de Justicia en Línea.

Artículo 58-I. Una vez recibida por vía electrónica cualquier promoción de las partes, el Sistema de Justicia en Línea del tribunal emitirá el acuse de recibo electrónico correspondiente, señalando la fecha y hora de recibido.

Artículo 58-J. Cualquier actuación en el juicio en línea se efectuará a través del Sistema de Justicia en Línea del tribunal en términos del presente capítulo. Dichas actuaciones serán validadas con las firmas electrónicas y firmas digitales de los magistrados y secretarios de acuerdos que den fe según corresponda.

Artículo 58-K. Los documentos que las partes ofrezcan como prueba, incluido el expediente administrativo a que se refiere el artículo 14, fracción V, de esta ley, deberán exhibirlos de forma legible a través del Sistema de Justicia en Línea del tribunal.

Tratándose de documentos digitales, se deberá manifestar la naturaleza de los mismos, especificando si la reproducción digital corresponde a una copia simple, una copia certificada o al original y tratándose de esta última, si tiene o no firma autógrafa. Los particulares deberán hacer esta manifestación bajo protesta de decir verdad, la omisión de la manifestación presume en perjuicio sólo del promoverte, que el documento digitalizado corresponde a una copia simple.

Las pruebas documentales que ofrezcan y exhiban las partes tendrán el mismo valor probatorio que su constancia física, siempre y cuando se observen las disposiciones de la presente ley y de los acuerdos normativos que emitan los órganos del tribunal para asegurar la autenticidad de la información, así como de su transmisión, recepción, validación y notificación.

Artículo 58-L. Para el caso de pruebas diversas a las documentales, los instrumentos en los que se haga constar la existencia de dichas pruebas se integrarán al expediente electrónico. El secretario de acuerdos a cuya mesa corresponda el asunto, deberá digitalizar las constancias relativas y procederá a la certificación de su cotejo con los originales físicos, así como a garantizar el resguardo de los originales y de los bienes materiales que en su caso hubieren sido objeto de prueba.

Para el caso de pruebas diversas a las documentales, éstas deberán ofrecerse en la demanda y ser presentadas a la sala que esté conociendo del asunto, en la misma fecha en la que se registre en el Sistema de Justicia en Línea del tribunal la promoción correspondiente a su ofrecimiento, haciendo constar su recepción por vía electrónica.

Artículo 58-M. Para los juicios que se substancien en términos de este capítulo no será necesario que las partes exhiban copias para correr los traslados que la ley establece, salvo que hubiese tercero interesado, en cuyo caso, a fin de correrle traslado, el demandante deberá presentar la copia de traslado con sus respectivos anexos.

En el escrito a través del cual el tercero interesado se apersone el juicio, deberá precisar si desea que el juicio se continúe substanciando en línea y señalar en tal caso, su dirección de correo electrónico. En caso de que manifieste su oposición, la sala dispondrá lo conducente para que se digitalicen los documentos que dicho tercero presente, a fin de que se prosiga con la instrucción del juicio en línea con relación a las demás partes, y a su vez, se impriman y certifiquen las constancias de las actuaciones y documentación electrónica, a fin de que se integre el expediente del tercero en un juicio en la vía tradicional.

Artículo 58-N. Las notificaciones que se practiquen dentro del juicio en línea, se efectuarán conforme a lo siguiente:

I. Todas las actuaciones y resoluciones que conforme a las disposiciones de esta ley deban notificarse en forma personal, mediante correo certificado con acuse de recibo, o por oficio, se deberán realizar a través del Sistema de Justicia en Línea del tribunal;
II. El actuario deberá elaborar la minuta electrónica en la que precise la actuación o resolución a notificar, así como los documentos que se adjunten a la misma. Dicha minuta, que contendrá la firma electrónica avanzada del actuario, será ingresada al Sistema de Justicia en Línea del tribunal junto con la actuación o resolución respectiva y los documentos adjuntos;
III. El actuario enviará a la dirección de correo electrónico de la o las partes a notificar, un aviso informándole que se ha dictado una actuación o resolución en el expediente electrónico, la cual está disponible en el Sistema de Justicia en Línea del tribunal;
IV. El Sistema de Justicia en Línea del tribunal registrará la fecha y hora en que se efectúe el envío señalado en la fracción anterior;
V. Se tendrá como legalmente practicada la notificación, conforme a lo señalado en las fracciones anteriores, cuando el Sistema de Justicia en Línea del tribunal genere el acuse de recibo electrónico donde conste la fecha y hora en que la o las partes notificadas ingresaron al expediente electrónico, lo que deberá suceder dentro del plazo de tres días hábiles siguientes a fecha de envío del aviso a la dirección de correo electrónico de la o las partes a notificar, y
VI. En caso de que en el plazo señalado en la fracción anterior, el Sistema de Justicia en Línea del tribunal no genere el acuse de recibo donde conste que la notificación fue realizada, la misma se efectuará mediante lista y por boletín procesal al cuarto día hábil contado a partir de la fecha de envío del correos electrónico, fecha en que se tendrá por legalmente notificado.

Artículo 58-O. Para los efectos del juicio en línea son hábiles las 24 horas de los días en que se encuentren abiertas al público las oficinas de las salas del tribunal.

Las promociones se considerarán, salvo prueba en contrario, presentadas el día y hora que conste en el acuse de recibo electrónico que emita el Sistema de Justicia en Línea del tribunal, en el lugar en donde el promovente tenga su domicilio fiscal y, por recibidas, en el lugar de la sede de la sala regional a la que corresponda conocer del juicio por razón de territorio. Tratándose de un día inhábil se tendrán por presentadas el día hábil siguiente.

Artículo 58-P. Las autoridades cuyos actos sean susceptibles de impugnarse ante el tribunal, deberán registrar en la Secretaría General de Acuerdos o ante la Presidencia de las Salas Regionales, según corresponda, la dirección de correo electrónico institucional, así como el domicilio oficial de las unidades administrativas a las que corresponda su representación en los juicios contenciosos administrativos, para el efecto de emplazarlas electrónicamente a juicio en aquellos casos en los que tengan el carácter de autoridad demandada.

En el caso de que las autoridades demandadas no cumplan con esta obligación, todas las notificaciones que deben hacerse, incluyendo el emplazamiento, se harán a través del boletín procesal, hasta que se cumpla con dicha formalidad.

Artículo 58-Q. Para la presentación y trámite de los recursos de revisión y juicios de amparo que se promuevan contra las actuaciones y resoluciones derivadas del juicio en línea, no será aplicable lo dispuesto en el presente capítulo.

El secretario general de acuerdos del tribunal, los secretarios adjuntos de sección y los secretarios de acuerdos de sala superior y de salas regionales según corresponda, deberán imprimir el archivo del expediente electrónico y certificar las constancias del juicio que deban ser remitidos a los juzgados de distrito y tribunales colegiados de circuito, cuando se impugnen resoluciones de los juicios correspondientes a su mesa.

Sin perjuicio de lo anterior, en aquellos casos en que así lo solicite el juzgado de distrito o el tribunal colegiado se podrá remitir la información a través de medios electrónicos.

Artículo 58-R. En caso que el tribunal advierta que alguna persona modificó, alteró, destruyó o provocó la pérdida de información contenida en el Sistema de Justicia en Línea, se tomarán las medidas de protección necesarias, para evitar dicha conducta hasta que concluya el juicio, el cual se continuará tramitando a través de un juicio en la vía tradicional.

Si el responsable es usuario del sistema, se cancelará su firma electrónica avanzada, clave y contraseña para ingresar al Sistema de Justicia en Línea y no tendrá posibilidad de volver a promover juicios en línea.

Sin perjuicio de lo anterior, y de las responsabilidades penales respectivas, se impondrá al responsable una multa de trescientas a quinientas veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de cometer la infracción.

Artículo 58-S. Cuando por caso fortuito, fuerza mayor o por fallas técnicas se interrumpa el funcionamiento del Sistema de Justicia en Línea, haciendo imposible el cumplimiento de los plazos establecidos en la ley, las partes deberán dar aviso a la sala correspondiente en la misma promoción sujeta a término, quien pedirá un reporte al titular de la unidad administrativa del tribunal responsable de la administración del sistema sobre la existencia de la interrupción del servicio.

El reporte que determine que existió interrupción en el sistema deberá señalar la causa y el tiempo de dicha interrupción, indicando la fecha y hora de inicio y término de la misma. Los plazos se suspenderán, únicamente, el tiempo que dure la interrupción del sistema. Para tal efecto, la sala hará constar esta situación mediante acuerdo en el expediente electrónico y, considerando el tiempo de la interrupción, realizará el cómputo correspondiente, para determinar si hubo o no incumplimiento de los plazos legales.

...

Artículo 65. Toda resolución debe notificarse, o en su caso, darse el aviso en la dirección de correo electrónico señalada, a más tardar el tercer día siguiente a aquél en que el expediente haya sido turnado al actuario para ese efecto y se asentará la razón respectiva a continuación de la misma resolución.

.....

...

Artículo 66. En las notificaciones, el actuario deberá asentar razón del envío por correo o entrega de los oficios de notificación y de los avisos en la dirección de correo electrónico, así como de las notificaciones personales y por lista. Los acuses postales de recibo y las piezas certificadas devueltas se agregarán como constancia a dichas actuaciones.

Artículo 67. ...

...

...

...

...

Las partes que así lo deseen, podrán señalar su clave o dirección de correo electrónico a la sala regional en que se lleve el juicio, a fin de que por este medio se les dé aviso de la emisión de los autos y demás resoluciones que en él se dicten, acompañado de un extracto de su contenido que comprenderá la fecha y órgano de emisión, los datos de identificación del expediente y el tipo de auto o resolución. Satisfecho lo anterior, el magistrado instructor ordenará que los avisos de que se trata se le practiquen por este medio a la parte que lo haya solicitado; el actuario, a su vez, deberá dejar constancia en el expediente de que el aviso se envió a la dirección de correo electrónico señalado hasta por tres ocasiones consecutivas y la fecha y hora en que las realizó. En estos casos, durante el plazo de cinco días siguientes a aquél en que el aviso se llevó a cabo, la parte interesada podrá apersonarse al local de la sala a notificarse personalmente de la resolución de que se trate y, a su vencimiento, si esto último no hubiere ocurrido, se procederá a su notificación por lista.

Artículo 68. Las notificaciones que deban hacerse a las autoridades administrativas se harán por oficio y por vía telegráfica en casos urgentes. También podrán efectuarse, opcionalmente, en la forma prevista en el artículo anterior por medio del aviso en la dirección del correo electrónico institucional.

...

...

Artículo Segundo. Se reforma la fracción VIII del artículo 37; se reforma la fracción X del artículo 38, recorriéndose en su orden la otra fracción y, se reforma la fracción XXX y XXXI del artículo 41,

recorriéndose en el mismo orden las fracciones subsecuentes; se adiciona una fracción VIII al artículo 47; se reforma la fracción VII del artículo 48, recorriéndose en su orden la otra fracción; se reforma la fracción V del artículo 49, recorriéndose en su orden la otra fracción y se reforma la fracción VI del artículo 50, recorriéndose en el mismo orden las fracciones subsecuentes, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para quedar como sigue:

Capítulo V De las Salas Regionales

Artículo 37. ...

I a VII. ...
VIII. Verificar que en la sala se utilice y mantenga actualizado el sistema de control y seguimiento de juicios, así como el Sistema de Justicia en Línea del tribunal;
IX a XI. ...

Artículo 38. ...

I a IX. ...
X. Supervisar la debida integración de las actuaciones en el Sistema de Justicia en Línea del tribunal, de los juicios tramitados en línea, y
XI. ...

Capítulo VI De la Junta de Gobierno y Administración

Artículo 41. ...

I a XXIX. ...
XXX. Establecer y administrar un boletín procesal para la notificación de las resoluciones y acuerdos, así como el control de las notificaciones que se realicen por medios electrónicos y supervisar la correcta operación y funcionamiento del Sistema de Justicia en Línea del tribunal para la tramitación de los juicios en línea;
XXXI. Emitir los acuerdos normativos que contengan los lineamientos técnicos y formales que deban observarse en la substanciación del juicio en línea;
XXXII a XXXIV. ...

Capítulo VII De los Demás Servidores Públicos del Tribunal

Artículo 47. ...

I VII. ...
VIII. Digitalizar la documentación y actuaciones que se requiera incorporar a un expediente tramitado en línea, así como imprimir y certificar las constancias de los expedientes electrónicos de la sala superior y las reproducciones en medios electrónicos de dichas actuaciones.

Artículo 48. ...

I aVI. ...
VII. Digitalizar la documentación y actuaciones que se requiera incorporar a un expediente tramitado en línea, así como imprimir y certificar las constancias de los expedientes electrónicos de la sección y las reproducciones en medios electrónicos de dichas actuaciones, y
VIII. ...

Artículo 49. ...

I a IV. ...
V. Digitalizar la documentación y actuaciones que se requiera incorporar a un expediente tramitado en línea, así como imprimir y certificar las constancias de los expedientes electrónicos de la ponencia a la que estén adscritos y las reproducciones en medios electrónicos de dichas actuaciones, y
VI. ...

Artículo 50. ...

I aV. ...
VI. Digitalizar la documentación y actuaciones que se requiera incorporar a un expediente tramitado en línea, así como imprimir y certificar las constancias de los expedientes electrónicos de la sala a la que estén adscritos y las reproducciones en medios electrónicos de dichas actuaciones, y
VII. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a la fecha de entrada en vigor del presente decreto, iniciará el desarrollo e instrumentación del Sistema de Justicia en Línea, a través del cual se substanciará el juicio en línea.

Tercero. El tribunal deberá realizar las acciones que correspondan, a efecto de que el juicio en línea, inicie su operación a los 18 meses contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa promoverá una campaña masiva entre los usuarios de los servicios del tribunal para difundir las disposiciones contenidas en este decreto.

Cuarto. Las autoridades cuyos actos sean susceptibles de impugnarse ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a través del Sistema de Justicia en Línea, deberán tramitar su firma electrónica avanzada ante la Secretaría General de Acuerdos o ante la Presidencia de las Salas Regionales, según corresponda, y registrar su dirección de correo electrónico institucional, así como el domicilio oficial de las unidades administrativas a las que corresponda su representación en los juicios contenciosos administrativos, para el efecto de emplazarlas electrónicamente a juicio, en aquellos casos en los que tengan el carácter de autoridades demandadas, a partir de los seis meses de la entrada en vigor del presente decreto, sin exceder para ello del plazo de 18 meses a que se refiere el artículo anterior.

Quinto. En el mismo plazo señalado en el artículo anterior, las unidades administrativas a las que corresponda la representación de las autoridades cuyos actos sean susceptibles de impugnarse ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en los juicios contenciosos administrativos deberán instrumentar y mantener permanentemente actualizados los mecanismos tecnológicos, materiales y humanos necesarios para acceder al juicio en línea a través del Sistema de Justicia en Línea del tribunal.

Sexto. En caso de que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa reciba una demanda por medio del Sistema de Justicia en Línea del tribunal, y constate que la autoridad demandada incumplió con lo señalado en el artículo cuarto transitorio del presente decreto, se le prevendrá para que en el plazo de 10 días hábiles contados a partir de que se le notifique dicha prevención, proceda a cumplir con dicha disposición o, en su caso acredite que ya la cumplió.

En caso de no cumplir con la obligación a que se refiere el artículo cuarto transitorio el tribunal le impondrá una multa de 100 a 200 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y todas las notificaciones que deban hacérsele, incluyendo el emplazamiento, se harán a través del boletín procesal, hasta que se cumpla con dicha formalidad.

Asimismo, se requerirá al superior jerárquico de aquélla para que en el plazo de tres días hábiles, la obligue a cumplir sin demora. En caso de continuar la renuencia de la autoridad, los hechos se pondrán en conocimiento del órgano interno de control que corresponda.

Séptimo. Los juicios que se encuentren en trámite ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administraba a la fecha en que inicie la operación del juicio en línea, continuarán substanciándose y se resolverán conforme a las disposiciones vigentes a la fecha de presentación de la demanda.

Octavo. El tribual llevará a cabo las acciones necesarias a efecto de integrar los sistemas informáticos internos en una sola plataforma tecnológica, a través del Sistema de Justicia en Línea del tribunal.

Noveno. Para la promoción, substanciación y resolución del juicio contencioso administrativo federal a través del Sistema de Justicia en Línea, prevalecerán las disposiciones contenidas en el Capítulo X de la ley respecto de otras que se contrapongan a lo establecido en dicho capítulo.

Décimo. Los recursos necesarios para la implementación y cumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto provendrán de recursos fiscales autorizados en el presupuesto del ramo 32: Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para el presente ejercicio y los subsecuentes.

Reitero a usted, ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo No Reelección.

Palacio Nacional, a 24 de marzo de 2009.--- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (rúbrica), Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Magistrado Presidente, Francisco Cuevas Godínez, del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.--- Presente.

Hago referencia a su oficio número 10-45-2009 mediante el cual envió a esta área jurídica el anteproyecto de ``iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa'', así como la evaluación de impacto correspondiente, a efecto de que por este conducto se tramitara el dictamen de impacto presupuestario de esta secretaría.

Sobre el particular, anexo al presente le remito, para los efectos a que haya lugar, copia de los oficios 353.A.1.-0337 y 315-A-01108, emitidos por la subdirección de legislación ``A'' adscrita a la Dirección General Adjunta de Análisis Jurídico, y la Dirección General de Programación y Presupuesto ``A'', respectivamente, ambas de la Subsecretaría de Egresos, mediante los cuales dan a conocer el dictamen solicitado.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo. Atentamente

México, DF, a 13 de marzo de 2009.--- Carmen Alicia Ornelas Sañudo (rúbrica), directora.»

« Secretaría de Hacienda y Crédito Público.--- Subsecretaría de Egresos.

Formato para la emisión de opiniones de la administración pública federal **Datos generales**

Nombre de la iniciativa: Iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y de la Ley del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Opinión Institucional

Argumentos presupuestarios e impacto estimado

Hago referencia a la iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y de la Ley del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Sobre el particular, con fundamento en las atribuciones que le confiere a esta DGPyP ``A'' el artículo 65 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, le informo que el documento de referencia ha sido analizado en el ámbito de nuestra competencia, del cual se presentan los siguientes comentarios:

- En la exposición de motivos se indica que no obstante que nuestro país ha avanzado en la integración de un cuerpo legal y de instituciones que permitan el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, aún persisten serías deficiencias en cuanto a la expedita impartición de justicia.
- Asimismo se indica que en la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, celebrada en Túnez del 16 al 18 de noviembre de 2005, México se comprometió a utilizar las ventajas que brinda el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información, lo cual da pauta a considerar que el juicio contencioso administrativo federal se puede tramitar por vía electrónica.
- Con estos antecedentes, en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 se estableció que una de las prioridades del eje rector denominado ``estado de derecho y seguridad'' es la modernización del sistema de impartición de justicia a través de un marco normativo que garantice justicia pronta y eficaz.
- El objetivo de la iniciativa es modificar el marco normativo del procedimiento contencioso administrativo para que, a través del uso de los medios electrónicos, más ciudadanos mexicanos tengan acceso a la justicia, sin que ello implique el desplazamiento desde sus localidades, reduciéndose además los tiempos para la resolución de los juicios.
- La propuesta consta de dos partes: en la primera se adiciona el artículo 1-A, en el se presentan definiciones de conceptos ligados al uso de las nuevas tecnologías, además se reforman los artículos 4, 13, 14, 24 y 31de la Ley Federal de Procedimientos Contencioso Administrativo, adicionándole al Título Segundo el Capítulo X denominado ``Del juicio en Línea'', integrado por los artículos 58-A, 58-B, 58-C, 58-D, 58-E, 58-F, 58-G, 58-H, 58-I, 58-J, 58-K, 58-L, 58-M, 58-N, 58-O, 58-P, 58-Q 58-R, y 58-S. En la segunda parte se reforman los artículos 37, 41, 47, 48, 49, y 50 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
- Con las modificaciones antes señaladas, se busca que el juicio contencioso administrativo, se substancie y resuelva a través de Internet, utilizando para este efecto la página web del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Se considera que esto es posible porque el proceso del juicio antes referido se integra por trámites que son susceptibles de llevarse a cabo a través de un sistema en línea.
- Se estima que la estrategia denominada ``juicio en línea'' signifique importantes ahorros en costos generales de viaje y en gastos de fotocopiado, tanto para los justiciables como para las autoridades involucradas, y que una vez que el ``expediente electrónico quede debidamente integrado, se

facilitará el proceso general que siguen los juicios de nulidad, reduciéndose los tiempos de espera, y revirtiendo la tendencia de los últimos años en el inventario de asuntos pendientes por resolver''.

- En la evaluación de impacto presupuestario emitida por el tribunal se señala que el costo total es de 374.3 millones de pesos; de los cuales, el Comité Técnico del Fondo Nacional para el Fortalecimiento y Modernización de la Impartición de Justicia (Fondo Júrica), a solicitud expresa del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, aprobó destinar, durante el ejercicio 2009, para la planeación, diseño y desarrollo de dos subproductos específicos del juicio en línea, recursos por la cantidad de 84.8 millones de pesos y el restante que representa 289.5 millones de pesos a erogarse en los ejercicios fiscales de 2009 y 2010 se cubrirá, de acuerdo con lo expresado en dicha evaluación, con cargo al presupuesto aprobado al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, mediante movimientos compensados; asimismo, el costo de operación para los ejercicios 2011, 2012, 2013 y 2014 de 181.5 millones de pesos, será financiado, de conformidad con lo señalado en la misma evaluación, con el presupuesto federal que se autorice al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en cada uno de esos ejercicios fiscales.
- Asimismo, se tiene previsto la creación de una plaza nivel LB1 en el tribunal, para la designación de un coordinador general, líder del proyecto ``juicio en línea'' , quién tendrá como misión básica dirigir y supervisar que tanto el diseño y la operación del proyecto garanticen la obtención de los beneficios previstos y su costo se cubrirá, conforme a lo indicado en la evaluación de impacto presupuestario emitida por el tribunal, con cargo al presupuesto aprobado al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

En opinión de esta DGPyP ``A'' a efecto de reflejar en el proyecto de ley lo dicho por el tribunal en su evaluación de impacto presupuestario, se deberá incluir un artículo transitorio que establezca lo siguiente:

``Décimo. Los recursos necesarios para la implementación y cumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto provendrán de recursos fiscales autorizados en el presupuesto del Ramo 32: Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para el presente ejercicio y los subsecuentes''.

Con la inclusión del artículo referido, en opinión de la DGPyP ``A'' la iniciativa de decreto no presentaría un impacto presupuestario.

México, DF , a 13 de marzo de 2009.--- Nicolás Kubli (rúbrica), director general de Programación y Presupuesto ``A''.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Licenciada Carmen Alicia Ornelas Sañudo, directora de Legislación y Consulta Presupuestaria.--- Presente.

Me refiero a su oficio 529-IIDLCP-049/09, por el cual la Procuraduría Fiscal de la Federación remite para efectos de recabar el dictamen de impacto presupuestario de esta subsecretaría, el anteproyecto de ``iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa'', así como la evaluación de impacto presupuestario correspondientes.

Sobre el particular, con fundamento en los artículos 18, último párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 18 a 20 de su reglamento; 65 y 65-B, fracciones III y VIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y con base en lo dispuesto en el acuerdo por el que se emiten los lineamientos para la elaboración, revisión y seguimiento de iniciativas de leyes y decretos del Ejecutivo federal (publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de septiembre de 2003), para los efectos del dictamen de impacto presupuestario a que se refieren las disposiciones de la ley anteriormente citada y de su reglamento, le informo lo siguiente:

1. Esta área, con base en lo dispuesto en el artículo 20 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidades Hacendaria, no tiene observaciones en el ámbito jurídico presupuestario sobre las disposiciones contenidas en el anteproyecto señalado anteriormente.
2. Se anexa copia del oficio número 315-A-01108, de fecha 13 de marzo del año en curso, emitido por la Dirección General de Programación y Presupuesto ``A''.

Lo anterior se hace de su conocimiento para los efectos de lo dispuesto en el artículo 20, último párrafo, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el cual señala que la evaluación de impacto presupuestario y su dictamen se anexarán a la iniciativa de ley o decreto que se presente al Congreso de la Unión.

La presente opinión se emite sobre la versión del anteproyecto antes citado, recibida el día 13 de marzo de 2009, por lo que nos reservamos la emisión de los comentarios respecto de las modificaciones que, en su caso, se realicen a dicha versión.

Atentamente
México, DF, a 13 de marzo de 2009.--- Licenciado J. Rafael Fernández de Lara y Olivares (rúbrica), subdirector.»

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña : Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Continúe, señor Secretario.

15-04-2009
Cámara de Diputados.
DICTAMEN de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Aprobado en lo general y en lo particular con 313 votos en pro, 0 en contra y 2 abstenciones.
Se turnó a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales. Gaceta Parlamentaria, 14 de abril de 2009.
Discusión y votación, 15 de abril de 2009.

DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, Y ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción I, y 73, fracciones XXIX-H y XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ejecutivo federal sometió a consideración de la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Los integrantes de esta comisión, con base en las facultades que les confieren los artículos 39, 44 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 56, 87 y 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis de la iniciativa antes señalada y conforme a las deliberaciones que de la misma se realizaron, presenta a esta honorable asamblea el siguiente dictamen:

Antecedentes

En la sesión del 26 de marzo de 2009, el Ejecutivo Federal presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. En la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su estudio y dictamen.

Para lo anterior, esta comisión llevó a cabo diversas consultas y reuniones de trabajo con representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, colegios e instituciones académicas y diversos sectores interesados en la materia.

Contenido de la iniciativa

La iniciativa refiere que es imperativo para el Estado garantizar el acceso efectivo a la justicia para la consolidación de una verdadera cultura de legalidad que norme la conducta de los ciudadanos y forme parte integral de su vida cotidiana.

Se precisa que en nuestro sistema de procuración e impartición de justicia existen graves rezagos que limitan la eficacia con que éste se desempeña, y que se traducen en una mayor desconfianza de los ciudadanos frente a las instituciones encargadas de protegerlos.

Concretamente, por lo que hace al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el número de juicios ingresados ante ése Tribunal se ha ido incrementando a partir del año 2000, junto con la ampliación de su competencia, por lo que de un inventario de 37,511 expedientes con que contaba en ese año, se llegó a la cantidad de 118,006 expedientes en 2007, lo cual no es proporcional con su número de salas regionales con las que cuenta, propiciándose de esta forma una dilación en la resolución de los juicios, llegando a 355 días hábiles promedio transcurridos para resolver un juicio.

Por lo anterior, el Ejecutivo federal destaca que los cambios en la demanda de los servicios judiciales y las exigencias respecto de su cumplimiento obligan a establecer estrategias de gestión modernas que permitan hacer más eficiente la actividad jurisdiccional en su conjunto, en beneficio de las labores sustantivas de esa institución, lo que coincide además con los objetivos contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, consistentes en modernizar el sistema de justicia para lograr un marco normativo que garantice justicia pronta y eficaz, mediante el impulso de reformas procesales que hagan más expedita la aplicación de la justicia.

De igual manera, la iniciativa enfatiza que para lograr un mayor acceso de la sociedad a la impartición de justicia, en la organización de ese sistema, se deben aprovechar los notables avances y adelantos en materia de tecnologías de la información, para que los órganos jurisdiccionales en general hagan uso de dichos avances tecnológicos en la tramitación de juicios, desde una perspectiva interna en la toma de decisiones, la gestión y la resolución de los asuntos; así como externa, para mejorar los servicios a sus usuarios, lo que se traduce en la posibilidad de que más mexicanos tengan acceso a la justicia, logrando una justicia más expedita, eficaz, moderna y confiable para todos.

Para enfrentar con oportunidad la coyuntura que ahora se presenta, la iniciativa presentada por el Ejecutivo federal propone implementar que el juicio contencioso administrativo federal pueda tramitarse también por vía electrónica, acorde al compromiso adquirido por México en la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información celebrada en Túnez del 16 al 18 de noviembre de 2005, para utilizar las ventajas que las tecnologías de la información y la comunicación pueden aportar a la humanidad de manera en que puedan transformar las actividades y la vida de las personas, así como su interacción, para un mejor futuro.

En ese orden de ideas, la iniciativa a dictamen estima conveniente adicionar a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en su Título II, el Capítulo X, "Del Juicio en Línea", a fin de regular de manera específica la tramitación y resolución del juicio contencioso administrativo federal a través de medios electrónicos.

Destaca de la iniciativa que nos ocupa, en la parte relativa al "juicio en línea" aspectos tales como:

a) La posibilidad de que los particulares puedan impugnar los actos y resoluciones administrativas de carácter individual o general, utilizando los dispositivos electrónicos y sistemas computacionales ("en línea"), al cual le serán aplicables todas las disposiciones de la propia Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y en el que sólo varían aspectos formales para su tramitación.

b) Se deja a elección de los particulares si el juicio en el que sean parte se tramitará en la forma tradicional (por escrito) o en línea (por medios electrónicos).

c) Se prevé que la integración y consulta de los expedientes que se formen con la tramitación de los juicios ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se realice a través de "Internet".

d) El trámite del juicio "en línea", queda condicionado a que en la demanda se señale expresamente la dirección de correo electrónico para recibir el aviso para el ingreso al Sistema de Justicia en Línea.

e) En caso de que se elija por el particular el juicio en línea, será obligatorio dicho trámite para las autoridades demandadas.

f) Si en un juicio decide el particular demandante o demandado que el trámite se realice en línea, y exista un tercero interesado que no coincida con ello, el juicio se tramitará en la forma tradicional respecto del tercero y "en línea" respecto de las demás partes.

g) Se prevé la implementación de un "Sistema de Justicia en Línea" por parte del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para la substanciación del juicio en línea, el cual deberá garantizar la inalterabilidad, autenticidad, durabilidad y seguridad de todos los documentos, promociones y actuaciones que se ingresen en el mismo y que conformen los expedientes que serán electrónicos.

h) Además, se establece que el tribunal deberá determinar mediante acuerdos y/o reglamentos, los lineamientos técnicos y formales, a fin de uniformar los programas y sistemas adecuados y determinar las características técnicas que deban cumplir las promociones y documentos que se presenten.

i) Conforme a la iniciativa sujeta a dictamen, en el juicio "en línea" todas las promociones y documentos deberán ser presentados ante el Tribunal de manera digital y contendrán la firma electrónica avanzada que los valide, que será equivalente a la firma autógrafa, misma que será proporcionada por el tribunal cuando sea solicitada mediante los formatos que para tal efecto se proporcionarán en la página electrónica del tribunal.

j) Queda establecido que al hacer la solicitud de la firma electrónica avanzada mediante el formato referido anteriormente, los particulares quedarán enterados de que las notificaciones del juicio se le harán llegar vía electrónica.

k) Se establece como obligación expresa de las partes en el juicio, accesar en un plazo de tres días al Sistema de Justicia en Línea, a fin de evitar dilaciones en el procedimiento, y para el caso de no cumplir con dicha obligación, la notificación correspondiente se hará al cuarto día, mediante lista.

l) La iniciativa contempla que mediante el Sistema de Justicia en Línea, el tribunal emitirá un acuse de recibo que señale fecha y hora de recepción de las promociones y documentos que sean enviados y dirigidos al expediente correspondiente, así como las constancias correspondientes con fecha y hora en la que se abran los correos electrónicos que se envíen a las partes como notificación, las cuales se integraran al expediente electrónico por el actuario.

m) Se establece que las notificaciones a las que se tenga acceso, así como la consulta del expediente y la presentación de promociones y pruebas, que se hicieren con el uso de la firma y clave electrónicas de las partes en juicio, se entenderán hechas por el titular de las mismas.

n) De la misma forma, se establece que los funcionarios que intervienen en la integración del juicio en línea como son magistrados instructores y secretarios de acuerdos, contarán con sus correspondientes firmas electrónica y digital, con la que validarán sus actuaciones.

o) En cuanto a las pruebas, se contempla que las documentales que se presenten en el juicio en línea, tendrán el mismo valor probatorio que sus constancias físicas, siempre que se hubieren respetado los lineamientos técnicos que respecto de su transmisión y recepción se determinen en los lineamientos que se emitan.

p) Se contempla la posibilidad de desahogo de pruebas diversas a las documentales, y para ello se prevé que el secretario de acuerdos a cuya mesa corresponda el asunto, digitalice e incorpore

al expediente electrónico las constancias de las diligencias que se lleven a cabo y haga constar en el mismo el resguardo de los originales físicos y de los bienes muebles que hubiesen sido presentados para el desahogo de la prueba correspondiente.

q) Se establece en la iniciativa a dictamen, el impedimento para continuar y utilizar a futuro el trámite de juicios en línea ante el Tribunal y la sanción administrativa para quien indebidamente altere, destruya o provoque la pérdida de información contenida en el Sistema de Justicia en Línea del tribunal, con independencia de las sanciones penales que en su caso pudieran proceder.

r) De igual manera se prevén los casos de contingencia en cuanto a fallas temporales en el Sistema de Justicia en Línea del tribunal, señalando la forma en la que las partes deberán de cumplir con los términos legales para la presentación de las promociones que correspondan en el trámite de los juicios en los que intervengan.

Asimismo, la iniciativa en estudio precisa que en el Código Penal Federal, ya se encuentran tipificados los delitos relativos a la alteración o uso indebido de la información contenida en sistemas o equipos de informática, específicamente en los artículos del 211 Bis 1 al 211 Bis 7, del Capítulo II, denominado "Acceso Ilícito a Sistemas y Equipos de Informática", del Título Noveno, "Revelación de Secretos y Acceso Ilícito a Sistemas y Equipos de Informática", ubicado en el Libro Segundo del citado código.

Por otra parte, en su iniciativa el Ejecutivo Federal propone reformar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a fin de que exista control y vigilancia en la operación y uso del Sistema de Justicia en Línea del Tribunal y se delimiten responsabilidades; se regulen las atribuciones necesarias para los funcionarios públicos del Tribunal, en concordancia a lo establecido en la ley adjetiva y al ámbito de su competencia, y que consisten en las siguientes:

a) En su artículo 41, fracciones XXX y XXI, en los cuales se otorga a la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal la facultad de verificar el correcto funcionamiento del Sistema de Justicia en Línea.

b) En los artículos 37 fracción VIII y 38 fracción X, en los que se otorga la responsabilidad de los Magistrados Instructores, de verificar tanto el correcto funcionamiento del Sistema de Justicia en Línea, como la integración de los expedientes electrónicos.

c) En los artículos 47, fracción VIII; 48, fracción VII; 49, fracción V; y 50, fracción VI; por los que se otorga al secretario general de acuerdos, a los secretarios adjuntos de acuerdos de las secciones y a los secretarios de acuerdos de Sala Superior y de Salas Regionales, la facultad de digitalizar documentos y actuaciones que deban ser integrados a los expedientes electrónicos que en turno les corresponda, así como imprimir y certificar las constancias de dichos expedientes.

Consideraciones de la comisión

Esta comisión coincide con el Ejecutivo federal en que, ante la demanda social actual de un sistema de procuración e impartición de justicia que brinde servicios judiciales de calidad, de manera pronta y expedita, se deben establecer estrategias de gestión modernas que permitan hacer más eficiente la actividad jurisdiccional en su conjunto, en beneficio de las labores sustantivas de dichas instituciones.

Por otro lado, se advierte que tal y como se precisa en la iniciativa a estudio, en los últimos años los juicios promovidos ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se han incrementado en forma considerable, lo que ha generado un importante rezago en el trámite y substanciación de los mismos, lo anterior se advierte del informe de actividades del año 2008 rendido por el magistrado presidente de dicho tribunal, en el que se señaló expresamente lo siguiente:

"Durante el periodo que se informa, el pleno de la Sala Superior examinó 987 asuntos, 60 por ciento más que el año anterior, y resolvió 731, es decir 46 por ciento más que el año pasado.

(…)

No obstante, el crecimiento de la estructura jurisdiccional del Tribunal no ha sido proporcional con la ampliación de su competencia. Tan sólo un dato.

Las 41 salas regionales del país dieron **ingreso a 136 mil 328 demandas nuevas**, que sumadas, al inventario inicial, **ascendieron a 254 mil 124 asuntos**.

Es importante destacar que durante el año que se informa, se consiguió un número de asuntos superior al ingresado, con lo que no sólo alcanzamos el punto de equilibrio, sino que rompimos una inercia de mucho tiempo y comenzamos a abatir el rezago.

(…)

En concreto, **logramos concluir 147 mil 537 asuntos**, es decir 8.2 por ciento más que los ingresados. En este mismo lapso, el monto del interés económico de los juicios resueltos en todo el tribunal ascendió a 73 mil 421 millones de pesos.

(…)

Durante 1998, al tribunal ingresaron 40 mil nuevas demandas y contaba con 30 salas regionales. 10 años después, **en 2008, ingresaron 136 mil nuevas demandas a las 41 salas regionales que hoy tiene el tribunal.**

De esta manera, **durante los últimos 10 años el número de nuevas demandas se incrementó en 240 por ciento, mientras que la estructura jurisdiccional aumentó tan sólo un 37 por ciento.**

(…)"

Asimismo, la que dictamina coincide con el Ejecutivo Federal respecto de que los cambios en la demanda de los servicios judiciales y las exigencias respecto de su cumplimiento obligan a establecer estrategias de gestión que permitan hacer más eficiente la actividad jurisdiccional, por lo que en ese sentido resulta viable aprovechar los avances tecnológicos disponibles que hagan más eficiente la tramitación de juicios, mediante la implementación de sistemas modernos y confiables que permitan a la sociedad de forma fácil y rápida acceder a la impartición de justicia, así como el uso de otros sistemas ya generalizados como la red mundial o "Internet".

Como se advierte del contenido de la iniciativa sujeta a dictamen, la posibilidad de que los particulares puedan impugnar los actos y resoluciones administrativas de carácter individual o general que les perjudiquen, a través de dispositivos electrónicos y sistemas computacionales, por una parte, permite aprovechar dichas tecnologías para una mejor impartición de justicia, tanto desde una perspectiva interna, facilitando el control, consulta, manejo, almacenamiento y análisis, necesarios para la toma de decisiones, la gestión y la resolución de los asuntos; y por otra parte, también permitiría mejorar los servicios que se presenten a las partes que pretendan se les administre justicia mediante un acceso más simplificado al juicio contencioso administrativo.

Esta comisión estima que, es procedente la reforma propuesta en el sentido de establecer como instrumentos jurídicos procesales la aplicación de mensajes de datos, la firma electrónica avanzada y

la conservación por medios electrónicos de la información generada, comunicada y archivada a través de medios ópticos y de cualquier otra tecnología equivalente, que haga posible la conversión de papel a medios virtuales, para una administración de justicia más ágil, pronta y expedita, sirviéndose para ello de herramientas generalizadas entre la sociedad tales como: correo electrónico o la "Internet"; o bien otros específicamente diseñados para tal efecto: formatos contenidos en medios informáticos, sistemas de cómputo confiables que pongan especial énfasis en la seguridad del resguardo de la información plasmada en los actos procesales, la publicación de acuerdos judiciales en páginas de "Internet", la Firma electrónica avanzada, y soportes electrónicos para el archivo y manejo de expedientes.

Así, esta dictaminadora estima que la implementación de un Sistema de Justicia en Línea por parte del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en los términos precisados en la iniciativa sujeta a dictamen, sería un mecanismo determinante para la consolidación de ese Tribunal como una instancia que garantice seguridad jurídica y una eficaz impartición de justicia.

Esta dictaminadora considera relevante hacer énfasis en el hecho de que, la reforma que se dictamina, sea el mecanismo parteaguas para que la tramitación de otros juicios se substancien a través de medios electrónicos, con el objeto de que los beneficios que tiene esta reforma se reflejen en todo el ámbito judicial de nuestro país.

Por lo anterior, la Comisión de Hacienda y Crédito Público pone a consideración del Pleno el siguiente

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

Artículo Primero. Se **reforman** los artículos 4o., primer párrafo; 13, primero y actual segundo párrafos; 14, fracción I, segundo, tercero y quinto párrafos; 24, fracción I y el inciso a); 65, primer párrafo; 66; 67, último párrafo, y 68, primer párrafo; y se **adicionan** los artículos 1-A; 13, con los párrafos segundo y tercero, recorriéndose los demás párrafos en su orden; 14, con un tercer párrafo, recorriéndose los demás párrafos en su orden; 31, con un párrafo segundo, y el Capítulo X, denominado "Del Juicio en Línea", al Título II, que comprende de los artículos 58-A al 58-S a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, para quedar como sigue:

Artículo 1-A. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I. Acuse de Recibo Electrónico: Constancia que acredita que un documento digital fue recibido por el Tribunal y estará sujeto a la misma regulación aplicable al uso de una firma electrónica avanzada. En este caso, el acuse de recibo electrónico identificará a la Sala que recibió el documento y se presumirá, salvo prueba en contrario, que el documento digital fue recibido en la fecha y hora que se consignen en dicha constancia. El Tribunal establecerá los medios para que las partes y los autorizados para recibir notificaciones puedan verificar la autenticidad de los acuses de recibo electrónico.

II. Archivo Electrónico: Información contenida en texto, imagen, audio o video generada, enviada, recibida o archivada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología que forma parte del Expediente Electrónico.

III. Boletín Procesal: Medio de comunicación oficial impreso o electrónico, a través del cual el Tribunal da a conocer las actuaciones o resoluciones en los juicios contenciosos administrativos federales que se tramitan ante el mismo.

IV. Clave de acceso: Conjunto único de caracteres alfanuméricos asignados por el Sistema de Justicia en Línea del Tribunal a las partes, como medio de identificación de las personas facultadas en el juicio en que promuevan para utilizar el Sistema, y asignarles los privilegios de consulta del expediente respectivo o envío vía electrónica de promociones relativas a las actuaciones procesales con el uso de la firma electrónica avanzada en un procedimiento contencioso administrativo.

V. Contraseña: Conjunto único de caracteres alfanuméricos, asignados de manera confidencial por el Sistema de Justicia en Línea del Tribunal a los usuarios, la cual permite validar la identificación de la persona a la que se le asignó una Clave de Acceso.

VI. Dirección de Correo Electrónico: Sistema de comunicación a través de redes informáticas, señalado por las partes en el juicio contencioso administrativo federal.

VII. Dirección de Correo Electrónico Institucional: Sistema de comunicación a través de redes informáticas, dentro del dominio definido y proporcionado por los órganos gubernamentales a los servidores públicos.

VIII. Documento Electrónico o Digital: Todo mensaje de datos que contiene texto o escritura generada, enviada, recibida o archivada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología que forma parte del Expediente Electrónico.

IX. Expediente Electrónico: Conjunto de información contenida en archivos electrónicos o documentos digitales que conforman un juicio contencioso administrativo federal, independientemente de que sea texto, imagen, audio o video, identificado por un número específico.

X. Firma Digital: Medio gráfico de identificación en el Sistema de Justicia en Línea, consistente en la digitalización de una firma autógrafa mediante un dispositivo electrónico, que es utilizada para reconocer a su autor y expresar su consentimiento.

XI. Firma Electrónica Avanzada: Conjunto de datos consignados en un mensaje electrónico adjuntados o lógicamente asociados al mismo que permita identificar a su autor mediante el Sistema de Justicia en Línea, y que produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. La firma electrónica permite actuar en Juicio en Línea.

XII. Juicio en la vía tradicional: El juicio contencioso administrativo federal que se substancia recibiendo las promociones y demás documentales en manuscrito o impresos en papel, y formando un expediente también en papel, donde se agregan las actuaciones procesales.

XIII. Juicio en línea: Substanciación y resolución del juicio contencioso administrativo federal en todas sus etapas, así como de los procedimientos previstos en el artículo 58 de esta Ley, a través del Sistema de Justicia en Línea.

XIV. Sistema de Justicia en Línea: Sistema informático establecido por el Tribunal a efecto de registrar, controlar, procesar, almacenar, difundir, transmitir, gestionar, administrar y notificar el procedimiento contencioso administrativo que se sustancie ante el Tribunal.

XV. Tribunal: Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Artículo 4o. Toda promoción deberá contener la firma autógrafa o la firma electrónica avanzada de quien la formule y sin este requisito se tendrá por no presentada. Cuando el promovente en

un Juicio en la vía tradicional, no sepa o no pueda estampar su firma autógrafa, estampará en el documento su huella digital y en el mismo documento otra persona firmará a su ruego.

…

Título II
De la Substanciación y Resolución del Juicio

Capítulo I
De la Demanda

Artículo 13. El demandante podrá presentar su demanda, mediante Juicio en la vía tradicional, por escrito ante la sala regional competente o, en línea, a través del Sistema de Justicia en Línea, para este último caso, el demandante deberá manifestar su opción al momento de presentar la demanda. Una vez que el demandante haya elegido su opción no podrá variarla. Cuando la autoridad tenga este carácter la demanda se presentará en todos los casos en línea a través del Sistema de Justicia en Línea.

Para el caso de que el demandante no manifieste su opción al momento de presentar su demanda se entenderá que eligió tramitar el Juicio en la vía tradicional.

La demanda deberá presentarse dentro de los plazos que a continuación se indican:

I. a III. …

Cuando el demandante tenga su domicilio fuera de la población donde esté la sede de la Sala, la demanda podrá enviarse a través de Correos de México, mediante correo certificado con acuse de recibo, siempre que el envío se efectúe en el lugar en que resida el demandante, pudiendo en este caso señalar como domicilio para recibir notificaciones, el ubicado en cualquier parte del territorio nacional, salvo cuando tenga su domicilio dentro de la jurisdicción de la Sala competente, en cuyo caso, el señalado para tal efecto, deberá estar ubicado dentro de la circunscripción territorial de la Sala.

…
…

Artículo 14. …
I. El nombre del demandante y su domicilio para recibir notificaciones en cualquier parte del territorio nacional, así como su Dirección de Correo Electrónico, cuando opte porque el juicio se substancie en línea a través del Sistema de Justicia en Línea.

II. a VIII. …

En cada demanda sólo podrá aparecer un demandante, salvo en los casos que se trate de la impugnación de resoluciones conexas, o que se afecte los intereses jurídicos de dos o más personas, mismas que podrán promover el juicio contra dichas resoluciones en una sola demanda.

En los casos en que sean dos o más demandantes éstos ejercerán su opción a través de un representante común.

En la demanda en que promuevan dos o más personas en contravención de lo dispuesto en el párrafo anterior, el Magistrado Instructor requerirá a los promoventes para que en el plazo de cinco días presenten cada uno de ellos su demanda correspondiente, apercibidos que de no hacerlo se desechará la demanda inicial.

Cuando se omita el nombre del demandante o los datos precisados en las fracciones II y VI, el Magistrado Instructor desechará por improcedente la demanda interpuesta. Si se omiten los datos previstos en las fracciones III, IV, V, VII y VIII, el Magistrado Instructor requerirá al promovente para que los señale dentro del término de cinco días, apercibiéndolo que de no hacerlo en tiempo se tendrá por no presentada la demanda o por no ofrecidas las pruebas, según corresponda.

En el supuesto de que conforme a lo dispuesto en la fracción I de este artículo, no se señale el domicilio del demandante en la jurisdicción de la Sala Regional que corresponda o se desconozca el domicilio del tercero, las notificaciones relativas se efectuarán por lista autorizada, que se fijará en sitio visible de la propia Sala, así como en el Boletín Procesal que emita el Tribunal, el cual estará disponible en su página electrónica. En caso de que el actor desconozca el domicilio del tercero, deberá manifestarlo así bajo protesta de decir verdad.

Artículo 24. …

I. La promoción en donde se soliciten las medidas cautelares señaladas, deberá contener los siguientes requisitos:

a) El nombre del demandante y su domicilio para recibir notificaciones en cualquier parte del territorio nacional, así como su Dirección de Correo Electrónico, cuando opte porque el juicio se substancie en línea a través del Sistema de Justicia en Línea.

b) a d) ... II. …

…

…

…

Artículo 31. …

I. a III. …

Para el caso en que proceda la acumulación y los juicios respectivos se estén sustanciando por la vía tradicional y el juicio en línea, el Magistrado Instructor requerirá a las partes relativas al Juicio en la vía tradicional para que en el plazo de tres días manifiesten si optan por substanciar el juicio en línea, en caso de que no ejerza su opción se tramitara el Juicio en la vía tradicional.

Capítulo X
Del Juicio en Línea

Artículo 58-A. El juicio contencioso administrativo federal se promoverá, substanciará y resolverá en línea, a través del Sistema de Justicia en Línea que deberá establecer y desarrollar el Tribunal, en términos de lo dispuesto por el presente Capítulo y las demás disposiciones específicas que resulten aplicables de esta Ley. En todo lo no previsto, se aplicarán las demás disposiciones que resulten aplicables de este ordenamiento.

Artículo 58-B. Cuando el demandante ejerza su derecho a presentar su demanda en línea a través del Sistema de Justicia en Línea del Tribunal, las autoridades demandadas deberán comparecer y tramitar el juicio en la misma vía.

Si el demandante no señala expresamente su Dirección de Correo Electrónico, el se tramitará el Juicio en la vía tradicional y el acuerdo correspondiente se notificará por lista y en el Boletín Procesal del Tribunal.

Artículo 58-C. Cuando la demandante sea una autoridad, el particular demandado, al contestar la demanda, tendrá derecho a ejercer su opción para que el juicio se tramite y resuelva en línea conforme a las disposiciones de este Capítulo, señalando para ello su domicilio y Dirección de Correo Electrónico.

A fin de emplazar al particular demandado, el Secretario de Acuerdos que corresponda, imprimirá y certificará la demanda y sus anexos que se notificarán de manera personal.

Si el particular rechaza tramitar el juicio en línea contestará la demanda mediante el Juicio en la vía tradicional.

Artículo 58-D. En el Sistema de Justicia en Línea del Tribunal se integrará el Expediente Electrónico, mismo que incluirá todas las promociones, pruebas y otros anexos que presenten las partes, oficios, acuerdos, y resoluciones tanto interlocutorias como definitivas, así como las demás actuaciones que deriven de la substanciación del juicio en línea, garantizando su seguridad, inalterabilidad, autenticidad, integridad y durabilidad, conforme a los lineamientos que expida el Tribunal.

En los juicios en línea, la autoridad requerida, desahogará las pruebas testimoniales utilizando el método de videoconferencia, cuando ello sea posible.

Artículo 58-E. La Firma Electrónica Avanzada, Clave de Acceso y Contraseña se proporcionarán, a través del Sistema de Justicia en Línea del Tribunal, previa obtención del registro y autorización correspondientes. El registro de la Firma Electrónica Avanzada, Clave de Acceso y Contraseña, implica el consentimiento expreso de que dicho Sistema registrará la fecha y hora en la que se abran los Archivos Electrónicos, que contengan las constancias que integran el Expediente Electrónico, para los efectos legales establecidos en este ordenamiento.

Para hacer uso del Sistema de Justicia en Línea deberán observarse los lineamientos que, para tal efecto, expida el Tribunal.

Artículo 58-F. La Firma Electrónica Avanzada producirá los mismos efectos legales que la firma autógrafa y garantizará la integridad del documento, teniendo el mismo valor probatorio.

Artículo 58-G. Solamente, las partes, las personas autorizadas y delegados tendrán acceso al Expediente Electrónico, exclusivamente para su consulta, una vez que tengan registrada su Clave de Acceso y Contraseña.

Artículo 58-H. Los titulares de una Firma Electrónica Avanzada, Clave de Acceso y Contraseña serán responsables de su uso, por lo que el acceso o recepción de las notificaciones, la consulta al Expediente Electrónico y el envío de información mediante la utilización de cualquiera de dichos instrumentos, les serán atribuibles y no admitirán prueba en contrario, salvo que se demuestren fallas del Sistema de Justicia en Línea.

Artículo 58-I. Una vez recibida por vía electrónica cualquier promoción de las partes, el Sistema de Justicia en Línea del Tribunal emitirá el Acuse de Recibo Electrónico correspondiente, señalando la fecha y la hora de recibido.

Artículo 58-J. Cualquier actuación en el Juicio en Línea se efectuará a través del Sistema de Justicia en Línea del Tribunal en términos del presente Capítulo. Dichas actuaciones serán validadas con las firmas electrónicas y firmas digitales de los Magistrados y Secretarios de Acuerdos que den fe según corresponda.

Artículo 58-K. Los documentos que las partes ofrezcan como prueba, incluido el expediente administrativo a que se refiere el artículo 14, fracción V, de esta Ley, deberán exhibirlos de forma legible a través del Sistema de Justicia en Línea del Tribunal.

Tratándose de documentos digitales, se deberá manifestar la naturaleza de los mismos, especificando si la reproducción digital corresponde a una copia simple, una copia certificada o al original y tratándose de esta última, si tiene o no firma autógrafa. Los particulares deberán hacer esta manifestación bajo protesta de decir verdad, la omisión de la manifestación presume en perjuicio solo del promovente, que el documento digitalizado corresponde a una copia simple.

Las pruebas documentales que ofrezcan y exhiban las partes tendrán el mismo valor probatorio que su constancia física, siempre y cuando se observen las disposiciones de la presente Ley y de los acuerdos normativos que emitan los órganos del Tribunal para asegurar la autenticidad de la información, así como de su transmisión, recepción, validación y notificación.

Artículo 58-L. Para el caso de pruebas diversas a las documentales, los instrumentos en los que se haga constar la existencia de dichas pruebas se integrarán al Expediente Electrónico. El Secretario de Acuerdos a cuya mesa corresponda el asunto, deberá digitalizar las constancias relativas y procederá a la certificación de su cotejo con los originales físicos, así como a garantizar el resguardo de los originales y de los bienes materiales que en su caso hubieren sido objeto de prueba.

Para el caso de pruebas diversas a las documentales, éstas deberán ofrecerse en la demanda y ser presentadas a la Sala que esté conociendo del asunto, en la misma fecha en la que se registre en el Sistema de Justicia en Línea del Tribunal la promoción correspondiente a su ofrecimiento, haciendo constar su recepción por vía electrónica.

Artículo 58-M. Para los juicios que se substancien en términos de este capítulo no será necesario que las partes exhiban copias para correr los traslados que la Ley establece, salvo que hubiese tercero interesado, en cuyo caso, a fin de correrle traslado, el demandante deberá presentar la copia de traslado con sus respectivos anexos.

En el escrito a través del cual el tercero interesado se apersone en juicio, deberá precisar si desea que el juicio se continúe substanciando en línea y señalar en tal caso, su Dirección de Correo Electrónico. En caso de que manifieste su oposición, la Sala dispondrá lo conducente para que se digitalicen los documentos que dicho tercero presente, a fin de que se prosiga con la instrucción del juicio en línea con relación a las demás partes, y a su vez, se impriman y certifiquen las constancias de las actuaciones y documentación electrónica, a fin de que se integre el expediente del tercero en un Juicio en la vía tradicional.

Artículo 58-N. Las notificaciones que se practiquen dentro del juicio en línea, se efectuarán conforme a lo siguiente:

I. Todas las actuaciones y resoluciones que conforme a las disposiciones de esta Ley deban notificarse en forma personal, mediante correo certificado con acuse de recibo, o por oficio, se deberán realizar a través del Sistema de Justicia en Línea del Tribunal.

II. El actuario deberá elaborar la minuta electrónica en la que precise la actuación o resolución a notificar, así como los documentos que se adjunten a la misma. Dicha minuta, que contendrá la Firma Electrónica Avanzada del actuario, será ingresada al Sistema de Justicia en Línea del Tribunal junto con la actuación o resolución respectiva y los documentos adjuntos.

III. El actuario enviará a la Dirección de Correo Electrónico de la o las partes a notificar, un aviso informándole que se ha dictado una actuación o resolución en el Expediente Electrónico, la cual está disponible en el Sistema de Justicia en Línea del Tribunal.

IV. El Sistema de Justicia en Línea del Tribunal registrará la fecha y hora en que se efectúe el envío señalado en la fracción anterior.

V. Se tendrá como legalmente practicada la notificación, conforme a lo señalado en las fracciones anteriores, cuando el Sistema de Justicia en Línea del Tribunal genere el Acuse de Recibo Electrónico donde conste la fecha y hora en que la o las partes notificadas ingresaron al Expediente Electrónico, lo que deberá suceder dentro del plazo de tres días hábiles siguientes a la fecha de envío del aviso a la Dirección de Correo Electrónico de la o las partes a notificar.

VI. En caso de que en el plazo señalado en la fracción anterior, el Sistema de Justicia en Línea del Tribunal no genere el acuse de recibo donde conste que la notificación fue realizada, la misma se efectuará mediante lista y por Boletín Procesal al cuarto día hábil contado a partir de la fecha de envío del Correo Electrónico, fecha en que se tendrá por legalmente notificado.

Artículo 58-O. Para los efectos del Juicio en Línea son hábiles las 24 horas de los días en que se encuentren abiertas al público las Oficinas de las Salas del Tribunal.

Las promociones se considerarán, salvo prueba en contrario, presentadas el día y hora que conste en el Acuse de Recibo Electrónico que emita el Sistema de Justicia en Línea del Tribunal, en el lugar en donde el promovente tenga su domicilio fiscal y, por recibidas, en el lugar de la sede de la Sala Regional a la que corresponda conocer del juicio por razón de territorio. Tratándose de un día inhábil se tendrán por presentadas el día hábil siguiente.

Artículo 58-P. Las autoridades cuyos actos sean susceptibles de impugnarse ante el Tribunal, deberán registrar en la Secretaría General de Acuerdos o ante la Presidencia de las Salas Regionales, según corresponda, la Dirección de Correo Electrónico Institucional, así como el domicilio oficial de las unidades administrativas a las que corresponda su representación en los juicios contenciosos administrativos, para el efecto de emplazarlas electrónicamente a juicio en aquellos casos en los que tengan el carácter de autoridad demandada.

En el caso de que las autoridades demandadas no cumplan con esta obligación, todas las notificaciones que deben hacerse, incluyendo el emplazamiento, se harán a través del Boletín Procesal, hasta que se cumpla con dicha formalidad.

Artículo 58-Q. Para la presentación y trámite de los recursos de revisión y juicios de amparo que se promuevan contra las actuaciones y resoluciones derivadas del Juicio en Línea, no será aplicable lo dispuesto en el presente Capítulo.

El Secretario General de Acuerdos del Tribunal, los Secretarios Adjuntos de Sección y los Secretarios de Acuerdos de Sala Superior y de Salas Regionales según corresponda, deberán imprimir el archivo del Expediente Electrónico y certificar las constancias del juicio que deban ser remitidos a los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados de Circuito, cuando se impugnen resoluciones de los juicios correspondientes a su mesa.

Sin perjuicio de lo anterior, en aquellos casos en que así lo solicite el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado se podrá remitir la información a través de medios electrónicos.

Artículo 58-R. En caso que el Tribunal advierta que alguna persona modificó, alteró, destruyó o provocó la pérdida de información contenida en el Sistema de Justicia en Línea, se tomarán las medidas de protección necesarias, para evitar dicha conducta hasta que concluya el juicio, el cual se continuará tramitando a través de un Juicio en la vía tradicional.

Si el responsable es usuario del Sistema, se cancelará su Firma Electrónica Avanzada, Clave y Contraseña para ingresar al Sistema de Justicia en Línea y no tendrá posibilidad de volver a promover juicios en línea.

Sin perjuicio de lo anterior, y de las responsabilidades penales respectivas, se impondrá al responsable una multa de trescientas a quinientas veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de cometer la infracción.

Artículo 58-S. Cuando por caso fortuito, fuerza mayor o por fallas técnicas se interrumpa el funcionamiento del Sistema de Justicia en Línea, haciendo imposible el cumplimiento de los plazos establecidos en la ley, las partes deberán dar aviso a la Sala correspondiente en la misma promoción sujeta a término, quien pedirá un reporte al titular de la unidad administrativa del Tribunal responsable de la administración del Sistema sobre la existencia de la interrupción del servicio.

El reporte que determine que existió interrupción en el Sistema deberá señalar la causa y el tiempo de dicha interrupción, indicando la fecha y hora de inicio y término de la misma. Los plazos se suspenderán, únicamente, el tiempo que dure la interrupción del Sistema. Para tal efecto, la Sala hará constar esta situación mediante acuerdo en el expediente electrónico y, considerando el tiempo de la interrupción, realizara el computo correspondiente, para determinar si hubo o no incumplimiento de los plazos legales.

Artículo 65. Toda resolución debe notificarse, o en su caso, darse el aviso en la Dirección de Correo Electrónico señalada, a más tardar el tercer día siguiente a aquél en que el expediente haya sido turnado al actuario para ese efecto y se asentará la razón respectiva a continuación de la misma resolución.

…
…

Artículo 66. En las notificaciones, el actuario deberá asentar razón del envío por correo o entrega de los oficios de notificación y de los avisos en la Dirección de Correo Electrónico, así como de las notificaciones personales y por lista. Los acuses postales de recibo y las piezas certificadas devueltas se agregarán como constancia a dichas actuaciones.

Artículo 67. …
…
…

…

Las partes que así lo deseen, podrán señalar su clave o Dirección de Correo Electrónico a la Sala Regional en que se lleve el juicio, a fin de que por este medio se les dé aviso de la emisión de los autos y demás resoluciones que en él se dicten, acompañado de un extracto de su contenido que comprenderá la fecha y órgano de emisión, los datos de identificación del expediente y el tipo de auto o resolución. Satisfecho lo anterior, el Magistrado Instructor ordenará que los avisos de que se trata se le practiquen por este medio a la parte que lo haya solicitado; el Actuario, a su vez, deberá dejar constancia en el expediente de que el aviso se envió a la Dirección de Correo Electrónico señalado hasta por tres ocasiones consecutivas y la fecha y hora en que las realizó. En estos casos, durante el plazo de cinco días siguientes a aquél en que el aviso se llevó a cabo, la parte interesada podrá apersonarse al local de la Sala a notificarse personalmente de la resolución de que se trate y, a su vencimiento, si esto último no hubiere ocurrido, se procederá a su notificación por lista.

Artículo 68. Las notificaciones que deban hacerse a las autoridades administrativas se harán por oficio y por vía telegráfica en casos urgentes. También podrán efectuarse, opcionalmente, en la forma prevista en el artículo anterior por medio del aviso en la Dirección de Correo Electrónico Institucional.

…

…

Artículo Segundo. Se reforman los artículos 37, fracción VIII y 41, fracción XXX; se adicionan los artículos 38, con una fracción X, pasando la actual a ser XI; 41, con una fracción XXXI, pasando la actual a ser XXXII y recorriéndose en su orden las demás fracciones; 47, con una fracción VIII; 48, con una fracción VII, pasando la actual a ser VIII; 49, con una fracción V, pasando la actual a ser VI y 50, con una fracción VI, pasando la actual a ser VII a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para quedar como sigue:

Capítulo V
De las Salas Regionales

Artículo 37. …

I. a VII. .....

VIII. Verificar que en la Sala se utilice y mantenga actualizado el sistema de control y seguimiento de juicios, así como el Sistema de Justicia en Línea del Tribunal;

IX. a XI.

Artículo 38.

I. a VIII. …

IX. Dictar los acuerdos y providencias relativas a las medidas cautelares provisionales en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, así como proponer a la Sala el proyecto de resolución correspondiente a la medida cautelar definitiva que se estime procedente;

X. Supervisar la debida integración de las actuaciones en el Sistema de Justicia en Línea del Tribunal, de los juicios tramitados en línea, y

XI. Las demás que les correspondan conforme a las disposiciones legales aplicables.

Capítulo VI
De la Junta de Gobierno y Administración

Artículo 41.

I. a XXIX. …

XXX. Establecer y administrar un Boletín Procesal para la notificación de las resoluciones y acuerdos, así como el control de las notificaciones que se realicen por medios electrónicos y supervisar la correcta operación y funcionamiento del Sistema de Justicia en Línea del Tribunal para la tramitación de los juicios en línea;

XXXI. Emitir los acuerdos normativos que contengan los lineamientos técnicos y formales que deban observarse en la substanciación del juicio en línea;

XXXII. Supervisar la publicación de las jurisprudencias, precedentes y tesis aisladas emitidas por las Salas y Secciones en la Revista del Tribunal;

XXXIII. a XXXV. …

Capítulo VII
De los demás Servidores Públicos del Tribunal

Artículo 47. …

I. a V. …

VI. Dirigir los archivos de la Sala Superior;

VII. Digitalizar la documentación y actuaciones que se requiera incorporar a un expediente tramitado en línea, así como imprimir y certificar las constancias de los expedientes electrónicos de la Sala Superior y las reproducciones en medios electrónicos de dichas actuaciones, y

VIII. Dar fe y expedir certificados de las constancias que obran en los expedientes que obran en la Sala Superior.

Artículo 48.
I. a V. …

VI. Dar fe y expedir certificados de constancias que obran en los expedientes de las Secciones;

VII. Digitalizar la documentación y actuaciones que se requiera incorporar a un expediente tramitado en línea, así como imprimir y certificar las constancias de los expedientes electrónicos de la Sección y las reproducciones en medios electrónicos de dichas actuaciones, y

VIII. Las demás que les encomiende el Presidente de la Sección.

Artículo 49. …
I. a III. …..

IV. Dar fe y expedir certificados de las constancias que obren en los expedientes de la Ponencia a la que estén adscritos;

V. Digitalizar la documentación y actuaciones que se requiera incorporar a un expediente tramitado en línea, así como imprimir y certificar las constancias de los expedientes electrónicos de la Ponencia a la que estén adscritos y las reproducciones en medios electrónicos de dichas actuaciones, y

VI. Desempeñar las demás atribuciones que las disposiciones aplicables les confieran.

Artículo 50. …
I. a IV. …

V. Dar fe y expedir certificados de las constancias que obren en los expedientes de la Sala a la que estén adscritos;

VI. Digitalizar la documentación y actuaciones que se requiera incorporar a un expediente tramitado en línea, así como imprimir y certificar las constancias de los expedientes electrónicos de la Sala a la que estén adscritos y las reproducciones en medios electrónicos de dichas actuaciones, y

VII. Las demás que señalen las disposiciones aplicables.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, iniciará el desarrollo e instrumentación del Sistema de Justicia en Línea a través del cual se substanciará el Juicio en Línea.

Tercero. El Tribunal deberá realizar las acciones que correspondan, a efecto de que el Juicio en Línea, inicie su operación a los 18 meses contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa promoverá una campaña masiva entre los usuarios de los servicios del Tribunal para difundir las disposiciones contenidas en este Decreto.

Cuarto. Las autoridades cuyos actos sean susceptibles de impugnarse ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a través del Sistema de Justicia en Línea, deberán tramitar su Firma Electrónica Avanzada ante la Secretaría General de Acuerdos o ante la Presidencia de las Salas Regionales, según corresponda, y registrar su Dirección de Correo Electrónico institucional, así como el domicilio oficial de las unidades administrativas a las que corresponda su representación en los juicios contenciosos administrativos, para el efecto de emplazarlas electrónicamente a juicio, en aquellos casos en los que tengan el carácter de autoridades demandadas, a partir de los seis meses de la entrada en vigor del presente Decreto, sin exceder para ello del plazo de 18 meses a que se refiere el artículo anterior.

Quinto. En el mismo plazo señalado en el artículo anterior, las unidades administrativas a las que corresponda la representación de las autoridades cuyos actos sean susceptibles de impugnarse ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en los juicios contenciosos administrativos deberán instrumentar y mantener permanentemente actualizados los mecanismos tecnológicos, materiales y humanos necesarios para acceder al Juicio en Línea a través del Sistema de Justicia en Línea del Tribunal.

Sexto. En caso de que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa reciba una demanda por medio del Sistema de Justicia en Línea del Tribunal, y constate que la autoridad demandada, incumplió con lo señalado en el **artículo cuarto** transitorio del presente Decreto, se le prevendrá para que en el plazo de 10 días hábiles contados a partir de que se le notifique dicha prevención, proceda a cumplir con dicha disposición o, en su caso acredite que ya la cumplió.

En caso de no cumplir con la obligación a que se refiere el **artículo cuarto** transitorio el Tribunal le impondrá una multa de 100 a 200 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y todas las notificaciones que deban hacérsele, incluyendo el emplazamiento, se harán a través del Boletín Procesal, hasta que se cumpla con dicha formalidad.

Asimismo, se requerirá al superior jerárquico de aquélla para que en el plazo de 3 días hábiles, la obligue a cumplir sin demora. En caso de continuar la renuencia de la autoridad, los hechos se pondrán en conocimiento del Órgano Interno de Control que corresponda.

Séptimo. Los juicios que se encuentren en trámite ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa a la fecha en que inicie la operación del Juicio en Línea, continuarán substanciándose y se resolverán conforme a las disposiciones vigentes a la fecha de presentación de la demanda.

Octavo. El Tribunal llevará a cabo las acciones necesarias a efecto de integrar los sistemas informáticos internos en una sola plataforma tecnológica, a través del Sistema de Justicia en Línea del Tribunal.

Noveno. Para la promoción, substanciación y resolución del juicio contencioso administrativo federal a través del Sistema de Justicia en Línea, prevalecerán las disposiciones contenidas en el Capítulo X de la ley respecto de otras que se contrapongan a lo establecido en dicho Capítulo.

Décimo. Los recursos necesarios para la implementación y cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto provendrán de recursos fiscales autorizados en el presupuesto del Ramo 32: Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para el presente ejercicio y los subsecuentes.

Sala de comisiones de la honorable Cámara de Diputados, a 2 de abril de 2009.

La Comisión de Hacienda y Crédito Público

Diputados: Charbel Jorge Estefan Chidiac (rúbrica), presidente; Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez (rúbrica), Ricardo Rodríguez Jiménez, Carlos Alberto García González (rúbrica), Hugo Eduardo Martínez Padilla, José Antonio Saavedra Coronel (rúbrica), Antonio Soto Sánchez (rúbrica), Ismael Ordaz Jiménez (rúbrica), Horacio Garza Garza (rúbrica), Carlos Alberto Puente Salas (rúbrica), Juan Ignacio Samperio Montaño, Joaquín Humberto Vela González, Manuel Cárdenas Fonseca (rúbrica), Aída Marina Arvizu Rivas (rúbrica), secretarios; Samuel Aguilar Solís, José Rosas Aispuro Torres, María del Consuelo Argüelles Arellano (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama, Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, Francisco Javier Calzada Vázquez, Ramón Ceja Romero (rúbrica), José de la Torre Sánchez (rúbrica), Javier Guerrero García, Mariano González Zarur, Juan Nicasio Guerra Ochoa, José Martín López Cisneros, Lorenzo Daniel Ludlow Kuri (rúbrica), Luis Xavier Maawad Robert (rúbrica), Octavio Martínez Vargas, José Murat, Dolores María del Carmen Parra Jiménez (rúbrica), María Guadalupe Salazar Anaya (rúbrica), Mario Alberto Salazar Madera (rúbrica), Jorge Alejandro Salum del Palacio (rúbrica), Pablo Trejo Pérez.

15-04-2009
Cámara de Diputados.
DICTAMEN de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Aprobado en lo general y en lo particular con 313 votos en pro, 0 en contra y 2 abstenciones.
Se turnó a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales. Gaceta Parlamentaria, 14 de abril de 2009.
Discusión y votación, 15 de abril de 2009.

El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

La Secretaria diputada Rosa Elia Romero Guzmán: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se le dispensa la lectura. Está a discusión en lo general. No habiendo quien haya solicitado el uso de la palabra, consulte la Secretaría a la asamblea si el proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general.

La Secretaria diputada Rosa Elia Romero Guzmán: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por a afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Suficientemente discutido. Para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular, especificando de la ley que se trate.

En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cuatro minutos para proceder a la votación en lo genera y en lo particular, en un solo acto.

La Secretaria diputada Rosa Elia Romero Guzmán: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por cuatro minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto, en un solo acto.

(Votación)

¿Falta alguna diputada o diputado de emitir su voto? Sigue abierto el sistema. Ciérrese el sistema electrónico. Sonido en la curul de la diputada Leticia Herrera.

La diputada Juana Leticia Herrera Ale (desde la curul)**:** A favor.

La Secretaria diputada Rosa Elia Romero Guzmán: El diputado Espinosa Piña.

El diputado José Luís Espinosa Piña (desde la curul)**:** Cambio el sentido de mi voto, a favor.

La Secretaria diputada Rosa Elia Romero Guzmán: Diputado Juan Guerra.

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa (desde la curul)**:** A favor.

La Secretaria diputada Rosa Elia Romero Guzmán: Diputado José Luís Varela.

El diputado Tomás José Luis Varela Lagunas (desde la curul)**:** A favor.

La Secretaria diputada Rosa Elia Romero Guzmán: diputado Gerardo Priego.

El diputado Gerardo Priego Tapia (desde la curul)**:** A favor.

La Secretaria diputada Rosa Elia Romero Guzmán: Gerardo Escaroz.

El diputado Gerardo Antonio Escaroz Soler (desde la curul)**:** A favor.

La Secretaria diputada Rosa Elia Romero Guzmán: Diputada Beatriz Collado.

La diputada Beatriz Collado Lara (desde la curul)**:** A favor.

La Secretaria diputada Rosa Elia Romero Guzmán: Diputado Pedro Armendáriz.

El diputado Pedro Armendáriz García (desde la curul)**:** A favor.

La Secretaria diputada Rosa Elia Romero Guzmán: diputado Jesús de León Tello.

El diputado Jesús de León Tello (desde la curul)**:** A favor.

La Secretaria diputada Rosa Elia Romero Guzmán: Jorge Godoy.

El diputado Jorge Godoy Cárdenas (desde la curul)**:** A favor.

La Secretaria diputada Rosa Elia Romero Guzmán: Alberto López.

El diputado Alberto López Rojas (desde la curul)**:** A favor.

La Secretaria diputada Rosa Elia Romero Guzmán: Diputada Ramírez Corral.

La diputada Ivette Jacqueline Ramírez Corral (desde la curul)**:** A favor.

La Secretaria diputada Rosa Elia Romero Guzmán: Tonatiuh Bravo.

El diputado Itzcóatl tonatiu Bravo Padilla (desde la curul)**:** A favor.

La Secretaria diputada Rosa Elia Romero Guzmán: Diputado Ismael Peraza.

El diputado Ismael Peraza Valdez (desde la curul)**:** A favor.

La Secretaria diputada Rosa Elia Romero Guzmán: Arely Madrid.

La diputada Arely Madrid Tovilla (desde la curul)**:** a favor.

La Secretaria diputada Rosa Elia Romero Guzmán: Armando García.

El diputado Armando García Méndez (desde la curul)**:** A favor.

La Secretaria diputada Rosa Elia Romero Guzmán: Diputado Víctor Varela.

El diputado Víctor Gabriel Varela López (desde la curul)**:** A favor.

La Secretaria diputada Rosa Elia Romero Guzmán: El diputado Alejandro Martínez.

El diputado Alejandro Martínez Hernández (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Rosa Elia Romero Guzmán: Diputada Dolores González.

La diputada María Dolores González Sánchez (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Rosa Elia Romero Guzmán: Diputado Octavio Martínez.

El diputado Octavio Martínez Vargas (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Rosa Elia Romero Guzmán: Diputada Alicia Rodríguez.

La diputada Alicia Rodríguez Martínez (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Rosa Elia Romero Guzmán: Diputado Irineo Mendoza.

El diputado Irineo Mendoza Mendoza (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Rosa Elia Romero Guzmán: Diputado Fausto Mendoza.

El diputado Fausto Fluvio Mendoza Maldonado (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Rosa Elia Romero Guzmán: Diputado Maawad.

El diputado Luis Xavier Maawad Robert (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Rosa Elia Romero Guzmán: Diputado Francisco Paredes.

El diputado Francisco Javier Paredes Rodríguez (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Rosa Elia Romero Guzmán: Diputado Ector Jaime Ramírez Barba.

El diputado Ector Jaime Ramírez Barba (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Rosa Elia Romero Guzmán: Señor presidente, se emitieron 313 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Aprobado en lo general y en lo particular por 313 votos. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

16-04-2009
Cámara de Senadores.
MINUTA proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera.
Diario de los Debates, 16 de abril de 2009.

- La C. Secretaria Menchaca Castellanos: Se recibió de la Cámara de Diputados una minuta proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

"MINUTA PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY ORGANICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

Artículo Primero.- Se reforman los artículos 4, primer párrafo, I3, primero y actual segundo párrafos; 14, fracción I, segundo, tercero y quinto párrafos; 24, fracción I y el inciso a); 65, primer párrafo; 66; 67, último párrafo y 68, primer párrafo y se adicionan los artículos 1-A; I3, con los párrafos segundo y tercero, recorriéndose los demás párrafos en su orden; 14, con un tercer párrafo, recorriéndose los demás párrafos en su orden; 31, con un párrafo segundo y el Capítulo X denominado "Del Juicio en Línea" al Título II, que comprende de los artículos 58-A al 58-S a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, para quedar como sigue:

ARTICULO 1-A.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I. Acuse de Recibo Electrónico: Constancia que acredita que un documento digital fue recibido por el Tribunal y estará sujeto a la misma regulación aplicable al uso de una firma electrónica avanzada. En este caso, el acuse de recibo electrónico identificará a la Sala que recibió el documento y se presumirá, salvo prueba en contrario, que el documento digital fue recibido en la fecha y hora que se consignen en dicha constancia. El Tribunal establecerá los medios para que las partes y los autorizados para recibir notificaciones puedan verificar la autenticidad de los acuses de recibo electrónico.

II. Archivo Electrónico: Información contenida en texto, imagen, audio o video generada, enviada, recibida o archivada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología que forma parte del Expediente Electrónico.

III. Boletín Procesal: Medio de comunicación oficial impreso o electrónico, a través del cual el Tribunal da a conocer las actuaciones o resoluciones en los juicios contenciosos administrativos federales que se tramitan ante el mismo.

IV. Clave de acceso: Conjunto único de caracteres alfanuméricos asignados por el Sistema de Justicia en Línea del Tribunal a las partes, como medio de identificación de las personas facultadas en el juicio en que promuevan para utilizar el Sistema, y asignarles los privilegios de consulta del expediente respectivo o envío vía electrónica de promociones relativas a las actuaciones procesales con el uso de la firma electrónica avanzada en un procedimiento contencioso administrativo.

V. Contraseña: Conjunto único de caracteres alfanuméricos, asignados de manera confidencial por el Sistema de Justicia en Línea del Tribunal a los usuarios, la cual permite validar la identificación de la persona a la que se le asignó una Clave de Acceso.

VI. Dirección de Correo Electrónico: Sistema de comunicación a través de redes informáticas, señalado por las partes en el juicio contencioso administrativo federal.

VII. Dirección de Correo Electrónico Institucional: Sistema de comunicación a través de redes informáticas, dentro del dominio definido y proporcionado por los órganos gubernamentales a los servidores públicos.

VIII. Documento Electrónico o Digital: Todo mensaje de datos que contiene texto o escritura generada, enviada, recibida o archivada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología que forma parte del Expediente Electrónico.

IX. Expediente Electrónico: Conjunto de información contenida en archivos electrónicos o documentos digitales que conforman un juicio contencioso administrativo federal, independientemente de que sea texto, imagen, audio o video, identificado por un número específico.

X. Firma Digital: Medio gráfico de identificación en el Sistema de Justicia en Línea, consistente en la digitalización de una firma autógrafa mediante un dispositivo electrónico, que es utilizada para reconocer a su autor y expresar su consentimiento.

XI. Firma Electrónica Avanzada: Conjunto de datos consignados en un mensaje electrónico adjuntados o lógicamente asociados al mismo que permita identificar a su autor mediante el Sistema de Justicia en línea, y que produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. La firma electrónica permite actuar en Juicio en Línea.

XII. Juicio en la vía tradicional: El juicio contencioso administrativo federal que se substancia recibiendo las promociones y demás documentales en manuscrito o impresos en papel, y formando un expediente también en papel, donde se agregan las actuaciones procesales.

XIII. Juicio en línea: Substanciación y resolución del juicio contencioso administrativo federal en todas sus etapas, así como de los procedimientos previstos en el artículo 58 de esta Ley, a través del Sistema de Justicia en Línea.

XIV. Sistema de Justicia en Línea: Sistema informático establecido por el Tribunal a efecto de registrar, controlar, procesar, almacenar, difundir, transmitir, gestionar, administrar y notificar el procedimiento contencioso administrativo que se sustancie ante el Tribunal.

XV. Tribunal: Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

ARTÍCULO 4.- Toda promoción deberá contener la firma autógrafa o la firma electrónica avanzada de quien la formule y sin este requisito se tendrá por no presentada. Cuando el promovente en un Juicio en la vía tradicional, no sepa o no pueda estampar su firma autógrafa, estampará en el documento su huella digital y en el mismo documento otra persona firmará a su ruego.

….

TITULO II
De la Substanciación y Resolución del Juicio

CAPITU LO I
De la Demanda

ARTICULO 13.- El demandante podrá presentar su demanda, mediante Juicio en la vía tradicional, por escrito ante la sala regional competente o, en línea, a través del Sistema de Justicia en Línea, para este último caso, el demandante deberá manifestar su opción al momento de presentar la demanda. Una vez que el demandante haya elegido su opción no podrá variarla. Cuando la autoridad tenga este carácter la demanda se presentará en todos los casos en línea a través del Sistema de Justicia en Línea.

Para el caso de que el demandante no manifieste su opción al momento de presentar su demanda se entenderá que eligió tramitar el Juicio en la vía tradicional.

La demanda deberá presentarse dentro de los plazos que a continuación se indican: I a III...

Cuando el demandante tenga su domicilio fuera de la población donde esté la sede de la Sala, la demanda podrá enviarse a través de Correos de México, mediante correo certificado con acuse de recibo, siempre que el envío se efectúe en el lugar en que resida el demandante, pudiendo en este caso señalar como domicilio para recibir notificaciones, el ubicado en cualquier parte del territorio nacional, salvo cuando tenga su domicilio dentro de la jurisdicción de la Sala competente, en cuyo caso, el señalado para tal efecto, deberá estar ubicado dentro de la circunscripción territorial de la Sala.

….

….

ARTICULO 14.- .....

I.- El nombre del demandante y su domicilio para recibir notificaciones en cualquier parte del territorio nacional, así como su Dirección de Correo Electrónico, cuando opte porque el juicio se substancie en línea a través del Sistema de Justicia en Línea.

II. a VIII. .....

En cada demanda sólo podrá aparecer un demandante, salvo en los casos que se trate de la impugnación de resoluciones conexas, o que se afecte los intereses jurídicos de dos o más personas, mismas que podrán promover el juicio contra dichas resoluciones en una sola demanda.

En los casos en que sean dos o más demandantes éstos ejercerán su opción a través de un representante común.

En la demanda en que promuevan dos o más personas en contravención de lo dispuesto en el párrafo anterior, el Magistrado Instructor requerirá a los promoventes para que en el plazo de cinco días presenten cada uno de ellos su demanda correspondiente, apercibidos que de no hacerlo se desechará la demanda inicial.

Cuando se omita el nombre del demandante o los datos precisados en las fracciones II y VI, el Magistrado Instructor desechará por improcedente la demanda interpuesta. Si se omiten los datos previstos en las fracciones III, IV, V, VII Y VIII, el Magistrado Instructor requerirá al promovente para que los señale dentro

del término de cinco días, apercibiéndolo que de no hacerlo en tiempo se tendrá por no presentada la demanda o por no ofrecidas las pruebas, según corresponda.

En el supuesto de que conforme a lo dispuesto en la fracción I de este artículo, no se señale el domicilio del demandante en la jurisdicción de la Sala Regional que corresponda o se desconozca el domicilio del tercero, las notificaciones relativas se efectuarán por lista autorizada, que se fijará en sitio visible de la propia Sala, así como en el Boletín Procesal que emita el Tribunal, el cual estará disponible en su página electrónica. En caso de que el actor desconozca el domicilio del tercero, deberá manifestarlo así bajo protesta de decir verdad.

ARTICULO 24.- …

I. La promoción en donde se soliciten las medidas cautelares señaladas, deberá contener los siguientes requisitos:

a) El nombre del demandante y su domicilio para recibir notificaciones en cualquier parte del territorio nacional, así como su Dirección de Correo Electrónico, cuando opte porque el juicio se substancie en línea a través del Sistema de Justicia en Línea.

b) a d) ..... II. ….
….

….

….

ARTICULO 31.- ... I. a III. ...
Para el caso en que proceda la acumulación y los juicios respectivos se estén sustanciando por la vía tradicional y el juicio en línea, el Magistrado Instructor requerirá a las partes relativas al Juicio en la vía tradicional para que en el plazo de tres días manifiesten si optan por substanciar el juicio en línea, en caso de que no ejerza su opción se tramitara el Juicio en la vía tradicional.

CAPITU LO X
Del Juicio en Línea

ARTICULO 58-A.- El juicio contencioso administrativo federal se promoverá, substanciará y resolverá en línea, a través del Sistema de Justicia en Línea que deberá establecer y desarrollar el Tribunal, en términos de lo dispuesto por el presente Capítulo y las demás disposiciones específicas que resulten aplicables de esta Ley. En todo lo no previsto, se aplicarán las demás disposiciones que resulten aplicables de este ordenamiento.

ARTICULO 58-B.- Cuando el demandante ejerza su derecho a presentar su demanda en línea a través del Sistema de Justicia en Línea del Tribunal, las autoridades demandadas deberán comparecer y tramitar el juicio en la misma vía.

Si el demandante no señala expresamente su Dirección de Correo Electrónico, el se tramitará el Juicio en la vía tradicional y el acuerdo correspondiente se notificará por lista y en el Boletín Procesal del Tribunal.

ARTICULO 58-C.- Cuando la demandante sea una autoridad, el particular demandado, al contestar la demanda, tendrá derecho a ejercer su opción para que el juicio se tramite y resuelva en línea conforme a las disposiciones de este Capítulo, señalando para ello su domicilio y Dirección de Correo Electrónico.

A fin de emplazar al particular demandado, el Secretario de Acuerdos que corresponda, imprimirá y certificará la demanda y sus anexos que se notificarán de manera personal.

Si el particular rechaza tramitar el juicio en línea contestará la demanda mediante el Juicio en la vía tradicional.

ARTICULO 58-D.-. En el Sistema de Justicia en Línea del Tribunal se integrará el Expediente Electrónico, mismo que incluirá todas las promociones, pruebas y otros anexos que presenten las partes, oficios, acuerdos, y resoluciones tanto interlocutorias como definitivas, así como las demás actuaciones que deriven de la substanciación del juicio en línea, garantizando su seguridad, inalterabilidad, autenticidad, integridad y durabilidad, conforme a los lineamientos que expida el Tribunal.

En los juicios en línea, la autoridad requerida, desahogará las pruebas testimoniales utilizando el método de videoconferencia, cuando ello sea posible.

ARTICULO 58-E.- La Firma Electrónica Avanzada, Clave de Acceso y Contraseña se proporcionarán, a través del Sistema de Justicia en Línea del Tribunal, previa obtención del registro y autorización correspondientes. El registro de la Firma Electrónica Avanzada, Clave de Acceso y Contraseña, implica el consentimiento expreso de que dicho Sistema registrará la fecha y hora en la que se abran los Archivos Electrónicos, que contengan las constancias que integran el Expediente Electrónico, para los efectos legales establecidos en este ordenamiento.

Para hacer uso del Sistema de Justicia en Línea deberán observarse los lineamientos que, para tal efecto, expida el Tribunal.

ARTICULO 58-F.- La Firma Electrónica Avanzada producirá los mismos efectos legales que la firma autógrafa y garantizará la integridad del documento, teniendo el mismo valor probatorio.

ARTICULO 58-G.- Solamente, las partes, las personas autorizadas y delegados tendrán acceso al Expediente Electrónico, exclusivamente para su consulta, una vez que tengan registrada su Clave de Acceso y Contraseña.

ARTICULO 58-H.- Los titulares de una Firma Electrónica Avanzada, Clave de Acceso y Contraseña serán responsables de su uso, por lo que el acceso o recepción de las notificaciones, la consulta al Expediente Electrónico y el envío de información mediante la utilización de cualquiera de dichos instrumentos, les serán atribuibles y no admitirán prueba en contrario, salvo que se demuestren fallas del Sistema de Justicia en Línea.

ARTICULO 58-I.- Una vez recibida por vía electrónica cualquier promoción de las partes, el Sistema de Justicia en Línea del Tribunal emitirá el Acuse de Recibo Electrónico correspondiente, señalando la fecha y la hora de recibido.

ARTICULO 58-J.- Cualquier actuación en el Juicio en Línea se efectuará a través del Sistema de Justicia en Línea del Tribunal en términos del presente Capítulo. Dichas actuaciones serán validadas con las firmas electrónicas y firmas digitales de los Magistrados y Secretarios de Acuerdos que den fe según corresponda.

ARTICULO 58-K.- Los documentos que las partes ofrezcan como prueba, incluido el expediente administrativo a que se refiere el artículo l4, fracción V, de esta Ley, deberán exhibirlos de forma legible a través del Sistema de Justicia en Línea del Tribunal.

Tratándose de documentos digitales, se deberá manifestar la naturaleza de los mismos, especificando si la reproducción digital corresponde a una copia simple, una copia certificada o al original y tratándose de esta última, si tiene o no firma autógrafa. Los particulares deberán hacer esta manifestación bajo protesta de decir verdad, la omisión de la manifestación presume en perjuicio solo del promovente, que el documento digitalizado corresponde a una copia simple.

Las pruebas documentales que ofrezcan y exhiban las partes tendrán el mismo valor probatorio que su constancia física, siempre y cuando se observen las disposiciones de la presente Ley y de los acuerdos normativos que emitan los órganos del Tribunal para asegurar la autenticidad de la información, así como de su transmisión, recepción, validación y notificación.

ARTICULO 58-L.- Para el caso de pruebas diversas a las documentales, los instrumentos en los que se haga constar la existencia de dichas pruebas se integrarán al Expediente Electrónico. El Secretario de Acuerdos a cuya mesa corresponda el asunto, deberá digitalizar las constancias relativas y procederá a la certificación de su cotejo con los originales físicos, así como a garantizar el resguardo de los originales y de los bienes materiales que en su caso hubieren sido objeto de prueba.

Para el caso de pruebas diversas a las documentales, éstas deberán ofrecerse en la demanda y ser presentadas a la Sala que esté conociendo del asunto, en la misma fecha en la que se registre en el Sistema de Justicia en Línea del Tribunal la promoción correspondiente a su ofrecimiento, haciendo constar su recepción por vía electrónica.

ARTICULO 58-M.- Para los juicios que se substancien en términos de este capítulo no será necesario que las partes exhiban copias para correr los traslados que la Ley establece, salvo que hubiese tercero interesado, en cuyo caso, a fin de correrle traslado, el demandante deberá presentar la copia de traslado con sus respectivos anexos.

En el escrito a través del cual el tercero interesado se apersone en juicio, deberá precisar si desea que el juicio se continúe substanciando en línea y señalar en tal caso, su Dirección de Correo Electrónico. En caso de que manifieste su oposición, la Sala dispondrá lo conducente para que se digitalicen los documentos que dicho tercero presente, a fin de que se prosiga con la instrucción del juicio en línea con relación a las demás partes, y a su vez, se impriman y certifiquen las constancias de las actuaciones y documentación electrónica, a fin de que se integre el expediente del tercero en un Juicio en la vía tradicional.

ARTICULO 58-N.- Las notificaciones que se practiquen dentro del juicio en línea, se efectuarán conforme a lo siguiente:

I.- Todas las actuaciones y resoluciones que conforme a las disposiciones de esta Ley deban notificarse en forma personal, mediante correo certificado con acuse de recibo, o por oficio, se deberán realizar a través del Sistema de Justicia en Línea del Tribunal.

II.- El actuario deberá elaborar la minuta electrónica en la que precise la actuación o resolución a notificar, así como los documentos que se adjunten a la misma. Dicha minuta, que contendrá la Firma Electrónica Avanzada del actuario, será ingresada al Sistema de Justicia en Línea del Tribunal junto con la actuación o resolución respectiva y los documentos adjuntos.

III.- El actuario enviará a la Dirección de Correo Electrónico de la o las partes a notificar, un aviso informándole que se ha dictado una actuación o resolución en el Expediente Electrónico, la cual está disponible en el Sistema de Justicia en Línea del Tribunal.

IV.- El Sistema de Justicia en Línea del Tribunal registrará la fecha y hora en que se efectúe el envío señalado en la fracción anterior.

V.- Se tendrá como legalmente practicada la notificación, conforme a lo señalado en las fracciones anteriores, cuando el Sistema de Justicia en Línea del Tribunal genere el Acuse de Recibo Electrónico donde conste la fecha y hora en que la o las partes notificadas ingresaron al Expediente Electrónico, lo que deberá suceder dentro del plazo de tres días hábiles siguientes a la fecha de envío del aviso a la Dirección de Correo Electrónico de la o las partes a notificar.

VI.- En caso de que en el plazo señalado en la fracción anterior, el Sistema de Justicia en Línea del Tribunal no genere el acuse de recibo donde conste que la notificación fue realizada, la misma se efectuará mediante lista y por Boletín Procesal al cuarto día hábil contado a partir de la fecha de envío del Correo Electrónico, fecha en que se tendrá por legalmente notificado.

ARTICULO 58-O.- Para los efectos del Juicio en Línea son hábiles las 24 horas de los días en que se encuentren abiertas al público las Oficinas de las Salas del Tribunal.

Las promociones se considerarán, salvo prueba en contrario, presentadas el día y hora que conste en el Acuse de Recibo Electrónico que emita el Sistema de Justicia en Línea del Tribunal, en el lugar en donde el promovente tenga su domicilio fiscal y, por recibidas, en el lugar de la sede de la Sala Regional a la que corresponda conocer del juicio por razón de territorio. Tratándose de un día inhábil se tendrán por presentadas el día hábil siguiente.

ARTICULO 58-P.- Las autoridades cuyos actos sean susceptibles de impugnarse ante el Tribunal, deberán registrar en la Secretaría General de Acuerdos o ante la Presidencia de las Salas Regionales, según corresponda, la Dirección de Correo Electrónico Institucional, así como el domicilio oficial de las unidades administrativas a las que corresponda su representación en los juicios contenciosos administrativos, para el efecto de emplazarlas electrónica mente a juicio en aquellos casos en los que tengan el carácter de autoridad demandada.

En el caso de que las autoridades demandadas no cumplan con esta obligación, todas las notificaciones que deben hacerse, incluyendo el emplazamiento, se harán a través del Boletín Procesal, hasta que se cumpla con dicha formalidad.

ARTICULO 58-Q.- Para la presentación y trámite de los recursos de revisión y juicios de amparo que se promuevan contra las actuaciones y resoluciones derivadas del Juicio en Línea, no será aplicable lo dispuesto en el presente Capítulo.

El Secretario General de Acuerdos del Tribunal, los Secretarios Adjuntos de Sección y los Secretarios de Acuerdos de Sala Superior y de Salas Regionales según corresponda, deberán imprimir el archivo del Expediente Electrónico y certificar las constancias del juicio que deban ser remitidos a los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados de Circuito, cuando se impugnen resoluciones de los juicios correspondientes a su mesa.

Sin perjuicio de lo anterior, en aquellos casos en que así lo solicite el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado se podrá remitir la información a través de medios electrónicos.

ARTICULO 58-R.- En caso que el Tribunal advierta que alguna persona modificó, alteró, destruyó o provocó la pérdida de información contenida en el Sistema de Justicia en Línea, se tomarán las medidas de protección necesarias, para evitar dicha conducta hasta que concluya el juicio, el cual se continuará tramitando a través de un Juicio en la vía tradicional.

Si el responsable es usuario del Sistema, se cancelará su Firma Electrónica Avanzada, Clave y Contraseña para ingresar al Sistema de Justicia en Línea y no tendrá posibilidad de volver a promover juicios en línea.

Sin perjuicio de lo anterior, y de las responsabilidades penales respectivas, se impondrá al responsable una multa de trescientas a quinientas veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de cometer la infracción.

ARTICULO 58-S.- Cuando por caso fortuito, fuerza mayor o por fallas técnicas se interrumpa el funcionamiento del Sistema de Justicia en Línea, haciendo imposible el cumplimiento de los plazos establecidos en la ley, las partes deberán dar aviso a la Sala correspondiente en la misma promoción sujeta a término, quien pedirá un reporte al titular de la unidad administrativa del Tribunal responsable de la administración del Sistema sobre la existencia de la interrupción del servicio.

El reporte que determine que existió interrupción en el Sistema deberá señalar la causa y el tiempo de dicha interrupción, indicando la fecha y hora de inicio y término de la misma. Los plazos se suspenderán, únicamente, el tiempo que dure la interrupción del Sistema. Para tal efecto, la Sala hará constar esta situación mediante acuerdo en el expediente electrónico y, considerando el tiempo de la interrupción, realizara el computo correspondiente, para determinar si hubo o no incumplimiento de los plazos legales.

ARTICULO 65.- Toda resolución debe notificarse, o en su caso, darse el aviso en la Dirección de Correo Electrónico señalada, a más tardar el tercer día siguiente a aquél en que el expediente haya sido turnado al actuario para ese efecto y se asentará la razón respectiva a continuación de la misma resolución.

…

…

ARTICULO 66.- En las notificaciones, el actuario deberá asentar razón del envío por correo o entrega de los oficios de notificación y de los avisos en la Dirección de Correo Electrónico, así como de las notificaciones personales y por lista. Los acuses postales de recibo y las piezas certificadas devueltas se agregarán como constancia a dichas actuaciones.

ARTICULO 67.-.....

….

….

….

Las partes que así lo deseen, podrán señalar su clave o Dirección de Correo Electrónico a la Sala Regional en que se lleve el juicio, a fin de que por este medio se les dé aviso de la emisión de los autos y demás resoluciones que en él se dicten, acompañado de un extracto de su contenido que comprenderá la fecha y órgano de emisión, los datos de identificación del expediente y el tipo de auto o resolución. Satisfecho lo anterior, el Magistrado Instructor ordenará que los avisos de que se trata se le practiquen por este medio a la parte que lo haya solicitado; el Actuario, a su vez, deberá dejar constancia en el expediente de que el aviso se envió a la Dirección de Correo Electrónico señalado hasta por tres ocasiones consecutivas y la fecha y hora en que las realizo. En estos casos, durante el plazo de cinco días siguientes a aquél en que el aviso se llevó a cabo, la parte interesada podrá apersonarse al local de la Sala a notificarse personalmente de la resolución de que se trate y, a su vencimiento, si esto último no hubiere ocurrido, se procederá a su notificación por lista.

ARTICULO 68.- Las notificaciones que deban hacerse a las autoridades administrativas se harán por oficio y por vía telegráfica en casos urgentes. También podrán efectuarse, opcional mente, en la forma prevista en el artículo anterior por medio del aviso en la Dirección de Correo Electrónico Institucional.

.....

….

ARTICULO SEGUNDO.- Se reforman los artículos 37, fracción VIII y 4I, fracción XXX; se adicionan los artículos 38, con una fracción X, pasando la actual a ser XI; 4I, con una fracción XXXI, pasando la actual a ser XXXII y recorriéndose en su orden las demás fracciones; 47, con una fracción VIII; 48, con una fracción VII, pasando la actual a ser VIII; 49, con una fracción V, pasando la actual a ser VI y 50, con una fracción VI, pasando la actual a ser VII a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para quedar como sigue:

CAPITU LO V

De las Salas Regionales

ARTICULO 37.- …

I. a VII….

VIII. Verificar que en la Sala se utilice y mantenga actualizado el sistema de control y seguimiento de juicios, así como el Sistema de Justicia en Línea del Tribunal;

IX. a XI. ...

ARTICULO 38.- ...

I. a VIII. ...

IX. Dictar los acuerdos y providencias relativas a las medidas cautelares provisionales en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, así como proponer a la Sala el proyecto de resolución correspondiente a la medida cautelar definitiva que se estime procedente;

X. Supervisar la debida integración de las actuaciones en el Sistema de Justicia en Línea del Tribunal, de los juicios tramitados en línea, y

XI. Las demás que les correspondan conforme a las disposiciones legales aplicables.

CAPITU LO VI

De la Junta de Gobierno y Administración

ARTICULO 41.- ...

I. a XXIX. ...

XXX. Establecer y administrar un Boletín Procesal para la notificación de las resoluciones y acuerdos, así como el control de las notificaciones que se realicen por medios electrónicos y supervisar la correcta operación y funcionamiento del Sistema de Justicia en Línea del Tribunal para la tramitación de los juicios en línea;

XXXI. Emitir los acuerdos normativos que contengan los lineamientos técnicos y formales que deban observarse en la substanciación del juicio en línea;

XXXII. Supervisar la publicación de las jurisprudencias, precedentes y tesis aisladas emitidas por las Salas y Secciones en la Revista del Tribunal;

XXXIII. a XXXV. ...

CAPITULO VII

De los demás Servidores Públicos del Tribunal

ARTICULO 47.-.....

I. a V. ...

VI. Dirigir los archivos de la Sala Superior;

VII. Digitalizar la documentación y actuaciones que se requiera incorporar a un expediente tramitado en línea, así como imprimir y certificar las constancias de los expedientes electrónicos de la Sala Superior y las reproducciones en medios electrónicos de dichas actuaciones, y

VIII.- Dar fe y expedir certificados de las constancias que obran en los expedientes que obran en la Sala Superior.

ARTICULO 48.- .....

I. a V. ...

VI. Dar fe y expedir certificados de constancias que obran en los expedientes de las Secciones;

VII. Digitalizar la documentación y actuaciones que se requiera incorporar a un expediente tramitado en línea, así como imprimir y certificar las constancias de los expedientes electrónicos de la Sección y las reproducciones en medios electrónicos de dichas actuaciones, y

VIII. Las demás que les encomiende el Presidente de la Sección.

ARTICULO 49.- ...

I. a III. …

IV. Dar fe y expedir certificados de las constancias que obren en los expedientes de la Ponencia a la que estén adscritos;

V. Digitalizar la documentación y actuaciones que se requiera incorporar a un expediente tramitado en línea, así como imprimir y certificar las constancias de los expedientes electrónicos de la Ponencia a la que estén adscritos y las reproducciones en medios electrónicos de dichas actuaciones, y

VI. Desempeñar las demás atribuciones que las disposiciones aplicables les confieran.

ARTICULO 50.- .....

I. a IV. .....

V. Dar fe y expedir certificados de las constancias que obren en los expedientes de la Sala a la que estén adscritos;

VI. Digitalizar la documentación y actuaciones que se requiera incorporar a un expediente tramitado en línea, así como imprimir y certificar las constancias de los expedientes electrónicos de la Sala a la que estén adscritos y las reproducciones en medios electrónicos de dichas actuaciones, y

VII. Las demás que señalen las disposiciones aplicables.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, iniciará el desarrollo e instrumentación del Sistema de Justicia en Línea a través del cual se substanciará el Juicio en Línea.

TERCERO.- El Tribunal deberá realizar las acciones que correspondan, a efecto de que el Juicio en Línea, inicie su operación a los 18 meses contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa promoverá una campaña masiva entre los usuarios de los servicios del Tribunal para difundir las disposiciones contenidas en este Decreto.

CUARTO.- Las autoridades cuyos actos sean susceptibles de impugnarse ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a través del Sistema de Justicia en Línea, deberán tramitar su Firma Electrónica Avanzada ante la Secretaría General de Acuerdos o ante la Presidencia de las Salas Regionales, según corresponda, y registrar su Dirección de Correo Electrónico institucional, así como el domicilio oficial de las unidades administrativas a las que corresponda su representación en los juicios contenciosos administrativos, para el efecto de emplazarlas electrónica mente a juicio, en aquellos casos en los que tengan el carácter de autoridades demandadas, a partir de los seis meses de la entrada en vigor del presente Decreto, sin exceder para ello del plazo de 18 meses a que se refiere el artículo anterior.

QUINTO.- En el mismo plazo señalado en el artículo anterior, las unidades administrativas a las que corresponda la representación de las autoridades cuyos actos sean susceptibles de impugnarse ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en los juicios contenciosos administrativos deberán instrumentar y mantener permanentemente actualizados los mecanismos tecnológicos, materiales y humanos necesarios para acceder al Juicio en Línea a través del Sistema de Justicia en Línea del Tribunal.

SEXTO.- En caso de que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa reciba una demanda por medio del Sistema de Justicia en Línea del Tribunal, y constate que la autoridad demandada, incumplió con lo señalado en el artículo CUARTO transitorio del presente Decreto, se le prevendrá para que en el plazo de 10 días hábiles contados a partir de que se le notifique dicha prevención, proceda a cumplir con dicha disposición o/ en su caso acredite que ya la cumplió.

En caso de no cumplir con la obligación a que se refiere el Artículo CUARTO transitorio el Tribunal le impondrá una multa de 100 a 200 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y todas las notificaciones que deban hacérsele, incluyendo el emplazamiento, se harán a través del Boletín Procesal, hasta que se cumpla con dicha formalidad.

Así mismo, se requerirá al superior jerárquico de aquélla para que en el plazo de 3 días hábiles, la obligue a cumplir sin demora. En caso de continuar la renuencia de la autoridad, los hechos se pondrán en conocimiento del Órgano Interno de Control que corresponda.

SEPTIMO.- Los juicios que se encuentren en trámite ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa a la fecha en que inicie la operación del Juicio en Línea, continuarán substanciándose y se resolverán conforme a las disposiciones vigentes a la fecha de presentación de la demanda.

OCTAVO.- El Tribunal llevará a cabo las acciones necesarias a efecto de integrar los sistemas informáticos internos en una sola plataforma tecnológica, a través del Sistema de Justicia en Línea del Tribunal.

NOVENO.- Para la promoción, substanciación y resolución del juicio contencioso administrativo federal a través del Sistema de Justicia en Línea, prevalecerán las disposiciones contenidas en el Capítulo X de la ley respecto de otras que se contrapongan a lo establecido en dicho Capítulo.

DECIMO.- Los recursos necesarios para la implementación y cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto provendrán de recursos fiscales autorizados en el presupuesto del Ramo 32: Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para el presente ejercicio los subsecuentes.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.- México, D.F., a 15 de abril de 2009.

Dip. **César Horacio Duarte Jáquez,** Presidente.- Dip. **Rosa Elia Romero Guzmán,** Secretaria".

- El C. Presidente Madero Muñoz: Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera para su análisis y dictamen correspondiente.

28-04-2009
Cámara de Senadores.
DICTAMEN de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa.
Aprobado en lo general y en lo particular con 86 votos en pro, 0 en contra y 7 abstenciones. Se turno al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.
Diario de los Debates, 28 de abril de 2009. Discusión y votación, 28 de abril de 2009.

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY ORGANICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

(Dictamen de primera lectura)

"COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO,
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA

H. ASAMBLEA:

La H. Cámara de Diputados de la LX Legislatura, remitió para sus efectos constitucionales, la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Estas Comisiones Legislativas que suscriben, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 93, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 60, 63, 64, 87, 88 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se han abocado al análisis de la Minuta que se menciona, y conforme a las deliberaciones y el análisis que de las mismas realizaron, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES

1. En la sesión de fecha 16 de abril de 2009, la H. Cámara de Diputados de la LX Legislatura, remitió para sus efectos constitucionales, la minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Senadores turnó, la minuta con proyecto de Decreto antes señalada, a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, para su estudio y dictamen.

3. Los CC. Senadores integrantes de las citadas Comisiones Dictaminadoras, realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la referida Minuta, expresar sus observaciones y comentarios a la misma, e integrar el presente dictamen.

II. DESCRIPCION DE LA MINUTA

La Minuta propone diversas modificaciones legales para crear un mecanismo que permita la impartición de justicia "PRONTA Y EXPEDITA", a través del uso de tecnologías de la información y comunicaciones, mediante el desarrollo y operación de un juicio en línea.

Así, de la minuta de referencia se desprende que el objetivo del juicio en línea es generar un bien público, que permita prestar al gobernado un servicio de justicia de excelencia, con una visión de largo plazo y que pueda ser reproducido en otros tribunales del país.

Entre las características principales del aludido juicio se citan las siguientes:

- El Juicio en Línea consiste en que toda la tramitación del juicio contencioso-administrativo, desde la demanda hasta la sentencia, se realice a través de la Internet.
- El Juicio en Línea es un espejo del juicio tradicional.
- El juicio tradicional y el Juicio en Línea van a coexistir para asegurar un pleno acceso a la justicia.
- El particular tendrá el derecho a decidir la vía en la que se tramite el juicio (tradicional o en línea).
- La "garantía de audiencia" y la "seguridad jurídica" en el Juicio en Línea se garantizarán plenamente.
- Una vez que el particular optó por promover el Juicio en Línea, todas las actuaciones efectuadas por la autoridad, incluyendo su contestación, deberán ser presentadas por Internet.
- En los juicios de lesividad, también el particular demandado, al contestar la demanda, elegirá la vía mediante la cual habrá de tramitarse y resolverse el juicio de que se trate.
- Las partes podrán presentar todas sus promociones a través del Sistema de Justicia en Línea, las 24 horas del día dentro de los plazos procesales previstos por la Ley.
- Para ello habrá que acceder al portal del Tribunal y registrar la clave de acceso y contraseña que previamente se tramitó en el propio Sistema.
- Las promociones presentadas a través del Sistema de Justicia en Línea deberán ser autorizadas por las partes con la Firma Electrónica Avanzada, la cual producirá los mismos efectos legales que la firma autógrafa y garantizará la integridad del documento.
- Las partes podrán consultar el estado procesal de su expediente, desde cualquier computadora, las 24 horas del día y los 365 días del año a través de la página Web del Tribunal.
- Los acuerdos, oficios y resoluciones que deban notificarse personalmente a los particulares o por oficio a las autoridades, se realizarán a través del Sistema de Justicia en Línea
- Los documentos, videos, audio, imágenes que las partes ofrezcan como prueba, incluido el expediente administrativo, deberán exhibirlos en forma legible a través del Sistema de Justicia en Línea y tendrán el mismo valor probatorio que su constancia física.
- En casos excepcionales de pruebas diferentes a las anteriores, deberán ofrecerse en la demanda y ser presentadas ante la Sala que esté conociendo del asunto.

En la Minuta de referencia se establecen los siguientes beneficios del juicio en línea:

Para los justiciables:

- Acceso Total a la Justicia Administrativa.- Todo justiciable podrá acceder y actuar, desde cualquier computadora con Internet, las 24 horas y los 365 días del año a su expediente electrónico en tiempo real.

- Litigio fácil, eficiente y seguro.- El Juicio en Línea se substanciará de manera integral, desde la presentación de la demanda hasta que se dicte sentencia.

- Justicia Expedita.- Reducir drásticamente el tiempo de tramitación de los juicios.

- Ahorros Sustanciales.- En tiempo, dinero y papel.

Para el Tribunal:

- Mayor eficiencia y calidad en la función jurisdiccional al:

    a) Reducir los tiempos en el trámite administrativo de los juicios e incrementar el tiempo en el estudio y análisis jurisdiccional.

    b) Repartir de manera más eficiente las cargas de trabajo entre las diferentes Salas.

- Gobierno Jurisdiccional

    a) Contar con un sistema integral que genere información en tiempo real para la planeación y toma de decisiones.

    b) Crear mecanismos eficientes para medir objetivamente el desempeño de la función jurisdiccional.

    c) Conocer de juicios con características similares para evitar criterios contradictorios, fijar jurisprudencia y agilizar los procesos.

En general:

- Posicionar a México en el mundo como un transformador de la forma tradicional de impartir justicia.

- Generar una experiencia institucional favorable, que pueda ser aprovechada por otros órganos de impartición de justicia.

- Contar con un mecanismo que permita el intercambio oportuno de información con otros Poderes y autoridades para la toma de decisiones.

- Contribuir al desarrollo económico del País.

- Generar un impacto económico favorable en las finanzas públicas, ya que el proyecto tiene un VANS de $1,907 MDP y una TIRS de 92%.

CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES

PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 85, 86, 93, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 60, 63, 64, 87, 88 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, estas Comisiones Dictaminadoras resultan competentes para dictaminar la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

SEGUNDA. Las Comisiones dictaminadoras coinciden con su Colegisladora en el sentido de en que, ante la demanda social actual de un sistema de procuración e impartición de justicia que brinde servicios judiciales de calidad, de manera pronta y expedita, se deben establecer estrategias de gestión modernas que permitan hacer más eficiente la actividad jurisdiccional en su conjunto, en beneficio de las labores sustantivas de dichas instituciones.

En ese tenor, estas Comisiones dictaminadoras comparten la viabilidad de implementar sistemas modernos y confiables que permitan a la sociedad, de forma fácil y rápida, acceder a la impartición de justicia, así como explotar los sistemas ya generalizados, como lo es la red mundial o “Internet”.

Derivado de lo anterior, las Comisiones que suscriben aprueban la posibilidad de que los particulares puedan impugnar los actos y resoluciones administrativas de carácter individual o general que les perjudiquen, a través de dispositivos electrónicos y sistemas computacionales, ya que con ello se logrará una mejor impartición de justicia, tanto desde una perspectiva interna, facilitando el control, consulta, manejo, almacenamiento y análisis, necesarios para la toma de decisiones, la gestión y la resolución de los asuntos y, por otra, también permitirá mejorar los servicios que se presenten a las partes que pretendan se les administre justicia mediante un acceso más simplificado al juicio contencioso administrativo.

De igual forma estas Comisión Unidas estiman procedente la reforma de establecer como instrumentos jurídicos procesales la aplicación de mensajes de datos, la firma electrónica avanzada y la conservación por medios electrónicos de la información generada, comunicada y archivada a través de medios ópticos y de cualquier otra tecnología equivalente, que haga posible la conversión de papel a medios virtuales, para una administración de justicia más ágil, pronta y expedita, sirviéndose para ello de sistemas de cómputo confiables que pongan especial énfasis en la seguridad del resguardo y manejo de la información plasmada en los actos procesales.

Con las anteriores reformas, las que dictaminan estiman que el Sistema de Justicia en Línea por parte del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se constituirá en un mecanismo determinante para la consolidación de ese Tribunal, como una instancia que garantice seguridad jurídica y una eficaz impartición de justicia.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las Comisiones Dictaminadoras que suscriben, se permiten someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY ORGANICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

Artículo Primero.- Se **reforman** los artículos 4o., primer párrafo, 13, primero y actual segundo párrafos; 14, fracción I, segundo, tercero y quinto párrafos; 24, fracción I y el inciso a); 65, primer párrafo; 66; 67, último párrafo y 68, primer párrafo y se **adicionan** los artículos 1-A; 13, con los párrafos segundo y tercero, recorriéndose los demás párrafos en su orden; 14, con un tercer párrafo, recorriéndose los demás párrafos en su orden; 31, con un párrafo segundo y el Capítulo X denominado “Del Juicio en

Línea" al Título II, que comprende de los artículos 58-A al 58-S a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, para quedar como sigue:

ARTICULO 1-A.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I. Acuse de Recibo Electrónico: Constancia que acredita que un documento digital fue recibido por el Tribunal y estará sujeto a la misma regulación aplicable al uso de una firma electrónica avanzada. En este caso, el acuse de recibo electrónico identificará a la Sala que recibió el documento y se presumirá, salvo prueba en contrario, que el documento digital fue recibido en la fecha y hora que se consignen en dicha constancia. El Tribunal establecerá los medios para que las partes y los autorizados para recibir notificaciones puedan verificar la autenticidad de los acuses de recibo electrónico.

II. Archivo Electrónico: Información contenida en texto, imagen, audio o video generada, enviada, recibida o archivada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología que forma parte del Expediente Electrónico.

III. Boletín Procesal: Medio de comunicación oficial impreso o electrónico, a través del cual el Tribunal da a conocer las actuaciones o resoluciones en los juicios contenciosos administrativos federales que se tramitan ante el mismo.

IV. Clave de acceso: Conjunto único de caracteres alfanuméricos asignados por el Sistema de Justicia en Línea del Tribunal a las partes, como medio de identificación de las personas facultadas en el juicio en que promuevan para utilizar el Sistema, y asignarles los privilegios de consulta del expediente respectivo o envío vía electrónica de promociones relativas a las actuaciones procesales con el uso de la firma electrónica avanzada en un procedimiento contencioso administrativo.

V. Contraseña: Conjunto único de caracteres alfanuméricos, asignados de manera confidencial por el Sistema de Justicia en Línea del Tribunal a los usuarios, la cual permite validar la identificación de la persona a la que se le asignó una Clave de Acceso.

VI. Dirección de Correo Electrónico: Sistema de comunicación a través de redes informáticas, señalado por las partes en el juicio contencioso administrativo federal.

VII. Dirección de Correo Electrónico Institucional: Sistema de comunicación a través de redes informáticas, dentro del dominio definido y proporcionado por los órganos gubernamentales a los servidores públicos.

VIII. Documento Electrónico o Digital: Todo mensaje de datos que contiene texto o escritura generada, enviada, recibida o archivada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología que forma parte del Expediente Electrónico.

IX. Expediente Electrónico: Conjunto de información contenida en archivos electrónicos o documentos digitales que conforman un juicio contencioso administrativo federal, independientemente de que sea texto, imagen, audio o video, identificado por un número específico.

X. Firma Digital: Medio gráfico de identificación en el Sistema de Justicia en Línea, consistente en la digitalización de una firma autógrafa mediante un dispositivo electrónico, que es utilizada para reconocer a su autor y expresar su consentimiento.

XI. Firma Electrónica Avanzada: Conjunto de datos consignados en un mensaje electrónico adjuntados o lógicamente asociados al mismo que permita identificar a su autor mediante el Sistema de Justicia en línea, y que produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. La firma electrónica permite actuar en Juicio en Línea.

XII. Juicio en la vía tradicional: El juicio contencioso administrativo federal que se substancia recibiendo las promociones y demás documentales en manuscrito o impresos en papel, y formando un expediente también en papel, donde se agregan las actuaciones procesales.

XIII. Juicio en línea: Substanciación y resolución del juicio contencioso administrativo federal en todas sus etapas, así como de los procedimientos previstos en el artículo 58 de esta Ley, a través del Sistema de Justicia en Línea.

XIV. Sistema de Justicia en Línea: Sistema informático establecido por el Tribunal a efecto de registrar, controlar, procesar, almacenar, difundir, transmitir, gestionar, administrar y notificar el procedimiento contencioso administrativo que se sustancie ante el Tribunal.

XV. Tribunal: Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

ARTICULO 4o.-Toda promoción deberá contener la firma autógrafa o la firma electrónica avanzada de quien la formule y sin este requisito se tendrá por no presentada. Cuando el promovente en un Juicio en la vía tradicional, no sepa o no pueda estampar su firma autógrafa, estampará en el documento su huella digital y en el mismo documento otra persona firmará a su ruego.

...

TITULO II
De la Substanciación y Resolución del Juicio

CAPITULO I
De la Demanda

ARTICULO 13.- El demandante podrá presentar su demanda, mediante Juicio en la vía tradicional, por escrito ante la sala regional competente o, en línea, a través del Sistema de Justicia en Línea, para este último caso, el demandante deberá manifestar su opción al momento de presentar la demanda. Una vez que el demandante haya elegido su opción no podrá variarla. Cuando la autoridad tenga este carácter la demanda se presentará en todos los casos en línea a través del Sistema de Justicia en Línea.

Para el caso de que el demandante no manifieste su opción al momento de presentar su demanda se entenderá que eligió tramitar el Juicio en la vía tradicional.

La demanda deberá presentarse dentro de los plazos que a continuación se indican:

I. a **III.** ...

Cuando el demandante tenga su domicilio fuera de la población donde esté la sede de la Sala, la demanda podrá enviarse a través de Correos de México, correo certificado con acuse de recibo, siempre que el envío se efectúe en el lugar en que resida el demandante, pudiendo en este caso señalar como domicilio para recibir notificaciones, el ubicado en cualquier parte del territorio nacional, salvo cuando tenga su domicilio dentro de la jurisdicción de la Sala competente, en cuyo caso, el señalado para tal efecto, deberá estar ubicado dentro de la circunscripción territorial de la Sala.

...

...

ARTICULO 14.- ...

I.- El nombre del demandante y su domicilio para recibir notificaciones en cualquier parte del territorio nacional, así como su Dirección de Correo Electrónico, cuando opte porque el juicio se substancie en línea a través del Sistema de Justicia en Línea.

II. a **VIII.** …..

En cada demanda sólo podrá aparecer un demandante, salvo en los casos que se trate de la impugnación de resoluciones conexas, o que se afecte los intereses jurídicos de dos o más personas, mismas que podrán promover el juicio contra dichas resoluciones en una sola demanda.

En los casos en que sean dos o más demandantes éstos ejercerán su opción a través de un representante común.

En la demanda en que promuevan dos o más personas en contravención de lo dispuesto en el párrafo anterior, el Magistrado Instructor requerirá a los promoventes para que en el plazo de cinco días presenten cada uno de ellos su demanda correspondiente, apercibidos que de no hacerlo se desechará la demanda inicial.

Cuando se omita el nombre del demandante o los datos precisados en las fracciones II y VI, el Magistrado Instructor desechará por improcedente la demanda interpuesta. Si se omiten los datos previstos en las fracciones III, IV, V, VII y VIII, el Magistrado Instructor requerirá al promovente para que los señale dentro del término de cinco días, apercibiéndolo que de no hacerlo en tiempo se tendrá por no presentada la demanda o por no ofrecidas las pruebas, según corresponda.

En el supuesto de que conforme a lo dispuesto en la fracción I de este artículo, no se señale el domicilio del demandante en la jurisdicción de la Sala Regional que corresponda o se desconozca el domicilio del tercero, las notificaciones relativas se efectuarán por lista autorizada, que se fijará en sitio visible de la propia Sala, así como en el Boletín Procesal que emita el Tribunal, el cual estará disponible en su página electrónica. En caso de que el actor desconozca el domicilio del tercero, deberá manifestarlo así bajo protesta de decir verdad.

ARTICULO 24.- ...

I. La promoción en donde se soliciten las medidas cautelares señaladas, deberá contener los siguientes requisitos:

a) El nombre del demandante y su domicilio para recibir notificaciones en cualquier parte del territorio nacional, así como su Dirección de Correo Electrónico, cuando opte porque el juicio se substancie en línea a través del Sistema de Justicia en Línea.

b) a **d)** ...

II. ...

...

...

...

ARTICULO 31.- ...

I. a **III.** ...

Para el caso en que proceda la acumulación y los juicios respectivos se estén sustanciando por la vía tradicional y el juicio en línea, el Magistrado Instructor requerirá a las partes relativas al Juicio en la vía tradicional para que en el plazo de tres días manifiesten si optan por substanciar el juicio en línea, en caso de que no ejerza su opción se tramitara el Juicio en la vía tradicional.

CAPITULO X

Del Juicio en Línea

ARTICULO 58-A.- El juicio contencioso administrativo federal se promoverá, substanciará y resolverá en línea, a través del Sistema de Justicia en Línea que deberá establecer y desarrollar el Tribunal, en términos de lo dispuesto por el presente Capítulo y las demás disposiciones específicas que resulten aplicables de esta Ley. En todo lo no previsto, se aplicarán las demás disposiciones que resulten aplicables de este ordenamiento.

ARTICULO 58-B.- Cuando el demandante ejerza su derecho a presentar su demanda en línea a través del Sistema de Justicia en Línea del Tribunal, las autoridades demandadas deberán comparecer y tramitar el juicio en la misma vía.

Si el demandante no señala expresamente su Dirección de Correo Electrónico, el se tramitará el Juicio en la vía tradicional y el acuerdo correspondiente se notificará por lista y en el Boletín Procesal del Tribunal.

ARTICULO 58-C.- Cuando la demandante sea una autoridad, el particular demandado, al contestar la demanda, tendrá derecho a ejercer su opción para que el juicio se tramite y resuelva en línea conforme a las disposiciones de este Capítulo, señalando para ello su domicilio y Dirección de Correo Electrónico.

A fin de emplazar al particular demandado, el Secretario de Acuerdos que corresponda, imprimirá y certificará la demanda y sus anexos que se notificarán de manera personal.

Si el particular rechaza tramitar el juicio en línea contestará la demanda mediante el Juicio en la vía tradicional.

ARTICULO 58-D.- En el Sistema de Justicia en Línea del Tribunal se integrará el Expediente Electrónico, mismo que incluirá todas las promociones, pruebas y otros anexos que presenten las partes, oficios, acuerdos, y resoluciones tanto interlocutorias como definitivas, así como las demás actuaciones que deriven de la substanciación del juicio en línea, garantizando su seguridad, inalterabilidad, autenticidad, integridad y durabilidad, conforme a los lineamientos que expida el Tribunal.

En los juicios en línea, la autoridad requerida, desahogará las pruebas testimoniales utilizando el método de videoconferencia, cuando ello sea posible.

ARTICULO 58-E.- La Firma Electrónica Avanzada, Clave de Acceso y Contraseña se proporcionarán, a través del Sistema de Justicia en Línea del Tribunal, previa obtención del registro y autorización correspondientes. El registro de la Firma Electrónica Avanzada, Clave de Acceso y Contraseña, implica el consentimiento expreso de que dicho Sistema registrará la fecha y hora en la que se abran los Archivos Electrónicos, que contengan las constancias que integran el Expediente Electrónico, para los efectos legales establecidos en este ordenamiento.

Para hacer uso del Sistema de Justicia en Línea deberán observarse los lineamientos que, para tal efecto, expida el Tribunal.

ARTICULO 58-F.- La Firma Electrónica Avanzada producirá los mismos efectos legales que la firma autógrafa y garantizará la integridad del documento, teniendo el mismo valor probatorio.

ARTICULO 58-G.- Solamente, las partes, las personas autorizadas y delegados tendrán acceso al Expediente Electrónico, exclusivamente para su consulta, una vez que tengan registrada su Clave de Acceso y Contraseña.

ARTICULO 58-H.- Los titulares de una Firma Electrónica Avanzada, Clave de Acceso y Contraseña serán responsables de su uso, por lo que el acceso o recepción de las notificaciones, la consulta al Expediente Electrónico y el envío de información mediante la utilización de cualquiera de dichos instrumentos, les serán atribuibles y no admitirán prueba en contrario, salvo que se demuestren fallas del Sistema de Justicia en Línea.

ARTICULO 58-I.- Una vez recibida por vía electrónica cualquier promoción de las partes, el Sistema de Justicia en Línea del Tribunal emitirá el Acuse de Recibo Electrónico correspondiente, señalando la fecha y la hora de recibido.

ARTICULO 58-J.- Cualquier actuación en el Juicio en Línea se efectuará a través del Sistema de Justicia en Línea del Tribunal en términos del presente Capítulo. Dichas actuaciones serán validadas con las firmas electrónicas y firmas digitales de los Magistrados y Secretarios de Acuerdos que den fe según corresponda.

ARTICULO 58-K.- Los documentos que las partes ofrezcan como prueba, incluido el expediente administrativo a que se refiere el artículo 14, fracción V, de esta Ley, deberán exhibirlos de forma legible a través del Sistema de Justicia en Línea del Tribunal.

Tratándose de documentos digitales, se deberá manifestar la naturaleza de los mismos, especificando si la reproducción digital corresponde a una copia simple, una copia certificada o al original y tratándose de esta última, si tiene o no firma autógrafa. Los particulares deberán hacer esta manifestación bajo protesta de decir verdad, la omisión de la manifestación presume en perjuicio solo del promovente, que el documento digitalizado corresponde a una copia simple.

Las pruebas documentales que ofrezcan y exhiban las partes tendrán el mismo valor probatorio que su constancia física, siempre y cuando se observen las disposiciones de la presente Ley y de los acuerdos normativos que emitan los órganos del Tribunal para asegurar la autenticidad de la información, así como de su transmisión, recepción, validación y notificación.

ARTICULO 58-L.- Para el caso de pruebas diversas a las documentales, los instrumentos en los que se haga constar la existencia de dichas pruebas se integrarán al Expediente Electrónico. El Secretario de Acuerdos a cuya mesa corresponda el asunto, deberá digitalizar las constancias relativas y procederá a la certificación de su cotejo con los originales físicos, así como a garantizar el resguardo de los originales y de los bienes materiales que en su caso hubieren sido objeto de prueba.

Para el caso de pruebas diversas a las documentales, éstas deberán ofrecerse en la demanda y ser presentadas a la Sala que esté conociendo del asunto, en la misma fecha en la que se registre en el Sistema de Justicia en Línea del Tribunal la promoción correspondiente a su ofrecimiento, haciendo constar su recepción por vía electrónica.

ARTICULO 58-M.- Para los juicios que se substancien en términos de este capítulo no será necesario que las partes exhiban copias para correr los traslados que la Ley establece, salvo que hubiese tercero interesado, en cuyo caso, a fin de correrle traslado, el demandante deberá presentar la copia de traslado con sus respectivos anexos.

En el escrito a través del cual el tercero interesado se apersone en juicio, deberá precisar si desea que el juicio se continúe substanciando en línea y señalar en tal caso, su Dirección de Correo Electrónico. En caso de que manifieste su oposición, la Sala dispondrá lo conducente para que se digitalicen los documentos que dicho tercero presente, a fin de que se prosiga con la instrucción del juicio en línea con relación a las demás partes, y a su vez, se impriman y certifiquen las constancias de las actuaciones y documentación electrónica, a fin de que se integre el expediente del tercero en un Juicio en la vía tradicional.

ARTICULO 58-N.- Las notificaciones que se practiquen dentro del juicio en línea, se efectuarán conforme a lo siguiente:

I.- Todas las actuaciones y resoluciones que conforme a las disposiciones de esta Ley deban notificarse en forma personal, mediante correo certificado con acuse de recibo, o por oficio, se deberán realizar a través del Sistema de Justicia en Línea del Tribunal.

II.- El actuario deberá elaborar la minuta electrónica en la que precise la actuación o resolución a notificar, así como los documentos que se adjunten a la misma. Dicha minuta, que contendrá la Firma Electrónica Avanzada del actuario, será ingresada al Sistema de Justicia en Línea del Tribunal junto con la actuación o resolución respectiva y los documentos adjuntos.

III.- El actuario enviará a la Dirección de Correo Electrónico de la o las partes a notificar, un aviso informándole que se ha dictado una actuación o resolución en el Expediente Electrónico, la cual está disponible en el Sistema de Justicia en Línea del Tribunal.

IV.- El Sistema de Justicia en Línea del Tribunal registrará la fecha y hora en que se efectúe el envío señalado en la fracción anterior.

V.- Se tendrá como legalmente practicada la notificación, conforme a lo señalado en las fracciones anteriores, cuando el Sistema de Justicia en Línea del Tribunal genere el Acuse de Recibo Electrónico donde conste la fecha y hora en que la o las partes notificadas ingresaron al Expediente Electrónico, lo que deberá suceder dentro del plazo de tres días hábiles siguientes a la fecha de envío del aviso a la Dirección de Correo Electrónico de la o las partes a notificar.

VI.- En caso de que en el plazo señalado en la fracción anterior, el Sistema de Justicia en Línea del Tribunal no genere el acuse de recibo donde conste que la notificación fue realizada, la misma se efectuará mediante lista y por Boletín Procesal al cuarto día hábil contado a partir de la fecha de envío del Correo Electrónico, fecha en que se tendrá por legalmente notificado.

ARTICULO 58-O.- Para los efectos del Juicio en Línea son hábiles las 24 horas de los días en que se encuentren abiertas al público las Oficinas de las Salas del Tribunal.

Las promociones se considerarán, salvo prueba en contrario, presentadas el día y hora que conste en el Acuse de Recibo Electrónico que emita el Sistema de Justicia en Línea del Tribunal, en el lugar en donde el promovente tenga su domicilio fiscal y, por recibidas, en el lugar de la sede de la Sala Regional a la que corresponda conocer del juicio por razón de territorio. Tratándose de un día inhábil se tendrán por presentadas el día hábil siguiente.

ARTICULO 58-P.- Las autoridades cuyos actos sean susceptibles de impugnarse ante el Tribunal, deberán registrar en la Secretaría General de Acuerdos o ante la Presidencia de las Salas Regionales, según corresponda, la Dirección de Correo Electrónico Institucional, así como el domicilio oficial de las unidades administrativas a las que corresponda su representación en los juicios contenciosos administrativos, para el efecto de emplazarlas electrónicamente a juicio en aquellos casos en los que tengan el carácter de autoridad demandada.

En el caso de que las autoridades demandadas no cumplan con esta obligación, todas las notificaciones que deben hacerse, incluyendo el emplazamiento, se harán a través del Boletín Procesal, hasta que se cumpla con dicha formalidad.

ARTICULO 58-Q.- Para la presentación y trámite de los recursos de revisión y juicios de amparo que se promuevan contra las actuaciones y resoluciones derivadas del Juicio en Línea, no será aplicable lo dispuesto en el presente Capítulo.

El Secretario General de Acuerdos del Tribunal, los Secretarios Adjuntos de Sección y los Secretarios de Acuerdos de Sala Superior y de Salas Regionales según corresponda, deberán imprimir el archivo del Expediente Electrónico y certificar las constancias del juicio que deban ser remitidos a los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados de Circuito, cuando se impugnen resoluciones de los juicios correspondientes a su mesa.

Sin perjuicio de lo anterior, en aquellos casos en que así lo solicite el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado se podrá remitir la información a través de medios electrónicos.

ARTICULO 58-R.- En caso que el Tribunal advierta que alguna persona modificó, alteró, destruyó o provocó la pérdida de información contenida en el Sistema de Justicia en Línea, se tomarán las medidas de protección necesarias, para evitar dicha conducta hasta que concluya el juicio, el cual se continuará tramitando a través de un Juicio en la vía tradicional.

Si el responsable es usuario del Sistema, se cancelará su Firma Electrónica Avanzada, Clave y Contraseña para ingresar al Sistema de Justicia en Línea y no tendrá posibilidad de volver a promover juicios en línea.

Sin perjuicio de lo anterior, y de las responsabilidades penales respectivas, se impondrá al responsable una multa de trescientas a quinientas veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de cometer la infracción.

ARTICULO 58-S.- Cuando por caso fortuito, fuerza mayor o por fallas técnicas se interrumpa el funcionamiento del Sistema de Justicia en Línea, haciendo imposible el cumplimiento de los plazos establecidos en la ley, las partes deberán dar aviso a la Sala correspondiente en la misma promoción sujeta a término, quien pedirá un reporte al titular de la unidad administrativa del Tribunal responsable de la administración del Sistema sobre la existencia de la interrupción del servicio.

El reporte que determine que existió interrupción en el Sistema deberá señalar la causa y el tiempo de dicha interrupción, indicando la fecha y hora de inicio y término de la misma. Los plazos se

suspenderán, únicamente, el tiempo que dure la interrupción del Sistema. Para tal efecto, la Sala hará constar esta situación mediante acuerdo en el expediente electrónico y, considerando el tiempo de la interrupción, realizara el computo correspondiente, para determinar si hubo o no incumplimiento de los plazos legales.

ARTICULO 65.- Toda resolución debe notificarse, o en su caso, darse el aviso en la Dirección de Correo Electrónico señalada, a más tardar el tercer día siguiente a aquél en que el expediente haya sido turnado al actuario para ese efecto y se asentará la razón respectiva a continuación de la misma resolución.

...

...

ARTICULO 66.- En las notificaciones, el actuario deberá asentar razón del envío por correo o entrega de los oficios de notificación y de los avisos en la Dirección de Correo Electrónico, así como de las notificaciones personales y por lista. Los acuses postales de recibo y las piezas certificadas devueltas se agregarán como constancia a dichas actuaciones.

ARTICULO 67.- ...

...

...

...

Las partes que así lo deseen, podrán señalar su clave o Dirección de Correo Electrónico a la Sala Regional en que se lleve el juicio, a fin de que por este medio se les dé aviso de la emisión de los autos y demás resoluciones que en él se dicten, acompañado de un extracto de su contenido que comprenderá la fecha y órgano de emisión, los datos de identificación del expediente y el tipo de auto o resolución. Satisfecho lo anterior, el Magistrado Instructor ordenará que los avisos de que se trata se le practiquen por este medio a la parte que lo haya solicitado; el Actuario, a su vez, deberá dejar constancia en el expediente de que el aviso se envió a la Dirección de Correo Electrónico señalado hasta por tres ocasiones consecutivas y la fecha y hora en que las realizó. En estos casos, durante el plazo de cinco días siguientes a aquél en que el aviso se llevó a cabo, la parte interesada podrá apersonarse al local de la Sala a notificarse personalmente de la resolución de que se trate y, a su vencimiento, si esto último no hubiere ocurrido, se procederá a su notificación por lista.

ARTICULO 68.- Las notificaciones que deban hacerse a las autoridades administrativas se harán por oficio y por vía telegráfica en casos urgentes. También podrán efectuarse, opcionalmente, en la forma prevista en el artículo anterior por medio del aviso en la Dirección de Correo Electrónico Institucional.

...

...

ARTICULO SEGUNDO.- Se reforman los artículos 37, fracción VIII y 41, fracción XXX; se adicionan los artículos 38, con una fracción X, pasando la actual a ser XI; 41, con una fracción XXXI, pasando la actual a ser XXXII y recorriéndose en su orden las demás fracciones; 47, con una fracción VIII; 48, con

una fracción VII, pasando la actual a ser VIII; 49, con una fracción V, pasando la actual a ser VI y 50, con una fracción VI, pasando la actual a ser VII a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para quedar como sigue:

CAPITULO V

De las Salas Regionales

ARTICULO 37.- ...

I. a **VII.** ...

VIII. Verificar que en la Sala se utilice y mantenga actualizado el sistema de control y seguimiento de juicios, así como el Sistema de Justicia en Línea del Tribunal;

IX. a **XI.** ...

ARTICULO 38.- ...

I. a **VIII.** ...

IX. Dictar los acuerdos y providencias relativas a las medidas cautelares provisionales en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, así como proponer a la Sala el proyecto de resolución correspondiente a la medida cautelar definitiva que se estime procedente;

X. Supervisar la debida integración de las actuaciones en el Sistema de Justicia en Línea del Tribunal, de los juicios tramitados en línea, y

XI. Las demás que les correspondan conforme a las disposiciones legales aplicables.

CAPITULO VI

De la Junta de Gobierno y Administración

ARTICULO 41.- ...

I. a **XXIX.** ...

XXX. Establecer y administrar un Boletín Procesal para la notificación de las resoluciones y acuerdos, así como el control de las notificaciones que se realicen por medios electrónicos y supervisar la correcta operación y funcionamiento del Sistema de Justicia en Línea del Tribunal para la tramitación de los juicios en línea;

XXXI. Emitir los acuerdos normativos que contengan los lineamientos técnicos y formales que deban observarse en la substanciación del juicio en línea;

XXXII. Supervisar la publicación de las jurisprudencias, precedentes y tesis aisladas emitidas por las Salas y Secciones en la Revista del Tribunal;

XXXIII. a **XXXV.** ...

CAPITULO VII

De los demás Servidores Públicos del Tribunal

ARTICULO 47.- ...

I. a **V.** ...

VI. Dirigir los archivos de la Sala Superior;

VII. Digitalizar la documentación y actuaciones que se requiera incorporar a un expediente tramitado en línea, así como imprimir y certificar las constancias de los expedientes electrónicos de la Sala Superior y las reproducciones en medios electrónicos de dichas actuaciones, y

VIII.- Dar fe y expedir certificados de las constancias que obran en los expedientes que obran en la Sala Superior.

ARTICULO 48.- ...

I. a **V.** ...

VI. Dar fe y expedir certificados de constancias que obran en los expedientes de las Secciones;

VII. Digitalizar la documentación y actuaciones que se requiera incorporar a un expediente tramitado en línea, así como imprimir y certificar las constancias de los expedientes electrónicos de la Sección y las reproducciones en medios electrónicos de dichas actuaciones, y

VIII. Las demás que les encomiende el Presidente de la Sección.

ARTICULO 49.- ...

I. a **III.** ...

IV. Dar fe y expedir certificados de las constancias que obren en los expedientes de la Ponencia a la que estén adscritos;

V. Digitalizar la documentación y actuaciones que se requiera incorporar a un expediente tramitado en línea, así como imprimir y certificar las constancias de los expedientes electrónicos de la Ponencia a la que estén adscritos y las reproducciones en medios electrónicos de dichas actuaciones, y

VI. Desempeñar las demás atribuciones que las disposiciones aplicables les confieran.

ARTICULO 50.- ...

I. a **IV.** ...

V. Dar fe y expedir certificados de las constancias que obren en los expedientes de la Sala a la que estén adscritos;

VI. Digitalizar la documentación y actuaciones que se requiera incorporar a un expediente tramitado en línea, así como imprimir y certificar las constancias de los expedientes electrónicos de la Sala a la que estén adscritos y las reproducciones en medios electrónicos de dichas actuaciones, y

VII. Las demás que señalen las disposiciones aplicables.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, iniciará el desarrollo e instrumentación del Sistema de Justicia en Línea a través del cual se substanciará el Juicio en Línea.

TERCERO. El Tribunal deberá realizar las acciones que correspondan, a efecto de que el Juicio en Línea, inicie su operación a los 18 meses contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa promoverá una campaña masiva entre los usuarios de los servicios del Tribunal para difundir las disposiciones contenidas en este Decreto.

CUARTO. Las autoridades cuyos actos sean susceptibles de impugnarse ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a través del Sistema de Justicia en Línea, deberán tramitar su Firma Electrónica

Avanzada ante la Secretaría General de Acuerdos o ante la Presidencia de las Salas Regionales, según corresponda, y registrar su Dirección de Correo Electrónico institucional, así como el domicilio oficial de las unidades administrativas a las que corresponda su representación en los juicios contenciosos administrativos, para el efecto de emplazarlas electrónicamente a juicio, en aquellos casos en los que tengan el carácter de autoridades demandadas, a partir de los seis meses de la entrada en vigor del presente Decreto, sin exceder para ello del plazo de 18 meses a que se refiere el artículo anterior.

QUINTO. En el mismo plazo señalado en el artículo anterior, las unidades administrativas a las que corresponda la representación de las autoridades cuyos actos sean susceptibles de impugnarse ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en los juicios contenciosos administrativos deberán instrumentar y mantener permanentemente actualizados los mecanismos tecnológicos, materiales y humanos necesarios para acceder al Juicio en Línea a través del Sistema de Justicia en Línea del Tribunal.

SEXTO. En caso de que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa reciba una demanda por medio del Sistema de Justicia en Línea del Tribunal, y constate que la autoridad demandada, incumplió con lo señalado en el artículo CUARTO transitorio del presente Decreto, se le prevendrá para que en el plazo de 10 días hábiles contados a partir de que se le notifique dicha prevención, proceda a cumplir con dicha disposición o, en su caso acredite que ya la cumplió.

En caso de no cumplir con la obligación a que se refiere el Artículo CUARTO transitorio el Tribunal le impondrá una multa de 100 a 200 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y todas las notificaciones que deban hacérsele, incluyendo el emplazamiento, se harán a través del Boletín Procesal, hasta que se cumpla con dicha formalidad.

Así mismo, se requerirá al superior jerárquico de aquélla para que en el plazo de 3 días hábiles, la obligue a cumplir sin demora. En caso de continuar la renuencia de la autoridad, los hechos se pondrán en conocimiento del Organo Interno de Control que corresponda.

SEPTIMO. Los juicios que se encuentren en trámite ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa a la fecha en que inicie la operación del Juicio en Línea, continuarán substanciándose y se resolverán conforme a las disposiciones vigentes a la fecha de presentación de la demanda.

OCTAVO. El Tribunal llevará a cabo las acciones necesarias a efecto de integrar los sistemas informáticos internos en una sola plataforma tecnológica, a través del Sistema de Justicia en Línea del Tribunal.

NOVENO. Para la promoción, substanciación y resolución del juicio contencioso administrativo federal a través del Sistema de Justicia en Línea, prevalecerán las disposiciones contenidas en el Capítulo X de la ley respecto de otras que se contrapongan a lo establecido en dicho Capítulo.

DECIMO. Los recursos necesarios para la implementación y cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto provendrán de recursos fiscales autorizados en el presupuesto del Ramo 32: Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para el presente ejercicio y los subsecuentes.

Dado en la sala de comisiones del Senado de la República en México, Distrito Federal, a 23 de abril de 2009.

COMISION DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA".

28-04-2009
Cámara de Senadores.
DICTAMEN de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa.
Aprobado en lo general y en lo particular con 86 votos en pro, 0 en contra y 7 abstenciones. Se turno al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.
Diario de los Debates, 28 de abril de 2009. Discusión y votación, 28 de abril de 2009.

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY ORGANICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

(Dictamen de primera lectura)

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- El C. Secretario Rivera Pérez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente González Morfín: Muchas gracias. Es de primera lectura. Consulte ahora la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen para que se ponga a discusión de inmediato.

- El C. Secretario Rivera Pérez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
FRANCISCO ARROYO VIEYRA

- El C. Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Está a la consideración de la Asamblea, no habiendo oradores registrados… se pregunta si hay algunas reservas. No habiendo oradores registrados, ábrase el sistema electrónico de votación por 3 minutos para recabar la votación nominal del proyecto de Decreto en lo general y en lo particular en un solo acto.

"VOTACION REGISTRADA CONFORME AL SISTEMA ELECTRONICO

ACEVES DEL OLMO CARLOS	PRI	Sí
ANAYA LLAMAS J. GUILLERMO	PAN	Sí
ANDRADE QUEZADA HUMBERTO	PAN	Sí
ARROYO VIEYRA FRANCISCO	PRI	Sí
AUREOLES CONEJO SILVANO	PRD	Sí
BELTRONES RIVERA MANLIO F.	PRI	Sí
BERGANZA ESCORZA FRANCISCO	CONV	Sí
BUENO TORIO JUAN	PAN	Sí
CALDERON CENTENO SEBASTIAN	PAN	Sí
CAMARILLO ORTEGA RUBEN	PAN	Sí
CANTU SEGOVIA ELOY	PRI	Sí
CASTELLON FONSECA FCO. JAVIER	PRD	Sí
CASTELO PARADA JAVIER	PAN	Sí
CASTRO TRENTI FERNANDO J.	PRI	Sí
CONTRERAS SANDOVAL EVA	PAN	Sí
COPPOLA JOFFROY LUIS A.	PAN	Sí
CORICHI GARCIA CLAUDIA	PRD	Sí
CORTES MENDOZA MARKO A.	PAN	Sí
CREEL MIRANDA SANTIAGO	PAN	Sí
CUE MONTEAGUDO GABINO	CONV	Sí
DELGADO DANTE	CONV	Sí
DIAZ DELGADO BLANCA J.	PAN	Sí
DORADOR P. GAVILAN RODOLFO	PAN	Sí
DUEÑAS LLERENAS J. JESUS	PAN	Sí
GALINDO NORIEGA RAMON	PAN	Sí
GALVAN RIVAS ANDRES	PAN	Sí
GARCIA CERVANTES RICARDO	PAN	Sí
GARCIA QUIROZ MA. DEL SOCORRO	PRI	Sí
GARIBAY GARCIA JESUS	PRD	Sí
GOMEZ ALVAREZ PABLO	PRD	Sí
GOMEZ TUEME AMIRA	PRI	Sí
GONZALEZ ALCOCER ALEJANDRO	PAN	Sí
GONZALEZ CARRILLO ADRIANA	PAN	Sí
GONZALEZ GONZALEZ FELIPE	PAN	Sí
GONZALEZ MORFIN JOSE	PAN	Sí
GOVEA ARCOS EUGENIO	PAN	Sí
GUADARRAMA MARQUEZ JOSE	PRD	Sí
HERNANDEZ GARCIA RAMIRO	PRI	Sí
HERNANDEZ RAMOS MINERVA	PRD	Sí
JOAQUIN COLDWELL PEDRO	PRI	Sí
LABASTIDA OCHOA FRANCISCO	PRI	Sí
LARIOS GAXIOLA EMMA LUCIA	PAN	Sí
LEGORRETA ORDORICA JORGE	PVEM	Sí
LOBATO CAMPOS JOSE LUIS	CONV	Sí
LOPEZ VALDEZ MARIO	PRI	Sí
LOZANO DE LA TORRE CARLOS	PRI	Sí
MARTINEZ MANRIQUEZ IRMA	PANAL	Sí
MAZON ALONSO LAZARO	PRD	Sí
MEJIA GONZALEZ RAUL	PRI	Sí
MEJIA HARO ANTONIO	PRD	Sí

MENDIZABAL PEREZ HECTOR	PAN	Sí
MONTENEGRO IBARRA GERARDO	PRI	Sí
MORALES FLORES MELQUIADES	PRI	Sí
MORENO U. MA DE LOS ANGELES	PRI	Sí
MORENO VALLE ROSAS RAFAEL	PAN	Sí
MUÑOZ GUTIERREZ RAMON	PAN	Sí
MURILLO KARAM JESUS	PRI	Sí
NAVA BOLAÑOS EDUARDO	PAN	Sí
NUÑEZ JIMENEZ ARTURO	PRD	Sí
OCEJO MORENO JORGE A.	PAN	Sí
OROZCO GOMEZ JAVIER	PVEM	Sí
ORTIZ SALINAS LUIS DAVID	PAN	Sí
ORTUÑO GURZA MA. TERESA	PAN	Sí
PEREDO AGUILAR ROSALIA	PAN	Sí
POLEVNSKY GURWITZ YEIDCKOL	PRD	Sí
RAMIREZ LOPEZ HELADIO	PRI	Sí
RIVERA PEREZ ADRIAN	PAN	Sí
RODRIGUEZ LOMELI LUIS F.	PAN	Sí
RODRIGUEZ Y PACHECO ALFREDO	PAN	Sí
RUEDA SANCHEZ ROGELIO	PRI	Sí
RUIZ DEL RINCON GABRIELA	PAN	Sí
SACRAMENTO JOSE JULIAN	PAN	Sí
SERRANO SERRANO MARIA	PAN	Sí
SOTELO GARCIA CARLOS	PRD	Sí
TAMBORREL SUAREZ GUILLERMO	PAN	Sí
TOLEDO INFANZON ADOLFO	PRI	Sí
TORRES ORIGEL RICARDO	PAN	Sí
TREJO REYES JOSE I.	PAN	Sí
VELAZQUEZ LOPEZ RUBEN	PRD	Sí
VILLARREAL GARCIA LUIS A.	PAN	Sí
ZAVALA PENICHE MA. BEATRIZ	PAN	Sí
ZOREDA NOVELO CLEOMINIO	PRI	Sí
ANAYA GUTIERREZ ALBERTO	PT	Abstención
JARA CRUZ SALOMON	PRD	Abstención
LOPEZ HERNANDEZ ROSALINDA	PRD	Abstención
MONREAL AVILA RICARDO	PT	Abstención
ROJO E INCHAUSTEGUI MARIA	PRD	Abstención
TORRES MERCADO TOMAS	PRD	Abstención
YBARRA DE LA GARZA ROSARIO	PT	Abstención

VOTACION REGISTRADA FUERA DEL SISTEMA ELECTRONICO

JIMENEZ MACIAS CARLOS	PRI	Sí
LEAL ANGULO AUGUSTO CESAR	PAN	Sí
MADERO MUÑOZ GUSTAVO	PAN	Sí
RAMIREZ NUÑEZ ULISES	PAN	Sí".

- El C. Secretario Rivera Pérez: Señor Presidente, conforme al registro del sistema electrónico se emitieron 86 votos en pro, cero en contra y 7 abstenciones.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Pasa al Ejecutivo de la Unión para los efectos constitucionales.

PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE GOBERNACION

DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente

DECRETO

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA:

SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.

Artículo Primero.- Se reforman los artículos 4o., primer párrafo, 13, primero y actual segundo párrafos; 14, fracción I, segundo, tercero y quinto párrafos; 24, fracción I y el inciso a); 65, primer párrafo; 66; 67, último párrafo y 68, primer párrafo y se adicionan los artículos 1-A; 13, con los párrafos segundo y tercero, recorriéndose los demás párrafos en su orden; 14, con un tercer párrafo, recorriéndose los demás párrafos en su orden; 31, con un párrafo segundo y el Capítulo X denominado "Del Juicio en Línea" al Título II, que comprende de los artículos 58-A al 58-S a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 1-A.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I. Acuse de Recibo Electrónico: Constancia que acredita que un documento digital fue recibido por el Tribunal y estará sujeto a la misma regulación aplicable al uso de una firma electrónica avanzada. En este caso, el acuse de recibo electrónico identificará a la Sala que recibió el documento y se presumirá, salvo prueba en contrario, que el documento digital fue recibido en la fecha y hora que se consignen en dicha constancia. El Tribunal establecerá los medios para que las partes y los autorizados para recibir notificaciones puedan verificar la autenticidad de los acuses de recibo electrónico.
II. Archivo Electrónico: Información contenida en texto, imagen, audio o video generada, enviada, recibida o archivada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología que forma parte del Expediente Electrónico.
III. Boletín Procesal: Medio de comunicación oficial impreso o electrónico, a través del cual el Tribunal da a conocer las actuaciones o resoluciones en los juicios contenciosos administrativos federales que se tramitan ante el mismo.
IV. Clave de acceso: Conjunto único de caracteres alfanuméricos asignados por el Sistema de Justicia en Línea del Tribunal a las partes, como medio de identificación de las personas facultadas en el juicio en que promuevan para utilizar el Sistema, y asignarles los privilegios de consulta del expediente respectivo o envío vía electrónica de promociones relativas a las actuaciones procesales con el uso de la firma electrónica avanzada en un procedimiento contencioso administrativo.

V. Contraseña: Conjunto único de caracteres alfanuméricos, asignados de manera confidencial por el Sistema de Justicia en Línea del Tribunal a los usuarios, la cual permite validar la identificación de la persona a la que se le asignó una Clave de Acceso.
VI. Dirección de Correo Electrónico: Sistema de comunicación a través de redes informáticas, señalado por las partes en el juicio contencioso administrativo federal.
VII. Dirección de Correo Electrónico Institucional: Sistema de comunicación a través de redes informáticas, dentro del dominio definido y proporcionado por los órganos gubernamentales a los servidores públicos.
VIII. Documento Electrónico o Digital: Todo mensaje de datos que contiene texto o escritura generada, enviada, recibida o archivada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología que forma parte del Expediente Electrónico.
IX. Expediente Electrónico: Conjunto de información contenida en archivos electrónicos o documentos digitales que conforman un juicio contencioso administrativo federal, independientemente de que sea texto, imagen, audio o video, identificado por un número específico.
X. Firma Digital: Medio gráfico de identificación en el Sistema de Justicia en Línea, consistente en la digitalización de una firma autógrafa mediante un dispositivo electrónico, que es utilizada para reconocer a su autor y expresar su consentimiento.
XI. Firma Electrónica Avanzada: Conjunto de datos consignados en un mensaje electrónico adjuntados o lógicamente asociados al mismo que permita identificar a su autor mediante el Sistema de Justicia en línea, y que produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. La firma electrónica permite actuar en Juicio en Línea.
XII. Juicio en la vía tradicional: El juicio contencioso administrativo federal que se substancia recibiendo las promociones y demás documentales en manuscrito o impresos en papel, y formando un expediente también en papel, donde se agregan las actuaciones procesales.
XIII. Juicio en línea: Substanciación y resolución del juicio contencioso administrativo federal en todas sus etapas, así como de los procedimientos previstos en el artículo 58 de esta Ley, a través del Sistema de Justicia en Línea.
XIV. Sistema de Justicia en Línea: Sistema informático establecido por el Tribunal a efecto de registrar, controlar, procesar, almacenar, difundir, transmitir, gestionar, administrar y notificar el procedimiento contencioso administrativo que se sustancie ante el Tribunal.
XV. Tribunal: Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

ARTÍCULO 4o.- Toda promoción deberá contener la firma autógrafa o la firma electrónica avanzada de quien la formule y sin este requisito se tendrá por no presentada. Cuando el promovente en un Juicio en la vía tradicional, no sepa o no pueda estampar su firma autógrafa, estampará en el documento su huella digital y en el mismo documento otra persona firmará a su ruego.

...

TÍTULO II
De la Substanciación y Resolución del Juicio

CAPÍTULO I
De la Demanda

ARTÍCULO 13.- El demandante podrá presentar su demanda, mediante Juicio en la vía tradicional, por escrito ante la sala regional competente o, en línea, a través del Sistema de Justicia en Línea, para este último caso, el demandante deberá manifestar su opción al momento de presentar la demanda. Una vez que el demandante haya elegido su opción no podrá variarla. Cuando la autoridad tenga este carácter la demanda se presentará en todos los casos en línea a través del Sistema de Justicia en Línea.

Para el caso de que el demandante no manifieste su opción al momento de presentar su demanda se entenderá que eligió tramitar el Juicio en la vía tradicional.

La demanda deberá presentarse dentro de los plazos que a continuación se indican:

I. a **III. ...**

Cuando el demandante tenga su domicilio fuera de la población donde esté la sede de la Sala, la demanda podrá enviarse a través de Correos de México, correo certificado con acuse de recibo, siempre que el envío se efectúe en el lugar en que resida el demandante, pudiendo en este caso señalar como domicilio para recibir notificaciones, el ubicado en cualquier parte del territorio nacional, salvo cuando tenga su domicilio dentro de la jurisdicción de la Sala competente, en cuyo caso, el señalado para tal efecto, deberá estar ubicado dentro de la circunscripción territorial de la Sala.

...

...

ARTÍCULO 14.- ...

I. El nombre del demandante y su domicilio para recibir notificaciones en cualquier parte del territorio nacional, así como su Dirección de Correo Electrónico, cuando opte porque el juicio se substancie en línea a través del Sistema de Justicia en Línea.

II. a **VIII. ...**

En cada demanda sólo podrá aparecer un demandante, salvo en los casos que se trate de la impugnación de resoluciones conexas, o que se afecte los intereses jurídicos de dos o más personas, mismas que podrán promover el juicio contra dichas resoluciones en una sola demanda.

En los casos en que sean dos o más demandantes éstos ejercerán su opción a través de un representante común.

En la demanda en que promuevan dos o más personas en contravención de lo dispuesto en el párrafo anterior, el Magistrado Instructor requerirá a los promoventes para que en el plazo de cinco días presenten cada uno de ellos su demanda correspondiente, apercibidos que de no hacerlo se desechará la demanda inicial.

Cuando se omita el nombre del demandante o los datos precisados en las fracciones II y VI, el Magistrado Instructor desechará por improcedente la demanda interpuesta. Si se omiten los datos previstos en las fracciones III, IV, V, VII y VIII, el Magistrado Instructor requerirá al promovente para que los señale dentro del término de cinco días, apercibiéndolo que de no hacerlo en tiempo se tendrá por no presentada la demanda o por no ofrecidas las pruebas, según corresponda.

En el supuesto de que conforme a lo dispuesto en la fracción I de este artículo, no se señale el domicilio del demandante en la jurisdicción de la Sala Regional que corresponda o se desconozca el domicilio del tercero, las notificaciones relativas se efectuarán por lista autorizada, que se fijará en sitio visible de la propia Sala, así como en el Boletín Procesal que emita el Tribunal, el cual estará disponible en su página electrónica. En caso de que el actor desconozca el domicilio del tercero, deberá manifestarlo así bajo protesta de decir verdad.

ARTÍCULO 24.- ...

I. La promoción en donde se soliciten las medidas cautelares señaladas, deberá contener los siguientes requisitos:

a) El nombre del demandante y su domicilio para recibir notificaciones en cualquier parte del territorio nacional, así como su Dirección de Correo Electrónico, cuando opte porque el juicio se substancie en línea a través del Sistema de Justicia en Línea.

b) a **d) ...**

II. **...**

...

...

...

ARTÍCULO 31.- ...

I. a **III. ...**

Para el caso en que proceda la acumulación y los juicios respectivos se estén sustanciando por la vía tradicional y el juicio en línea, el Magistrado Instructor requerirá a las partes relativas al Juicio en la vía tradicional para que en el plazo de tres días manifiesten si optan por substanciar el juicio en línea, en caso de que no ejerza su opción se tramitara el Juicio en la vía tradicional.

CAPÍTULO X

Del Juicio en Línea

ARTÍCULO 58-A.- El juicio contencioso administrativo federal se promoverá, substanciará y resolverá en línea, a través del Sistema de Justicia en Línea que deberá establecer y desarrollar el Tribunal, en términos de lo dispuesto por el presente Capítulo y las demás disposiciones específicas que resulten aplicables de esta Ley. En todo lo no previsto, se aplicarán las demás disposiciones que resulten aplicables de este ordenamiento.

ARTÍCULO 58-B.- Cuando el demandante ejerza su derecho a presentar su demanda en línea a través del Sistema de Justicia en Línea del Tribunal, las autoridades demandadas deberán comparecer y tramitar el juicio en la misma vía.

Si el demandante no señala expresamente su Dirección de Correo Electrónico, se tramitará el Juicio en la vía tradicional y el acuerdo correspondiente se notificará por lista y en el Boletín Procesal del Tribunal.

ARTÍCULO 58-C.- Cuando la demandante sea una autoridad, el particular demandado, al contestar la demanda, tendrá derecho a ejercer su opción para que el juicio se tramite y resuelva en línea conforme a las disposiciones de este Capítulo, señalando para ello su domicilio y Dirección de Correo Electrónico.

A fin de emplazar al particular demandado, el Secretario de Acuerdos que corresponda, imprimirá y certificará la demanda y sus anexos que se notificarán de manera personal.

Si el particular rechaza tramitar el juicio en línea contestará la demanda mediante el Juicio en la vía tradicional.

ARTÍCULO 58-D.- En el Sistema de Justicia en Línea del Tribunal se integrará el Expediente Electrónico, mismo que incluirá todas las promociones, pruebas y otros anexos que presenten las partes, oficios,

acuerdos, y resoluciones tanto interlocutorias como definitivas, así como las demás actuaciones que deriven de la substanciación del juicio en línea, garantizando su seguridad, inalterabilidad, autenticidad, integridad y durabilidad, conforme a los lineamientos que expida el Tribunal.

En los juicios en línea, la autoridad requerida, desahogará las pruebas testimoniales utilizando el método de videoconferencia, cuando ello sea posible.

ARTÍCULO 58-E.- La Firma Electrónica Avanzada, Clave de Acceso y Contraseña se proporcionarán, a través del Sistema de Justicia en Línea del Tribunal, previa obtención del registro y autorización correspondientes. El registro de la Firma Electrónica Avanzada, Clave de Acceso y Contraseña, implica el consentimiento expreso de que dicho Sistema registrará la fecha y hora en la que se abran los Archivos Electrónicos, que contengan las constancias que integran el Expediente Electrónico, para los efectos legales establecidos en este ordenamiento.

Para hacer uso del Sistema de Justicia en Línea deberán observarse los lineamientos que, para tal efecto, expida el Tribunal.

ARTÍCULO 58-F.- La Firma Electrónica Avanzada producirá los mismos efectos legales que la firma autógrafa y garantizará la integridad del documento, teniendo el mismo valor probatorio.

ARTÍCULO 58-G.- Solamente, las partes, las personas autorizadas y delegados tendrán acceso al Expediente Electrónico, exclusivamente para su consulta, una vez que tengan registrada su Clave de Acceso y Contraseña.

ARTÍCULO 58-H.- Los titulares de una Firma Electrónica Avanzada, Clave de Acceso y Contraseña serán responsables de su uso, por lo que el acceso o recepción de las notificaciones, la consulta al Expediente Electrónico y el envío de información mediante la utilización de cualquiera de dichos instrumentos, les serán atribuibles y no admitirán prueba en contrario, salvo que se demuestren fallas del Sistema de Justicia en Línea.

ARTÍCULO 58-I.- Una vez recibida por vía electrónica cualquier promoción de las partes, el Sistema de Justicia en Línea del Tribunal emitirá el Acuse de Recibo Electrónico correspondiente, señalando la fecha y la hora de recibido.

ARTÍCULO 58-J.- Cualquier actuación en el Juicio en Línea se efectuará a través del Sistema de Justicia en Línea del Tribunal en términos del presente Capítulo. Dichas actuaciones serán validadas con las firmas electrónicas y firmas digitales de los Magistrados y Secretarios de Acuerdos que den fe según corresponda.

ARTÍCULO 58-K.- Los documentos que las partes ofrezcan como prueba, incluido el expediente administrativo a que se refiere el artículo 14, fracción V, de esta Ley, deberán exhibirlos de forma legible a través del Sistema de Justicia en Línea del Tribunal.

Tratándose de documentos digitales, se deberá manifestar la naturaleza de los mismos, especificando si la reproducción digital corresponde a una copia simple, una copia certificada o al original y tratándose de esta última, si tiene o no firma autógrafa. Los particulares deberán hacer esta manifestación bajo protesta de decir verdad, la omisión de la manifestación presume en perjuicio sólo del promovente, que el documento digitalizado corresponde a una copia simple.

Las pruebas documentales que ofrezcan y exhiban las partes tendrán el mismo valor probatorio que su constancia física, siempre y cuando se observen las disposiciones de la presente Ley y de los acuerdos normativos que emitan los órganos del Tribunal para asegurar la autenticidad de la información, así como de su transmisión, recepción, validación y notificación.

ARTÍCULO 58-L.- Para el caso de pruebas diversas a las documentales, los instrumentos en los que se haga constar la existencia de dichas pruebas se integrarán al Expediente Electrónico. El Secretario de Acuerdos a cuya mesa corresponda el asunto, deberá digitalizar las constancias relativas y procederá a la certificación de su cotejo con los originales físicos, así como a garantizar el resguardo de los originales y de los bienes materiales que en su caso hubieren sido objeto de prueba.

Para el caso de pruebas diversas a las documentales, éstas deberán ofrecerse en la demanda y ser presentadas a la Sala que esté conociendo del asunto, en la misma fecha en la que se registre en el Sistema de Justicia en Línea del Tribunal la promoción correspondiente a su ofrecimiento, haciendo constar su recepción por vía electrónica.

ARTÍCULO 58-M.- Para los juicios que se substancien en términos de este capítulo no será necesario que las partes exhiban copias para correr los traslados que la Ley establece, salvo que hubiese tercero interesado, en cuyo caso, a fin de correrle traslado, el demandante deberá presentar la copia de traslado con sus respectivos anexos.

En el escrito a través del cual el tercero interesado se apersone en juicio, deberá precisar si desea que el juicio se continúe substanciando en línea y señalar en tal caso, su Dirección de Correo Electrónico. En caso de que manifieste su oposición, la Sala dispondrá lo conducente para que se digitalicen los documentos que dicho tercero presente, a fin de que se prosiga con la instrucción del juicio en línea con relación a las demás partes, y a su vez, se impriman y certifiquen las constancias de las actuaciones y documentación electrónica, a fin de que se integre el expediente del tercero en un Juicio en la vía tradicional.

ARTÍCULO 58-N.- Las notificaciones que se practiquen dentro del juicio en línea, se efectuarán conforme a lo siguiente:

I.- Todas las actuaciones y resoluciones que conforme a las disposiciones de esta Ley deban notificarse en forma personal, mediante correo certificado con acuse de recibo, o por oficio, se deberán realizar a través del Sistema de Justicia en Línea del Tribunal.

II.- El actuario deberá elaborar la minuta electrónica en la que precise la actuación o resolución a notificar, así como los documentos que se adjunten a la misma. Dicha minuta, que contendrá la Firma Electrónica Avanzada del actuario, será ingresada al Sistema de Justicia en Línea del Tribunal junto con la actuación o resolución respectiva y los documentos adjuntos.

III.- El actuario enviará a la Dirección de Correo Electrónico de la o las partes a notificar, un aviso informándole que se ha dictado una actuación o resolución en el Expediente Electrónico, la cual está disponible en el Sistema de Justicia en Línea del Tribunal.

IV.- El Sistema de Justicia en Línea del Tribunal registrará la fecha y hora en que se efectúe el envío señalado en la fracción anterior.

V.- Se tendrá como legalmente practicada la notificación, conforme a lo señalado en las fracciones anteriores, cuando el Sistema de Justicia en Línea del Tribunal genere el Acuse de Recibo Electrónico donde conste la fecha y hora en que la o las partes notificadas ingresaron al Expediente Electrónico, lo que deberá suceder dentro del plazo de tres días hábiles siguientes a la fecha de envío del aviso a la Dirección de Correo Electrónico de la o las partes a notificar.

VI.- En caso de que en el plazo señalado en la fracción anterior, el Sistema de Justicia en Línea del Tribunal no genere el acuse de recibo donde conste que la notificación fue realizada, la misma se efectuará mediante lista y por Boletín Procesal al cuarto día hábil contado a partir de la fecha de envío del Correo Electrónico, fecha en que se tendrá por legalmente notificado.

ARTÍCULO 58-O.- Para los efectos del Juicio en Línea son hábiles las 24 horas de los días en que se encuentren abiertas al público las Oficinas de las Salas del Tribunal.

Las promociones se considerarán, salvo prueba en contrario, presentadas el día y hora que conste en el Acuse de Recibo Electrónico que emita el Sistema de Justicia en Línea del Tribunal, en el lugar en donde el promovente tenga su domicilio fiscal y, por recibidas, en el lugar de la sede de la Sala Regional a la que corresponda conocer del juicio por razón de territorio. Tratándose de un día inhábil se tendrán por presentadas el día hábil siguiente.

ARTÍCULO 58-P.- Las autoridades cuyos actos sean susceptibles de impugnarse ante el Tribunal, deberán registrar en la Secretaría General de Acuerdos o ante la Presidencia de las Salas Regionales, según corresponda, la Dirección de Correo Electrónico Institucional, así como el domicilio oficial de las unidades administrativas a las que corresponda su representación en los juicios contenciosos administrativos, para el efecto de emplazarlas electrónicamente a juicio en aquellos casos en los que tengan el carácter de autoridad demandada.

En el caso de que las autoridades demandadas no cumplan con esta obligación, todas las notificaciones que deben hacerse, incluyendo el emplazamiento, se harán a través del Boletín Procesal, hasta que se cumpla con dicha formalidad.

ARTÍCULO 58-Q.- Para la presentación y trámite de los recursos de revisión y juicios de amparo que se promuevan contra las actuaciones y resoluciones derivadas del Juicio en Línea, no será aplicable lo dispuesto en el presente Capítulo.

El Secretario General de Acuerdos del Tribunal, los Secretarios Adjuntos de Sección y los Secretarios de Acuerdos de Sala Superior y de Salas Regionales según corresponda, deberán imprimir el archivo del Expediente Electrónico y certificar las constancias del juicio que deban ser remitidos a los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados de Circuito, cuando se impugnen resoluciones de los juicios correspondientes a su mesa.

Sin perjuicio de lo anterior, en aquellos casos en que así lo solicite el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado se podrá remitir la información a través de medios electrónicos.

ARTÍCULO 58-R.- En caso que el Tribunal advierta que alguna persona modificó, alteró, destruyó o provocó la pérdida de información contenida en el Sistema de Justicia en Línea, se tomarán las medidas de protección necesarias, para evitar dicha conducta hasta que concluya el juicio, el cual se continuará tramitando a través de un Juicio en la vía tradicional.

Si el responsable es usuario del Sistema, se cancelará su Firma Electrónica Avanzada, Clave y Contraseña para ingresar al Sistema de Justicia en Línea y no tendrá posibilidad de volver a promover juicios en línea.

Sin perjuicio de lo anterior, y de las responsabilidades penales respectivas, se impondrá al responsable una multa de trescientas a quinientas veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de cometer la infracción.

ARTÍCULO 58-S.- Cuando por caso fortuito, fuerza mayor o por fallas técnicas se interrumpa el funcionamiento del Sistema de Justicia en Línea, haciendo imposible el cumplimiento de los plazos establecidos en la ley, las partes deberán dar aviso a la Sala correspondiente en la misma promoción sujeta a término, quien pedirá un reporte al titular de la unidad administrativa del Tribunal responsable de la administración del Sistema sobre la existencia de la interrupción del servicio.

El reporte que determine que existió interrupción en el Sistema deberá señalar la causa y el tiempo de dicha interrupción, indicando la fecha y hora de inicio y término de la misma. Los plazos se suspenderán, únicamente, el tiempo que dure la interrupción del Sistema. Para tal efecto, la Sala hará constar esta situación mediante acuerdo en el expediente electrónico y, considerando el tiempo de la interrupción, realizara el computo correspondiente, para determinar si hubo o no incumplimiento de los plazos legales.

ARTÍCULO 65.- Toda resolución debe notificarse, o en su caso, darse el aviso en la Dirección de Correo Electrónico señalada, a más tardar el tercer día siguiente a aquél en que el expediente haya sido turnado al actuario para ese efecto y se asentará la razón respectiva a continuación de la misma resolución.

...

...

ARTÍCULO 66.- En las notificaciones, el actuario deberá asentar razón del envío por correo o entrega de los oficios de notificación y de los avisos en la Dirección de Correo Electrónico, así como de las notificaciones personales y por lista. Los acuses postales de recibo y las piezas certificadas devueltas se agregarán como constancia a dichas actuaciones.

ARTÍCULO 67.- ...

...

...

...

Las partes que así lo deseen, podrán señalar su clave o Dirección de Correo Electrónico a la Sala Regional en que se lleve el juicio, a fin de que por este medio se les dé aviso de la emisión de los autos y demás resoluciones que en él se dicten, acompañado de un extracto de su contenido que comprenderá la fecha y órgano de emisión, los datos de identificación del expediente y el tipo de auto o resolución. Satisfecho lo anterior, el Magistrado Instructor ordenará que los avisos de que se trata se le practiquen por este medio a la parte que lo haya solicitado; el Actuario, a su vez, deberá dejar constancia en el expediente de que el aviso se envió a la Dirección de Correo Electrónico señalado hasta por tres ocasiones consecutivas y la fecha y hora en que las realizó. En estos casos, durante el plazo de cinco días siguientes a aquél en que el aviso se llevó a cabo, la parte interesada podrá apersonarse al local de la Sala a notificarse personalmente de la resolución de que se trate y, a su vencimiento, si esto último no hubiere ocurrido, se procederá a su notificación por lista.

ARTÍCULO 68.- Las notificaciones que deban hacerse a las autoridades administrativas se harán por oficio y por vía telegráfica en casos urgentes. También podrán efectuarse, opcionalmente, en la forma prevista en el artículo anterior por medio del aviso en la Dirección de Correo Electrónico Institucional.

...

...

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforman los artículos 37, fracción VIII y 41, fracción XXX; se adicionan los artículos 38, con una fracción X, pasando la actual a ser XI; 41, con una fracción XXXI, pasando la actual a ser XXXII y recorriéndose en su orden las demás fracciones; 47, con una fracción VIII; 48, con una fracción VII, pasando la actual a ser VIII; 49, con una fracción V, pasando la actual a ser VI y 50, con una fracción VI, pasando la actual a ser VII a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para quedar como sigue:

CAPÍTULO V
De las Salas Regionales

ARTÍCULO 37.- ...

I. a **VII. ...**

VIII. Verificar que en la Sala se utilice y mantenga actualizado el sistema de control y seguimiento de juicios, así como el Sistema de Justicia en Línea del Tribunal;

IX. a **XI. ...**

ARTÍCULO 38.- ...

I. a **VIII. ...**

IX. Dictar los acuerdos y providencias relativas a las medidas cautelares provisionales en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, así como proponer a la Sala el proyecto de resolución correspondiente a la medida cautelar definitiva que se estime procedente;

X. Supervisar la debida integración de las actuaciones en el Sistema de Justicia en Línea del Tribunal, de los juicios tramitados en línea, y

XI. Las demás que les correspondan conforme a las disposiciones legales aplicables.

CAPÍTULO VI
De la Junta de Gobierno y Administración

ARTÍCULO 41.- ...

I. a **XXIX. ...**

XXX. Establecer y administrar un Boletín Procesal para la notificación de las resoluciones y acuerdos, así como el control de las notificaciones que se realicen por medios electrónicos y supervisar la correcta operación y funcionamiento del Sistema de Justicia en Línea del Tribunal para la tramitación de los juicios en línea;

XXXI. Emitir los acuerdos normativos que contengan los lineamientos técnicos y formales que deban observarse en la substanciación del juicio en línea;

XXXII. Supervisar la publicación de las jurisprudencias, precedentes y tesis aisladas emitidas por las Salas y Secciones en la Revista del Tribunal;

XXXIII. a **XXXV. ...**

ARTÍCULO 47.- ...

I. a **V. ...**

CAPÍTULO VII
De los demás Servidores Públicos del Tribunal

VI. Dirigir los archivos de la Sala Superior;

VII. Digitalizar la documentación y actuaciones que se requiera incorporar a un expediente tramitado en línea, así como imprimir y certificar las constancias de los expedientes electrónicos de la Sala Superior y las reproducciones en medios electrónicos de dichas actuaciones, y

VIII. Dar fe y expedir certificados de las constancias que obran en los expedientes que obran en la Sala Superior.

ARTÍCULO 48.- ...

I. a **V. ...**

VI. Dar fe y expedir certificados de constancias que obran en los expedientes de las Secciones;

VII. Digitalizar la documentación y actuaciones que se requiera incorporar a un expediente tramitado en línea, así como imprimir y certificar las constancias de los expedientes electrónicos de la Sección y las reproducciones en medios electrónicos de dichas actuaciones, y

VIII. Las demás que les encomiende el Presidente de la Sección.

ARTÍCULO 49.- ...

I. a **III. ...**

IV. Dar fe y expedir certificados de las constancias que obren en los expedientes de la Ponencia a la que estén adscritos;

V. Digitalizar la documentación y actuaciones que se requiera incorporar a un expediente tramitado en línea, así como imprimir y certificar las constancias de los expedientes electrónicos de la Ponencia a la que estén adscritos y las reproducciones en medios electrónicos de dichas actuaciones, y

VI. Desempeñar las demás atribuciones que las disposiciones aplicables les confieran.

ARTÍCULO 50.- ...

I. a **IV. ...**

V. Dar fe y expedir certificados de las constancias que obren en los expedientes de la Sala a la que estén adscritos;

VI. Digitalizar la documentación y actuaciones que se requiera incorporar a un expediente tramitado en línea, así como imprimir y certificar las constancias de los expedientes electrónicos de la Sala a la que estén adscritos y las reproducciones en medios electrónicos de dichas actuaciones, y

VII. Las demás que señalen las disposiciones aplicables.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, iniciará el desarrollo e instrumentación del Sistema de Justicia en Línea a través del cual se substanciará el Juicio en Línea.

TERCERO. El Tribunal deberá realizar las acciones que correspondan, a efecto de que el Juicio en Línea, inicie su operación a los 18 meses contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa promoverá una campaña masiva entre los usuarios de los servicios del Tribunal para difundir las disposiciones contenidas en este Decreto.

CUARTO. Las autoridades cuyos actos sean susceptibles de impugnarse ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a través del Sistema de Justicia en Línea, deberán tramitar su Firma Electrónica Avanzada ante la Secretaría General de Acuerdos o ante la Presidencia de las Salas Regionales, según corresponda, y registrar su Dirección de Correo Electrónico institucional, así como el domicilio oficial de las unidades administrativas a las que corresponda su representación en los juicios contenciosos administrativos, para el efecto de emplazarlas electrónicamente a juicio, en aquellos casos en los que tengan el carácter de autoridades demandadas, a partir de los seis meses de la entrada en vigor del presente Decreto, sin exceder para ello del plazo de 18 meses a que se refiere el artículo anterior.

QUINTO. En el mismo plazo señalado en el artículo anterior, las unidades administrativas a las que corresponda la representación de las autoridades cuyos actos sean susceptibles de impugnarse ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en los juicios contenciosos administrativos deberán instrumentar y mantener permanentemente actualizados los mecanismos tecnológicos, materiales y humanos necesarios para acceder al Juicio en Línea a través del Sistema de Justicia en Línea del Tribunal.

SEXTO. En caso de que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa reciba una demanda por medio del Sistema de Justicia en Línea del Tribunal, y constate que la autoridad demandada, incumplió con lo señalado en el artículo CUARTO transitorio del presente Decreto, se le prevendrá para que en el plazo de 10 días hábiles contados a partir de que se le notifique dicha prevención, proceda a cumplir con dicha disposición o, en su caso acredite que ya la cumplió.

En caso de no cumplir con la obligación a que se refiere el Artículo CUARTO transitorio el Tribunal le impondrá una multa de 100 a 200 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y todas las notificaciones que deban hacérsele, incluyendo el emplazamiento, se harán a través del Boletín Procesal, hasta que se cumpla con dicha formalidad.

Así mismo, se requerirá al superior jerárquico de aquélla para que en el plazo de 3 días hábiles, la obligue a cumplir sin demora. En caso de continuar la renuencia de la autoridad, los hechos se pondrán en conocimiento del Órgano Interno de Control que corresponda.

SÉPTIMO. Los juicios que se encuentren en trámite ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa a la fecha en que inicie la operación del Juicio en Línea, continuarán substanciándose y se resolverán conforme a las disposiciones vigentes a la fecha de presentación de la demanda.

OCTAVO. El Tribunal llevará a cabo las acciones necesarias a efecto de integrar los sistemas informáticos internos en una sola plataforma tecnológica, a través del Sistema de Justicia en Línea del Tribunal.

NOVENO. Para la promoción, substanciación y resolución del juicio contencioso administrativo federal a través del Sistema de Justicia en Línea, prevalecerán las disposiciones contenidas en el Capítulo X de la ley respecto de otras que se contrapongan a lo establecido en dicho Capítulo.

DÉCIMO. Los recursos necesarios para la implementación y cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto provendrán de recursos fiscales autorizados en el presupuesto del Ramo 32: Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para el presente ejercicio y los subsecuentes.

México, D.F., a 28 de abril de 2009.- Dip. **Cesar Horacio Duarte Jaquez**, Presidente.- Sen. **Gustavo Enrique Madero Muñoz**, Presidente.- Dip. **Santiago Gustavo Pedro Cortes**, Secretario.- Sen. **Adrián Rivera Pérez**, Secretario.- Rúbricas.**"**

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a once de junio de dos mil nueve.- **Felipe de Jesús Calderón Hinojosa**.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Lic. **Fernando Francisco Gómez Mont Urueta**.- Rúbrica.

PODER EJECUTIVO SECRETARIA DE GOBERNACION
DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente

DECRETO

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA:

SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

ARTÍCULO PRIMERO. Se REFORMAN los artículos 1-A, fracciones III, XII, XIII y actual XV; 13, fracción I, inciso a); 14, sexto párrafo; 24; 25; 27; 28; 29, fracción I; 30; 48, primer párrafo, así como la fracción I, inciso a), segundo párrafo, fracción II, incisos a, b) y d); 52, fracción V, inciso c); 58, fracción III; 62; 65, primer párrafo; 66; 67; 68; 69; 70; 75, tercer párrafo, y 77, primer párrafo; y se ADICIONAN una fracción XIV al artículo 1-A, recorriéndose las demás en su orden; un párrafo segundo a la fracción I y un séptimo párrafo al artículo 14; el artículo 24 Bis; el párrafo cuarto al artículo 51, recorriéndose el actual cuarto párrafo en su orden, y el Capítulo XI denominado "Del Juicio en la Vía Sumaria" al Título II, que comprende de los artículos 58-1 a 58-15, a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, para quedar como sigue:

Artículo 1-A. ...

I. a **II**. ...

III. Boletín Electrónico: Medio de comunicación oficial electrónico, a través del cual el Tribunal da a conocer las actuaciones o resoluciones en los juicios contenciosos administrativos federales que se tramitan ante el mismo.

IV. a **XI**. ...

XII. Juicio en la vía tradicional: El juicio contencioso administrativo federal que se substancia recibiendo las promociones y demás documentales en manuscrito o impresos en papel, y formando un expediente también en papel, donde se agregan las actuaciones procesales, incluso en los casos en que sea procedente la vía sumaria.

XIII. Juicio en línea: Substanciación y resolución del juicio contencioso administrativo federal en todas sus etapas, así como de los procedimientos previstos en el artículo 58 de esta Ley, a través del Sistema de Justicia en Línea, incluso en los casos en que sea procedente la vía sumaria.

XIV. Juicio en la vía Sumaria: El juicio contencioso administrativo federal en aquellos casos a los que se refiere el Capítulo XI del Título II de esta Ley.

XV. Sistema de Justicia en Línea: Sistema informático establecido por el Tribunal a efecto de registrar, controlar, procesar, almacenar, difundir, transmitir, gestionar, administrar y notificar el procedimiento contencioso administrativo que se sustancie ante el Tribunal.

XVI. Tribunal: Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Artículo 13. ...

...

...

I. ...

a) Que haya surtido efectos la notificación de la resolución impugnada, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley, inclusive cuando se controvierta simultáneamente como primer acto de aplicación una regla administrativa de carácter general.

b) ...

II. y III. ...

...

...

...

Artículo 14. ...

I. El nombre del demandante, domicilio fiscal y su domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la jurisdicción de la Sala Regional competente, así como su dirección de correo electrónico, cuando opte porque el juicio se substancie en línea a través del Sistema de Justicia en Línea.

La indicación de que se tramitará en la Vía Sumaria. En caso de omisión, el Magistrado Instructor lo tramitará en esta vía en los supuestos que proceda de conformidad con el Título II, Capítulo XI de esta Ley, sin embargo no será causa de desechamiento de la demanda, el hecho de que está no se presente dentro del término establecido para la promoción del Juicio en la Vía Sumaria, cuando la procedencia del mismo derive de la existencia de alguna de las jurisprudencias a las que se refiere el antepenúltimo párrafo del Artículo 58-2; en todo caso si el Magistrado Instructor, antes de admitir la demanda, advierte que los conceptos de impugnación planteados por la actora tienen relación con alguna de las citadas jurisprudencias, proveerá lo conducente para la sustanciación y resolución del Juicio en la Vía Ordinaria.

II. a **VIII** ...

...

...

...

...

Si en el lugar señalado por el actor como domicilio del tercero, se negare que sea éste, el demandante deberá proporcionar al Tribunal la información suficiente para proceder a su primera búsqueda, siguiendo al efecto las reglas previstas en el Código Federal de Procedimientos Civiles.

En el supuesto de que no se señale domicilio del demandante para recibir notificaciones conforme a lo dispuesto por la fracción I, de este artículo, las que corresponda hacérsele en el mismo, se efectuarán por Boletín Electrónico.

Artículo 24. Una vez iniciado el juicio contencioso administrativo, podrán decretarse todas las medidas cautelares necesarias para mantener la situación de hecho existente, que impidan que la resolución impugnada pueda dejar el litigio sin materia o causar un daño irreparable al actor, salvo en los casos en que se cause perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público.

La suspensión de la ejecución del acto impugnado se tramitará y resolverá de conformidad con el artículo 28 de esta Ley.

Las demás medidas cautelares se tramitarán y resolverán de acuerdo con la presente disposición jurídica y los artículos 25, 26 y 27 de esta Ley.

Durante los periodos de vacaciones del Tribunal, en cada región un Magistrado de Sala Regional cubrirá la guardia y quedará habilitado para resolver las peticiones urgentes sobre medidas cautelares o suspensión del acto impugnado, relacionadas con cuestiones planteadas en la demanda.

Artículo 24 Bis. Las medidas cautelares se tramitarán de conformidad con el incidente respectivo, el cual se iniciará de conformidad con lo siguiente:

I. La promoción en donde se soliciten las medidas cautelares señaladas, deberá contener los siguientes requisitos:

a) El nombre del demandante y su domicilio para recibir notificaciones, el cual deberá encontrarse ubicado dentro de la región de la Sala que conozca del juicio, así como su dirección de correo electrónico, cuando opte porque el juicio se substancie en línea a través del Sistema de Justicia en Línea;

b) Resolución que se pretende impugnar y fecha de notificación de la misma;
c) Los hechos que se pretenden resguardar con la medida cautelar, y
d) Expresión de los motivos por los cuales solicita la medida cautelar.
II. El escrito de solicitud de medidas cautelares deberá cumplir con lo siguiente:
a) Acreditar la necesidad para gestionar la medida cautelar, y
b) Adjuntar copia de la solicitud, para cada una de las partes, a fin de correrles traslado.

En caso de no cumplir con los requisitos previstos en las fracciones I y II del presente artículo, se tendrá por no interpuesto el incidente.

En los demás casos, el particular justificará en su petición las razones por las cuales las medidas cautelares son indispensables y el Magistrado Instructor podrá otorgarlas, motivando las razones de su procedencia.

La solicitud de las medidas cautelares, se podrá presentar en cualquier tiempo, hasta antes de que se dicte sentencia definitiva.

Artículo 25. En el acuerdo que admita el incidente de petición de medidas cautelares, el Magistrado Instructor ordenará correr traslado a quien se impute el acto administrativo o los hechos objeto de la controversia, pidiéndole un informe que deberá rendir en un plazo de tres días. Si no se rinde el informe o si éste no se refiere específicamente a los hechos que le impute el promovente, dichos hechos se tendrán por ciertos. En el acuerdo a que se refiere este párrafo, el Magistrado Instructor resolverá sobre las medidas cautelares previas que se le hayan solicitado.

Dentro del plazo de cinco días contados a partir de que haya recibido el informe o que haya vencido el término para presentarlo, el Magistrado Instructor dictará la resolución en la que, de manera definitiva, decrete o niegue las medidas cautelares solicitadas, decida en su caso, sobre la admisión de la garantía ofrecida, la cual deberá otorgarse dentro del plazo de tres días. Cuando no se otorgare la garantía dentro del plazo señalado, las medidas cautelares dejarán de tener efecto.

Mientras no se dicte sentencia definitiva el Magistrado Instructor que hubiere conocido del incidente, podrá modificar o revocar la resolución que haya decretado o negado las medidas cautelares, cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique.

Artículo 27. En los casos en los que las medidas cautelares puedan causar daños a terceros, el Magistrado Instructor o en su caso, la Sala las ordenará siempre que el actor otorgue garantía bastante para reparar, mediante indemnización, el daño y los perjuicios que con ellas pudieran causarse si no obtiene sentencia favorable en el juicio; garantía que deberá expedirse a favor de los terceros que pudieran tener derecho a la reparación del daño o a la indemnización citada y quedará a disposición de la Sala. Si no es cuantificable la indemnización respectiva, se fijará discrecionalmente el importe de la garantía, expresando los razonamientos lógicos y jurídicos respectivos. Si se carece por completo de datos que permitan el ejercicio de esta facultad, se requerirá a la parte afectada para que proporcione todos aquéllos que permitan conocer el valor probable del negocio y hagan posible la fijación del monto de la garantía.

Las medidas cautelares podrán quedar sin efecto si la contraparte da, a su vez, caución bastante para indemnizar los daños y perjuicios que pudieran causarse por no subsistir las medidas cautelares previstas, incluidos los costos de la garantía que hubiese otorgado la parte afectada.

Por su parte, la autoridad podrá obligarse a resarcir los daños y perjuicios que se pudieran causar al particular; en cuyo caso, el Tribunal, considerando las circunstancias del caso, podrá no dictar las medidas cautelares. En este caso, si la sentencia definitiva es contraria a la autoridad, el Magistrado Instructor, la Sala Regional, la Sección o el Pleno, deberá condenarla a pagar la indemnización administrativa que corresponda.

Artículo 28. La solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, presentado por el actor o su representante legal, se tramitará y resolverá, de conformidad con las reglas siguientes:

I. Se concederá siempre que:
a) No se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, y
b) Sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado.
II. Para el otorgamiento de la suspensión deberán satisfacerse los siguientes requisitos:

a) Tratándose de la suspensión de actos de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, se concederá la suspensión, la que surtirá sus efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables.

Al otorgar la suspensión, se podrá reducir el monto de la garantía, en los siguientes casos:

1. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del solicitante, y

2. Si se tratara de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito.

b) En los casos en que la suspensión pudiera causar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el solicitante otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que con ella se cause, si éste no obtiene sentencia favorable.

En caso de afectaciones no estimables en dinero, de proceder la suspensión, se fijará discrecionalmente el importe de la garantía.

La suspensión a la que se refiere este inciso quedará sin efecto, si previa resolución del Magistrado Instructor, el tercero otorga a su vez contragarantía para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la notificación del acto impugnado al solicitante y a pagar los daños y perjuicios que se le hayan ocasionado, si finalmente la sentencia definitiva que se dicte fuere favorable a sus pretensiones, así como el costo de la garantía que este último hubiere otorgado. No procede admitir la contragarantía si, de ejecutarse el acto, quedare sin materia el juicio.

c) En los demás casos, se concederá determinando la situación en que habrán de quedar las cosas, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal, hasta que se pronuncie sentencia firme.

d) El monto de la garantía y contragarantía será fijado por el Magistrado Instructor o quien lo supla.

III. El procedimiento será:

a) La solicitud podrá ser formulada en la demanda o en escrito diverso presentado ante la Sala en que se encuentre radicado el juicio, en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia firme.

b) Se tramitará por cuerda separada, bajo la responsabilidad del Magistrado Instructor.

c) El Magistrado Instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud.

d) El Magistrado Instructor requerirá a la autoridad demandada un informe relativo a la suspensión definitiva, el que se deberá rendir en el término de tres días. Vencido el término, con el informe o sin él, el Magistrado resolverá lo que corresponda, dentro de los tres días siguientes.

IV. Mientras no se dicte sentencia firme en el juicio, el Magistrado Instructor podrá modificar o revocar la resolución que haya concedido o negado la suspensión definitiva, cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique.

V. Cuando el solicitante de la suspensión obtenga sentencia favorable firme, el Magistrado Instructor ordenará la cancelación o liberación de la garantía otorgada. En caso de que la sentencia firme le sea desfavorable, a petición de la contraparte o en su caso, del tercero, y previo acreditamiento de que se causaron perjuicios o se sufrieron daños, la Sala ordenará hacer efectiva la garantía otorgada ante la autoridad.

Artículo 29. ...

I. La incompetencia por materia.

II. a **VI**. ...

...

Artículo 30. Las Salas Regionales serán competentes para conocer de los juicios por razón de territorio, de conformidad con lo previsto en el artículo 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

En caso de duda, será competente por razón de territorio la Sala Regional ante quien se haya presentado el asunto.

Cuando una sala esté conociendo de algún juicio que sea competencia de otra, el demandado o el tercero podrán acudir ante el Presidente del Tribunal exhibiendo copia certificada de la demanda y de las constancias que estime pertinentes, a fin de que se someta el asunto al conocimiento de la Sección que

por turno le corresponda conocer.
Cuando se presente un asunto en una Sala Regional que por materia corresponda conocer a una Sala Especializada, la primera se declarará incompetente y comunicará su resolución a la que en su opinión corresponde conocer del juicio, enviándole los autos.
La Sala requerida decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la fecha de recepción del expediente, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si la Sala lo acepta, comunicará su resolución a la requirente y a las partes. En caso de no aceptarlo, se tramitará el incidente a que se refiere el tercer párrafo de este artículo.
Artículo 48. El Pleno o las Secciones del Tribunal podrán resolver los juicios con características especiales.

I. ...

a) ...

Tratándose de la cuantía, el valor del negocio deberá exceder de cinco mil veces el salario mínimo general del área geográfica correspondiente al Distrito Federal, elevado al año, vigente en el momento de la emisión de la resolución combatida.

b) ...

II. ...

a) La petición que, en su caso, formulen las Salas Regionales, el Magistrado Instructor o las autoridades deberá presentarse hasta antes del cierre de la instrucción.

b) La Presidencia del Tribunal comunicará el ejercicio de la facultad de atracción a la Sala Regional o al Magistrado Instructor antes del cierre de la instrucción.

c) ...

d) Una vez cerrada la instrucción del juicio, la Sala Regional o el Magistrado Instructor remitirá el expediente original a la Secretaría General de Acuerdos de la Sala Superior, la que lo turnará al Magistrado ponente que corresponda conforme a las reglas que determine el Pleno del propio Tribunal.

Artículo 51. ...

I. a **V**. ...

...

a) a **f)** ...

...

Cuando resulte fundada la incompetencia de la autoridad y además existan agravios encaminados a controvertir el fondo del asunto, el Tribunal deberá analizarlos y si alguno de ellos resulta fundado, con base en el principio de mayor beneficio, procederá a resolver el fondo de la cuestión efectivamente planteada por el actor.

...

Artículo 52. ...

I. a **IV**. ...

V. ...

a) y **b)** ...

c) Declarar la nulidad del acto o resolución administrativa de carácter general, caso en que cesarán los efectos de los actos de ejecución que afectan al demandante, inclusive el primer acto de aplicación que hubiese impugnado. La declaración de nulidad no tendrá otros efectos para el demandante, salvo lo previsto por las leyes de la materia de que se trate.

d) ...

...

...

...

...

...

...

...

Artículo 58. ...

I. y II. ...

III. Tratándose del incumplimiento de la resolución que conceda la suspensión de la ejecución del acto impugnado o alguna otra de las medidas cautelares previstas en esta Ley, procederá la queja mediante escrito interpuesto en cualquier momento hasta antes de que se dicte sentencia definitiva ante el Magistrado Instructor.

En el escrito en que se interponga la queja se expresarán los hechos por los que se considera que se ha dado el incumplimiento y en su caso, se acompañarán los documentos en que consten las actuaciones de la autoridad que pretenda vulnerar la suspensión o la medida cautelar otorgada.

El Magistrado pedirá un informe a quien se impute el incumplimiento, que deberá rendir dentro del plazo de cinco días, en el que, en su caso, se justificará el acto o la omisión que provocó la queja. Vencido dicho plazo, con informe o sin él, el Magistrado dará cuenta a la Sala, la que resolverá en un plazo máximo de cinco días.

Si la Sala resuelve que hubo incumplimiento, declarará la nulidad de las actuaciones realizadas en violación a la suspensión o de otra medida cautelar otorgada.

La resolución a que se refiere esta fracción se notificará también al superior jerárquico del servidor público responsable, entendiéndose por este último al que incumpla con lo resuelto, para que proceda jerárquicamente y la Sala impondrá al responsable o autoridad renuente, una multa equivalente a un mínimo de treinta días de su salario, sin exceder del equivalente a sesenta días del mismo, tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento, el sueldo del servidor público de que se trate y su nivel jerárquico.

También se tomará en cuenta para imponer la sanción, las consecuencias que el no acatamiento de la resolución hubiera ocasionado, cuando el afectado lo señale, caso en que el solicitante tendrá derecho a una indemnización por daños y perjuicios, la que, en su caso, correrá a cargo de la unidad administrativa en la que preste sus servicios el servidor público de que se trate, en los términos en que se resuelva la queja.

IV. ...

Capítulo XI
Del Juicio en la Vía Sumaria

Artículo 58-1. El juicio contencioso administrativo federal se tramitará y resolverá en la vía sumaria, de conformidad con las disposiciones específicas que para su simplificación y abreviación se establecen en este Capítulo y, en lo no previsto, se aplicarán las demás disposiciones de esta Ley.

Artículo 58-2. Cuando se impugnen resoluciones definitivas cuyo importe no exceda de cinco veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al año al momento de su emisión, procederá el Juicio en la vía Sumaria siempre que se trate de alguna de las resoluciones definitivas siguientes:

I. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, por las que se fije en cantidad líquida un crédito fiscal;

II. Las que únicamente impongan multas o sanciones, pecuniaria o restitutoria, por infracción a las normas administrativas federales;

III. Las que exijan el pago de créditos fiscales, cuando el monto de los exigibles no exceda el importe citado;

IV. Las que requieran el pago de una póliza de fianza o de una garantía que hubiere sido otorgada a favor de la Federación, de organismos fiscales autónomos o de otras entidades paraestatales de aquélla, ó

V. Las recaídas a un recurso administrativo, cuando la recurrida sea alguna de las consideradas en los incisos anteriores y el importe de esta última, no exceda el antes señalado.

También procederá el Juicio en la vía Sumaria cuando se impugnen resoluciones definitivas que se dicten en violación a una tesis de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de inconstitucionalidad de Leyes, o a una jurisprudencia del Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal

de Justicia Fiscal y Administrativa.
Para determinar la cuantía en los casos de los incisos I), III) y V), sólo se considerará el crédito principal sin accesorios ni actualizaciones. Cuando en un mismo acto se contenga más de una resolución de las mencionadas anteriormente no se acumulará el monto de cada una de ellas para efectos de determinar la procedencia de esta vía.
La demanda deberá presentarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación de la resolución impugnada, de conformidad con las disposiciones de esta Ley ante la Sala Regional competente.
Artículo 58-3. La tramitación del Juicio en la vía Sumaria será improcedente cuando:

I. Si no se encuentra en alguno de los supuestos previstos en el artículo 58-2.

II. Simultáneamente a la impugnación de una resolución de las señaladas en el artículo anterior, se controvierta una regla administrativa de carácter general;

III. Se trate de sanciones económicas en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos o de sanciones por responsabilidad resarcitoria a que se refiere el Capítulo II del Título V de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación;

IV. Se trate de multas por infracciones a las normas en materia de propiedad intelectual;

V. Se trate de resoluciones que además de imponer una multa o sanción pecuniaria, incluyan alguna otra carga u obligación, o

VI. El oferente de una prueba testimonial, no pueda presentar a las personas señaladas como testigos.

En estos casos el Magistrado Instructor, antes de resolver sobre la admisión de la demanda, determinará la improcedencia de la vía sumaria y ordenará que el juicio se siga conforme a las demás disposiciones de esta Ley y emplazará a las otras partes, en el plazo previsto por los artículos 18 y 19 de la misma, según se trate.
Contra la determinación de improcedencia de la vía sumaria, podrá interponerse el recurso de reclamación ante la Sala Regional en que se encuentre radicado el juicio, en el plazo previsto por el artículo 58-8 de esta Ley.
Artículo 58-4. Una vez admitida la demanda, se correrá traslado al demandado para que la conteste dentro del término de quince días y emplazará, en su caso, al tercero, para que en igual término, se apersone en juicio.
En el mismo auto en que se admita la demanda, se fijará día para cierre de la instrucción. Dicha fecha no excederá de los sesenta días siguientes al de emisión de dicho auto.
Artículo 58-5. El Magistrado proveerá la correcta integración del juicio, mediante el desahogo oportuno de las pruebas, a más tardar diez días antes de la fecha prevista para el cierre de instrucción.
Serán aplicables, en lo conducente, las reglas contenidas en el Capítulo V de este Título, salvo por lo que se refiere a la prueba testimonial, la cual sólo podrá ser admitida cuando el oferente se comprometa a presentar a sus testigos en el día y hora señalados para la diligencia.
Por lo que toca a la prueba pericial, ésta se desahogará en los términos que prevé el artículo 43 de esta Ley, con la salvedad de que todos los plazos serán de tres días, salvo el que corresponde a la rendición y ratificación del dictamen, el cual será de cinco días, en el entendido de que cada perito deberá hacerlo en un solo acto ante el Magistrado Instructor. Cuando proceda la designación de un perito tercero, ésta correrá a cargo del propio Magistrado.
Artículo 58-6. El actor podrá ampliar la demanda, en los casos a que se refiere el artículo 17 de esta Ley, en un plazo de cinco días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del auto que tenga por presentada la contestación.
La parte demandada o en su caso el tercero, contestarán la ampliación a la demanda, en el plazo de cinco días siguientes a que surta efectos la notificación de su traslado.
En caso de omisión de los documentos a que se refieren los artículos 17, último párrafo, y 21, segundo párrafo, de la Ley, las partes deberán subsanarla en el plazo de tres días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del requerimiento formulado por el instructor.
Artículo 58-7. Los incidentes a que se refieren las fracciones II y IV del artículo 29 de esta Ley, podrán

promoverse dentro de los diez días siguientes a que surtió efectos la notificación del auto que tuvo por presentada la contestación de la demanda o, en su caso, la contestación a la ampliación.
El incidente de incompetencia sólo procederá en esta vía cuando sea hecho valer por la parte demandada o por el tercero, por lo que la Sala Regional en que se radique el juicio no podrá declararse incompetente ni enviarlo a otra diversa.
El incidente de acumulación sólo podrá plantearse respecto de expedientes que se encuentren tramitando en esta misma vía.
Los incidentes de nulidad de notificaciones y de recusación de perito, se deberán interponer dentro del plazo de tres días siguientes a aquél en que se conoció del hecho o se tuvo por designado al perito, respectivamente, y la contraparte deberá contestar la vista en igual término.
Artículo 58-8. Los recursos de reclamación a que se refieren los artículos 59 y 62 de esta Ley, deberán interponerse dentro del plazo de cinco días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación de la resolución correspondiente del Magistrado Instructor.
Interpuesto cualquiera de los recursos se ordenará correr traslado a la contraparte y esta última deberá expresar lo que a su derecho convenga en un término de tres días y sin más trámite, se dará cuenta a la Sala Regional en que se encuentra radicado el juicio, para que resuelva el recurso en un término de tres días.
Artículo 58-9. Las medidas cautelares, se tramitarán conforme a las reglas generales establecidas en el Capítulo III de esta Ley. El Magistrado Instructor estará facultado para decretar la resolución provisional o definitiva que corresponda a las medidas cautelares.
Contra la resolución del Magistrado Instructor dictada conforme al párrafo anterior procederá el recurso de reclamación ante la Sala Regional en la que se encuentre radicado el juicio.
Artículo 58-10. En los casos de suspensión del juicio, por surtirse alguno de los supuestos contemplados para ello en esta Ley, en el auto en que el Magistrado Instructor acuerde la reanudación del procedimiento, fijará fecha para el cierre de instrucción, en su caso, dentro de los veinte días siguientes a aquél en que haya surtido efectos la notificación a las partes de la reanudación del juicio.
Artículo 58-11. Las partes podrán presentar sus alegatos antes de la fecha señalada para el cierre de la instrucción.
Artículo 58-12. En la fecha fijada para el cierre de instrucción el Magistrado Instructor procederá a verificar si el expediente se encuentra debidamente integrado, supuesto en el que deberá declarar cerrada la instrucción; en caso contrario, fijará nueva fecha para el cierre de instrucción, dentro de un plazo máximo de diez días.
Artículo 58-13. Una vez cerrada la instrucción, el Magistrado pronunciará sentencia dentro de los diez días siguientes.
Artículo 58-14. Si la sentencia ordena la reposición del procedimiento administrativo o realizar un determinado acto, la autoridad deberá cumplirla en un plazo que no exceda de un mes contado a partir de que dicha sentencia haya quedado firme de conformidad con el artículo 53 de esta Ley.
Artículo 58-15. A falta de disposición expresa que establezca el plazo respectivo en la vía sumaria, se aplicará el de tres días.
Artículo 62. Las resoluciones que concedan, nieguen, modifiquen o revoquen cualquiera de las medidas cautelares previstas en esta Ley, podrán ser impugnadas mediante la interposición del recurso de reclamación ante la Sala Regional que corresponda.
El recurso se promoverá dentro de los cinco días siguientes a aquél en que surta sus efectos la notificación respectiva. Interpuesto el recurso en la forma y términos señalados, el Magistrado ordenará correr traslado a las demás partes, por igual plazo, para que expresen lo que a su derecho convenga. Una vez transcurrido dicho término y sin más trámite, dará cuenta a la Sala Regional, para que en un plazo de cinco días, revoque o modifique la resolución impugnada y, en su caso, conceda o niegue la suspensión solicitada, o para que confirme lo resuelto, lo que producirá sus efectos en forma directa e inmediata. La sola interposición suspende la ejecución del acto impugnado hasta que se resuelva el recurso.
La Sala Regional podrá modificar o revocar su resolución cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique.
El Pleno del Tribunal podrá ejercer de oficio la facultad de atracción para la resolución de los recursos de

reclamación a que se refiere el presente artículo, en casos de trascendencia que así considere o para fijar jurisprudencia.

Artículo 65. Toda resolución debe notificarse a más tardar el tercer día siguiente a aquél en que el expediente haya sido turnado al actuario para ese efecto y se asentará la razón respectiva a continuación de la misma resolución.

...

...

Artículo 66. En las notificaciones, el actuario deberá asentar razón del envío por correo o entrega de los oficios de notificación, así como de las notificaciones personales o por Boletín Electrónico. Los acuses postales de recibo y las piezas certificadas devueltas se agregarán como constancia al expediente.

Artículo 67. Una vez que los particulares se apersonen en el juicio, deberán señalar domicilio para recibir notificaciones, en el que se les harán saber, personalmente o por correo certificado con acuse de recibo, las siguientes resoluciones:

I. La que corra traslado de la demanda, en el caso del tercero, así como el emplazamiento al particular en el juicio de lesividad a que se refiere el artículo 13, fracción III de esta Ley;

II. La que mande citar al testigo que no pueda ser presentado por la parte oferente y la que designe al perito tercero, en el caso de dichas personas;

III. El requerimiento o prevención a que se refieren los artículos 14, 15, 17 y 21 de esta Ley a la persona que deba cumplirlo, y

IV. La resolución de sobreseimiento en el juicio y la sentencia definitiva, al actor y al tercero.

En los demás casos, las notificaciones se ordenarán hacer a los particulares por medio del Boletín Electrónico.

Artículo 68. El emplazamiento a las autoridades demandadas y las notificaciones, del sobreseimiento en el juicio cuando proceda, y de la sentencia definitiva, se harán por oficio.

En los demás casos, las notificaciones a las autoridades se realizarán por medio del Boletín Electrónico.

Las notificaciones por oficio se harán únicamente a la unidad administrativa a la que corresponda la representación en juicio de la autoridad demandada, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5, tercer párrafo, de esta Ley.

El requerimiento o notificación a otras autoridades administrativas se hará por oficio.

Si el domicilio de la sede principal de la autoridad se encuentra en el lugar de la sede de la Sala, el actuario hará la entrega, recabando la constancia de recibo correspondiente.

Artículo 69. La lista de autos y resoluciones dictados por un Magistrado o Sala, se publicará en el Boletín Electrónico al día hábil siguiente de su emisión para conocimiento de las partes.

La publicación señalará la denominación de la Sala y ponencia del Magistrado que corresponda, el nombre del particular y la identificación de las autoridades a notificar, la clave del expediente, así como el contenido del auto o resolución.

Se tendrá como fecha de notificación, la del día en que se publique en el Boletín Electrónico y el actuario lo hará constar en el auto o resolución de que se trate.

El Tribunal llevará en archivo especial, las publicaciones atrasadas del Boletín Electrónico y hará la certificación que corresponda, a través de los servidores públicos competentes.

La lista también podrá darse a conocer mediante documento impreso que se colocará en un lugar accesible de la Sala en que estén radicados los juicios, en la misma fecha en que se publique en el Boletín Electrónico.

Artículo 70. Las notificaciones surtirán sus efectos, el día hábil siguiente a aquél en que fueren hechas.

Artículo 75. ...

...

Las Salas y los Magistrados Instructores de un Juicio en la vía Sumaria podrán apartarse de los precedentes establecidos por el Pleno o las Secciones, siempre que en la sentencia expresen las razones por las que se apartan de los mismos, debiendo enviar al Presidente del Tribunal copia de la sentencia.

Artículo 77. En el caso de contradicción de sentencias, interlocutorias o definitivas, cualquiera de los Magistrados del Tribunal o las partes en los juicios en las que tales tesis se sustentaron, podrán denunciarla ante el Presidente del Tribunal para que éste la haga del conocimiento del Pleno, el cual

con un quórum mínimo de diez Magistrados, decidirá por mayoría la que debe prevalecer, constituyendo jurisprudencia.

...

ARTÍCULO SEGUNDO. Se **REFORMAN** los artículos 1, segundo párrafo; 2, fracción II; 8, párrafos tercero y cuarto; 14, fracción XIV, segundo párrafo; 18, fracciones II y VII; 23, fracción VII; 25, primer párrafo; 30, fracciones I, XII y XIV; 31; 33; 37, primer párrafo y fracción X; 38, fracción X; 41, fracciones IV, V, XI, XIX, XXIX y XXX; 47, fracción VII y VIII; 53, primer párrafo; 55, segundo párrafo; se **ADICIONAN** el artículo 2 Bis; la fracción XV al artículo 14, recorriéndose la última en su orden; las fracciones VIII y IX al artículo 23, recorriéndose la última en su orden; la fracción XV del artículo 30, recorriéndose la última en su orden; la fracción XI del artículo 37, recorriéndose la última en su orden; las fracciones XI y XII del artículo 38, recorriéndose la última en su orden; la fracción XIII Bis del artículo 41; la fracción IX del artículo 47; la fracción IV y el segundo párrafo del artículo 53; y se **DEROGA** la fracción XV del artículo 18, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para quedar como sigue:

Artículo 1. ...

El proyecto de presupuesto del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa será aprobado por el Pleno de su Sala Superior con sujeción a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y será enviado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su incorporación en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, en los términos de los criterios generales de política económica y conforme a los techos globales de gasto establecidos por el Ejecutivo Federal. Una vez aprobado su presupuesto, el Tribunal lo ejercerá directamente sin sujetarse a las disposiciones generales emitidas por las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, observando lo dispuesto en la ley citada, dentro del margen de autonomía previsto en su artículo 5, fracción II, incisos c) y d). Dicho ejercicio deberá realizarse con base en los principios de eficiencia, eficacia y transparencia y estará sujeto a la evaluación y control de los órganos correspondientes.

Artículo 2. ...

I. ...

II. Las Salas Regionales, que podrán tener el carácter de Salas Especializadas;

III. ...

Artículo 2 Bis. Las Salas Especializadas conocerán de materias específicas, con la jurisdicción, competencia y sedes que se determinen en su Reglamento Interior, de acuerdo a los estudios y propuesta de la Junta de Gobierno y Administración, con base en las necesidades del servicio.

Dichas Salas observarán para su organización, integración y en su caso funcionamiento, las mismas disposiciones aplicables a las Salas Regionales, sin perjuicio de las adecuaciones que se requieran para su buen desempeño.

Artículo 8. ...

...

Las faltas definitivas de Magistrados en Salas Regionales o Especializadas serán cubiertas provisionalmente por los Magistrados Supernumerarios adscritos por la Junta de Gobierno y Administración o a falta de ellos por el primer secretario del Magistrado ausente, hasta en tanto se realice un nuevo nombramiento en los términos de este artículo.

Las faltas temporales y las comisiones a que se refiere la fracción XIII Bis del artículo 41 de esta Ley hasta por un mes de los Magistrados en Salas Regionales o Especializadas se suplirán por el primer secretario del Magistrado ausente. Las faltas temporales o las comisiones antes citadas superiores a un mes serán cubiertas por los Magistrados Supernumerarios o a falta de éstos por el primer secretario del Magistrado ausente. La suplencia comprenderá todo el lapso de la falta temporal, o de la comisión, salvo en aquellos casos en los que la Junta determine la conclusión anticipada de la misma.

...

Artículo 14. ...

I. a **XIII**. ...

XIV. ...

No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior en todos aquellos casos en los que se pudiere afectar el derecho de un tercero, reconocido en un registro o anotación ante autoridad administrativa;

XV. Las sanciones y demás resoluciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación, en términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y

XVI. Las señaladas en las demás leyes como competencia del Tribunal.

...

...

...

Artículo 18. ...

I. ...

II. Aprobar y expedir el Reglamento Interior del Tribunal, en el que se deberán incluir, entre otros aspectos, las regiones, sede y número de Salas Regionales; la competencia material y territorial de las Salas Especializadas; así como las materias específicas de competencia de las Secciones de la Sala Superior y los criterios conforme a los cuales se ejercerá la facultad de atracción;

III. a **VI**. ...

VII. Designar al Secretario General de Acuerdos y al Contralor Interno, a propuesta del Presidente del Tribunal;

VIII. a **XIV**. ...

XV. Se deroga.

XVI. ...

Artículo 23. ...

I. a VI ...

VII. Resolver los conflictos de competencia de conformidad con las disposiciones legales aplicables;

VIII. Los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se funden en un Tratado o Acuerdo Internacional para evitar la doble tributación, o en materia comercial, suscrito por México, o cuando el demandante haga valer como concepto de impugnación que no se haya aplicado a su favor alguno de los referidos Tratados o Acuerdos.

Cuando exista una Sala Especializada con competencia en determinada materia, será dicha Sala quien tendrá la competencia original para conocer y resolver los asuntos que se funden en un Convenio, Acuerdo o Tratado Internacional relacionado con las materias de su competencia, salvo que la Sala Superior ejerza su facultad de atracción;

IX. Designar al Secretario Adjunto de la Sección que corresponda, a propuesta del Presidente de la Sección, y

X. Resolver los demás asuntos que establezcan las leyes.

Artículo 25. Las resoluciones de una Sección se tomarán por mayoría de votos de los Magistrados que la integran, quienes no podrán abstenerse de votar sino cuando tengan impedimento legal. Cuando no se apruebe un proyecto por dos veces, se cambiará de Sección.

...

Artículo 30. ...

I. Representar al Tribunal, a la Sala Superior, al Pleno de la Sala Superior y a la Junta de Gobierno y Administración, ante toda clase de autoridades y delegar las facultades que el ejercicio de esta función requiera en términos de las disposiciones aplicables;

II. a **XI**. ...

XII. Rendir los informes previos y justificados cuando los actos reclamados en los juicios de amparo sean imputados a la Sala Superior, al Pleno de la Sala Superior o a la Junta de Gobierno y Administración, así como informar del cumplimiento dado a las ejecutorias en dichos juicios;

XIII. ...

XIV. Rendir anualmente ante la Sala Superior un informe dando cuenta de la marcha del Tribunal y de las principales jurisprudencias establecidas por el Pleno y las Secciones;

XV. Autorizar, junto con el Secretario Auxiliar de la Junta de Gobierno y Administración, las actas en que se hagan constar las deliberaciones y acuerdos de la Junta de Gobierno y Administración, y firmar el engrose de las resoluciones respectivas, y

XVI. Las demás que establezcan las disposiciones aplicables.

Artículo 31. El Tribunal tendrá Salas Regionales, con jurisdicción en la circunscripción territorial que les sea asignada, integradas por tres Magistrados cada una. Las Salas Regionales conocerán de los juicios que se promuevan en los supuestos señalados en los artículos 14 y 15 de esta Ley, con excepción de los que corresponda resolver al Pleno o a las Secciones de la Sala Superior.

En los juicios en la vía sumaria, el Magistrado que haya instruido el juicio lo resolverá, en términos de lo previsto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Artículo 33. En cada una de las regiones a que se refiere el artículo anterior habrá el número de Salas que establezca el Reglamento Interior del Tribunal, en el que también se determinará la sede, su circunscripción territorial, la distribución de expedientes y la fecha de inicio de funciones.

Artículo 37. Los Presidentes de las Salas Regionales o Especializadas tendrán las siguientes atribuciones:

I. a **IX**. ...

X. Proponer a la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal se imponga una multa al actuario que no cumpla con sus obligaciones legales durante la práctica de las notificaciones a su cargo;

XI. Comunicar a la Junta de Gobierno y Administración la falta de alguno de sus Magistrados integrantes, así como el acuerdo por el que se suplirá dicha falta por el primer Secretario de Acuerdos del Magistrado ausente, y

XII. Las demás que establezcan las disposiciones aplicables.

Artículo 38. ...

I. a **IX**. ...

X. Supervisar la debida integración de las actuaciones en el Sistema de Justicia en Línea del Tribunal;

XI. Proponer a la Sala Regional la designación de perito tercero, para que se proceda en los términos de la fracción V del artículo 43 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo;

XII. Tramitar y resolver los juicios en la vía sumaria que por turno le correspondan, atendiendo a las disposiciones legales que regulan dicho procedimiento, y

XIII. Las demás que les correspondan conforme a las disposiciones legales aplicables.

Artículo 41. ...

I. a **III**. ...

IV. Llevar a cabo los estudios necesarios para determinar las regiones, sedes y número de las Salas Regionales; la competencia material y territorial de las Salas Especializadas, así como las materias específicas de competencia de las Secciones de la Sala Superior y los criterios conforme a los cuales se ejercerá la facultad de atracción, de acuerdo con lo que establezcan las disposiciones aplicables;

V. Adscribir a Salas Regionales o Salas Especializadas y, en su caso, cambiar de adscripción a los Magistrados de Salas Regionales y demás servidores públicos del Tribunal, observando las Condiciones Generales de Trabajo respecto a los trabajadores a los que les sean aplicables.

VI. a **X**. ...

XI. Dictar las reglas conforme a las cuales se deberán practicar visitas para verificar el correcto funcionamiento de las Salas Regionales y Salas Especializadas, así como señalar las que corresponderá visitar a cada uno de sus miembros;

XII. a **XIII**. ...

XIII Bis. Fijar las comisiones requeridas para el adecuado funcionamiento del Tribunal, indicando el o los servidores públicos comisionados, así como el objeto, fines y periodo en que se realizarán;

XIV. a **XVIII**. ...

XIX. Conceder licencias con goce de sueldo a los Magistrados por periodos inferiores a un mes y sin goce de sueldo hasta por dos meses más, siempre que exista causa fundada que así lo amerite;

XX. a **XXVIII**. ...

XXIX. Integrar y desarrollar, dentro del Sistema de Justicia en Línea, un subsistema de información estadística sobre el desempeño del Tribunal, del Pleno y de las Secciones de la Sala Superior, de las Salas Regionales y de las Salas Especializadas, que contemple por lo menos el número de asuntos atendidos, su materia, su cuantía, la duración de los procedimientos, el rezago y las

resoluciones confirmadas, revocadas o modificadas;

XXX. Establecer y administrar el Boletín Electrónico para la notificación de las resoluciones y acuerdos, de conformidad con lo establecido por la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, así como el control de las notificaciones que se realicen por medios electrónicos y supervisar la correcta operación y funcionamiento del Sistema de Justicia en Línea del Tribunal para la tramitación de los juicios en línea;

XXXI. a **XXXV**. ...

Artículo 47. ...

I. a VI. ...

VII. Digitalizar la documentación y actuaciones que se requiera incorporar a un expediente tramitado en línea, así como imprimir y certificar las constancias de los expedientes electrónicos de la Sala Superior y las reproducciones en medios electrónicos de dichas actuaciones;

VIII. Dar fe y expedir certificados de las constancias que obran en lo expedientes que obran en la Sala Superior, y

IX. Las demás que le correspondan conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 53. El Tribunal contará con un Centro de Estudios Superiores en materia de Derecho Fiscal y Administrativo. Al frente del mismo habrá un Director General el cual será nombrado por el Pleno, a propuesta del Presidente, y tendrá las atribuciones siguientes:

I. a **III**. ...

IV. Las demás que establezcan otras disposiciones jurídicas.

El Centro, coordinará, promoverá e impartirá cursos de estudios superiores en materia de derecho fiscal y administrativo, de conformidad con el reconocimiento de validez oficial que le otorguen las autoridades competentes.

Artículo 55. ...

Se suspenderán las labores generales del Tribunal y no correrán los plazos, los días que acuerde el Pleno del Tribunal. Durante las vacaciones del Tribunal, la Junta de Gobierno y Administración, determinará el personal que deberá realizar las guardias necesarias en las diferentes regiones y preverá que entre dicho personal se designe, cuando menos, a un Magistrado, un Secretario de Acuerdos, un Actuario y un Oficial Jurisdiccional en cada región, para atender y resolver, en los casos urgentes que no admitan demora, las medidas cautelares y suspensión en términos de lo establecido por la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

...

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Los artículos 24, 24 Bis, 25, 27 y 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo que se reforman o adicionan en términos del presente Decreto, entrarán en vigor a partir de los noventa días siguientes, al de la publicación del presente instrumento jurídico.

TERCERO. Las disposiciones relativas al Juicio en la Vía Sumaria, previstas en el Capítulo XI del Título II que se adiciona a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y los artículos 1o, fracción III, 65, 66, 67, 68, 69 y 70 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y 41, fracción XXX de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que se reforman conforme al presente Decreto, entrarán en vigor a partir de los 240 días naturales siguientes, a la fecha de publicación de este ordenamiento.

Asimismo, el Tribunal deberá realizar las acciones que correspondan, a efecto de que el Juicio en Línea, inicie su operación a partir de los 240 días naturales siguientes, a la fecha de publicación de este ordenamiento.

Los juicios que se encuentren en trámite ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al momento de entrar en vigor el Capítulo XI del Título II a que se refiere el párrafo anterior, continuarán

substanciándose y se resolverán conforme a las disposiciones vigentes a la fecha de presentación de la demanda.

CUARTO. Los avisos que se estén tramitando conforme a los artículos 67, último párrafo y 68, primer párrafo de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo que se reforma con este decreto, continuarán realizándose hasta la conclusión del juicio que corresponda, salvo que las partes manifiesten su interés de acogerse a lo dispuesto por este instrumento jurídico.

Cualquier referencia hecha en alguna disposición jurídica al Boletín procesal o a la lista en estrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se entenderá realizada al Boletín Electrónico a partir de la entrada en vigor del artículo 1-A, fracción III de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo que se reforma conforme al presente Decreto.

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa promoverá una campaña masiva entre los usuarios de los servicios del Tribunal para difundir las disposiciones contenidas en este Decreto.

México, D.F., a 18 de noviembre de 2010.- Dip. **Jorge Carlos Ramírez Marín**, Presidente.- Sen. **Manlio Fabio Beltrones Rivera**, Presidente.- Dip. **Balfre Vargas Cortez**, Secretario.- Sen. **Arturo Hervíz Reyes,** Secretario.- Rúbricas."

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los 9 días del mes de diciembre de 2010.- **Felipe de Jesús Calderón Hinojosa**.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, **José Francisco Blake** Mora.- Rúbrica.

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

JUNTA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN
ACUERDO E/JGA/16/2011
LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y FORMALES PARA LA SUSTANCIACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA.

"75 Aniversario de la Promulgación de la Ley de Justicia Fiscal".

La Junta de Gobierno y Administración del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 41, fracciones I, XXII, XXIV, XXX y XXXI de Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y con fundamento en los artículos 58-D y 58-E de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, SEGUNDO, CUARTO y QUINTO Transitorios del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las Leyes Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 2009; TERCERO Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las Leyes Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2010, y 3, 47, 67 y 68 del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y

CONSIDERANDO

Que corresponde a la Junta de Gobierno y Administración expedir, en el ámbito administrativo, los acuerdos necesarios para el buen funcionamiento del Tribunal y dirigir su buena marcha dictando las medidas necesarias para el despacho de los asuntos administrativos;

Que de igual manera, corresponde a la Junta de Gobierno y Administración supervisar la correcta operación y funcionamiento del Sistema de Justicia en Línea del Tribunal, para la tramitación de los juicios en línea, así como emitir los acuerdos normativos que contengan los lineamientos técnicos y formales que deban observarse en la substanciación del Juicio en Línea;

Que el Sistema de Justicia en Línea está integrado por los Subsistemas de Juicio en Línea, Juicio Tradicional y de Información Estadística, y este último a su vez comprende el Módulo de Banco de Sentencias y Criterios Relevantes y el Módulo de Indicadores de Gestión y Reportes de Operación;

Que los artículos Segundo, Cuarto y Quinto Transitorios del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan las Leyes Federal de Procedimiento Contencioso

Administrativo y Orgánica del Tribunal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 2009, establecen que a partir de la entrada en vigor del Decreto, es decir del 13 del mismo mes y año, el Tribunal iniciará el desarrollo e instrumentación del Sistema de Justicia en Línea y que las autoridades cuyos actos sean susceptibles de ser impugnados ante el Tribunal deberán tramitar su Firma Electrónica Avanzada, registrar su Dirección de Correo Electrónico institucional, así como el domicilio oficial de las unidades administrativas a las que corresponda su representación en los juicios contencioso administrativos, a partir de los seis meses de la entrada en vigor de dicho Decreto, es decir a partir del día 12 de diciembre de 2009, sin exceder el plazo para la entrada en operación del Juicio en Línea;

Que el artículo Tercero Transitorio, párrafo segundo, del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y de la

Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2010, establece que el Tribunal deberá realizar las acciones que correspondan, a efecto de que el juicio en línea, inicie su operación a partir de los 240 días naturales siguientes a la fecha de publicación del citado Decreto, es decir el 7 de agosto de 2011;

Que el artículo 58-D de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en su primer párrafo, establece que el Tribunal deberá expedir los lineamientos para garantizar la seguridad, inalterabilidad, autenticidad, integridad y durabilidad de los expedientes electrónicos que se integren en el Sistema de Justicia en Línea;

Que el artículo 58-E de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en su segundo párrafo, dispone que para hacer uso del Sistema de Justicia en Línea deberán observarse los lineamientos que, para tal efecto, expida el Tribunal, y

Que es necesario establecer los Lineamientos técnicos y formales para la promoción, sustanciación y resolución del juicio contencioso administrativo federal en todas sus etapas, a través del Sistema de Justicia en Línea; regular el funcionamiento y uso de dicho Sistema, y estandarizar los procedimientos internos sin afectar la autonomía jurisdiccional, ha tenido a bien expedir el siguiente

ACUERDO QUE ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y FORMALES PARA LA SUSTANCIACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA

TÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I OBJETO Y DEFINICIONES

Artículo 1.- Los presentes Lineamientos son de carácter general y de observancia obligatoria para todos los Usuarios del Sistema, así como sus administradores y tienen por objeto:

I. Establecer el procedimiento para el acceso y utilización del Sistema, para la promoción, sustanciación y resolución del Juicio en Línea, y

II. Establecer las normas de carácter administrativo a las que deberán sujetarse los servidores públicos del Tribunal en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, así como todos aquellos Usuarios y Administradores del Sistema, que hagan uso del mismo.

Artículo 2.- Para los efectos de los presentes Lineamientos serán aplicables las definiciones establecidas por el artículo 1-A de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Adicionalmente, se entenderá por:

I. **Administrador:** Servidor público del Tribunal, responsable de vigilar el cumplimiento de la normatividad relativa a la operación del Sistema, así como del mantenimiento del mismo;

II. **Archivo administrativo:** Conjunto organizado de documentos, en cualquier medio, físico o electrónico, que sean recibidos o producidos por las Unidades Administrativas del Tribunal o bien, por cualquier otra Unidad en el ejercicio de sus funciones o actividades de índole administrativa, distintas de las jurisdiccionales;

III. **Centro de Atención a Usuarios:** Oficina del Tribunal adscrita a la Unidad de Administración, encargada de atender dudas y asesorar a los Usuarios respecto del uso del Sistema, en coordinación con la Dirección;

IV. **Código de Barras:** Técnica de entrada de datos (tal como la captura manual, el reconocimiento óptico y la cinta magnética), con imágenes formadas por combinaciones de barras y espacios paralelos, de anchos variables. Representan números que a su vez pueden ser leídos y descifrados por lectores ópticos o escáners;

V. **Correo Spam:** Son mensajes no solicitados, no deseados, no esperados o de remitentes desconocidos, habitualmente de tipo publicitario enviados en cantidades masivas, generalmente por correo electrónico, cuyo objetivo es realizar un daño o un uso indebido de los medios y servicios disponibles por parte del Tribunal;

VI. **Datos personales:** Información concerniente a la persona física identificada o identificable, relativa a su nombre, registro federal de contribuyentes, domicilio, número telefónico, correo electrónico personal, clave única de registro de población u otras análogas que afecten su intimidad;

VII. **Depuración:** Desintegración material de documentos y/o transferencia de documentos electrónicos a un medio secundario a fin de liberar espacio en el Sistema;

VIII. **Dirección:** Dirección General de Informática adscrita a la Secretaría Técnica Ejecutiva, cuyas atribuciones se describen en el artículo 87 del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa;

IX. **Documentos:** Los expedientes, dictámenes, estudios, actas, resoluciones, constancias, oficios, correspondencia, acuerdos, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memoranda, estadísticas o bien, cualquier otro registro que compruebe el ejercicio de las facultades o la actividad de las áreas jurisdiccionales o unidades administrativas, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán constar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático, holográfico o cualquier otro derivado de la innovación tecnológica;

X. **Huella Digital:** Es la forma caprichosa que adopta la piel que cubre las yemas de los dedos. Está constituida por rugosidades que forman salientes y depresiones;

XI. **Información:** Datos contenidos en los documentos o archivos que el Tribunal genere, obtenga, adquiera, transforme o conserve por cualquier título, en papel o medio electrónico;

XII. **Internet:** Conjunto de redes de comunicación interconectadas cuya finalidad es intercambiar información entre computadoras que se encuentran físicamente distantes;

XIII. **Intranet:** Red de computadoras diseñada, desarrollada y administrada por el Tribunal, siguiendo los protocolos propios de Internet. Cuyo propósito es poner a disposición exclusiva de los servidores públicos del Tribunal, recursos, sistemas o información para su uso o aprovechamiento;

XIV. **Junta**: Junta de Gobierno y Administración;

XV. **Ley**: Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo;

XVI. **Ley Orgánica**: Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa;

XVII. **Lineamientos:** Las disposiciones contenidas en este documento, aprobadas por la Junta;

XVIII. **Módulo de Registro:** Lugar en el que se lleva a cabo el registro de los Usuarios del Sistema, ubicado en cada una de las sedes del País en las que existen Salas Regionales del Tribunal.

XIX. Unidad de Administración: La Unidad de Administración del Tribunal encargada de administrar y coordinar la operación del Sistema;

XX. Usuarios: Los usuarios externos e internos del Sistema;

XXI. Usuario Externo: Cualquier persona que, sin actuar como servidor púbico del Tribunal en funciones, sea parte en el juicio en línea y utilice el Sistema conforme a lo establecido en la Ley;

XXII. Usuario Interno: Servidor público del Tribunal que por su perfil, ámbito de competencia y demás cuestiones relativas a la función que desempeña, requiera utilizar o administrar el Sistema;

XXIII. Sistema: Sistema de Justicia en Línea;

XXIV. Virus: Es un programa o aplicación que tiene por objeto alterar o dañar el funcionamiento de una computadora, sistema o información, sin el permiso o el conocimiento del usuario;

XXV. Web: Red Global Mundial basada en un sistema de documentos de hipertexto y/o hipermedios enlazados y accesibles a través de Internet y conocido por sus siglas www (World Wide Web).

CAPÍTULO II
DE LA ASISTENCIA A USUARIOS

Artículo 3.- El Tribunal establecerá mecanismos de asistencia a Usuarios que utilicen el Sistema para la promoción, sustanciación y resolución del Juicio en Línea, así como para la consulta de los Expedientes Electrónicos que se generen.

Esta asistencia será proporcionada dentro del mismo Sistema o a través de la instalación de un Centro de Atención a Usuarios, personal y telefónica, que las necesidades del servicio requieran.

Corresponderá a la Junta interpretar las disposiciones establecidas en los presentes Lineamientos, así como resolver cualquier situación técnica o administrativa no prevista en los mismos.

TÍTULO SEGUNDO
DE LOS USUARIOS EXTERNOS

CAPÍTULO I
DE LA CLAVE DE ACCESO Y CONTRASEÑA

Artículo 4.- Las Claves de Acceso asignadas por el Sistema a Usuarios Externos se otorgarán exclusivamente a personas físicas, sean promoventes, autorizados, delegados, representantes legales, terceros interesados, peritos de las partes, peritos terceros, ciudadanos en general, así como personas físicas que ostenten la calidad de titular de una unidad administrativa, tanto susceptibles de ser actoras o demandadas, como las encargadas de su defensa en juicios.

Artículo 5.- Para efectos de registro y obtención de Clave de Acceso, se considerará como identificación oficial cualquiera de los siguientes documentos:

I. Pasaporte vigente expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores;

II. Credencial para votar vigente expedida por el Instituto Federal Electoral;

III. Cédula profesional expedida por la Secretaría de Educación Pública;

IV. Cartilla del Servicio Militar Nacional, expedida por la Secretaría de la Defensa Nacional;

V. Tratándose de extranjeros, el documento migratorio vigente que corresponda, emitido por la autoridad competente;

VI. Visa emitida por el consulado o embajada, y

VII. Certificado de Matrícula Consular, expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores o en su caso por la Oficina Consular de la circunscripción donde se encuentre el connacional.

Artículo 6.- Para el otorgamiento de la Clave de Acceso y generación de Contraseña, las personas físicas se apersonarán en el Módulo de Registro en el que deberán cumplir con los siguientes requisitos:

I. Llenar la solicitud para obtener la Clave de Acceso y generar la Contraseña, disponible en cada módulo de registro;

II. Proporcionar su nombre completo;

III. Precisar su domicilio (calle, número exterior e interior, calles que la circundan, colonia, ciudad, código postal, delegación o municipio, entidad federativa y país);

IV. Proporcionar su correo electrónico particular o institucional, en su caso;

V. Indicar su Clave Única de Registro de Población (CURP) siempre que se trate de personas físicas de nacionalidad mexicana;

VI. Precisar su nacionalidad;

VII. Exhibir su identificación oficial, y

VIII. Presentar el documento certificado con el que acredite su personalidad, cuando el trámite lo realice en representación de otra persona física.

Los documentos mencionados en las fracciones VII y VIII deberán presentarse en original o copia certificada para cotejo y copia simple. El documento mencionado en la fracción I deberá presentarse en original. Cuando el solicitante sea un extranjero, tratándose del dato señalado en la fracción VI, deberá exhibir el documento con el que acredite su nacionalidad en el formato expedido por la Secretaría de Gobernación o impreso desde el portal de la misma y en copia simple.

Cumplidos los requisitos señalados, el solicitante obtendrá la Clave de Acceso y registrará su Contraseña de conformidad con los parámetros de seguridad determinados por la Dirección e implementados en el Sistema, además de la constancia impresa de registro.

Artículo 7.- Los titulares de una Clave de Acceso y Contraseña serán responsables de su uso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58-H de la Ley, por lo que suscribirán una carta de conocimiento de dicha responsabilidad al obtener estos elementos electrónicos.

Artículo 8.- La Clave de Acceso y Contraseña tendrán vigencia permanente, mientras no se solicite la baja o cancelación de la primera ni la modificación o recuperación de la segunda.

Artículo 9.- Las personas físicas que requieran darse de baja en el Sistema o modificar los datos de su registro, deberán apersonarse en el Módulo de Registro y cumplir con los siguientes requisitos:

I. Llenar la solicitud de baja en el Sistema o modificación de información proporcionada para la obtención de Clave de Acceso y Contraseña, disponible en cada Módulo de Registro. En este último caso, precisando la información objeto de actualización;

II. Proporcionar su nombre completo;

III. Presentar identificación oficial y, en su caso, su folio, y

IV. Exhibir el documento certificado que acredite su personalidad cuando el trámite lo realice en representación de otra persona física.

Los documentos mencionados en las fracciones III y IV deberán presentarse en original o copia certificada para cotejo y copia simple. El documento mencionado en la fracción I deberá presentarse en original.

Una vez cumplidos estos requisitos se otorgará al solicitante una constancia impresa que indicará, además de la información antes precisada, la fecha de baja o modificación, según sea el caso, en el Sistema.

La recuperación de la Clave de Acceso o Contraseña podrá realizarse a través del Sistema, accediendo a esa opción en la pantalla de inicio.

Artículo 10.- Para obtener la Clave de Acceso y Contraseña y asegurar su uso adecuado, los solicitantes y usuarios de las mismas deberán cumplir con las siguientes obligaciones:

I. Proporcionar información fidedigna al presentarse en el Módulo de Registro. Si el personal autorizado del Tribunal constata que dicha información fuere falsa, inexacta o inexistente, cancelará la Clave de Acceso y denegará el ingreso al Sistema. En estos casos, las personas que hubieren incumplido con esta obligación deberán abstenerse de intentar obtener nueva Clave de Acceso y Contraseña para ingresar al Sistema;

II. Resguardar la confidencialidad de la Clave de Acceso y Contraseña para el ingreso al Sistema;

III. Mantener un control físico, personal y exclusivo de la Clave de Acceso y Contraseña, absteniéndose de compartirla con persona alguna;

IV. Informar al Tribunal, en cuanto tenga conocimiento de ello, que la Clave de Acceso y Contraseña fueron divulgadas o se encuentran en circunstancias que pongan en riesgo su privacidad, con el objeto de que las mismas sean revocadas y sustituidas;

V. Mantener actualizada la información proporcionada al Tribunal, y

VI. Verificar que una vez que concluya el trámite para el cual ingresó al Sistema, la sesión sea cerrada correctamente.

Artículo 11.- El Magistrado Instructor en un Juicio en Línea que haya sido modificado, alterado, destruido o que haya sufrido pérdida de la información contenida en el Expediente Electrónico correspondiente, solicitará un reporte al titular de la Unidad de Administración responsable del Sistema sobre la irregularidad advertida.

Con base en el reporte de referencia, si el Usuario Externo que sea parte en el juicio en el que se hayan cometido las conductas señaladas en el párrafo anterior es el responsable, el Magistrado Instructor

ordenará la cancelación de su Clave de Acceso y Contraseña, y acordará lo conducente a fin de que el juicio afectado se siga tramitando en la vía tradicional.

No se cancelará la Clave de Acceso y Contraseña cuando se surtan los supuestos del primer párrafo de este artículo y el o los responsables sean autoridades; no obstante lo anterior, el Tribunal presentará las denuncias correspondientes para que se inicien los procedimientos en materia de responsabilidades administrativas a los servidores públicos responsables, sin perjuicio de ejercer cualquier otra acción legal que proceda en su contra.

Las determinaciones que se tomen en términos del presente artículo, se darán a conocer a las Salas del Tribunal que tengan radicados juicios en línea, en los que intervenga la persona responsable, para que procedan en términos del artículo 58-R primer párrafo de la Ley, observando lo dispuesto en el Capítulo V, "De la Digitalización, Impresión y Resguardo de Documentos", del Título Sexto de los presentes Lineamientos.

CAPÍTULO II
DEL REGISTRO DE AUTORIDADES

Artículo 12.- Las dependencias, organismos o autoridades cuyos actos o resoluciones sean susceptibles de impugnarse ante el Tribunal a través del Sistema, así como aquéllas encargadas de su defensa en juicio y quienes puedan promover juicio de lesividad acorde con lo establecido por el artículo 2, párrafo tercero, de la Ley, deberán inscribir su dirección de correo electrónico institucional y su domicilio oficial en los Módulos de Registro, a fin de que sean emplazadas y notificadas electrónicamente y puedan apersonarse en los juicios contencioso administrativos federales iniciados a través del Sistema.

Artículo 13.- El registro de autoridades que se menciona en el artículo anterior, lo podrá realizar personalmente o por conducto de quien designe para tal efecto:

I. El titular de la dependencia, organismo o autoridad emisora de actos y resoluciones susceptibles de ser impugnados;

II. El titular de la unidad administrativa encargada de la defensa jurídica de los intereses de la dependencia, organismo o autoridad, o

III. El titular de la dependencia, organismo o autoridad que pueda promover el juicio de lesividad.

Cuando el registro lo realice el servidor público designado para tal efecto por la dependencia, organismo o autoridad, deberá acreditar tal carácter.

Artículo 14.- Para efectuar el registro, los servidores públicos señalados en el artículo anterior deberán cumplir con los siguientes requisitos:

I. Presentar en el Módulo de Registro:

a) Identificación oficial y en su caso, su folio;

b) Nombramiento del servidor público solicitante;

c) Documento en el que acredite que la dependencia, organismo o autoridad lo designó para efectuar el registro ante el Tribunal; y

d) Escrito de solicitud de registro de la Secretaría de Estado, órgano desconcentrado, organismo descentralizado, autoridad o unidad administrativa, debidamente requisitado, el cual estará disponible en cada Módulo de Registro.

Los documentos señalados en los incisos a) y b), deberán presentarse en original o copia certificada para cotejo y copia simple. El documento referido en el inciso c) deberá presentarse en original y copia simple y el escrito mencionado en el inciso d) deberá presentarse en original.

II. Además de presentar los documentos a que se refiere la fracción anterior, deberán proporcionar la información siguiente:

a) Nombre completo del servidor público, su cargo, correo electrónico institucional y carácter con el que realiza el trámite;

b) Denominación de la dependencia, organismo o autoridad que se pretende registrar y cuando proceda, la dependencia superior de la misma u organismo desconcentrado o descentralizado al que pertenece;

c) Las unidades administrativas a las que corresponde su representación en juicio;

d) Domicilio oficial de la dependencia, organismo o autoridad objeto de registro que comprenderá la calle, número exterior e interior, calles que la circundan, colonia, ciudad, código postal, delegación o municipio y entidad federativa;

e) Correo electrónico institucional de la dependencia, organismo o autoridad.

Una vez cumplidos los requisitos previstos en las fracciones I y II se otorgará al servidor público solicitante la constancia de registro de la dependencia, organismo o autoridad correspondiente en la que constará su número único de registro, la fecha en que éste se realizó y los datos de identificación de la dependencia, organismo o autoridad proporcionados en el Módulo de Registro.

Artículo 15.- Para el caso de baja o modificación de la información de registro de una dependencia, organismo o autoridad emisora de actos susceptibles de ser impugnados ante el Tribunal o de las unidades administrativas encargadas de su defensa en juicio, el servidor público autorizado deberá apersonarse en el Módulo de Registro a requisitar la solicitud correspondiente y presentar los documentos señalados en los incisos a), b) y c) de la fracción I del artículo anterior, además de los datos de la dependencia, organismo o autoridad señalados en la fracción II del mismo artículo, que será dada de baja o cuya información será actualizada, según corresponda.

Tramitada la solicitud se entregará al servidor público el documento en el que conste la baja del registro o la información actualizada, así como la fecha de realización del trámite.

Artículo 16.- Los titulares de las dependencias, organismos o autoridades registradas tendrán las siguientes obligaciones:

I. Proporcionar al Tribunal información fidedigna al momento de efectuar el registro, o cuando este último lo haya realizado un servidor público designado, verificar que así haya sido, y

II. Mantener actualizada la información proporcionada al Tribunal con motivo de un registro.

Artículo 17.- A fin de estar en posibilidad de presentar promociones o consultar los expedientes en los que sean parte, los titulares de las unidades administrativas de dependencias, organismos o autoridades

registradas, que extiendan la carta de conocimiento de responsabilidad regulada por el artículo 7 de estos Lineamientos, deberán efectuar la solicitud de vinculación de su Clave de Acceso y Contraseña con la dependencia, organismo o autoridad a la que pertenecen; para ello deberán presentarse en el Módulo de Registro para exhibir la documentación prevista por la fracción I del artículo 14 de los presentes Lineamientos. Este mismo procedimiento se seguirá para solicitar la revocación de la vinculación.

En los supuestos anteriores, se otorgará al servidor público solicitante un documento en el que se hará constar la vinculación o revocación, según corresponda, así como la fecha del trámite y la información que obre en el Módulo de Registro.

TÍTULO TERCERO
DE LOS USUARIOS INTERNOS

CAPÍTULO I
DE LA CLAVE DE ACCESO Y CONTRASEÑA

Artículo 18.- Los Usuarios Internos que requieran obtener su Clave de Acceso y Contraseña para utilizar el Sistema, deberán presentarse en el Módulo de Registro y cumplir con los siguientes requisitos:

a) Proporcionar su nombre completo;

b) Presentar identificación oficial y en su caso, su número de folio, y

c) Exhibir escrito de solicitud de Clave de Acceso y generación de Contraseña, disponible en cada Módulo de Registro.

El documento mencionado en el inciso b) deberá presentarse en original o copia certificada para cotejo y copia simple. El documento mencionado en el inciso c) deberá presentarse en original.

Tratándose de Magistrados, Secretarios de Acuerdos o Actuarios, además de los requisitos a que se refiere el párrafo anterior, deberán cumplir con lo siguiente:

I. Manifestar si cuentan o no con Firma Electrónica Avanzada y, en su caso, precisar su vigencia;

II. Atender los requerimientos del encargado del Módulo de Registro, a fin de que éste capture la Firma Digital del servidor público, y

III. Seguir las indicaciones del encargado del Módulo de Registro para que tome las huellas de su dedo índice derecho e izquierdo por triplicado.

Cumplidos los requisitos señalados, se verificará la identidad del servidor público con la Huella Digital y la Firma Electrónica Avanzada. El Sistema proporcionará la Clave de Acceso y el servidor público registrará su Contraseña de conformidad con los parámetros de seguridad determinados por la Dirección e implementados en el Sistema, con lo que se otorgará la constancia impresa de registro en la que se indicará la información proporcionada por dicho servidor público, así como su Clave de Acceso para ingresar al Sistema.

Artículo 19.- Para el caso de baja o modificación de información del registro de una Clave de Acceso y Contraseña, los Usuarios Internos deberán apersonarse en el Módulo de Registro en el que deberán cumplir con los requisitos previstos en las fracciones I, II y III del artículo 9 de los presentes Lineamientos.

Cumplidos los requisitos señalados, se otorgará al servidor público solicitante una constancia impresa en la que se indicará, además de la información señalada en el párrafo anterior, la fecha de modificación o baja en el Sistema, según sea el caso.

La Dirección General de Recursos Humanos del Tribunal tendrá la responsabilidad de hacer del conocimiento de la Unidad de Administración del Sistema los ascensos, cambios de adscripción, renuncias y modificaciones que ameriten una revisión o cancelación de la Clave de Acceso y Contraseña asignados a Usuarios Internos, para proceder a su cancelación en los casos en que éstos causen baja y no cumplan con lo dispuesto en este artículo.

Artículo 20.- Cuando con base en el reporte a que se refiere el primer párrafo del artículo 11 de los presentes Lineamientos, se desprenda que el o los responsables de haber modificado, alterado, destruido u ocasionado la pérdida de la información contenida en un Expediente Electrónico, es un Usuario Interno, no se cancelará su Clave de Acceso y Contraseña; sin embargo, el Tribunal presentará las denuncias correspondientes para que se le inicie un procedimiento en materia de responsabilidades administrativas, sin perjuicio de ejercer cualquier otra acción legal que proceda en su contra.

Artículo 21.- Resultan aplicables a los Usuarios Internos, lo dispuesto en los artículos 7, 8 y 10 de los presentes Lineamientos.

CAPÍTULO II
DE LOS REQUERIMIENTOS PARA FIRMAR RESOLUCIONES Y ACTUACIONES

Artículo 22.- Para que los Magistrados y Secretarios de Acuerdos estén en posibilidad de firmar actuaciones en el Expediente Electrónico deberán tramitar y obtener lo siguiente:

I. Registro de la Huella Digital;

II. Firma Digital, y

III. Firma Electrónica Avanzada.

Artículo 23. Para que los Actuarios puedan firmar Documentos Electrónicos en el Sistema deberán gestionar y obtener lo siguiente:

I. Registro de la huella digital, y

II. Firma Electrónica Avanzada.

TÍTULO CUARTO
DEL SISTEMA DE JUSTICIA EN LÍNEA

CAPÍTULO I
DEL PORTAL

Artículo 24.- El Tribunal proveerá el ingreso al Sistema a través de su portal disponible en Internet www.juicioenlinea.gob.mx o www.tfjfa.gob.mx para lo cual los Usuarios deberán contar con todo el equipo y programas necesarios para establecer dicha conexión.

En el Anexo Único de los presentes Lineamientos, denominado “Requerimientos Tecnológicos para los Usuarios del Sistema”, se especifican los requisitos mínimos necesarios que deberán cubrir los Usuarios para la debida interacción con el Sistema.

Artículo 25.- Los Usuarios del portal del Tribunal y del Sistema deberán abstenerse de:

I. Utilizar el Sistema para cargar, anunciar o enviar cualquier contenido con propósitos diversos a la promoción y sustanciación de un juicio contencioso administrativo federal; información ilegal, peligrosa, amenazante, abusiva, hostigadora, tortuosa, difamatoria, vulgar, obscena, calumniosa, invasiva del derecho de privacidad, discriminatoria; que sea ofensiva, dañe o perjudique a terceros;

II. Hacerse pasar por alguna persona o entidad diferente a la propia, o a la que en términos de ley represente;

III. Falsificar información o identificadores para desviar el origen de algún contenido transmitido por medio del Sistema;

IV. Cargar, anunciar o enviar información confidencial y comercial reservada sin la diligencia necesaria prevista por el Sistema para evitar su divulgación;

V. Cargar o transmitir algún archivo electrónico que contenga virus o cualquier otro código de computadora, o programas diseñados para interrumpir, destruir o perjudicar el correcto funcionamiento de equipos de cómputo de terceros, del Sistema o equipos de telecomunicaciones;

VI. Desatender cualquier requisito, procedimiento, política o regulación del Sistema, establecido por la Junta en estos Lineamientos o de los que en su momento indique la Dirección;

VII. Acceder a los servicios del portal del Tribunal para realizar actividades contrarias a la ley y a los presentes Lineamientos;

VIII. Condicionar el uso total o parcial del portal del Tribunal, así como del Sistema al pago de contraprestaciones por servicios profesionales o empresariales, y

IX. Incumplir con los demás requisitos previstos por la ley.

CAPÍTULO II
DE LA INTEGRIDAD DEL SISTEMA DE JUSTICIA EN LÍNEA

Artículo 26.- A fin de asegurar la integridad del Sistema, éste contará con un servicio de antivirus para la revisión de los Archivos Electrónicos que se generen en el Sistema, así como de los que se envíen y reciban a través del mismo.

En el supuesto de que, una vez utilizado el antivirus, se advierta que un Archivo o Documento Electrónico está infectado por un virus u otro software maligno, el Usuario Interno se abstendrá de abrirlo, ejecutarlo, copiarlo, difundirlo o transmitirlo por cualquier medio en el Sistema. El personal de la Unidad de Administración procederá a certificar las circunstancias en las que se recibió el archivo o documento y levantará acta administrativa.

En caso de que el archivo infectado sea necesario para la sustanciación del Juicio en Línea, se enviará un correo electrónico al Usuario Externo que lo haya enviado, en el que se le informará del virus detectado y se le requerirá, para que en un plazo de tres días hábiles envíe nuevamente el archivo limpio de virus o software maligno, con el apercibimiento de que, de no hacerlo, no será considerado en el juicio de que se trate. Lo anterior también procederá en el caso de que el Archivo o Documento Electrónico este dañado o por cualquier otra causa no pueda comprobarse su contenido.

CAPÍTULO III
DE LA SEGURIDAD Y EL RESPALDO DE LA INFORMACIÓN

Artículo 27.- Para garantizar la seguridad de los datos e información contenida en los documentos o archivos que se generen, reciban o transmitan a través del Sistema, se proveerá un mecanismo en el que de manera automatizada y periódica se generen respaldos independientes de la información que asegure su permanencia, integridad y ulterior consulta en caso de ser necesario.

TÍTULO QUINTO
DE LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA

Artículo 28.- El Tribunal implementará y habilitará el uso de la Firma Electrónica Avanzada expedida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), a fin de promover, sustanciar y notificar los acuerdos, resoluciones y otras actuaciones que se dicten en los juicios contencioso administrativos federales que se tramiten mediante el Sistema.

Artículo 29.- La Firma Electrónica Avanzada vinculará y responsabilizará al promovente con el contenido de un Documento Electrónico presentado en el Tribunal mediante el Sistema, de la misma forma en que la firma autógrafa lo hace respecto del documento que la contiene en un Juicio Tradicional.

Artículo 30.- El uso de la Firma Electrónica Avanzada implica:

I. La vinculación indubitable entre el firmante y el Documento Electrónico en el que se contenga la Firma Electrónica Avanzada, que se asocia con los datos que se encuentran bajo el control exclusivo del firmante y que expresan en medio digital su identidad;

II. La responsabilidad de prevenir cualquier modificación o alteración en el contenido de los Documentos Electrónicos que se presentan en el Sistema, al existir un control exclusivo de los medios para insertar la referida firma, y

III. La integridad y autenticidad del contenido del documento firmado electrónicamente.

Artículo 31.- Los titulares de una Firma Electrónica Avanzada tendrán las siguientes obligaciones:

I. Resguardar la confidencialidad de la clave privada que se requiere para signar electrónicamente los documentos;

II. Mantener el control físico, personal y exclusivo de su Firma Electrónica Avanzada;

III. Actualizar los datos proporcionados para su tramitación, y

IV. Informar de manera inmediata al prestador de servicios de certificación, de cualquier circunstancia que ponga en riesgo su privacidad o confidencialidad en su uso, a fin de que, de ser necesario, se revoque.

TÍTULO SEXTO DEL JUICIO EN LÍNEA

CAPÍTULO I
DEL REGISTRO Y ENVÍO DE PROMOCIONES ELECTRÓNICAS

Artículo 32.- Los Usuarios del Sistema, al momento de ingresar a éste, deberán completar de manera correcta todos los campos de captura que correspondan y que se soliciten.

Artículo 33.- En caso de que no exista coincidencia entre la información registrada por los Usuarios en los campos de captura señalados en el artículo anterior y el contenido de la promoción enviada a través del Sistema, el Magistrado Instructor podrá requerir al usuario que corresponda para que, dentro del plazo de 5 días hábiles, señale la información correcta que deberá considerar el Tribunal.

Artículo 34.- El Sistema funcionará de acuerdo a la hora oficial mexicana, que incluye los tres husos horarios que cubren la República Mexicana, es decir, representando las horas locales de nuestro país, y asentará la fecha y hora en todos los acuses de recibo de Documentos Electrónicos que se reciban y envíen a través del Sistema, mismos que corresponderán a las del domicilio de la Sala destinataria de la promoción de que se trate.

Artículo 35.- Se entenderá que el demandante optó por el Juicio en Línea cuando acceda al Sistema y exprese su voluntad en ese sentido requisitando los campos de información correspondientes. La opción elegida no variará aunque en fecha posterior se presente una demanda en la vía tradicional, contra la misma resolución.

Artículo 36.- Cualquier Documento Electrónico o digitalizado, que obre en el Expediente Electrónico o sea ofrecido por las partes en el juicio, deberá cumplir con las características de ser accesible, de fácil manejo, inalterable y sin restricciones de copiado del texto o de cualquier contenido, impresión y consulta, así como las demás características precisadas en el Anexo Único de estos Lineamientos.

Artículo 37.- En atención a lo dispuesto en el artículo 58-S de la Ley, en caso de que la Unidad de Administración, reporte la interrupción en el funcionamiento del Sistema por caso fortuito, fuerza mayor o falla técnica, la Sala considerará el tiempo de la interrupción y suspenderá los plazos únicamente respecto de aquellas promociones sujetas a término por ese mismo lapso o bien hasta el día hábil siguiente en que el Sistema haya sido restablecido, a efecto de determinar la oportunidad de dichas promociones.

Artículo 38.- Para registrar y enviar promociones a través del Sistema, se deberán cumplir las siguientes obligaciones:

I. El Tribunal:

a) Adoptar las medidas técnicas y administrativas de seguridad a fin de garantizar la integridad, confidencialidad e inalterabilidad tanto de las comunicaciones como de la información transmitida y almacenada en el Sistema;

b) Impedir el acceso al Sistema de aquellos Usuarios que modifiquen, alteren, destruyan o produzcan la pérdida de información ahí almacenada, así como de aquéllos que realicen alguna de las conductas previstas por el artículo 25 de los presentes Lineamientos. Cuando detecte alguna de las situaciones referidas cancelará sus Claves de Acceso y Contraseñas, y

c) Evitar, a través del Sistema, la recepción de promociones que carezcan de Firma Electrónica Avanzada.

II. Los promoventes, previo a remitir cualquier Documento Electrónico:

a) Verificar el correcto y completo registro de la información solicitada en el Sistema;

b) Verificar el adecuado funcionamiento, integridad, legibilidad y formato de los archivos electrónicos, incluso los digitalizados, que adjunte al Sistema, y

c) Corroborar que los archivos electrónicos a remitir por el Sistema se encuentren libres de virus, y en caso contrario, aplicar los mecanismos necesarios para eliminarlos.

CAPÍTULO II
DE LAS ACTAS POR DESAHOGO DE PRUEBAS

Artículo 39.- Cuando en un Juicio en línea deban desahogarse pruebas no documentales y se requiera la generación de un acta, ésta se asentará en documento impreso, el cual deberá contener la firma autógrafa de quienes en ella intervengan, así como las del Magistrado Instructor y del Secretario de Acuerdos. Hecho lo anterior, el Secretario de Acuerdos deberá:

I. Digitalizar, certificar y resguardar el acta en términos de los artículos 42, 43 y 44 de los presentes Lineamientos, y

II. Incluir el acta en el Expediente Electrónico correspondiente.

CAPÍTULO III
DE LA ACUMULACIÓN DE JUICIOS SUSTANCIADOS EN LÍNEA Y EN LA VÍA TRADICIONAL

Artículo 40.- Para el caso de que proceda la acumulación de juicios sustanciados en línea y tradicional, y los particulares que sean parte de éste último, rechacen la posibilidad de que se tramite en línea, se estará a lo siguiente:

I. Las partes que eligieron el Juicio en Línea, también podrán consultar el expediente del juicio sustanciado en la vía tradicional, para lo cual deberán acudir al local de la Sala en que se encuentre radicado, y

II. Las partes que eligieron la vía tradicional, también podrán consultar el Expediente Electrónico del juicio sustanciado en línea, siempre que hayan obtenido su Clave de Acceso y Contraseña en los términos previstos por los presentes Lineamientos.

CAPÍTULO IV
DEL CÓDIGO DE BARRAS

Artículo 41.- Por cada promoción recibida, actuación realizada y resolución emitida, el Sistema generará un código de barras para su identificación, seguimiento y control. Los documentos anexos que integren el expediente electrónico, en el Juicio en Línea, también contarán con código de barras.

CAPÍTULO V
DE LA DIGITALIZACIÓN, IMPRESIÓN Y RESGUARDO DE DOCUMENTOS

Artículo 42.- Las promociones de un Juicio en Línea que por excepción sean recibidas en la Oficialía de Partes de este Tribunal, así como las actuaciones consignadas en papel durante la sustanciación del mismo, deberán ser digitalizadas y certificadas por el Secretario de Acuerdos para ser agregadas al Expediente Electrónico que corresponda.

Artículo 43.- Los Expedientes Electrónicos o parte de ellos que requieran ser impresos conforme a los supuestos establecidos en la Ley, deberán certificarse por el Secretario de Acuerdos.

Artículo 44.- Los documentos físicos a que se refieren los artículos 42 y 43 de los presentes Lineamientos, deberán ser resguardados en el expediente físico correspondiente, hasta la depuración que, en su momento, ordene la Junta.

TÍTULO SÉPTIMO
DEL BOLETÍN ELECTRÓNICO

Artículo 45.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley, se entenderá como fecha de emisión de los autos y resoluciones que deban notificarse por medio del Boletín Electrónico, aquélla en que el actuario los haya recibido a través del Sistema, debidamente firmados por el Secretario de Acuerdos y el Magistrado Instructor o Magistrados integrantes de la Sala, o en su caso por el Magistrado Presidente de la Sección o del Pleno Jurisdiccional, según corresponda.

Artículo 46.- En relación al segundo párrafo del artículo 69 de la Ley y con el objeto de salvaguardar tanto los datos personales de las partes que intervienen en los juicios contencioso administrativos federales en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, como la información confidencial y comercial reservada aportada en los mismos, se deberá considerar como contenido de los acuerdos y resoluciones, un extracto de los mismos.

TÍTULO OCTAVO DE LAS SANCIONES

Artículo 47.- El incumplimiento a lo dispuesto en los presentes Lineamientos por parte de los servidores públicos, dará lugar al inicio del procedimiento disciplinario previsto por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en que incurran.

Artículo 48.- La falta de conocimiento de los presentes Lineamientos no libera a los Usuarios de las responsabilidades establecidas en ellos por el mal uso que hagan del Sistema.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Las disposiciones relativas al Juicio en Línea y al Boletín Electrónico previstas en los Títulos Sexto y Séptimo de los presentes Lineamientos entrarán en vigor el mismo día en que inicie operaciones el Juicio en Línea.

Dictado en sesión del día catorce de abril de dos mil once.- Firman el Magistrado Juan Manuel Jiménez Illescas, Presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y el Licenciado Rabindranath Guadarrama Martínez, Secretario Auxiliar de la Junta de Gobierno y Administración, quien da fe, con fundamento en el artículo 52, fracciones II y III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con relación a los artículos 78, fracciones VIII y XI, y 103 del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

JUNTA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN
ACUERDO E/JGA/16/2011
LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y FORMALES PARA LA SUSTANCIACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA.

"75 Aniversario de la Promulgación de la Ley de Justicia Fiscal".

ANEXO ÚNICO
REQUERIMIENTOS TECNOLÓGICOS PARA LOS USUARIOS DEL SISTEMA

El equipo de cómputo y programas informáticos mínimos recomendados por el Tribunal a los Usuarios, para ingresar y navegar de manera óptima dentro del Sistema y establecer la conexión requerida vía internet, son los siguientes:

REQUERIMIENTOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Procesador	1 Ghz
Memoria RAM	2 GB
Explorador de internet	Internet Explorer 7 o superior / Firefox 3.6.10 o superior
Lector de PDFs	Acrobat Reader 8.0 o superior
Complementos	▪ JRE 1.6.23 o superior ▪ Antivirus actualizado
Ancho de Banda Libre por usuario	512 kb o superior

Las características mínimas que deberán reunir los documentos electrónicos que se utilicen dentro del Sistema, ya sea porque se ofrezcan como pruebas, o porque formen parte del Expediente Electrónico administrado por el mismo Sistema, son las siguientes:

CARACTERÍSTICAS - ARCHIVOS ELECTRÓNICOS Y DIGITALIZADOS

- Los documentos digitalizados o escaneados deberán contar con una resolución óptica en rangos de entre 100 y 600 dpi, con la posibilidad de ajustar la resolución en caso necesario. Para ello se recomienda generar la salida del documento digitalizado o escaneado en formato PDF a 200 dpi y 256 colores, preferentemente, además de contar con la opción de "solo lectura" y permitir la selección del texto.
- Para los archivos de "tipo imagen" serán aceptados los siguientes formatos: .jpg, .jpeg, .tif, .bmp, .png, .jpe, .jfif, .gif, .dib que pueden ser abiertos por la mayoría de las herramientas de visualización.
- Los documentos asociados a videos y audio, podrán presentarse en alguno de los formatos siguientes: .avi, .flv, .mp4, .wmv, DVD-video (video); .mp3, .wmv, audio CD, DVD-audio, .wma, .mpg (audio).
- Los documentos elaborados con herramientas de productividad para oficina, de la suite de Microsoft se aceptarán en Word, Excel y PowerPoint en sus versiones 97, 2000, 2002, 2003, 2007 y 2010; También se aceptarán otras suites, como Works 6.0, 7.0, 8.0 y 9.0; WordPerfect 5.0 y 6.0; de igual manera formatos abiertos emitidos por Staroffice, Openoffice, Lotus Symphony, entre otros: .odf.
- Específicamente, para documentos que contengan datos o información generados por otras herramientas, también se aceptarán los siguientes formatos: .xml, .rtf, .txt, .html, .htm, .mht, .mhtml.

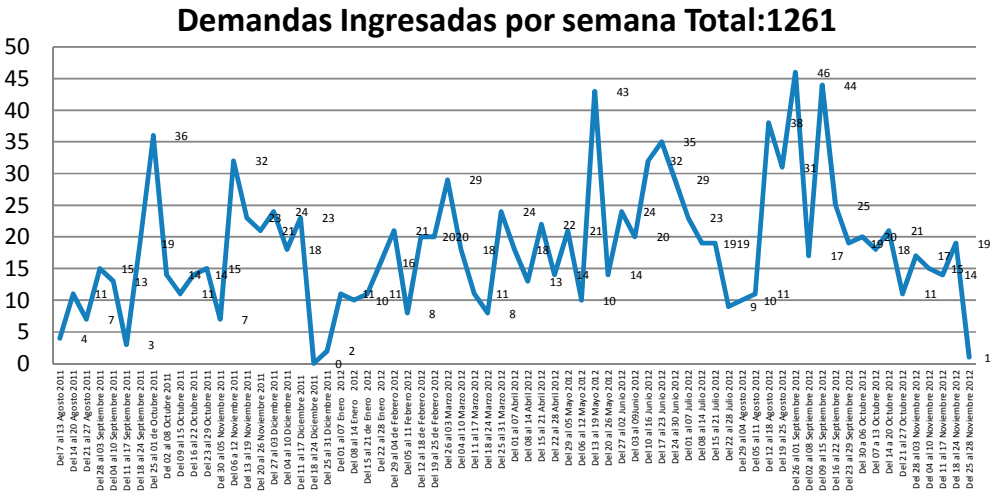
JUNTA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA OPERATIVA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
Dirección General del Sistema de Justicia en Línea
AVANCES DE LA PUESTA EN OPERACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA: 29 de Noviembre del 2012, 15 hrs

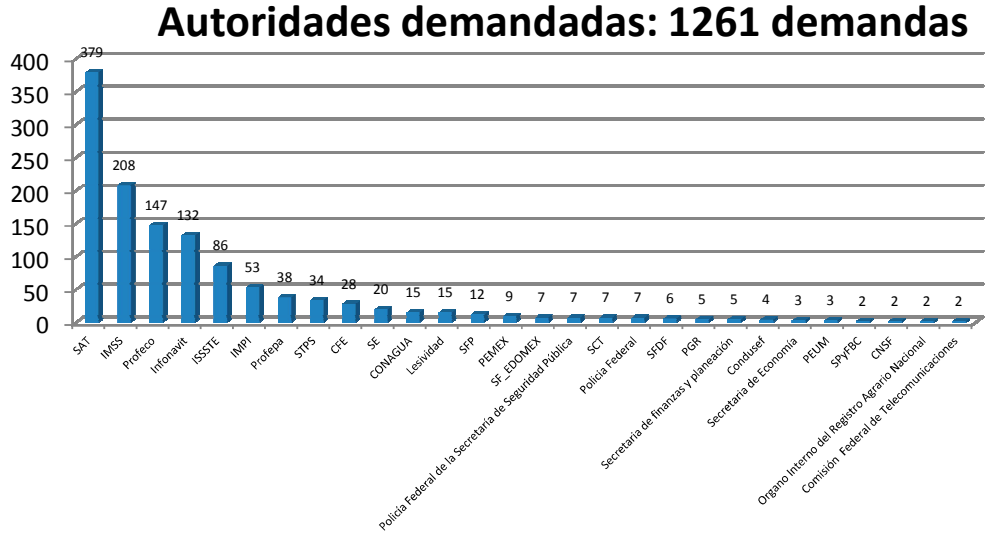
Información Jurisdiccional

- **Demandas: 1261**
- **Cuantía: $17,120,407,800.85**
- **Total de Sentencias:499**
  - **Sentencias Definitivas: 246**
  - **Sentencias Interlocutorias: 253**
- **Resoluciones Telemáticas Notificadas: 6,257**
  - **Por Boletín Electrónico: 3,762**
  - **Por Correo Electrónico:2,495**
- **Demandas Sala Juicio en Línea(SEJL): 1208**
  - **Autoridades:153**
  - **Persona Física: 213**
  - **Personas Morales: 842**
  - **En la SEJL existen:**
    - **Lesividad:14**
    - **Desechadas: 103**
    - **No Interpuestas: 31**
- **Demandas Sala Especializada PI(SEPI): 53**
  - **Persona Física: 51**
  - **Personas Morales:2**
  - **En la SEPI existen:**
    - **Desechadas: 1**
    - **No Interpuestas: 0**

Información de la Administración del Juicio en Línea

- **Mesa de Ayuda, Solicitudes Recibidas: 6,398**
  - Resueltas: 6,183
    - Consultora: 2,369
    - Tribunal: 3,814
  - Pendientes por Resolver: 215
- **Portal del Juicio en Línea**
  - **1,128,668** personas han ingresado a la página. De estos han ingresado con clave de usuario y contraseña:
    - **1,443** servidores públicos del Tribunal.
    - **1,083** justiciables han ingresado con su clave de acceso y contraseña al Sistema, en **12,041** ocasiones.
    - El resto han consultado aspectos generales del portal


Demandas Ingresadas por semana Total:1261
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
4 11 7 15 13 3 36 19 11 14 11 15 7 32 23 21 24 18 0 2 11 10 11 16 8 21 20 29 18 11 24 13 8 22 13 18 21 10 43 14 24 20 32 35 29 23 19 19 9 10 11 38 31 46 44 17 25 19 18 20 11 21 17 15 14 19 1
Del 7 al 13 Agosto 2011
Del 14 al 20 Agosto 2011
Del 21 al 27 Agosto 2011
Del 28 al 03 Septiembre 2011
Del 04 al 10 Septiembre 2011
Del 11 al 17 Septiembre 2011
Del 18 al 24 Septiembre 2011
Del 25 al 01 de Octubre 2011
Del 02 al 08 Octubre 2011
Del 09 al 15 Octubre 2011
Del 16 al 22 Octubre 2011
Del 23 al 29 Octubre 2011
Del 30 al 05 Noviembre 2011
Del 06 a 12 Noviembre 2011
Del 13 al 19 Noviembre 2011
Del 20 al 26 Noviembre 2011
Del 27 al 03 Diciembre 2011
Del 04 al 10 Diciembre 2011
Del 11 al 17 Diciembre 2011
Del 18 al 24 Diciembre 2011
Del 25 al 31 Diciembre 2011
Del 01 al 07 Enero 2012
Del 08 al 14 Enero 2012
Del 15 al 21 de Enero 2012
Del 22 al 28 Enero 2012
Del 29 a 04 de Febero 2012
Del 05 al 11 Febero 2012
Del 12 al 18 de Febero 2012
Del 19 al 25 de Febero 2012
Del 26 al 03 Marzo 2012
Del 04 al 10 Marzo 2012
Del 11 al 17 Marzo 2012
Del 18 al 24 Marzo 2012
Del 25 al 31 Marzo 2012
Del 01 al 07 Abril 2012
Del 08 al 14 Abril 2012
Del 15 al 21 Abril 2012
Del 22 al 28 Abril 2012
Del 29 al 05 Mayo 20.2
Del 06 al 12 Mayo 20.2
Del 13 al 19 Mayo 20.2
Del 20 al 26 Mayo 20.2
Del 27 al 02 Junio 2012
Del 03 al 09Junio 2012
Del 10 al 16 Junio 2012
Del 17 al 23 Junio 2012
Del 24 al 30 Junio 2012
Del 01 al 07 Julio 2012
Del 08 al 14 Julio 2012
Del 15 al 21 Julio 2012
Del 22 al 28 Julio 2012
Del 29 al 04 Agosto 2012
Del 05 al 11 Agosto 2012
Del 12 al 18 Agosto 2012
Del 19 al 25 Agosto 2012
Del 26 al01 Septiembre 2012
Del 02 al 08 Septiembre 2012
Del 09 al 15 Septiembre 2012
Del 16 al 22 Septiembre 2012
Del 23 al 29 Septiembre 2012
Del 30 a 06 Octubre 2012
Del 07 a 13 Octubre 2012
Del 14 a 20 Octubre 2012
Del 21 al 27 Octubre 2012
Del 28 al03 Noviembre 2012
Del 04 al 10 Noviembre 2012
Del 11 al 17 Noviembre 2012
Del 18 al24 Noviembre 2012
Del 25 al 28 Noviembre 2012


Autoridades demandadas: 1261 demandas
400
350
300
250
200
150
100
50
0
379 208 147 132 86 53 38 34 28 20 15 15 12 9 7 7 7 7 6 5 5 4 3 3 2 2 2 2
SAT
IMSS
Profeco
Infonavit
ISSSTE
IMPI
Profepa
STPS
CFE
SE
CONAGUA
Lesividad
SFP
PEMEX
SF. EDOMEX
Policía Federal de la Secretaría de Seguridad Pública
SCT
Policía Federal
SFDF
PGR
Secretaría de finanzas y planeación
Condusef
Secretaría de Economía
PEUM
SPyFBC
CNSF
Órgano Interno del Registro Agrario Nacional
Comisión Federal de Telecomunicaciones

Bibliografía

1. BERNAL LADRÓN DE GUEVARA, Diana y GUERRA JUÁREZ, Alejandra. La Obligatoriedad del Juicio en la Vía Sumaria y su lesión a los Derechos Fundamentales de los Contribuyentes, 2012.
2. CERVANTES MARTÍNEZ, Jaime Daniel. "Juicio en Línea en Materia Fiscal y Administrativa" 2011
3. Código Fiscal Federal, Editorial: THEMIS 2010
4. CORRALES, F. Carlos (1998) *Derecho y Economía*: *Una aproximación al Análisis Económico del Derecho*, (1° edición, pp. 24) México: Universidad de Extremadura.
5. CROVI DRUETTA, Delia María, *"¿Es Internet un medio de comunicación*?", Revista Digital Universitaria, Volumen 7, No. 6, ISSN: 1067-6079, UNAM
6. DE LA GARZA, Sergio Francisco *"Derecho Financiero Mexicano",* Editorial Porrúa, 2006
7. DE LA PEÑA MÉNDEZ José Antonio, Ríos Granados Gabriela, Valadés Diego. Investigación y Desarrollo en la Reforma Fiscal. UNAM. México 2002.
8. *Económica*. Instituto Tecnológico Autónomo de México, Porrúa. México 2010.
9. GARCÍA AGUILAR, Nayeli, *"Los medios de impugnación de la autoridad y en particular contra la sentencia dictada en juicio en línea",* Revista TFJFA, Diciembre 2009
10. HERNÁNDEZ SALCEDO, Ricardo, GUTIÉRREZ BARBOSA, Guillermo, "Juicio de Nulidad en Materia Fiscal Federal" INDETEC 1997
11. HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto, *Metodología de la Investigación* Mc. Graw-Hill, México 2003.
12. HOLGUÍN QUIÑONES, Fernando *"Estadística Descriptiva aplicada a las Ciencias Sociales", Facultad de Ciencias Políticas y Sociales"*, UNAM, 1988.
13. IBARRA DELGADILLO, José D., *Investigación Cualitativa en el ámbito jurídico*, U. de. G, México 2006.
14. JIMÉNEZ ILLESCAS, Juan Manuel, "El juicio en línea, Procedimiento Contencioso Administrativo Federal", Dofiscal, 1ª. Edición, Agosto 2009
15. KAYE, Dionisio J. / KAYE TRUEBA, Christian *Nuevo Derecho Procesal Fiscal Y Administrativo*, Editorial: THEMIS
16. PÉREZ LÓPEZ, Miguel, *"La Reforma Del Derecho Procesal Administrativo Federal De 2010"* TFJFA
17. POSNER, A. Richard (1998) *El análisis económico del derecho*, (1° edición, pp. 7) México: Fondo de Cultura Económica.
18. PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE. "Derechos Humanos de los Contribuyentes" 2012
19. REYES ALTAMIRANO, Rigoberto. "Estudio del Juicio Fiscal sumario y en línea" 2011

20. ROJAS AMANDI, Víctor Manuel, "El uso de internet en el Derecho" Oxford University Press, 2012
21. ROJAS SORIANO, Raúl *"Guía para realizar Investigaciones Sociales",* Plaza y Valdés, S.A. de C.V., Octava Edición, UNAM.
22. SILVA JUAREZ, Ernesto, "El Procedimiento Contencioso Administrativo Federal" Tercera Edición, Editorial PAC, México 2009
23. TÉLLEZ VALDÉS, Julio, "Derecho Informático" Cuarta Edición, Mc Graw Hill 2009
24. WITKER VELÁSQUEZ, Jorge, *Metodología Jurídica*, Mc. Graw-Hill, México 2002.

✓ **Revistas jurídicas y/o artículos:**

1. Seminario Juicio en Línea y Sumario. INDETEC. 2011
2. Artículo Juicio en Línea. INDETEC. 2011
3. INDETEC, Revista Trimestral No. 96 Sistema Nacional de Coordinación Fiscal 2011

✓ **Legislación**

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
2. Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo
3. Ley de Coordinación Fiscal
4. Ley de Comercio Exterior
5. Código Fiscal de la Federación
6. Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente
7. Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa
8. Lineamientos Técnicos y Formales para la Sustanciación del Juicio Fiscal en Línea Acuerdo E/JGA/16/2011 y su Anexo Único
9. Ley 29/1998, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa en España
10. Ley Reguladora del Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Administración de Justicia en España

✓ **Páginas web:**

1. www.tfjfa.gob.mx
2. www.prodecon.gob.mx
3. www.indetec.gob.mx
4. www.sat.gob.mx
5. www.scjn.gob.mx
6. www.diputados.gob.mx
7. www.justicia.navarro.es
8. www.oficinajudicial.justicia.es
9. www.revista.unam.mx
10. www.economia.unam.mx